



De la casa editora Martínez Roca, S.A.:

11 septiembre 1973: derrocamiento y asesinato de Allende. 30 septiembre 1974: asesinato del que fuera su directo colaborador, el general Prats. Dos eslabones de una trágica cadena todavía inconclusa y de consecuencias imprevisibles, pero que ahoga mientras a Chile en un baño de horror y desesperación. Los dos extremos de la cadena los sujetan las mismas fuerzas, el imperialismo norteamericano y una oligarquía nacional a su servicio, que han forjado principalmente los magnicidios contemporáneos cuando no queda otra opción para frenar el ímpetu revolucionario de un pueblo. A través del minucioso desenmascaramiento de la burda trama del «suicidio» de Allende, R. Rojas nos desvela los entresijos de tan aleccionador proceso político. No enjuicia, suministra elementos exhaustivos para que el lector extraiga sus propias conclusiones y restituya los verdaderos perfiles a sus protagonistas: desde los militares, que prepararon hasta siete golpes de Estado en complicidad con el Pentágono y la democracia cristiana, hasta un presidente contemplado desde un agudo tamiz crítico. Y que sin perder su condición de símbolo, aparece con las inevitables limitaciones de su reformismo ante el doble frente de un aparato estatal burgués y la presión combativa de las clases populares.

El periodista chileno Róbinson Rojas es uno de los miles de chilenos lanzados al exilio por un brutal régimen militar que ha desempolvado el espectro del fascismo. Pudo salvarse de la carnicería que alcanzó a tantas decenas de miles para buscar, inútilmente, refugio en diversos países sudamericanos y europeos: al cabo lo ha encontrado en China. Pero es, además, un testigo de excepción: su dilatada actividad profesional, sus viajes por el continente y su compromiso político le permitieron reunir una información de primerísima mano para escribir esta denuncia escalofriante. No es ya un libro de circunstancias ni una aportación más o menos meritoria: es el testimonio definitivo sobre la verdad del asesinato de Allende, detonante para asesinar a todo un pueblo e impedir su liberación.

Cubierta de Geest/Hoverstad

Róbinson Rojas

Estos mataron a Allende

Reportaje a la masacre de un pueblo

Colección Nueva Fontana

Ediciones Martínez Roca, S.A.

1a. edición

1974, Ediciones Martínez Roca, S. A.

Avda. José Antonio 774, 7º, Barcelona-13

ISBN 84-2700266-1

Depósito legal: B. 40.105-74

Impreso en Gráficas Universidad s. a.

Arquímedes, 3 - San Adrián de Besós

Una explicación necesaria

Este es un libro de denuncia. Y como tal, tiene la forma de una larga crónica policial. Es la historia de un asesinato. Del asesinato de un hombre, de miles de seres humanos y de las ideas de esos seres humanos. Es la historia del asesinato del Presidente Constitucional de Chile, el doctor Salvador Allende Gossens. Y por eso mismo, sus personajes principales son los asesinos, sus costumbres, sus ideas, sus reuniones, sus planes y sus conspiraciones.

El lector no encontrará explicaciones en este libro. Encontrará hechos, encontrará actitudes de los personajes principales. Y porque este libro está escrito por un periodista, chileno, de izquierdas, participante a su manera personal en el proceso que vivió Chile entre 1970 y 1973, el lector también encontrará un Salvador Allende distinto al de los discursos fúnebres, estatuas, afiches y homenajes mundiales. Un Salvador Allende despojado de la máscara de la perfección, de "todo lo que hizo lo hizo bien", con que lo han querido presentar muchos.

Salvador Allende murió como un héroe; eso no lo duda nadie en todo el mundo. Ningún hijo de la tierra chilena ignora que Allende murió combatiendo conscientemente, sin esperanzas de salir vivo de la situación, si no se rendía. Y no se rindió. Así mueren los héroes y así murió Allende. Así murieron también miles de chilenos defendiendo la democracia aplastada por los tanques, carros blindados, aviones de combate y ametralladoras manejados por los militares insurrectos. Allende dijo una vez: "Que lo sepan, que lo oigan, que se les grave profundamente: defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno Popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo".

Y lo acribillaron a balazos.

Antes de morir, horas de antes de morir, en un discurso para su pueblo y ya bajo el fuego mortal de los generales y almirantes insurrectos, decía: "Así se escribe la primera página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto" Palabras de decisión de un hombre, de un héroe.

Pero Allende murió combatiendo bajo las ruinas de la democracia burguesa destruida por el fascismo. Y esas ruinas aplastaron a miles de chilenos obreros, chilenos campesinos, chilenos empleados, chilenos estudiantes, mujeres, niños y ancianos.

Y entonces, la dimensión heroica de Allende combatiendo toma la forma de un presidente vacilante, contradictorio, defendiendo una tesis política, la de "la vía chilena hacia el socialismo", con el peligro de abrirle paso al fascismo contemporáneo, el fascismo del imperialismo de los Estados Unidos.

Eso también lo encontrarán ustedes en este libro, lectores. Son hechos. Encontrarán cómo el pueblo que más tarde sería masacrado, no tuvo oportunidad de organizarse para detener al fascismo. Encontrarán cómo Salvador Allende, políticamente equivocado, junto con dirigentes de otros partidos políticos, también políticamente equivocados, abrieron paso al crecimiento del fascismo, a la preparación del fascismo para que asesinara al pueblo de Chile. Esos son hechos y este libro los consigna. Deber elemental de periodista. Y el autor lo es.

Este libro, en suma, pretende denunciar a los asesinos de Allende, que son generales y almirantes en Santiago de Chile, y también generales y almirantes en Washington. Pero también pretende denunciar la trágica y vacilante conducta de quienes se autotitulaban dirigentes del pueblo y lo dejaron inerme, impidiéndole incluso, en algunos casos, organizarse para la defensa del ataque fascista-imperialista.

En estos momentos, en las galerías 3 y 5 de la Cárcel Pública

de Santiago y en la Penitenciaría de la misma ciudad, hay unos 700 presos entre clases, suboficiales, oficiales y soldados de las fuerzas armadas y carabineros de Chile, que se negaron a combatir contra el pueblo. Su dimensión, tan menguada en una fuerza armada de cien mil hombres, marca el resultado de la suicida política de Salvador Allende de impedir que el pueblo, con sus ideas y con su lucha, entrara en los cuarteles para combatir al fascismo en su propia cuna armada.

Estos son hechos, y es necesario que los pueblos del resto del mundo los conozcan. El pueblo chileno pagó con más de quince mil muertos, más de treinta mil presos, más de cien mil torturados brutalmente, más de doscientos mil cesantes políticos y más de treinta mil universitarios expulsados de las aulas por las fuerzas militares el aprendizaje de esta lección. Una lección que Carlos Altamirano, secretario general del partido socialista de Chile, el 3 de enero de 1974, en La Habana, definió así:

“La gran burguesía y el imperialismo han ahogado en sangre la democracia burguesa. Salvador Allende y la Unidad Popular se habían planteado "la vía chilena al socialismo" como una vía democrática, pluralista, realizada de acuerdo con la Constitución y con respeto a todas las ideologías y partidos políticos. Esta concepción ha caído derrotada militarmente el 11 de septiembre.

“La "pacífica y democrática burguesía chilena" recurrió a la violencia contrarrevolucionaria armada para aplastar el proceso de transformaciones estructurales, al precio de abjurar y traicionar todo lo que había sostenido en cuanto a su irrestricta adhesión a los valores de la vida cristiana, al régimen democrático, a las libertades individuales y al estado de derecho”

Toda la barbarie desatada sobre el pueblo chileno para defender los intereses de grandes consorcios norteamericanos (Anaconda, Kennecott, ITT, Esso Standard, Chase Manhattan

Bank, First National City Bank, WR Grace) y los intereses estratégicos en América Latina del gobierno militar-industrial de Washington, ha tratado de ser encubierta por los generales y almirantes chilenos con invenciones fantásticas, como el burdo Plan Zeta, como las falsas "pruebas" de elementos pornográficos "encontrados" en la casa de Salvador Allende, y con declaraciones líricas y trágicamente cómicas como la de que "los militares no matamos a nadie", hechas por el general Pinochet Ugarte.

Cuando el lector termine de leer este libro, entenderá la falacia del llamado Plan Zeta, fantástica invención de los generales al servicio del Pentágono, hecha con tal apresuramiento y torpeza que el 17 de septiembre de 1973, el propio jefe de la Junta, Pinochet, declaraba a los periodistas sus dudas respecto al Plan Zeta: "Es muy posible que en realidad se estuviera fraguando ese autogolpe. Son tantos los rumores que han circulado. Es tanta la gente que está empeñada en crear dudas o inquietud en la población..." ("La Tercera", 18 de septiembre de 1973).

Y eso era dicho el mismo día en que el general Oscar Bonilla, ministro del Interior, afirmaba que "los militares tuvimos que reaccionar... eran ellos o nosotros... nos levantamos para impedir la realización del Plan Zeta". Por otro lado, de la simple lectura del "documento" llamado Plan Zeta, exhibido más tarde por los generales y almirantes insurrectos, se desprende que la izquierda chilena "tenía preparado un ejército irregular de cien mil hombres", "había infiltrado regimientos completos" y poseía armas para dotar a "varias divisiones" para un "autogolpe" que "debería" desencadenarse el 19 de septiembre. Pues bien; el 11 de septiembre se demostró con los hechos que no había tal preparación, que las fuerzas de los trabajadores eran magras, incoherentes y desorganizadas, y que la "infiltración" en las fuerzas armadas era menos del uno por ciento. No había, pues, tal Plan Zeta.

No había más que el largo plan preparado, madurado y organizado en el Pentágono norteamericano, puesto en práctica en Chile, y montado sobre los cadáveres de miles de chilenos. Había la preparación meticulosa del asesinato del presidente Allende por un grupo de generales. Había la preparación minuciosa de la masacre de todo un pueblo, como en los tiempos más sanguinarios de las tropas nazis en la asolada Europa. Esos son los hechos que el lector encontrará en este libro.

20 de junio de 1974.

1

Un «suicidio» para armar

Un pueblo disciplinado, organizado y consciente es, junto a la limpia lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la mejor defensa del Gobierno Popular y del futuro de la Patria.

(Salvador Allende, discurso del 1 de Mayo de 1971, en la Plaza Bulnes de Santiago de Chile)

Y tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza.

(Salvador Allende, discurso del 11 de septiembre de 1973, a las 9.15 horas, en el Palacio de La Moneda, Santiago de Chile)

Eran seis o siete minutos después de las dos de la tarde del día 11 de septiembre de 1973. Una patrulla de penetración de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al mando de un capitán, irrumpió, cubriéndose con una cortina de ráfagas de fusiles FAL, en la parte superior de la escalera principal del Palacio de la Moneda, llegando hasta la entrada del Salón Rojo. Una vez allí, a través de la densa humareda provocada por el incendio de una parte del edificio y las explosiones de bombas lacrimógenas, granadas de cañones sin retroceso de 75 mm y de cañones de tanques Sherman, el capitán de la patrulla de penetración vio a tres o cuatro civiles que, con subametralladoras, trataban de

enfrentarse al ataque militar. El capitán disparó su arma automática defectuosamente, soltando el gatillo de inmediato. Una de las tres balas percutadas dio en el estómago de uno de los civiles. Un soldado de la patrulla de penetración también disparó. Impactó en el abdomen del mismo civil, ya herido en el estómago. Sólo en ese instante reaccionó el capitán de la patrulla, reconoció al civil que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, y lo acribilló con una ráfaga de su fusil ametrallador. «¡Cagamos al Presidente!», gritó el capitán, mientras saltaba hacia la escalera de entrada huyendo del fuego que disparaba un grupo de civiles combatientes que habían irrumpido en el Salón Rojo desde una puerta lateral, cuando Salvador Allende caía muerto acribillado por el fuego de la patrulla de la Escuela de Infantería. El capitán y parte de sus soldados corrieron por la escalera principal hacia el primer piso, perseguidos por los civiles que defendían el Palacio de la Moneda Sólo 40 ó 50 minutos más tarde, las fuerzas de la Escuela de Infantería, del Regimiento Tacna y del Regimiento de Blindados Número 2, lograron eliminar la resistencia de las 32 personas sobrevivientes del grupo que había defendido la sede presidencial durante cinco horas. Todo el segundo piso del edificio fue ocupado por las tropas invasoras. El primer piso ya estaba en sus manos desde una hora y media antes.

El jefe de las tropas invasoras, general de brigada Javier Palacios Ruhman, flanqueado por el capitán Roberto Garrido y su patrulla de penetración, entró al Salón Rojo, se inclinó sobre el cadáver de Salvador Allende Gossens, retiró una ensangrentada bandera chilena que los civiles defensores habían puesto sobre el cuerpo aún tibio del Presidente de Chile tras rechazar la patrulla del capitán Garrido y, volviéndose hacia éste, le dijo:

—Hay que aislar este salón, que nadie más entre, que nadie vea el cadáver del Presidente... Comuníqueme con el Cuartel General de la Comandancia. Con el general Pinochet.

«Atención Puesto Uno... Atención Puesto Uno... Aquí unidad de combate "alfa uno"... General Palacios solicita hablar con

general Pinochet.» El jefe de las fuerzas de ataque, destrucción y arrasamiento del Palacio de la Moneda, Javier Palacios, tomó el auricular del equipo de telecomunicaciones de la patrulla de penetración y con voz seca, precisa, dijo:

—General Palacios a general Pinochet... Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto...

—¿Cómo está el cadáver? —preguntó el comandante en jefe.

—Destrozado.

—Que nadie lo vea... espere instrucciones.

Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde del 11 de septiembre de 1973. A las seis de la mañana de ese mismo día, los altos mandos de todas las fuerzas armadas chilenas, que movilizaban a unos cien mil hombres, habían iniciado una *blitzkrieg* (guerra relámpago) contra el pueblo chileno, invadiendo a sangre y fuego todos los centros de poder económico, político, social y administrativo del país. En términos concretos, el poder militar chileno había declarado la guerra a los trabajadores chilenos, y lanzó sobre ellos toda la fuerza destructiva de su armada, fuerza aérea, ejército y policía militarizada.

Para Santiago, la capital de Chile, con casi un tercio de la población nacional concentrada en ella, la *blitzkrieg* de los generales sublevados tenía dos objetivos de combate principales: «alfa uno» y «beta uno».

«Alfa uno» era el cerco, ataque y toma del Palacio de la Moneda, con el propósito de hacer prisionero a Salvador Allende y preparar después su «suicidio» en condiciones remedadas de la autoeliminación de un antiguo presidente chileno, José Manuel Balmaceda, en 1891. El cálculo de las tropas invasoras de la población civil chilena para la operación «alfa uno» era de 120 minutos después del inicio del ataque (las nueve de la mañana). El análisis del Servicio de Inteligencia no contó, en ningún momento, con la decisión del puñado de civiles que habría en el interior del palacio de defenderse hasta el último hombre. Ellos esperaban que Salvador Allende, ante el despliegue de tropas de infantería, carros

blindados, tanques y amenaza de bombardeo aéreo, se rindiera. Esto, según los cálculos de la Inteligencia Militar —que había trabajado en la preparación de la *blitzkrieg* desde octubre de 1972—, daba tiempo a los generales insurrectos para armar el «suicidio» de Allende —inducido o por la fuerza— y anunciarlo al país alrededor de la una de la tarde de ese día 11 de septiembre de 1973.

Pero no ocurrió así. Allende y sus acompañantes, todos civiles, resistieron hasta el último cartucho. Todo el aterrador aparato de guerra preparado para rendirlo tuvo que ser puesto en funcionamiento, y se tardó cinco horas de combate efectivo en reducir a un grupo de poco más de cuarenta personas.

Cuando a las 14.50 horas del día 11 de septiembre, el comando de los generales sublevados anunció al país que «el Palacio de la Moneda ha sido reducido por las fuerzas militares», habían transcurrido cinco horas de resistencia de 42 civiles provistos de fusiles ametralladores y un bazooka, contra el asedio de ocho tanques Sherman, dos cañones sin retroceso, de 75 mm, montados en jeeps, doscientos hombres de infantería de dos regimientos de Santiago, y el bombardeo de dos aviones de caza a reacción Hawker Hunter que dejaron caer, haciendo blanco, entre las 11.56 y las 12.15 de ese día, dieciocho de sus cohetes, además de ametrallar el techo y el segundo piso de La Moneda.

Y en el transcurso de esa resistencia inesperada para los cálculos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas (con el asesoramiento de los expertos militares norteamericanos y brasileños que participaron en la preparación de la *blitzkrieg*), se vino abajo toda la trama montada para tener un «suicidio limpio» de Salvador Allende. El cadáver acribillado, cubierto por una ensangrentada bandera chilena, en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda, estuvo a punto de hacer fracasar, con graves consecuencias para los generales insurrectos, «alfa uno». Los generales conspiradores se demoraron cuatro horas (desde las tres hasta las siete de la tarde de ese día), en montar un

improvisado escenario dentro de los escombros de La Moneda para «demostrar» el «suicidio» de Allende, buscándose un «testigo presencial» que sirvió para el papel bajo la amenaza de ser acusado, por los propios altos mandos sublevados, como «asesino del Presidente de la República». El apresurado montaje del escenario del «suicidio» fue tan improvisado, urgido por el tiempo que corría, que resultó una historia burda, llena de contradicciones y de mentiras evidentes. Y su debilidad era aún más evidente para los propios altos mandos militares, los cuales no se ponían de acuerdo con la celeridad necesaria y demoraron su decisión de dar la noticia a todo Chile más de veinte horas. Tenían miedo de dar a conocer los detalles fabricados a los chilenos, porque estos tenían la capacidad de juicio suficiente para darse cuenta de las contradicciones y las falsedades. Por eso, dejaron salir primero la noticia al exterior, a través de los corresponsales extranjeros, y sólo veinticuatro horas más tarde, cumplida en lo principal la tarea «beta uno», la dieron a conocer a los chilenos.

En síntesis: Originalmente, al lanzar la *blitzkrieg* de muerte y destrucción contra las organizaciones populares chilenas, los generales sublevados esperaban utilizar el «suicidio» programado de Allende como efecto de desmoralización para los focos de resistencia a su invasión del país. Pero, al fracasar el itinerario primitivo de su operación «alfa uno», se vieron impedidos de hacer uso de este arma de guerra psicológica, que se volvía contra ellos, y demoraron la noticia hasta que lo principal de la resistencia civil a la invasión militar de los generales sublevados concluyó. El asesinato del Presidente de Chile por las fuerzas militares, realizado «fuera de programa» por un capitán de infantería, hizo pedazos la trama preparada para un «suicidio impecable», y, al final, sirvió para dejar al descubierto, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario realizados por el equipo de propaganda de los militares, toda la dimensión de frialdad, planificación previa y decisión consciente de los altos mandos militares para destruir por medio del asesinato masivo, de la prisión de millares de hombres y

mujeres, e incluso niños, y del aterrorizamiento de centenares de miles de chilenos, toda la organización popular existente hasta ese día de septiembre, y preparar así las condiciones para gobernar por el terror y la muerte a todo un país; para mantener ocupada por fuerzas militares de mando extranjero una nación derrotada por una *blitzkrieg*.

Cuando el autor de este reportaje, en la noche del 11 de septiembre, escuchaba el recuento de los bandos militares por la cadena oficial de radioemisoras controlada por los sublevados, pensaba en lo que había leído en los libros de historia cuando, en la tarde del día primero de septiembre de 1939, Adolfo Hitler se dirigió por la radio al pueblo alemán para comunicarle que «en la madrugada de este día, el ejército alemán ha respondido una agresión de los polacos, entrando en su territorio para defenderse de dicha agresión. Alemania no está atacando a nadie. Sólo se está defendiendo de quienes la agreden. ¡Y esas palabras ocultaban la bestial realidad de una invasión relámpago, de una *blitzkrieg* contra un pueblo indefenso que tenía, como «táctica fundamental», la de arrasar, quemar, destruir y matar todo. La de «destruir la población civil» como medida de «apaciguamiento!»

La invasión de Polonia en septiembre de 1939 por parte de la Wehrmacht nazi, se parecía, como una gota de agua a otra, a la invasión de Santiago, de la que yo estaba siendo testigo, por parte de las fuerzas militares chilenas en septiembre de 1973.

La reconstrucción de los sucesos de ese día 11 de septiembre y de los días posteriores, permite dibujar el perfil real de la guerra relámpago contra el pueblo chileno que desataron los generales sublevados. La contabilidad del asesinato de un pueblo es tan escalofriante como la contabilidad del asesinato de un Presidente: 3.000 dirigentes medios de los obreros, campesinos, empleados y partidos políticos de izquierda asesinados en las primeras veinte horas del 11 de septiembre; alrededor de 5.500 personas más, muertas en combate contra las fuerzas militares sublevadas entre los días 11 y 15 de septiembre; 6.300 personas fusiladas o

asesinadas por otros métodos, después de estar presas, desde el 12 al 30 de septiembre. El total aproximado de muertos civiles en los primeros 18 días tras el asesinato de Allende fue de 15.000.

De ellos, poco menos de 6.000 víctimas fueron en Santiago, la capital. Cantidad que se detalla así: 800 hombres asesinados el mismo día 11; 2.900 muertos en combate y 2.200 fusilados o asesinados, después de caer prisioneros, con o sin «juicio sumario en tiempo de guerra».

Esta contabilidad trágica es la contabilidad del segundo gran objetivo militar que, principalmente para Santiago, tenían los generales sublevados: el objetivo «beta uno». Se trataba de ocupar militarmente dos de las principales concentraciones industriales de la ciudad: los sectores de Cerrillos (al suroeste) y de Vicuña Mackenna (al centroeste). Junto con la ocupación militar de estos sectores, el plan «beta uno» contemplaba la acción de comandos mixtos militares-organizaciones civiles fascistas en lo que llamaron «operación pinzas». Esta consistía en el apresamiento, entre las seis y las ocho de la mañana del día 11, de más o menos seis mil personas en todo el país para someterlas a un interrogatorio breve y preciso y enseguida asesinarlas.

Esto es lo que los militares llamaban la «limpieza de los motores del marxismo»: acabar con los dirigentes medios de poblaciones, sindicatos, asentamientos campesinos, partidos políticos y agrupaciones culturales de izquierda. La lista había sido minuciosamente preparada a partir de noviembre de 1972, en acción conjunta del servicio de inteligencia del ejército, la marina y la aviación, en estrecha relación con los departamentos de inteligencia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con sede en la zona del Canal de Panamá, vecino a Fort Amador, donde se presume hay instalaciones de cohetes con ojiva nuclear dirigidos hacia Cuba. También, en el equipo de redacción de esa lista de chilenos a ser asesinados en la mañana del día D, habían participado miembros de la Embajada de Brasil en Chile.

Los generales sublevados pensaban que «beta uno» podría ser completada al atardecer del día 11, después de haber dado a conocer «el suicidio» de Salvador Allende, tal como se preparaba según el plan de «alfa uno». Pero el «suicidio» falló y la resistencia del pueblo en los cordones industriales de Vicuña Mackenna y Los Cerrillos, en Santiago, continuó toda la noche del 11 al 12 de septiembre, y sólo declinó al mediodía del 12, cuando las precarias municiones de los trabajadores se acabaron y se completaron las acciones de asesinato masivo a pobladores de sectores habitacionales obreros, como La Legua y La Hermida.

Sólo después del mediodía del 12, cuando era evidente que los focos de resistencia contra la invasión militar a Santiago se desmoronaban por falta de parque y de armas, el grupo de generales sublevados se atrevió a dar publicidad a su burda fabricación del «suicidio» del presidente constitucional de Chile.

En ese momento había culminado, en lo principal, el plan del magnicidio, más increíble de la historia contemporánea. Para llevarlo a cabo, los conspiradores planificaron poner en pie de guerra y hacer entrar en acción a 100.000 hombres de los ejércitos de tierra, mar y aire. Y para tratar de encubrirlo, decidieron sumir a todo un país en un baño de sangre y muerte tan enorme que, esperaban, el horror y la desesperación de centenares de miles de civiles perseguidos, acorralados y desorientados por la catástrofe bélica que se les venía encima, dejaran de pensar, dejaran de razonar y aceptaran cualquier explicación sobre cualquier cosa con tal de seguir viviendo. Con esto esperaban cambiar todo el sistema de relaciones económicas existentes en Chile hasta ese momento, a fin de proteger de la mejor forma posible los intereses de una docena de grandes consorcios industriales y financieros de los Estados Unidos, y de una veintena de grandes monopolios industriales, comerciales y financieros de la oligarquía chilena. Para hacer funcionar esa estructura montada sobre decenas de miles de cadáveres de civiles, los generales pretendieron liquidar toda capacidad de lucha y de exigencias de los trabajadores

chilenos sometiénolos a un régimen de dictadura brutal, en el cual fábricas, oficinas, haciendas, calles y viviendas particulares debieran tomar la forma y las características de un cuartel militar.

En suma, los autores intelectuales del asesinato del presidente Salvador Allende y de la masacre de todo un pueblo, pusieron en acción la mayor maquinaria de guerra en tiempos de paz de la que se tenga memoria en nuestro continente para, fundamentalmente, impedir que el pueblo chileno tomara en sus manos el destino de Chile independiente del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional. Asesinaron a Allende para asesinar a un pueblo. Asesinaron a Allende porque su gestión administrativa fue incapaz, a los ojos del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional, de detener el ímpetu revolucionario de ese pueblo, porque fue incapaz de desviar la lucha popular chilena para que no se transformara en revolución. Y cuando los trabajadores chilenos, tanto de la ciudad como del campo, sobrepasaron la autoridad de los partidos políticos tradicionales, e incluso, en muchos aspectos, la del propio presidente Allende, buscando un camino propio, definitivo y claro para hacerse con el poder económico, político y social y expulsar de una vez de Chile el colonialismo norteamericano y la brutal explotación de la oligarquía, los altos mandos de las fuerzas armadas del país desataron una guerra relámpago contra su propio pueblo, lo sometieron a sangre y fuego, asesinaron a un presidente que ya no les daba garantías para los intereses económicos extranjeros y oligárquicos, y dieron nacimiento a una dictadura fascista.

Este reportaje revela cómo fue esa conspiración. Cómo los generales chilenos, adiestrados en academias de los Estados Unidos, y con la complicidad del gobierno militar de los Estados Unidos y del gobierno militar de Brasil, se confabularon para planificar la puesta en marcha de una gran maquinaria de guerra contra el pueblo chileno.

¿Con qué fuerzas contaban los conspiradores para llevar a cabo el asesinato del presidente Allende, primero, y el asesinato de un

pueblo, después? Con unas fuerzas, que, desde el Pacto de Ayuda Mutua firmado con Estados Unidos en 1952 por el presidente radical Gabriel González Videla, han sido adiestradas, preparadas, financiadas e influidas por las fuerzas armadas norteamericanas:

EJERCITO: poco más de 30.000 hombres, divididos en seis divisiones, de las cuales una es de caballería. Tiene seis regimientos de caballería, dos regimientos blindados y dos de artillería montada de montaña; 16 regimientos de infantería, de los cuales diez son motorizados, y cinco regimientos de artillería. De este total de regimientos, hay ocho estacionados en la capital. La instrucción en ellos es asesorada permanentemente por las misiones militares norteamericanas, cuya tarea va desde la enseñanza en la Academia de Guerra (para oficiales de Estado Mayor), hasta la Escuela de Suboficiales (que tiene su sede en Santiago). En estas unidades se enseña reiterativamente a conscriptos, clases y mandos que «el marxismo es el enemigo de la humanidad», que «los obreros que hacen huelgas son marxistas», que «los intelectuales llamados de izquierda en realidad son marxistas y son traidores a la Patria», etc. Todos los planes educativos, charlas y cursos de «cultura general» en los regimientos del ejército (y unidades de la Fuerza Aérea, Marina y Carabineros), están redactados con la asesoría de expertos norteamericanos.¹

FUERZA AEREA: poco menos de 9.000 hombres. Incluye unidades de bombardeo, ataque aéreo, defensa antiaérea, helicópteros de combate y fuerzas de apoyo terrestre. Su dependencia de la fuerza aérea norteamericana es de tal grado que su comandante en jefe anterior al actual (Gustavo Leigh Guzmán, miembro de la Junta Militar), que se llamaba César Ruiz Danyau, era conocido entre sus subalternos como «El Yanqui», porque manejaba sus fuerzas en constante contacto con la misión aérea de Estados Unidos en Chile.

MARINA: Poco más de 15.000 hombres. La Marina posee, además de las unidades propias de una escuadra de guerra, otras de

infantería de marina, aviación naval e ingeniería naval. Su oficialidad es heredera de la tradición de la Armada Real de Gran Bretaña, y sus mandos se consideran «la aristocracia militar de Chile». Para la preparación del golpe militar contra Allende, fueron los que propusieron el plan de la «operación pinzas», que consistía en el asesinato masivo de dirigentes populares. Ellos también planificaron el asesinato del edecán naval del presidente Allende, meses antes del golpe, para provocar el repudio de sectores militares al Jefe del Estado chileno y prevenir la entrada de ese edecán naval (amigo de Allende), al Estado Mayor de la Marina.

CARABINEROS: tiene un contingente un poco superior a 30.000 hombres. Su organización es militarizada, con armas automáticas y una compañía de tanques antimotines que poseen una ametralladora 0.30 cada uno. Su adiestramiento también está asesorado por norteamericanos. Constituyó un escándalo de proporciones cuando, en 1969, en la revista «CAUSA ML» se publicó el texto completo de la cartilla de adiestramiento antimotines utilizada por el Grupo Móvil de Carabineros. La cartilla era «secreta» para los civiles, y había sido hecha en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono).

Toda esta fuerza militar suma alrededor de 85.000 hombres, a los cuales, el día del desencadenamiento del golpe militar se agregaron más de 10.000 civiles (ex militares, reservistas, etc.) que formaban parte de grupos armados fascistas como Patria y Libertad, Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolando Matus, que habían sido adiestrados, financiados y provistos de armas por la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea. Estos civiles fascistas hicieron el trabajo de fuerza de apoyo durante el golpe militar, bajo la denominación de «unidades independientes», las cuales recibían órdenes directas del Comando Central de la sublevación, cuyo jefe era el general Augusto Pinochet Ugarte.

Esta fuerza militar de cien mil hombres es la que sometió a mi país a una guerra relámpago el 11 de septiembre y, desde entonces, mantiene a su población civil bajo condiciones de ocupación

militar de un ejército extranjero en tiempos de guerra.

Se podría pensar que no todas las unidades de las fuerzas armadas fueron cómplices en el golpe y masacre del pueblo chileno, pero los hechos mostraron que las disensiones internas fueron mínimas. Por ejemplo, en Santiago, sólo una parte pequeñísima de la oficialidad de la Escuela de Suboficiales, del regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto y de la Escuela de Carabineros se opuso al golpe, y esos oficiales fueron asesinados por sus propios compañeros. En general, ninguna unidad de las fuerzas armadas chilenas, considerada como tal, se opuso o se marginó del golpe. Eso demuestra que el trabajo previo de los conspiradores fue minucioso y preparó las condiciones de «opinión» para el momento de decidir el día en que se debía asesinar a Allende y masacrar al pueblo chileno.

«Alfa uno» se tambalea

Como veremos en detalle más adelante, la conspiración de los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y del cuerpo de policía militarizada (Carabineros), comenzó a estructurarse en el período octubre-noviembre de 1972, cuando los servicios de inteligencia del Pentágono norteamericano estimaron que «la capacidad de control de la Administración Allende sobre la potencialidad revolucionaria de los obreros y campesinos chilenos estaba en bancarrota».²

Desde esa fecha, el Latinamerican Desk del Pentágono, en combinación con más o menos un tercio de los generales del ejército, la mayoría de los generales de la fuerza aérea, la casi totalidad de los altos mandos de la marina y la mayoría de los generales de carabineros, comenzó a estructurar un dispositivo golpista contra el régimen constitucional de Chile. Este dispositivo tenía dos etapas: una de «ablandamiento» de la opinión pública nacional a través de la acción de los partidos demócratacristiano y nacional, de los grupos de choque fascistas como Patria y Libertad,

Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolando Matus, y de las organizaciones empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril (oligarquía industrial), Sociedad Nacional de Agricultura (oligarquía agrícola) y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (oligarquía industrial, comercial y financiera). La segunda etapa era la de «caer sobre la presa», cuando se estimara que esa presa ya estaba acorralada, sin aliento y con precario apoyo de las masas.

En este esquema golpista, que tenía considerado un momento de «esperar y ver» según fueran los resultados de las elecciones generales para llenar los 150 cargos de diputados en la Cámara baja del Parlamento y 25 senadores (de un total de 50) en la Cámara alta, el día 4 de marzo de 1973, no estaba definido con claridad, todavía, el destino final de Salvador Allende una vez derrocado. Había, hasta julio de 1973, la idea mayoritaria en el seno de los altos mandos militares chilenos, de que Salvador Allende debía ser exiliado. Incluso, como veremos en este reportaje, había un sector minoritario de generales, sobre todo en el ejército (concretamente los generales de las divisiones primera y tercera, más el jefe conjunto de la segunda división y la guarnición de Santiago, entre los conspiradores; y el general Carlos Prats González, comandante en jefe del ejército, y el general Héctor Bravo Muñoz, comandante de la división de caballería del sur entre los no conspiradores), creían que podían convencer al propio Salvador Allende de encabezar un gobierno cívico-militar, de «unidad nacional», sin la participación oficial de los partidos políticos de izquierda en él. Esto lo llamaban ellos «un golpe blando».

Sin embargo, las cosas se precipitaron a partir de las elecciones de marzo de 1973, cuando la combinación de Gobierno sacó más del 40 % de los votos y la presión de las organizaciones de obreros, campesinos y empleados comenzó a crear de hecho, aunque en forma muy embrionaria, estructuras de poder desde la base. Ello suponía el intento de llegar a desbancar del poder económico,

político y social al imperialismo norteamericano y a la oligarquía nacional. La actitud de los generales más reaccionarios, junto a la opinión del Latinamerican Desk del Pentágono, se endureció y presionó a los generales que se aferraban a la idea de un «gobierno cívico-militar de unidad nacional» encabezado por Allende. Por otro lado, el propio Allende, empujado por la creciente marea revolucionaria de sus partidarios en la base, dejó en claro a los generales Prats y Pinochet que él no se prestaría para encabezar una dictadura militar encubierta.³

A medida que esto ocurría y la estructura militar golpista ya estaba completa en sus detalles estratégicos y tácticos, quedaba por definir con exactitud el destino personal de Salvador Allende; es decir, el objetivo militar final de la operación «alfa uno».

Fue el alto mando de la Marina chilena quien, en julio de 1973, rompió el equilibrio de opiniones, dando un golpe de fuerza audaz y macabro, en combinación con la organización Comando de Ex Cadetes, que era adiestrada por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana a través de un relaciones públicas de la empresa multinacional Ford Motor, el periodista chileno Federico Willoughby MacDonald (actual Secretario de Prensa de la Junta Militar).

En ese mes, los almirantes golpistas recurrieron al asesinato político para avanzar en su trama y prevenir ser descubiertos antes de tiempo. Por medio de un equipo comando de asesinos profesionales, dirigidos por un miembro del Servicio de Inteligencia de la Marina, organizaron y llevaron a cabo el asesinato del edecán naval del Presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters, en la noche del 26 de julio de 1973, en su propia casa. El asesinato del marino fue hecho en combinación con el grupo de conspiradores de los Carabineros, que dominaban el Servicio de Inteligencia de ese cuerpo de policía militarizada.

Los altos mandos de la Marina que participaban en la conspiración contra el Gobierno de Allende, estimaron que con el asesinato del comandante Araya Peters, cumplían dos objetivos de

alta significación:

1) Impedían que Araya Peters, hombre muy cercano al presidente Allende y partidario de la tesis «constitucionalista» de los sectores del Ejército y de Carabineros, fuera ascendido a contralmirante en noviembre-diciembre de 1973 y pasara a formar parte del Estado Mayor de la Armada Nacional. Esto debía ocurrir porque Araya Peters terminaba su período de dos años reglamentario como edecán naval del Presidente en septiembre de 1973, incorporándose de inmediato al servicio activo y, también por reglamento, debía ser ascendido a la penúltima graduación más alta de su arma. Esto dejaba al presidente Allende con un hombre importante en el seno del Estado Mayor naval. Es decir, en el seno de la conspiración para derribar al gobierno constitucional, pudiendo descubrirla antes de tiempo. (Hay que tener claro que en julio de 1973 los generales conspiradores no habían fijado todavía fecha al golpe, y la idea común era que a fines de año o principios de 1974, cuando la situación económica fuera insostenible, acelerada por un nuevo paro empresarial nacional que se preparaba para comenzar desde agosto en adelante, sería posible dar con mayor facilidad el manotazo para derribar al Gobierno)

2) Con la complicidad del Servicio de Inteligencia de Carabineros, los almirantes golpistas esperaban montar una trama para culpar al partido socialista de la muerte del edecán naval, y provocar así una reacción favorable a la conspiración en el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas y carabineros. Como se sabe, el partido socialista era el principal partido del Gobierno, a él pertenecía el propio Salvador Allende y de él dependía su guardia personal conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales).

El trabajo del comando asesino alquilado por el Servicio de Inteligencia de la Marina fue realmente «limpio» y la maquinaria funcionó bien cuando, horas después, el servicio de inteligencia de Carabineros «detuvo» al probable «asesino». Era un empleado de última categoría de una dependencia de la Corporación de Fomento de la Producción, borracho habitual, el cual, ¡vaya sorpresa!,

después de ser flagelado en el primer sótano del Ministerio de Defensa, bajo la supervigilancia de Aldo Montagna, afirmó ser «socialista», haber participado en el comando asesino de Araya Peters por «contrato con un GAP» y estar «arrepentido», razón por la cual «se había entregado, ebrio, a la guardia nocturna de la Intendencia de Santiago, sede de la Primera Prefectura de Carabineros, la que dependía directamente, ¡adivinen de quién!, ¡del general César Mendoza Duran, actual miembro de la Junta Militar!

Sin embargo, al comenzar la segunda semana de agosto, la trama montada por el Servicio de Inteligencia de la Marina comenzó a desmoronarse. Y esto fue así porque un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios de la policía civil chilena —cuya director, Alfredo Joignat, era miembro del partido socialista—, comenzó a coger los hilos que llevaban a la identidad de los integrantes del comando asesino. Pero todavía recibió Allende un primer informe policial sobre el caso, en el cual se establecían más allá de toda duda dos cosas:

1) El detenido por la Primera Prefectura de Carabineros como «presunto homicida» del comandante Araya Peters había sido obligado por el jefe del Servicio de Inteligencia de Carabineros a firmar, después de ser golpeado, una declaración que ni si quiera había leído. El texto de esa confesión del detenido «socialista», «amigo de los miembros del GAP» y «arrepentido» había sido conocido por un parlamentario de extrema derecha (Gustavo Alessandri)... ¡dos horas antes de ser detenido el «presunto homicida» y leída en parte por ese mismo parlamentario en la radioemisora Sociedad Nacional de Agricultura (propiedad de los latifundistas)!

2) La identificación de los verdaderos participantes en el comando asesino —siete personas— había revelado que al menos dos de ellos tenían conexiones con un alto oficial de la Armada Nacional. También la investigación realizada paralelamente sobre el capitán de carabineros del Servicio de Inteligencia que había

hecho firmar la declaración al «presunto homicida», indicaba que se había reunido, dos semanas antes del 26 de julio, con otro alto oficial de la Armada Nacional.

Con estos antecedentes en sus manos, parte de los cuales Salvador Allende ordenó hacer públicos aunque sin mencionar la existencia del «alto oficial de la Armada Nacional», el Presidente se reunió en la mañana del 8 de agosto de 1973 con el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González; comandante en jefe de la fuerza aérea, general César Ruiz Danyau; comandante en jefe de la armada nacional, almirante Raúl Montero, y con el director general de carabineros, general José Sepúlveda Galindo.⁴

La situación política era gravísima: el 27 de julio había comenzado un nuevo paro nacional de los dueños de camiones, dirigidos por León Vilarín, hombre directamente conectado a la conspiración a través de Eduardo Frei y Onofre Jarpa (líderes de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, respectivamente). El 7 de agosto habían sido dadas por terminadas las conversaciones entre la directiva nacional del partido demócratacristiano (dominada por el grupo de Eduardo Frei, el cual complotaba con los militares a través del general Oscar Bonilla, actual ministro del Interior de la Junta, y director de personal en aquella época). Estas conversaciones PDC-Allende habían sido pedidas por el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, bajo la línea general de «llegar a un acuerdo político de no agresión, a fin de detener la guerra civil que sería desencadenada después de un intento militar de golpe de estado». Naturalmente, Frei estaba interesado en que esas conversaciones fracasaran.

El mismo día 30 de julio, fecha de iniciación de las conversaciones, el general Oscar Bonilla se había reunido con Eduardo Frei y el senador Juan de Dios Carmona (ministro de Defensa en la administración de Frei), exigiéndoles que hicieran fracasar los intentos de conciliación política y que su dedicación fundamental debía ser «sacar un acuerdo del Parlamento que declare ilegal el Gobierno Allende». (Sobre este manejo que los generales golpistas

hicieron de los partidos políticos de centro y derecha para sus fines, hablaremos con detalle más adelante, en el capítulo quinto).

Esa mañana del 8 de agosto era la de un día con nubarrones de tormenta para la estabilidad política de Chile: se había desencadenado un paro empresarial destinado a hacer naufragar la economía chilena; en respuesta, las organizaciones de trabajadores exigían a Allende que les permitiera «resolver con nuestras propias manos el paro empresarial»; mientras tanto la conjura industrial-militar-norteamericana empezaba la cuenta regresiva de una embestida final, calculada en medio año a partir de agosto-septiembre, que dejaría la situación «madura» para que los militares se hicieran cargo del poder total.

Sin embargo Salvador Allende no veía la situación global del mismo modo. Sus informaciones sobre la conjura militar, muy fragmentarias, y principalmente manipuladas por la contrainteligencia del Ejército y de Carabineros, le habían hecho formarse un cuadro errado de la magnitud de la conspiración. Él creía que había un pequeño «foco» en la Armada, dirigido por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso, principal puerto chileno a una hora y media de Santiago por carretera), vicealmirante José Toribio Merino —el cual, más tarde, llegaría a ser miembro de la Junta Militar—, y otro «pequeño foco» aislado, en la Fuerza Aérea, que tenía «las simpatías» del general César Ruiz Danyau. Razonando sobre estos datos, Allende, aquella mañana del 8 de agosto, pensó que podría tratar de resolver la crisis política global en que se encontraba, dando un golpe de efecto contra los conspiradores tanto civiles como militares, incorporando a TODAS las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros a su gabinete de ministros, y, por otro lado, desalentar los esfuerzos de las organizaciones de trabajadores por lanzar una embestida contra las fuerzas empresariales oligárquicas, mostrando una actitud de fuerza respaldada por los cuatro comandantes en jefe.

Para conseguir la participación militar en el Gabinete, esa

mañana del 8 de agosto, Allende leyó a los cuatro jefes militares el informe de la policía civil sobre el asesinato del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, y les explicó que «si el pueblo se entera de esta verdad, Chile tendrá medio millón de muertos», porque los obreros y campesinos «se lanzarán contra los cuarteles de la Marina y de Carabineros para aplastar a los conjurados y asesinos de Araya Peters». Definió el informe como una bomba de tiempo. Y explicó que lo mejor era resolver el problema de la «conjura» de la Marina y de Carabineros «de modo confidencial e institucional». Agregó que el informe de la policía civil tenía una segunda parte, que él prefería no mostrar por ahora, en la cual se probaba la «conexión de los asesinos del comandante Araya Peters con fuerzas armadas extranjeras».

Por eso, explicó, lo mejor era, en ese momento, que «las instituciones armadas de Chile muestren cohesión y apego a la constitucionalidad y las leyes» integrando un Gabinete de «unidad nacional», para «apaciguar los ánimos», resolver el paro empresarial en sus inicios y no cuando ya fuera grave, «como el de octubre de 1972», y dar tiempo al poder ejecutivo para promulgar diversas leyes que pedían la Democracia Cristiana y el Partido Nacional por encargo de la Sociedad de Fomento Fabril y Sociedad Nacional de Agricultura.

Los comandantes en jefe aceptaron. El jefe de la Marina fue nombrado ministro de Hacienda; el de la Fuerza Aérea, de Obras Públicas; el del Ejército, de Defensa, y el de Carabineros, de Vivienda. En la mañana del 9 de agosto, Salvador Allende anunció dramáticamente al país la composición de su nuevo Gabinete, definiéndolo como de «seguridad nacional» y calificándolo de «la última oportunidad para evitar el enfrentamiento entre chilenos».

Pero, el fondo de la cuestión era que Allende había puesto la primera frase de su propia condena a muerte por parte de los conjurados. El general de aviación Ruiz Danyau comunicó a José Toribio Merino, almirante, los términos en que Allende leyó el informe sobre el asesinato del ex edecán naval Araya Peters, y la

idea que quedó entre los altos mandos conspiradores era que Allende estaba «peligrosamente cerca de la verdad», y que, si tenía tiempo para profundizar en la investigación, podría llegar a tener un cuadro completo de la conexión Pentágono-Marina-Fuerza Aérea-Ejército-Carabineros, del cual haría uso político en el exilio. Fue el propio Merino quien primero opinó en los días siguientes que «a este individuo hay que matarlo o suicidarlo, no nos queda otra».

No obstante, la decisión final de eliminar físicamente al presidente Allende no surgió hasta la noche del martes 21 de agosto, en una reunión en la que no participó el comandante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. (De hecho, Pinochet no supo nunca que Allende iba a ser asesinado. Se enteró de este plan en la tarde del 11 de septiembre, cuando la muerte del Presidente estaba consumada y se montaba afiebradamente el espectáculo del «suicidio».)

Sólo el entonces jefe de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; el general César Mendoza Duran, de Carabineros, y el general Gustavo Leigh Guzmán, nombrado el 20 de agosto comandante en jefe de la Fuerza Aérea, prepararon el plan para eliminar físicamente a Allende.

Y esa decisión final surgió como secuela de una torpeza mayúscula cometida por el general César Ruiz Danyau el viernes 17 de agosto. Impulsado por ambiciones personales, y creyendo que «la situación estaba madura», Ruiz Danyau preparó a la guarnición aérea de Santiago, compuesta de dos bases, una de apoyo terrestre y otra de caza y bombardeo, para un «pronunciamiento militar» el lunes 20 de agosto, que él creía que arrastraría al resto de las Fuerzas Armadas a su lado. Para desencadenar el golpe, Ruiz Danyau renunció a su cargo de ministro de Obras Públicas el viernes 17 de agosto. Esto significaba que Allende tendría que pedirle la renuncia como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y, planeaba Ruiz Danyau, esta institución militar debía resistirse, sublevarse y provocar la caída de Allende,

así como su nombramiento como jefe de una Junta Militar de Gobierno.

Allende, conociendo en parte el juego de Ruiz Danyau, demoró su aceptación de la renuncia hasta el día siguiente, sábado 18 de agosto. Mandó llamar a reunión en el Palacio de la Moneda al jefe de la Marina, almirante Raúl Montero; al jefe del Ejército, Carlos Prats, y al segundo general más antiguo de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh Guzmán (éste era uno de los jefes de la conspiración, pero Allende no lo sabía). En la reunión, Allende les hizo escuchar una grabación en cinta magnetofónica de una conversación en que participaban un coronel retirado de aviación y dos o tres personajes más. En la grabación se oía decir al coronel retirado que «el grupo» ya había comenzado a «operar diversas unidades» para convencer a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas «para que abandonen a Allende» y se «sumen a la cruzada de lucha contra el marxismo». Agregaba que «los americanos están en conocimiento de nuestra acción y la aprueban», y citaba una sola vez, que «mi general Ruiz Danyau está a muerte con nosotros».

Allende dijo entonces a Gustavo Leigh Guzmán que se debía entender que «en este complot» hay «traición a la patria», hay una potencia extranjera en complicidad con generales «de la República de Chile». «Esto es un baldón moral para nuestras fuerzas armadas.» Acto seguido señaló a Leigh Guzmán que él debía aceptar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, aprobar el llamado a retiro de Ruiz Danyau y convencer a las unidades aéreas que pudieran apoyar a Ruiz que no hicieran semejante cosa. Leigh Guzmán, probablemente muy sorprendido por el texto de la grabación que había escuchado, aceptó la proposición del presidente Allende, el cual amenazaba con «dar a conocer a Chile esta infamia».⁵

Al día siguiente, sin informar a Ruiz Danyau de nada, Leigh Guzmán habló con José Toribio Merino, de la Marina; César Mendoza, de Carabineros, y Augusto Pinochet, del Ejército. Les

indicó, según parece por los sucesos posteriores, que había que desembarcar a Ruiz Danyau, no apoyar la insurrección de la guarnición aérea de Santiago y esperar el momento preciso para dar el golpe.

Así ocurrió. Al día siguiente, lunes 20 de agosto, la oficialidad de las bases aéreas El Bosque y Los Cerrillos, de Santiago, se autoacuarteló, solicitando apoyo a la Marina de Guerra y a los regimientos Tacna y Buin, así como a la Escuela de Suboficiales y Regimiento Blindado Número 2, ambos acantonados en la ciudad. El día, en todo caso, estaba bien elegido. Salvador Allende viajó en helicóptero a Chillan (unos 500 kilómetros al sur de Santiago) para asistir a la ceremonia de conmemoración del natalicio del padre de la patria, el general Bernardo O'Higgins. Sin embargo, el resto de los generales conspiradores habían decidido hacer abortar este golpe «a destiempo» y dejar caer la guillotina sobre el cuello de su cómplice César Ruiz Danyau.

Desde el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que reúne a las tres ramas militares, tomó las medidas de parlamento y convencimiento para los oficiales aéreos autoacuartelados y ya al mediodía estaban todos de acuerdo en que había que «esperar» y que mientras tanto, el general César Ruiz Danyau sería llamado a retiro, el general Gustavo Leigh Guzmán asumía la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y, por último, en el ministerio de Obras Públicas se nombraba a otro general de aviación, Héctor Magliochetti (el cual es ahora ayudante del general Pinochet).

Todo aparentaba ser una rotunda victoria política de Salvador Allende. Joan Garcés, ciudadano español y asesor económico de Allende, en su testimonio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de octubre de 1973, indicaba: «Esa noche, a su regreso a Santiago, el presidente Allende es informado de que el general Pinochet, comandante en jefe subrogante del Ejército, fue requerido para que se sumara al golpe y, según él mismo, respondió: "Soy un general respetuoso de la Constitución y seré

leal al Gobierno hasta las últimas consecuencias."»

Resulta notable el hecho de que hasta la mañana del 11 de septiembre, cuando el general Pinochet dirigía desde los faldeos cordilleranos de Peñalolén, en Santiago, la invasión militar a la ciudad y el ataque y destrucción de La Moneda, todavía Salvador Allende pensaba en él como «un general leal» y lo llamaba por teléfono para preguntarle: «¿Qué está pasando, Augusto?»

La «victoria» sobre el pequeño *putsch* Ruiz Danyau del lunes 20 de agosto, fue una a lo Pirro para Salvador Allende. La había logrado a costa de dejar saber a sus enemigos que tenía informaciones concretas de la complicidad de generales chilenos con generales norteamericanos para tramar el golpe de Estado. Fue la segunda y definitiva frase que el propio Allende escribió en su sentencia de muerte dictada por los líderes de la conspiración. A lo de Araya Peters, se sumaba ahora lo de Ruiz Danyau.

Desde el mismo martes 21 de agosto, los autores intelectuales del asesinato —Leigh, Mendoza y Merino—, comenzaron a elaborarlo, asesorados por un equipo sacado del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército, del Servicio de Inteligencia de la Armada, y del Servicio de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Quedó definitivamente aceptado por estos tres generales que el exilio de Allende, teniendo esos documentos a su alcance y considerando las simpatías que despertaba en la mayoría de los gobiernos y pueblos del mundo, era un enemigo más que formidable para la dictadura militar que sería implantada. Por eso, el objetivo del plan «alfa uno» quedó estructurado cabalmente para ser puesto en práctica durante el día D.

En términos de reconstrucción aproximada (dadas las dificultades para reportear después del día 11 de septiembre para el autor de este libro, ya que pasó 15 días esquivando las fuerzas militares que lo buscaban, y enseguida estuvo confinado 120 días en una embajada en Santiago, a causa de que la Junta Militar se negaba sistemáticamente a otorgarle salvoconducto para que pudiera salir del país), el objetivo final del plan «alfa uno» estaba

contenido en unas ideas que recogí de tercera o cuarta mano después que, consumado el asesinato de Allende, algunos altos mandos militares que estaban en el aparato de acción de «alfa uno», se confidenciaron con mandos inferiores, e incluso civiles, abrumados por la barbaridad que habían planificado, puesto en acción y ejecutado el 11 de septiembre.

Para completar las «ideas básicas» del plan, los autores de «alfa uno» recogieron apresuradamente información sobre la personalidad de Salvador Allende entre los mandos militares que más lo conocían. Principalmente, se valieron de la opinión del general de división Manuel Torres de la Cruz, comandante en jefe de la Quinta División de Ejército en el extremo sur del país, hombre sumamente católico, miembro de la organización internacional Opus Dei y cuarta antigüedad en el generalato del ejército (sobrepasado sólo por Carlos Prats, Augusto Pinochet y Orlando Urbina Herrera; comandante en jefe titular, comandante en jefe subrogante e inspector general del Ejército, respectivamente).

El general Manuel Torres de la Cruz era el jefe de la fracción ultrafascista del Ejército, verdadero motor de la conspiración contra el Gobierno constitucional chileno desde octubre de 1972, y, sin embargo, estaba considerado por Salvador Allende y su «asesor en asuntos militares», el senador Alberto Jerez, de la Izquierda Cristiana, como «el único general allendista del ejército» y un «leal amigo».⁶

Los informes confidenciales del general Torres de la Cruz sobre la personalidad de Allende dibujaron, para los promotores de «alfa uno», la caricatura de un «individuo exageradamente bebedor, voluble, vanidoso, cobarde, fácil presa del desánimo en los momentos difíciles». Esta caricatura era como calcada de la publicitaria en los periódicos de derecha de Santiago («El Mercurio» y su cadena —del clan monopólico Edwards—; «La Tribuna», del Partido Nacional; y «La Prensa», del grupo de la Democracia Cristiana controlada por Eduardo Frei), en el curso de

su violenta campaña por desacreditar la persona del Presidente constitucional, iniciada apenas cuatro o cinco meses después de comenzar su período presidencial el 4 de noviembre de 1970.

Considerando este informe del general Manuel Torres de la Cruz, además de otros del general de Carabineros José María Sepúlveda Galindo y del edecán del Ejército, los promotores del plan «alfa uno», asesorados por el grupo de Inteligencia de la misión militar norteamericana en el Ministerio de Defensa de Chile estimaron que, una vez atrapado Allende en su residencia particular de la calle Tomás Moro, en la parte oriental de la capital, o en el Palacio de la Moneda, para el día del desencadenamiento del golpe militar, sólo podrían ocurrir dos alternativas. En el lenguaje de los conspiradores, las alternativas eran así:

*Probabilidad Uno: El objetivo, acorralado ante el despliegue blindado y de infantería, y bajo la amenaza de bombardeo aéreo, se suicida antes de que comience el combate. Esto es altamente posible, teniendo en cuenta que el objetivo ha expresado en innumerables ocasiones, incluso ante los altos jefes de la Institución, que es un admirador de José Manuel Balmaceda, presidente que se suicidó en 1891, después de la derrota de sus tropas sufrida a manos de las tropas insurgentes.

*Probabilidad Dos: El objetivo, sabiendo que no tiene defensa alguna, ya que él sabe perfectamente que los civiles están incapacitados para defenderse de un ataque coordinado de todas las instituciones armadas del país, se rinde. Esto puede ocurrir antes o después de un bombardeo aéreo de ablandamiento y no de demolición, a su casa particular o al Palacio. El bombardeo de ablandamiento tendrá el carácter de recurso para obtener Uno u obtener Dos, demostrando que la decisión institucional es inflexible y que destruiremos todo intento de oposición a nuestros objetivos mayores.

Si ocurre la Uno, entonces se debe encargar a prensa militar que haga el anuncio de inmediato, comenzando paralelamente la fase prensa de descrédito al objetivo suicida centrando la operación en

proponer una imagen de borracho, licencioso y sibarita (esto se conecta con el equipo encargado de componer pruebas).

Si se da la Dos, se separa al objetivo de inmediato de todos los demás civiles y militares que puedan estar con él. Estos deben ser enviados a seguridad de Escuela Militar, bajo arresto en tiempo de guerra. El objetivo, una vez aislado, debe ser llevado en seguridad máxima a Blindados 2. Se le debe tratar en forma humillante por personal escogido con uniforme de baja graduación. Se le somete a vejámenes (desnudo, actitudes vejatorias, obligarlo a ejecutar actos humillantes), los cuales se fotografiarán de manera abierta para que el objetivo sepa, según experiencias que nos han comunicado, para inducirlo a suicidio por efecto traumatizante. Se debe agregar a la preparación el mostrar al objetivo el material preparado previamente para desacreditarlo públicamente. Si la inducción tiene éxito, prensa militar debe comenzar de inmediato la operación «conocimiento público» en los términos ya citados. Si el objetivo resiste la acción del equipo para efecto traumatizante, y no se consigue resultado alguno cuando hayan transcurrido entre 60 y 90 minutos después de la rendición, el objetivo será inmovilizado y muerto con características de suicidio. A esto seguirá la operación prensa militar como estaba prevista. En ambos procedimientos se informará que el objetivo fue tratado en forma respetuosa a su rango por los vencedores. Que, por eso, sus ropas no se sometieron a registro cuando se le dejó solo en el recinto de oficiales del regimiento, y esto posibilitó que el objetivo guardara una pistola calibre 7.65 entre sus ropas. Con ella, el objetivo se suicidó mientras estaba solo en la dependencia, esperando la llegada de los comandantes en jefe para que firmara su renuncia, según él mismo había aceptado, y dijera unas palabras al pueblo para que no resistiera en ningún momento a la acción de las instituciones militares. El objetivo había aceptado también, salir en un avión, con destino a Cuba, puesto a su disposición por la FACH.»

De acuerdo con informaciones posteriores, muy fragmentarias, los conspiradores de «alfa uno» no consideraron jamás la

posibilidad de que Salvador Allende resistiera hasta el final el asalto abrumador de blindados, infantería y aviación, a los cuales se agregaría más tarde, pasadas las 13 horas, una escuadra de carabineros del Grupo de Servicios Especiales, que cubrió el segundo piso de La Moneda con bombas de gases lacrimógenos y vomitivos. En todo caso, la reconstrucción del objetivo final de «alfa uno» que ustedes han leído, refleja el grado de decisión homicida con el cual los altos mandos militares afrontaron la tarea de derrocar al Presidente constitucional de Chile, después que éste les mostrara los documentos que poseía y que llevaban a una segura pista para demostrar que el Servicio de Inteligencia de la Marina había organizado el asesinato del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, el 26 de julio; y, además, que el ex general César Ruiz Danyau estaba conspirando con asesores de la misión aérea norteamericana.

El día 11 de septiembre, pocos minutos después de las dos de la tarde, toda la operación «alfa uno» se tambaleó, cuando la patrulla de penetración de la Escuela de Infantería subió al segundo piso de La Moneda y asesinó al presidente Allende «fuera de programa». Y mucho más se complicó «alfa uno» debido a que los defensores civiles del Palacio de Gobierno, al ver caer acribillado a Allende, reaccionaron con furia y rechazaron la penetración de la infantería, manteniéndose en un combate de inútil resistencia 40 o 50 minutos más.

Cuando cerca de las tres de la tarde del 11 de septiembre, el general Javier Palacios Ruhman, comunicó al jefe militar de la insurrección, general Augusto Pinochet Ugarte, que toda la resistencia en La Moneda había cesado, éste conocía de la muerte de Allende desde hacía menos de 30 minutos. Un jeep militar, con una estafeta con «información clasificada» (el lenguaje yanqui del ejército chileno para decir «información secreta»), había partido desde las inmediaciones de La Moneda, por órdenes del general Palacios, hasta el cuartel general de Peñalolén para informar personalmente, y no a través de los equipos de telecomunicaciones,

a Pinochet que Allende había sido liquidado a tiros de fusil ametrallador FAL. El jeep llegó a Peñalolén alrededor de las dos y media de la tarde. Desde ese momento, hasta cerca de las tres, Pinochet y su Estado Mayor discutieron qué hacer. Todos estuvieron de acuerdo en que el asesinato de Allende era un tremendo error porque haría más encarnizada la resistencia de los trabajadores; por lo tanto, a cualquier costo, debía probarse que se había suicidado.

Como en esos instantes La Moneda todavía resistía, Pinochet y su Estado Mayor decidieron postergar la discusión de los detalles para fabricar el suicidio hasta el momento de tener en sus manos el cadáver del Presidente constitucional, pero, igualmente, decidieron dar una «información oficiosa», para el extranjero, de que Allende se había suicidado. Para ello recurrieron al sistema de telecomunicaciones abierto, sin clave, que habían estado utilizando todo el día, sabiendo perfectamente que radioaficionados chilenos y de Argentina, además de receptores de las agencias norteamericanas de noticias en Santiago, tenían sintonizadas sus bandas de transmisión. Alrededor de 20 minutos antes de las tres de la tarde, desde Peñalolén, se transmitió en sistema morse, al puesto numero cinco, en el Ministerio de Defensa, a ciento cincuenta metros del asediado Palacio de la Moneda, una instrucción de Pinochet para que ese puesto, de viva voz, diera la noticia encubierta como información interna entre los distintos puestos de comando de la insurrección militar. El puesto número cinco al mando del vicealmirante Patricio Carvajal Prado, hombre de confianza del almirante José Toribio Merino, y el cual, presumiblemente estaba también en conocimiento del verdadero alcance de «alfa uno», en ese instante a punto de fracasar, cumplió la orden a las 14.45 horas. Un radioaficionado de izquierdas que estaba escuchando los mensajes militares, pudo grabar esa comunicación y por eso, yo puedo transcribirla textualmente. Decía así:

«Atención... éste es el puesto cinco... el puesto de Patricio... se

informa que personal de la Escuela de Infantería está ya dentro de la Moneda... lo que sigue lo voy a transmitir en inglés, por si nos están escuchando... they said presidente Allende committed suicide... ¿me entendió?

La frase en inglés, desde el punto de vista de la seguridad para el mensaje, era ridícula, porque este idioma se enseña en Chile desde la escuela básica. Sin embargo, no era tan ridícula si, como el vicealmirante Carvajal sabía, los corresponsales norteamericanos estaban escuchando en sus monitores de Santiago y de Mendoza, en Argentina. Eso les facilitaba la rápida y exacta comprensión, y lo que los militares insurrectos querían era que todos los teletipos del mundo, a partir de esa hora, prepararan a la opinión pública mundial para la idea del «suicidio de Allende».

Pero ésta fue la parte fácil de la trama montada por los generales insurrectos. La difícil comenzó apenas quince minutos después, cuando Pinochet, ansioso, le preguntó al general Palacios: «¿Cómo está el cadáver?», y éste le contestó: «Destrozado». Pinochet dio orden de aislar el sitio y de que nadie viera el cuerpo ametrallado de Allende.

Durante media hora se buscó una forma adecuada de suicidio para un cadáver ametrallado. Se acordó destrozarle la cabeza con balas de subametralladora, vestirlo de nuevo para impedir que los testigos posibles vieran las otras heridas en el cuerpo, y poner el cadáver en otro sitio más adecuado, ya que el Salón Rojo, lugar original del asesinato, estaba destruido y en llamas, al igual que el despacho de trabajo del Presidente. Se eligió el Salón Independencia, un lugar de descanso y recepción de visitas privado del Presidente. Allí, los hombres del Servicio de Inteligencia del Ejército, vigilados por el general Javier Palacios Ruhman, sacaron del cadáver el ensangrentado suéter de cuello subido que había utilizado durante todo el asedio. También le sacaron los pantalones color azul, que estaban perforados y ensangrentados a la altura del vientre. Le pusieron pantalones de color marengo, sacados de uno de los tantos cadáveres que había dentro de La Moneda, y un suéter

gris de cuello subido. En seguida, para mayor seguridad, le colocaron una chaqueta de tweed color gris, abotonada en el botón inferior, que el Presidente se había sacado en el combate, dejándola sobre su mesa de trabajo. Vestido así, los militares del SIM lo sentaron en el sofá de terciopelo rojo que estaba adosado a la pared que da para la calle Morandé, lo apretaron contra el respaldo, pusieron la subametralladora que tenía en sus manos Allende cuando fue asesinado casi una hora y media antes, y lo acribillaron. La cabeza de Allende se partió en dos, y parte de su masa encefálica, sangre y trozos de cabello golpearon y se pegaron en un gobelino que estaba en el muro adyacente al sofá, a una altura superior a los tres metros. El escenario estaba completo. Como el cadáver de Allende tenía un *rigor mortis* de poco más de una hora, no fue fácil colocarlo en el sillón, y los militares del Servicio de Inteligencia del Ejército tuvieron que enderezar con fuerza las piernas del ex Presidente, dejándolas muy separadas, para que estabilizaran el cuerpo. Los brazos quedaron colgando a los costados del cuerpo, ligeramente extendidos.

Eran las tres y media de la tarde. En ese instante, más de tres horas después de comenzado el incendio de La Moneda originado por la explosión de los cohetes de los aviones Hawker Hunter, los bomberos de la Quinta Compañía (que tenían preparados sus carros contra incendios desde las 12.20 horas, cuando terminó el bombardeo aéreo y vieron las llamas sobre el edificio gubernativo) recibieron órdenes de salir a combatir el fuego. El cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos está a menos de trescientos metros de La Moneda, en calle Nataniel, en la planta baja del mismo edificio que ocupan las oficinas de la agencia norteamericana de noticias United Press International.

Jaime Egaña, capitán de la compañía de bomberos, relata que «un momento que no se nos olvidará fue la salida del carro bomba desde el cuartel; se abrieron las puertas y los soldados se apostaron en diversos sitios. Al salir, los militares dispararon simultáneamente contra todos los sitios para defender nuestro

avance».

Al llegar a La Moneda, los bomberos vieron que el incendio cubría casi todo el sector de calle Morandé, en los pisos segundo y tercero, y toda la fachada norte, en que estaban el Ministerio del Interior y la Presidencia.

La orden de intervención para los bomberos había sido dada desde el Ministerio de Defensa, después que el general Palacios informara que estaba todo listo en el salón privado de la Presidencia. Es decir, que el espectáculo estaba montado para esparcir por el mundo la teoría de que Allende se había suicidado. Sin embargo, el general Palacios, presionado por el incendio que amenazaba con llegar al lugar donde se preparaba la trama, actuó con demasiada prisa al informar al Ministerio de Defensa que «todo O.K.». Y eso porque cuando los bomberos comenzaron a combatir el fuego, por lo menos dos entraron al Salón Independencia, y fueron empujados hacia el exterior por los fusiles ametralladoras de los que estaban en el interior. Pero alcanzaron a ver a uno de los militares, que ponía un arma en las rodillas del cadáver sentado en el sofá, mientras otro ponía a su lado el casco de combate y los anteojos del presidente Allende. Sólo después de eso, se les informó a todos los bomberos que ahí no se podía entrar, porque «el presidente Allende se suicidó y no se puede mover nada».

Al mismo tiempo que esto ocurría, los miembros del SIM estaban empeñados en otra tarea importante: la de fabricar un testigo caído del cielo. Ocurrió que cuando las fuerzas de infantería entraron por segunda vez al segundo piso de La Moneda, desmoronada ya la resistencia civil, actuaron con una brutalidad sin límites, golpeando, pateando y dando de culatazos a los rendidos, obligándolos a tenderse en el suelo, de bruces, con las manos sobre la nuca, y corriendo sobre ellos con las pesadas botas de combate al atravesar los pasillos. Uno de los últimos en ser rodeados por los soldados asaltantes fue un civil que llevaba un maletín en la mano, que estaba acurrucado contra un muro y sollozaba, histérico,

gritando «yo no he hecho nada... yo no he hecho nada». Uno de los miembros del equipo del SIM que iba a la cabeza, junto con el general Palacios, para comenzar el trabajo de «montar el suicidio» de Allende, se quedó con el histérico prisionero, mientras a pocos metros, en el Salón Independencia, se discutía la forma de simular el suicidio. Ahí surgió la idea. El civil fue llevado al Salón, y los miembros del SIM le dijeron: «Tú eres del GAP y asesinaste al Presidente... Te fusilaremos en el acto».

Ese hombre era el doctor Patricio Guijón Klein, que desde noviembre de 1972 había sido contratado como médico cirujano en el equipo de doctores para cuidar la salud del presidente. No pertenecía a ningún partido político integrante de la Unidad Popular. Había aceptado ser médico de Allende simplemente porque eso mejoraba su *statu* como profesional. Esa tarde del 11 de septiembre se había visto atrapado junto con el equipo médico restante (siete personas), y el futuro le deparaba ser «testigo» de un suicidio que no ocurrió... Era su vida contra su participación en la trama montada por los militares insurrectos. Prefirió ser testigo.

Con Palacios y los miembros del SIM, entre las tres y cuatro de la tarde, el doctor Guijón se aprendió el esquema general de lo que tenía que decir. Fueron testigos de este acuerdo las decenas de cadáveres de soldados que había en el interior de La Moneda, y los nueve cadáveres de los civiles que cayeron defendiendo la sede de los presidentes constitucionales de Chile. Mientras combatían el fuego, los bomberos fueron advertidos que todos quedaban bajo «jurisdicción militar» y no «pueden decir a nadie lo que han visto dentro de este recinto». La eficacia de la maquinaria militar para fusilar, detener, torturar y hacer desaparecer personas por miles, demostrada en los días posteriores, reafirmó en el ánimo de los bomberos de la Quinta Compañía el deseo de cumplir con las órdenes militares recibidas el 11 de septiembre, entre las tres y media de la tarde y las diez de la noche, cuando se retiraron del recinto, después de sofocar el incendio.

A esa hora, el cadáver del presidente Allende ya estaba en el

Hospital Militar, para ser puesto dentro de un ataúd, y para servir de testigo a una junta de médicos del Ejército, la Fuerza Aérea, Marina y Carabineros, que no harían más que copiar en un «acta» lo puesto horas antes por los detectives de la Brigada de Homicidios, llamados por el general Ernesto Baeza Michelsen, comandante de las fuerzas militares que habían invadido el centro de Santiago a partir de las seis de la mañana de ese día.

Los detectives de la Brigada de Homicidios fueron llamados a las cuatro de la tarde por el general Baeza Michelsen. A esa misma hora, desde el comando conjunto central, en Peñalolén, Pinochet, por intermedio del general Oscar Bonilla, el cual sabía del plan primitivo que se frustró, daba órdenes distintas, que no fueron obedecidas. En la grabación de un radioaficionado, esta orden se transmitió así:

- Aquí general Bonilla... General Bonilla a contralmirante Carvajal. Una orden de Pinochet... General Bonilla de parte del comandante en jefe: es indispensable que a la mayor brevedad posible los médicos jefes del Servicio de Sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende... con el objeto de que más adelante no se nos pueda imputar por los políticos a las Fuerzas Armadas que fuimos los que provocamos su fallecimiento... esto debe ser a la brevedad... diga si me ha entendido...

- Conforme... repito: los jefes de Sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende... con el objeto...

- Sí... los jefes del Servicio de Sanidad de cada institución y además de Carabineros... roger...

La descoordinación entre los jefes militares, atropellándose entre sí para intentar sepultar a los ojos de los chilenos y de los demás pueblos del mundo el asesinato de Allende, era muy grande esa tarde del 11 de septiembre. Razonando con frialdad, el jefe de

las fuerzas que asaltaron el centro de Santiago, general de brigada Ernesto Baeza Michelsen, en contacto con su superior inmediato, el jefe de las fuerzas que ocuparon toda la provincia de Santiago, general de brigada Sergio Arellano Stark, parece haber llegado a la conclusión que después de la acción militar de *blitzkrieg* en que estaban siendo fusilados y asesinados miles de civiles en todo el país, la «palabra militar» iba a estar muy desprestigiada en la opinión pública chilena. Por eso, decidió que la «certificación» del «suicidio» debía estar avalada por la policía civil, y con ese objeto llamó a la Moneda al equipo de la Brigada de Homicidios, desobedeciendo las órdenes del propio general Pinochet, que exigía la presencia de los médicos militares. Baeza Michelsen, en diez minutos, ordenó al equipo de la Brigada de Homicidios lo que tenía que hacer:

1. Levantar un acta del «sitio del suceso» tal como lo iban a encontrar cuando entraran al Salón Independencia de La Moneda. Es decir, debían levantar un acta del escenario tal como lo preparó entre las tres y tres y media de la tarde el equipo del Servicio de Inteligencia Militar, vigilado por el general de brigada Javier Palacios Ruhman.

2. Examinar la herida de «tipo suicida» que el cadáver de Allende tenía en la cabeza... Y NADA MAS...

3. No realizar una investigación circunstancial del sitio del suceso.

Los miembros de la Brigada de Homicidios, encabezados por el inspector Pedro Espinoza Valdés, cuyas ideas políticas eran notoriamente contrarias al destruido régimen de la Unidad Popular, comenzaron su «trabajo» a las 16.20 horas del día martes 11 de septiembre y lo terminaron a las 18.10 horas.

Una hora después que este trabajo había concluido el general Pinochet, por intermedio del general Oscar Bonilla, seguía insistiendo en la presencia de los médicos militares y, desesperado, preguntaba por qué no llegaba todavía al comando central de las tropas de ocupación de la capital el «acta del suicidio».

A las siete de la tarde, un radioaficionado captó y grabó esta conversación por el equipo de telecomunicación de los militares, entre el general Bonilla y el general de aviación Nicanor Díaz Estrada, que estaba a cargo del puesto de coordinación, en el Ministerio de Defensa Nacional:

- Nicanor... escucha... queremos saber si ya los jefes del Servicio de Sanidad y el médico legista hicieron el reconocimiento y el acta correspondiente... esto es muy importante... NO LO VAYAN A LLEVAR A LA MORGUE PARA QUE LE HAGAN LA AUTOPSIA PORQUE ÉSE ES UN ANTRO DE EXTREMISTAS Y PUEDEN TRATAR DE ROBARSE EL CUERPO...

- Comprendido... dimos orden de traslado EN SECRETO al Hospital Militar... los jefes legistas fueron citados en el Hospital Militar. Di orden de que el acta deben traerla aquí, al Estado Mayor. Pero no la han traído... DE ESTO HACE UNA HORA Y MEDIA... pero no tenemos noticias...

- Sí, Nicanor... Dile a Hernán Brady que garantice la absoluta seguridad militar del Hospital Militar... Esto es importante... Adelante. Cambio, Nicanor...

- Lo hice así.

- Gracias, Nicanor.

Está claro que los generales al mando de las tropas de invasión de Santiago estaban muy preocupados por mantener fuera de la vista de todas las personas ajenas a sus instituciones el cadáver del asesinado presidente. Y su preocupación fue tan celosa que, al día siguiente, no le permitieron a su viuda, Hortensia Bussi, que mirara por última vez el cuerpo de su marido.

La viuda de Allende, el día 13 de septiembre, en Santiago, en la embajada de México, relató al periodista mexicano Manuel Mejido, del «Excelsior», la forma en que los militares le impidieron ver el cadáver:

- Al otro día (miércoles 12 de septiembre) me avisaron por teléfono que Salvador se encontraba en el Hospital Militar y que

estaba herido. Me dirigí allá y aunque me identifiqué plenamente, los soldados me negaron la entrada. Después hablé con un general que me recibió con estas palabras: "Señora, fui amigo de Salvador Allende. Le expreso mi más sentido pésame". Entonces supe que había muerto.

Me prometió ese general, cuyo nombre no conozco, un jeep y un oficial para que me acompañara al campo aéreo del Grupo Siete de las Fuerzas Aéreas de Chile, donde me dijeron que tenía que dirigirme. Pero después salió otro general que tampoco conozco, y simplemente me dijo que viajara en mi auto, porque no había disponibles ni vehículos ni soldados.

Decidí viajar en el pequeño automóvil de mi sobrino Eduardo Grove Allende. En el campo aéreo me dijeron que el cadáver de Salvador estaba a bordo de un avión de la Fuerza Aérea. Antes de abordarlo hablé por teléfono con mi hija Isabel, pero no pudo acompañarme porque le faltaba su salvoconducto.

Subí al avión. Imagínese el cuadro que vi: un ataúd en el centro, cubierto con una cobija militar, y a los lados, Patricio López, mi otro sobrino, y Laura Allende, la hermana de Salvador. Me acompañaron también el edecán Roberto Sánchez y Eduardo Grove. Volamos hacia Viña del Mar. El avión descendió en la base aérea de Quintero. El vuelo fue sin tropiezos, suave. Después bajaron a Salvador.

Pedí verlo, tocarlo, pero no me lo permitieron... Me dijeron que la caja estaba soldada. En dos automóviles, siguiendo al furgón, fuimos hasta el cementerio de Santa Inés. La gente nos miraba extrañada. No sabía de quién se trataba, ni de quién era el cadáver que iba en el furgón. Había gran cantidad de soldados y de carabineros, como si se esperase una multitud. Las cinco personas que acompañábamos a Salvador caminamos en silencio hasta la cripta familiar, donde enterramos hace un mes a Inés Allende, la hermana de Salvador, que había muerto de cáncer.

Volví a insistir en ver a mi marido. No me lo permitieron, pero levantaron la tapa y sólo descubrí una sábana que lo cubría. No

supe si eran los pies o la cabeza. Me dieron ganas de llorar. Los oficiales me impidieron que lo viera. Volvieron a repetirme que el ataúd se encontraba soldado. Entonces dije al oficial que me acompañaba, en voz alta: "Salvador Allende no puede ser enterrado en forma tan anónima. Quiero que ustedes sepan por lo menos el nombre de la persona que están enterrando". Tomé unas flores cercanas y las arrojé a la fosa y dije: "Aquí descansa Salvador Allende, que es el Presidente de la República y a quien no han permitido que ni su familia lo acompañe".

Las contradicciones

La preparación del escenario en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno de Chile fue tan precipitada, debido a que no se pudo poner en práctica la operación final de «alfa uno» para suicidar a Allende en el interior del Regimiento Blindados Número 2, que los diferentes personajes que intervinieron en la trama cometieron errores burdos. Errores que podrían servir para que cualquier detective de tercera categoría de la policía civil de Santiago investigara y desentrañara el crimen. Pero, la policía civil de Santiago no está interesada en descubrir a los homicidas del presidente Allende. El actual Director de Investigaciones es el mismo general que dio las órdenes de «no investigar» a los técnicos de la Brigada de Homicidios que concurrieron a La Moneda a examinar SOLAMENTE la herida de tipo suicida que Allende tenía en la cabeza, después que le fue destruida con su propia metralleta por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. El mismo día 11 de septiembre, en la tarde, el general Ernesto Baeza Michelsen fue nombrado Director de Investigaciones, es decir, jefe máximo del inspector Pedro Espinoza y el resto de policías civiles que concurrieron a La Moneda. Por eso, ningún detective chileno se dedicaría a investigar y resolver el fácil caso del homicidio del Presidente de Chile.

Pero, la presión psíquica de los momentos que se vivían el 11 de

septiembre, al parecer, influyó demasiado en el inspector Pedro Espinoza y sus subordinados no razonaron con claridad. Por ello no repararon en un error cometido por los agentes del SIM que prepararon el escenario del «suicidio». Y a tal punto no repararon, que el error quedó por escrito, para la Historia, en «el parte policial» levantado en La Moneda, según se conoció oficialmente el día 20 de septiembre en Santiago, por lectura del propio general Baeza Michelsen, en conferencia de prensa a los periodistas sobrevivientes de la invasión militar contra Santiago iniciada el día 11 de ese mismo mes.

Dice el parte de la Brigada de Homicidios:

«El cadáver yacía sentado sobre un diván de terciopelo rojo granate adosado al muro oriental, entre dos ventanas que miran a la calle Morandé, con la cabeza y el tronco LEVEMENTE INCLINADOS HACIA EL LADO DERECHO, MIEMBROS SUPERIORES LIGERAMENTE EXTENDIDOS, EXTREMIDADES INFERIORES EXTENDIDAS Y UN TANTO SEPARADAS.»

Y agrega algo determinante para cualquier investigación:

«LOS PROYECTILES SUICIDAS FUERON DISPARADOS CON EL ARMA PUESTA ENTRE LAS RODILLAS Y EL CAÑÓN PEGADO A LA BARBILLA.»

¿Qué clase de arma fue la utilizada por Salvador Allende, según este parte policial?

«Fusil ametrallador núm. 1.651, de fabricación soviética, en cuya culata se leía la inscripción: "A Salvador de su compañero de armas. Fidel."»

Es decir, se trataba de un fusil de grueso calibre, cuyo efecto de retroceso es muy poderoso.

Cualquier reportero policial, y el autor de este reportaje lo fue durante largo tiempo en el periódico «La Tercera», de Santiago, tiene una experiencia práctica en muertes de tipo suicida, con arma de fuego, y el suicida no queda sentado en una silla o mueble sin brazos laterales estrechos. Esto permite que hagamos una

reconstrucción de los sucesos a partir de la afirmación de la Brigada de Homicidios, según la cual Salvador Allende se habría suicidado apoyando un fusil ametrallador tipo AK en sus rodillas, tras sentarse en un sofá bastante ancho; es decir, sin apoyo lateral.

En el momento de sentarse, debido a la altura del asiento del sofá (los reporteros conocíamos ese sofá bastante bien) y para sujetar la culata del fusil ametrallador con las rodillas. Salvador Allende tendría que haberse apoyado en la punta de los pies, con las piernas muy tensas, el tronco inclinado, los brazos muy flectados y la cabeza descansando sobre la punta del cañón del fusil ametrallador. Habría sido lo que se podría llamar una posición «incómoda», en «equilibrio inestable» hacia adelante.

Pues bien, al apretar el gatillo en esa posición y volarse media cabeza, el cuerpo del «suicida» tendría que haber sufrido un sacudón primero, separándose sus rodillas, y el fusil ametrallador habría caído con fuerza al suelo, mientras que el tronco se inclinaría hacia adelante y a la derecha, cayendo al suelo junto al sofá.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al revés, como si el caso de Allende hubiera sido muy especial, en el cual no se cumplen las leyes del modo de morir de todo ser humano, su cadáver RÍGIDO DE INMEDIATO DESPUÉS DE LOS BALAZOS, abrió las piernas, ya rígidas, para no caer del sofá, y, lo mejor de todo, para que no hubiera duda: el fusil ametrallador quedó sobre la falda del «suicida».

Este detalle está contenido en la propia acta legal levantada por la Brigada de Homicidios, y en las declaraciones del general Javier Palacios Ruhman, el 21 de septiembre, en Bogotá, a la agencia española EFE: «Me acerqué al cadáver. El Presidente estaba sentado en la mitad del sofá tapizado de rojo CON LA METRALLETA EN LAS MANOS. El casco y la máscara de gases a un lado, los anteojos en el suelo. La cara estaba hinchada y la cabeza partida en dos, como una sandía.» Fíjense ustedes como el propio general Palacios se desenmascara. Al querer dar mayores

detalles pone al descubierto las incongruencias: el cadáver estaba «sentado»... «en el medio» del sofá... se destrozó «como una sandía» la cabeza con un fusil ametrallador... ¡y sin embargo la muerte y el *rigor mortis* le vinieron de manera instantánea... dejándolo sentado... y con el fusil en la mano, después del tremendo impacto de dos balas del calibre del AK soviético!

Así, la propia versión de la Brigada de Homicidios de la policía civil chilena, que el general Ernesto Baeza esperaba les sirviera de escudo de protección a los altos mandos que planearon el asesinato del presidente Allende, los desenmascaró totalmente. Dejó en evidencia que:

1) El cadáver de Allende FUE ACOMODADO EN EL SOFÁ DESPUÉS DE MUERTO UNA HORA ANTES.

2) Entre las dos y ocho minutos de la tarde, momento en que Salvador Allende fue asesinado por una patrulla de penetración de la Escuela de Infantería, al mando de un capitán, y las cuatro y veinte minutos de esa misma tarde (hora en que el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil comenzó el examen «del sitio del suceso»), el general Javier Palacios Ruhman, al mando de un equipo del Servicio de Inteligencia, trasladó el cadáver de Allende desde el Salón Rojo al Salón de la Independencia, le cambió parte de la ropa, le puso una chaqueta, le voló la cabeza de dos balazos de fusil ametrallador, obligó al médico Patricio Guijón Klein a servir de «testigo presencial» del supuesto suicidio presidencial, y, por órdenes del general Ernesto Baeza Michelsen, contravino las del comandante en jefe de la insurrección militar contra los civiles chilenos, general Augusto Pinochet, que exigía que «el suicidio» fuera certificado por los médicos militares —para mayor seguridad, por supuesto— y no por los médicos civiles.

3) Toda esta trama se hizo con tal apresuramiento, que se cometieron errores elementales, tan elementales como el de la posición del cadáver de Allende; las contradicciones entre Guijón y el general Palacios en sus declaraciones posteriores (como veremos más adelante); la falsedad circunstancial del comunicado oficial de

los generales insurrectos sobre la muerte de Allende; y lo más grave, una diferencia de DOS HORAS entre la muerte real del presidente Allende, y la muerte que señala el informe de la Brigada de Homicidios.

Este último e increíble error está contenido en las líneas finales del informe policial, según versión publicada en el diario «El Mercurio», de Santiago de Chile, del día 21 de septiembre. Dice así:

«Data de muerte, a las 18.10 horas, hora en que finalizó el examen, fue estimada en seis horas.»

Ahora, es cuestión de hacer la resta. ¿Cuánto es 18.10 menos seis? es 12.10. Es decir, que según el nervioso informe pericial hecho por el inspector Pedro Espinoza Valdés, de la Brigada de Homicidios, al cadáver de Salvador Allende, éste se habría suicidado pocos minutos después del mediodía. ¡A la hora en que los dos aviones de combate Hawker Hunter, de la Fuerza Aérea chilena finalizaban de descargar sobre La Moneda 18 cohetes de guerra! ¡Es decir, dos horas antes de la muerte real de Allende!

Este increíble error de los expertos de la policía chilena, revela hasta qué punto ese examen del «sitio del suceso» fue hecho bajo presión anímica.

Por supuesto, no se puede culpar a los policías al mando del inspector Espinoza por estos errores. Hay que tener en consideración que cuando ellos llegaron a La Moneda, en la tarde del día 11 de septiembre, se combatía en toda la capital, y no estaba claro qué bando podía ganar la batalla. Entonces, aun cuando los policías debieron darse cuenta de que el montaje de la escena del «suicidio» de Salvador Allende era sumamente defectuoso, no pusieron reparos y, actuando «profesionalmente», se limitaron a reflejar por escrito, en el informe pericial, la escena tal como la encontraron. Total, no era la policía civil la que había montado la escena. Más que eso: en aquellos momentos, ellos no tenían la menor idea por qué se había montado una escena para hacer aparecer a Salvador Allende como suicidado. En una palabra, los

expertos policiales, al actuar como actuaron y escribir de esa forma el informe pericial, se dejaron una «puerta de salida» para su actuación en la trama, en el caso de que más adelante los militares insurrectos hubieran sido derrotados por los civiles que combatían para defender el orden constitucional y democrático.

Pero no sólo el informe oficial de la Brigada de Homicidios revela más allá de toda duda que los testigos principales del supuesto suicidio de Allende estaban mintiendo. Comencemos por el más importante, el general de brigada Javier Palacios Ruhman, jefe de las fuerzas de asalto blindadas y de infantería al Palacio de La Moneda.

El día 21 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el general Palacios fue entrevistado por el periodista Arturo Abella, en el programa informativo de televisión «Siete en Punto». He aquí transcripción textual de sus declaraciones:

«Cuando rodeamos el Palacio de La Moneda, en forma de tenazas, la aviación había destruido gran parte de la casa. Nosotros entramos sin máscara de gases y nos recibieron a balazos los miembros de la guardia personal de Allende y gritaban «El marxismo no se rinde». No veíamos casi nada por el humo, pero dominamos la resistencia. Cuando subí al segundo piso, en busca del Presidente, las oficinas donde despachaba estaban solas y en desorden... Seguí mi camino por los sitios que no estaban destruidos. Llegué a la antesala del gran comedor de Palacio. Abrí la puerta, allí estaba Allende sentado en un sofá.

»¿Usted lo identificó a primera vista? —preguntó el periodista.

»No. No me pareció que era Allende. Al lado suyo, o en un rincón, había un médico de apellido Yojón o Guijón. Temblaba y casi no podía hablar. Me dijo: "Es el Presidente, es el Presidente". Me acerqué al cadáver. El Presidente estaba sentado en la mitad del sofá tapizado de rojo, con la metralleta en las manos. El casco y la máscara de gases a un lado, los anteojos en el suelo. La cabeza estaba hinchada y la cabeza partida en dos, como una sandía. Las manos estaban negras de pólvora. No había casi sangre. Ordené a

mis hombres que no tocaran nada, mientras llegaban los peritos a examinar el cadáver. Llegaron los peritos de las tres armas chilenas. Comprobaron el suicidio. Se tomaron fotografías que están en poder del Gobierno y que serán presentadas, si se desea verlas.

»¿Se dice que tenía heridas en varias partes del cuerpo?

»Ni una sola. Ni una sola. El peritaje lo puede demostrar. Había también en la habitación una botella de whisky. Pedí a los legistas que establecieran si el Presidente había bebido algo, la prueba fue negativa. Allende no bebió absolutamente nada.»

Es importante no perder de vista el hecho de que estas declaraciones fueron hechas el día 21 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, por el general Javier Palacios, quien estaba en Colombia como jefe de la delegación deportiva militar chilena al Quinto Festival Sudamericano de Cadetes. Es decir, Palacios no tenía idea del «perfeccionamiento» en Chile, de la historia del «suicidio» de Allende centralizada ahora en las manos del general Ernesto Baeza Michelsen.

Del relato de Palacios se desprende que las tropas a su mando entraron a la Moneda a sangre y fuego, luchando contra defensores del recinto QUE NO TENÍAN INTENCIÓN ALGUNA DE RENDIRSE... Bueno, si esto era así... ¿por qué se había suicidado Allende? Era un detalle muy importante que, en Santiago, el general Baeza Michelsen ya había resuelto, adecuando coherentemente los testimonios del testigo civil —doctor Guijón— y la versión oficial «corregida» de la caída de La Moneda. Esto no fue una tarea fácil para el general Baeza, porque otros generales, encabezados por el propio Augusto Pinochet, habían dejado por escrito, en declaraciones apresuradas, una serie de errores y falsedades que, compiladas ordenadamente por un investigador serio e imparcial, podrían destruir todas las versiones militares sobre el supuesto suicidio de Allende.

Como ha quedado establecido fehacientemente, los defensores de la administración constitucional chilena en el Palacio de la

Moneda, no expresaron nunca su deseo de rendirse, pero, al mismo tiempo, durante toda la mañana, los mandos militares insurrectos anunciaron reiteradamente la «rendición» de Allende a través de las radioemisoras en su poder, e incluso por medio de una comunicación oficial, poco después de la una de la tarde del día 11. Los hechos, cronológicamente, ocurrieron así:

9.20 horas del martes 11 de septiembre. Salen de La Moneda los tres edecanes militares del presidente Allende, a los cuales éste les había dicho que «los generales traidores a Chile anuncian que atacarán este Palacio presidencial en cinco minutos más... Ustedes quedan en libertad de acción conforme les dicte su conciencia. Yo me quedaré en La Moneda y resistiré hasta el último cartucho.» Los médicos: Enrique Paris, comunista; Eduardo Paredes, socialista, varios periodistas de la Unidad Popular y parte de los ministros que acompañaban a Allende en esos momentos, fueron testigos de esta conversación. Cuando los edecanes presidenciales dejaron el Palacio y entraron al Ministerio de Defensa (a una cuadra de distancia), la Radio Sociedad Nacional de Agricultura anunció por primera vez la rendición de Allende.

11 horas. Cuando el anunciado bombardeo de la Fuerza Aérea para esa hora no se produjo, las radios en manos de los insurrectos también propalaron la rendición de Allende. Pero la verdad era otra. Allende había pedido a los generales que suspendieran por diez minutos el bombardeo, para que «las mujeres y quienes lo deseen abandonen este lugar antes de la batalla final». Allende, a esa hora, reunió a todos los ocupantes de Palacio, civiles y militares, en el Patio de Invierno del recinto. Allí, hablándoles a los integrantes de la guardia de Carabineros de Palacio —cincuenta hombres— y al general de Carabineros José María Sepúlveda Galindo, director general del Cuerpo policial militarizado, depuesto esa mañana por la insurrección del general César Mendoza Duran, integrante de la Junta Militar, les dijo que podían abandonar La Moneda quienes quisieran. Les agregó que lo único que «les pido, es que no se resistan a entregar sus armas cuando

abandonen Palacio. Esas armas las necesitamos quienes vamos a hacer frente a la sublevación militar». Todos los jefes y tropas de Carabineros abandonaron La Moneda, a medida que eran desarmados por los civiles, los cuales tuvieron que mantenerlos encañonados para evitar cualquier traición. La traición de Sepúlveda Galindo al presidente Allende, esa mañana, fue premiada por los integrantes de la Junta Militar, más tarde.

11.10 horas. Salen de La Moneda las primeras mujeres —entre ellas las periodistas Frida Modak y Verónica Ahumada. El Presidente había estado tratando, desde las nueve y media de la mañana, cuando las tropas insurrectas que rodeaban La Moneda hicieron los primeros disparos en contra de Palacio, que las mujeres y «los varones que no tengan armas» se fueran del recinto. A las nueve y veinticinco de la mañana, Allende, en el Salón Toesca, reunió a todas las personas que había en el recinto para avisarles que el «general traidor Baeza Michelsen me ha anunciado que comenzará a atacar La Moneda en dos minutos más». Por esa razón, Allende dijo un breve discurso, cuya reconstrucción aproximada es la siguiente: «Del mismo modo que ninguna revolución puede triunfar si sus dirigentes no saben asumir sus responsabilidades en todo momento y hasta sus últimas consecuencias, también es cierto que las muertes inútiles no contribuyen en absoluto a la causa de la revolución. Por ello ruego encarecidamente a los varones para que me ayuden a convencer a las damas para que abandonen el Palacio, ya que los que en él nos quedaremos vamos a resistir hasta el final.»

Minutos antes de las once de la mañana, en un gesto típico de la personalidad de Allende, éste se había comunicado por teléfono con el general Baeza Michelsen para pedirle un «alto el fuego de diez o quince minutos» para permitir la evacuación de las mujeres. Beatriz Allende, hija del Presidente, estaba presente en esa conversación telefónica y recuerda que Allende le dijo: «General Baeza, usted que ha traicionado a la Patria, espero que por lo menos no sea traidor a lo que un hombre debe a la mujer.

Respéte las al menos por eso.»

A esa hora, el nerviosismo en el cuartel general de los mandos sublevados era muy grande. La petición de tregua de Allende al general Baeza había sido entendida por el general Augusto Pinochet como petición de rendición. Y cuando las primeras mujeres salían de la Moneda, el general Pinochet desde su puesto de comando en Peñalolén, llamaba desesperadamente al puesto de coordinación, en el Ministerio de Defensa, que estaba encabezado por el vicealmirante Patricio Carvajal. La conversación, grabada por un radioaficionado de izquierdas, fue la siguiente:

—Déme con el vicealmirante Carvajal... Augusto llama a Patricio. ..

—Momento, por favor... Un momento, mi general... Aquí está puesto cinco...

—Patricio... Mientras luego se vaya el Presidente con todos los gallos que quiera... Con todos los gallos que quiera...

—No todos... Los GAP no... No todos... En estos momentos dijeron que se rinden cinco mujeres...

—De La Moneda al avión... De La Moneda al avión, viejo... No lo paseen más... Fondeadito al tiro... Para que no haya problemas... Ningún GAP con él... A los GAP hay que juzgarlos a todos... Que lo lleven escoltadito porque lo pueden quitar...

Hay que recordar que a esa hora se combatía en los sectores industriales de Los Cerrillos, Vicuña Mackenna y en todo el radio central de la capital, entre Plaza Italia por el este, Universidad Técnica del Estado por el oeste, el río Mapocho por el norte y Avenida Matta por el sur (un semirectángulo de 30 por 20 cuadras, más o menos). Por otro lado, el general Augusto Pinochet, a quien no se le había hecho partícipe del plan «alfa uno» para asesinar a Allende por medio de un suicidio simulado, estaba convencido de que el objetivo final del ataque a La Moneda era poner a Allende en un avión en la base aérea militar de Los Cerrillos y mandarlo fuera de Chile. Sin embargo, el vicealmirante Patricio Carvajal sí lo sabía.⁷

Cuando, minutos después de las 11.15, el general Augusto Pinochet se enteró que no había tal rendición, que las «cinco mujeres» no se habían rendido, como lo dijera erradamente el vicealmirante Carvajal, y que esas mujeres y algunos civiles varones habían evacuado simplemente La Moneda, y que el combate proseguía, ordenó una nueva tregua y pidió hablar con el presidente Allende. De esa conversación, sólo han quedado los textos reconstruidos de las respuestas de Allende:

—Yo no hago tratos con traidores. Y usted, general Pinochet, es un traidor.

En esos momentos, el general Pinochet pidió ayuda al vicealmirante José Toribio Merino, jefe de la insurrección en la Marina, y uno de los cuatro integrantes de la autoproclamada Junta de Gobierno. Merino, al parecer, exigió por teléfono a Allende que se rindiera, a lo cual respondió Allende:

—Rendirse es para los cobardes y yo no soy cobarde. Los verdaderos cobardes son ustedes que conspiran como los maleantes a la sombra de la noche.

A pesar de la insistencia de los generales Pinochet y Baeza y del vicealmirante Merino, Allende se negó a rendirse y, también, se negó a entrar en tratos con ellos «porque yo soy su superior y no puedo tratar con mis subordinados en rebeldía». Esto llevó a Allende a pensar que sería útil una negociación «a segundo nivel», y encargó a Fernando Flores, ex ministro de Hacienda, a Daniel Vergara, subsecretario de Interior, y a Osvaldo Puccio, su secretario privado, que fueran en «embajada» al Ministerio de Defensa, para discutir con los generales los términos de «un arreglo político» de la situación.

A las 11.30 horas, estos tres funcionarios del gobierno Allende dejaron La Moneda y fueron llevados, con escolta militar, al Ministerio de Defensa. Allí, los tres pidieron ver a los generales Pinochet, Leigh y Mendoza y al vicealmirante Merino, para «lamentar».

Merino y Leigh se opusieron a ello. Pinochet y Mendoza que-

rían entrar en tratos con los enviados de Allende. Seguramente para forzar los acontecimientos, impedir el parlamento y seguir adelante con el plan «alfa uno» de obligar a Allende a rendirse en combate y ser asilado con menos probabilidades de testigos molestos, para enseguida suicidarlo, el general Gustavo Leigh dio la «luz verde» para el bombardeo a la Moneda. Veinte minutos después de haber entrado en el Ministerio de Defensa, y sin siquiera haber conversado ni con los mandos militares responsables de ese recinto, es decir, mientras todavía hacían antesala, los tres enviados de Allende a «parlamentar» fueron aterrados testigos del bombardeo a La Moneda por dos aviones de combate Hawker Hunter.

El bombardeo comenzó a las 11.56 de la mañana. El ataque aéreo se hizo desde el norte al sur, desde el río Mapocho hacia la alameda Bernardo O'Higgins. Para las decenas de miles de santiaguinos que viven en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, donde estaba el palacio de los presidentes de Chile, las 11.56 horas del día 11 de septiembre marca el comienzo de una pesadilla: ninguno creyó que podía ocurrir lo que estaban viendo en esos instantes: el palacio de gobierno bombardeado por aviones chilenos. Era el símbolo de la destrucción total, física, de un bando político por otro bando político... ¡en Chile, el país de los 150 años de lucha política democrática!

¿Qué sintieron los pilotos militares que manejaban los dos aviones atacantes, en ese mismo momento? La respuesta se conoció el sábado 24 de noviembre de 1973, setenta y cuatro días después del bombardeo, cuando el diario «El Mercurio» publicó una entrevista a los dos pilotos que habían dejado caer la muerte y la destrucción sobre la ex casa de los presidentes constitucionales de su país.

«El Mercurio» pregunta a uno de los pilotos:

«¿Qué sintió cuando supo que debía bombardear La Moneda?»

»Mucha preocupación. Fue sobrecogedor. Después de todo tenía que atacar a mi propio país, pero no hubo momentos de va-

cilación ni temor. Nosotros estamos preparados para cumplir cualquier orden. ¿La precisión? Se debe al entrenamiento constante que se hace sobre blancos de un tamaño menor que el Palacio de Gobierno, tambores de doscientos litros o elementos del porte de un tanque. En este caso, los rockets tienen un mayor grado de precisión que las bombas y fueron lanzados desde el río Mapocho, a unos ochocientos metros más o menos del blanco, a una altura de 500 metros y a una velocidad de 250 metros por segundo.

»¿Por qué se usaron sólo dos pilotos y dos aviones?

«Porque con eso era suficiente.

»¿Cómo se sintió anímicamente después del ataque aéreo?

«Bien. Satisfecho por la misión cumplida. Impresionado por lo que habíamos hecho. Pero en ningún caso arrepentidos ni mucho menos. Todos estábamos contentos.»

El relato del diario «El Mercurio» dice que, llamados por sus nombres claves, dos pilotos de la FACH fueron elegidos para el bombardeo. «La orden de la comandancia era inequívoca. Blanco: La Moneda», es decir, el Palacio de Gobierno. Agrega el periódico que «desde las ocho de la mañana los Hawker Hunter habían empezado a llegar al aeropuerto de Los Cerrillos (junto al cual está una base militar de la FACH), desde sus diversas bases en el país». En seguida, el periódico consulta detalles técnicos a los pilotos que demolieron el Palacio de su Gobierno constitucional:

»¿Qué es un rocket y cuántos lleva cada avión?

»El día 11 de septiembre llevaba cada avión 18 rockets. El rocket es un proyectil autopropulsado, que va colocado en el ala del avión. El piloto puede seleccionar si lanzar los 18 cohetes juntos o si lo hace de a dos, de a cuatro, etc. Hay rockets penetrantes y explosivos. Para el ataque a La Moneda se usaron los dos tipos.

»¿Se podría decir que ésta fue una misión improvisada?

»Sí, si se considera que no se había efectuado en el terreno. Pero esto no se puede improvisar de un día para otro. Las unidades de combate están preparadas.

»¿Qué otra misión se realiza durante el ataque aéreo?

»Al disparar el rocket el avión filma, para que el piloto vea después el resultado de su misión.»

Nueve picadas hicieron los dos aviones de guerra entre las 11,56 y las 12,15 horas. Impactaron 18 rockets en el viejo edificio, construido hace doscientos años por un arquitecto italiano de apellido Toesca. Al terminar su trabajo de «ablandamiento final», como lo habían bautizado los jefes de «alfa uno», había una gran destrucción en el piso superior de la parte norte y en toda el ala oeste. Se declaró un enorme incendio en la parte noroeste. El humo y las llamas se veían desde varios kilómetros de distancia.

Entre las 12,15 y 12,20 horas, el general Javier Palacios esperó la señal de rendición. Inútilmente. Ordenó un ataque de demolición con los cañones de los tanques Sherman, por las calles Morandé y Moneda. Al mismo tiempo, desplegó las tropas de infantería de la Escuela de Infantería y del Regimiento Tacna, en tenazas detrás de los tanques, por la calle Teatinos. Un intenso fuego de fusiles ametralladores y los disparos de bazooka desde el interior de la Moneda les demostraron a los atacantes que no había ninguna intención de abandonar la lucha. El avance de los tanques del Regimiento Blindados Número 2 fue detenido por el general Palacios ante la imposibilidad de poder avanzar con la infantería bajo el intenso fuego proveniente de parte de los defensores. El general Palacios, a las 13 horas, preguntó al general Pinochet qué hacer, ya que era imposible avanzar con sus tropas y tomar La Moneda sin otro ataque aéreo. El general Pinochet ordenó el cese del fuego por un momento.

13,05 horas. El general Pinochet conversa con el vicealmirante Patricio Carvajal, en el puesto del Ministerio de Defensa y le dice que envíe a La Moneda a Osvaldo Puccio, secretario privado del presidente Allende, con una hoja en que estén escritas las condiciones de rendición incondicional. Pinochet pide a Carvajal que explique, en esa nota de petición de rendición, que «el Presidente tendrá su salvoconducto para irse del país con su familia

y las personas que él quiera». Carvajal no escribe eso en la nota y ordena que Puccio salga hacia La Moneda con los términos de una rendición «incondicional» y con instrucciones de que «el Presidente debe entregarse al oficial al mando de las tropas blindadas». (Hay que recordar que el plan «alfa uno», en su fase final, que conocía Carvajal pero no el general Pinochet, consistía en el traslado rápido de Allende al Regimiento Blindados Número 2, para poner en práctica el «suicidio» presidencial.» Al mismo tiempo, el vicealmirante Patricio Carvajal ordena que los otros dos «parlamentarios» enviados por Allende a las 11,30 horas, es decir, Fernando Flores y Daniel Vergara, sean tomados prisioneros y enviados a la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, en el barrio alto (oriental) de la capital.

Oswaldo Puccio, a bordo de un jeep militar es llevado hacia La Moneda. Pero el intenso fuego desde La Moneda y desde el Ministerio de Obras Públicas (al frente de Palacio, por su lado oriental), detiene el paso del jeep.

13,10 horas. El general Javier Palacios ordena que de nuevo avancen los tanques Sherman, disparando sus cañones, y comunica a su infantería la orden de «ataque final» a La Moneda. Una cortina de balas de ametralladoras cubre los muros del palacio junto con las explosiones de los cañones de los tanques, permitiendo el avance de los infantes que, por fin, logran ponerse junto a los muros, a salvo de la respuesta de los defensores.

13,15 horas. Por los efectos de la cortina de fuego de ametralladoras y cañonazos sobre el blanco, cae muerto el periodista Augusto Olivares Becerra, defensor de Palacio, director de la Televisión Nacional y amigo personal de Allende.

Genaro Carnero Checa, presidente de la Asociación de Periodistas Peruanos, publicó en el diario «El Expreso», de Lima, el 11 de diciembre de 1973, una reconstrucción por medio de testigos directos salvados de la hecatombe, del último día de Augusto Olivares. Un extracto de su crónica es el siguiente:

«La última visión que tengo de Augusto Olivares es en el

despacho presidencial de La Moneda, antes de que Allende me ordenara abandonarlo (me cuenta en La Habana Joan Garcés, uno de los más cercanos colaboradores del Presidente héroe). Estaba con una metralleta en las manos y le decía al Presidente: «Vamos a convertir La Moneda en un Alcázar de Toledo... pero al revés, antifascista».

«Otras personas, ya en Lima, me han descrito las últimas horas del combate de Augusto Olivares, así como el via crucis de Mireya para rescatar su cuerpo y conservar la huella profunda de sus pasos. Son fuentes insospechables, testigos excepcionales, que me han pedido silenciar sus nombres por razones obvias.

«Olivares se despidió telefónicamente de su mujer a las 6,45 del 11 de septiembre. «Las cosas marchan muy mal —le dijo—. En unos instantes más nos dirigimos a La Moneda. Un beso y mucha suerte.»

»Eran cerca de las dos de la tarde y Mireya no conocía sino rumores sobre la suerte de su esposo. Mientras tanto, el presidente Allende, metralleta en mano, combatía en Palacio, bombardeado por sus cuatro costados. Una gigantesca humareda podía verse desde los más apartados barrios de la capital. «Estoy segura de que Augusto está ahí —dijo Mireya a uno de nuestros testigos—. Le conozco lo suficiente. No abandonaré a Salvador por nada, y si éste muere, morirá con él.»

»Los teléfonos de Palacio ya no funcionaban y Mireya esperó en vano una nueva llamada. Quien informó a Mireya de la muerte de Olivares fue el autor de este relato. Me lo dijeron periodistas amigos. Augusto había caído en la galería de los presidentes, segundo piso de La Moneda, en pleno fragor de la batalla, arma al brazo, y Allende había tenido la presencia de ánimo suficiente y dignidad revolucionaria para pedir un minuto de silencio por la muerte de su amigo.

»No podíamos, sin embargo, confirmar la noticia ni localizar el cadáver. Vino la noche en esa búsqueda terrible. Negaban su existencia en la Posta Central de la Asistencia Pública, en el

Hospital Militar y en el Instituto Médico Legal. El subido número de cadáveres, nunca se había visto tantos, impedía cualquier identificación.

«Sólo en la madrugada, una llamada telefónica nos sacudió hasta las raíces confirmando la noticia. Era de un coronel del Ejército que notificó a Mireya la muerte de Augusto Olivares. Le indicó que aunque había toque de queda al día siguiente, tendría oportunidad de sepultar a su esposo. Dispondría para ello de no más de dos horas y tenía instrucciones de asegurar que el sepelio fuese en privado, lo que era casi una burla en medio del riguroso toque de queda. Se advirtió, además, que enviaría un vehículo militar, antes de las once de la mañana de ese día, miércoles 12, para «permitir la operación».

»El vehículo prometido no llegó. Pasado el mediodía, resolvimos recurrir a la buena voluntad de un compañero chófer del Canal 7 de Televisión, del que era director Olivares. Arriesgando su vida llegó hasta la casa. Carecía del pase indispensable para transitar por las calles, y en el trayecto hasta la Asistencia Pública, donde se encontraban los restos de Augusto, detuvieron al vehículo muchas veces. El conocido rostro de Mireya, artista y animadora de televisión muy popular, permitió franquear las patrullas y las calles de Santiago completamente desiertas y envueltas en un silencio ominoso rubricado por disparos de francotiradores y el tableteo de las ametralladoras fascistas.

»Una vez en la Asistencia Pública, Mireya se entrevistó con el director y otros médicos, nerviosos, traumatizados, ante el increíble número de víctimas de la masacre. «Ya perdimos la cuenta de los cadáveres.» Había pánico en las funerarias y costó muchísimos esfuerzos conseguir que una de ellas (la Santa Lucía) accediera a vender un ataúd ¡en 78.000 escudos! Lo que resultó imposible fue encontrar un carro fúnebre. Al fin convencimos a un camillero de la Posta Central para que nos permitiese utilizar una ambulancia para trasladar el cuerpo de Augusto hasta el Instituto Médico Legal. Él fue quien rescató el cadáver de Olivares en La Moneda,

llevándolo hasta la Asistencia Pública. Mireya ingresó sola y altiva a buscar los restos de su esposo al depósito de cadáveres. El féretro, dentro de la ambulancia, se condujo al Instituto Médico Legal. Ahí permanecemos hasta el día siguiente, porque los trabajadores del cementerio y del servicio de incineración estaban fuera de sus puestos. Augusto fue incinerado.»

Hasta aquí el relato de testigos, reconstruido por el periodista peruano Carnero Checa, de un trozo de esas dramáticas horas vividas por todo un pueblo.

Poco después de caer Augusto Olivares, ya a las 13.40 horas los soldados de la Escuela de Infantería logran penetrar en el primer piso del Palacio, por la puerta principal de la calle Moneda. Comienza allí una pequeña batalla infernal por mantener esa «cabeza de puente» en el primer piso del Palacio de Gobierno.

A las 13.52 funcionan por última vez los teléfonos, y el director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, Julio Timossi, desde sus oficinas en la capital, logra comunicarse con Jaime Barrios, director del Banco Central y asesor económico del presidente Allende, que estaba combatiendo junto a los demás la embestida de las tropas asaltantes. Barrios dice a Timossi: «Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Aquí cerca, Allende está disparando con su metralleta. Esto es un infierno; el humo nos ahoga. Augusto Olivares murió. El Presidente envió hace un par de horas a Flores, Vergara y Puccio para que parlamenten. Parece que el Presidente quiere garantías por escrito para las conquistas sociales de los trabajadores. No creo que renuncie».

Julio Timossi tenía material para un *lead* de su agencia noticiosa, pero no pudo conseguir detalles porque la comunicación telefónica se cortó, y desde ese minuto los teléfonos no funcionaron más en La Moneda.

Ocho minutos después de esta última conversación telefónica desde la sede gubernamental, a las 14 horas, los soldados de la Escuela de Infantería ya estaban ocupando la escalera principal de acceso hacia las oficinas de la Presidencia.

Seis o siete minutos más tarde, la patrulla de penetración de la Escuela de Infantería, encabezada por el capitán Roberto Garrido, rompe la resistencia civil en la escalera principal, irrumpe en el Salón Rojo de La Moneda, en el segundo piso. Allí se enfrenta con un grupo de cinco personas, dispara sobre ellas, se dan cuenta que han matado al presidente Allende, y en seguida son rechazados por un refuerzo civil que entra por un costado del Salón Rojo. Los soldados atacantes pierden el control de la escalera principal del edificio, pero mantienen sólidamente la ocupación en todo el primer piso del Palacio de Gobierno.

Los defensores civiles vuelven al Salón Rojo. Entre ellos está el doctor Enrique Paris, psiquiatra, médico personal de Allende, que estaba combatiendo igual que los demás. Se inclina sobre el cadáver de Allende, que muestra los impactos de por lo menos seis balazos, a la altura del abdomen y del bajo vientre. Le toma el pulso. Señala que está muerto. Alguien, no se sabe de dónde, aparece con una bandera chilena. El propio Enrique Paris lo cubre con esa bandera. La batalla, entre el primero y el segundo piso continúa siendo furiosa. Los defensores del grupo del doctor Paris abandonan el Salón Rojo que, semi-destruido, comienza a quemarse por el techo. Separados en pequeños grupos de cuatro o cinco personas, los defensores del Gobierno constitucional siguen combatiendo, la mayoría sin saber que el presidente Allende ya estaba muerto.

Unos cuarenta minutos más tarde, alrededor de las 14.45 horas, los soldados vuelven a irrumpir en el Salón Rojo destrozando la resistencia civil por la puerta principal de La Moneda, al mismo tiempo que penetran por la puerta lateral del número 80 de la calle Morandé. En ese instante, el general Palacios corre hacia el Salón Rojo, por el lado oriental norte de la Casa de los Presidentes, retira la bandera ensangrentada que cubre el cadáver de Allende, y se comunica con su comandante en jefe para decirle: «Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto».

Sesenta segundos después, más o menos, las radioemisoras,

todas en poder de los generales insurrectos, anuncian la caída de La Moneda. Cuarenta minutos más tarde, mientras en el interior del Palacio los miembros del Servicio de Inteligencia preparaban el escenario para el «suicidio» de Allende, tras haber destrozado la cabeza del ex Presidente con un par de balas de su fusil ametrallador, colocando el cadáver en el sofá rojo del Salón de la Independencia, los generales insurrectos difundían por las radioemisoras el siguiente comunicado: «Al ocupar La Moneda se ha afianzado la autoridad impuesta en bien de la Patria por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, hace nacer en este mes una nueva esperanza para la Patria y expresamos nuestra petición a la ciudadanía a que manifieste su adhesión a la chilenidad colocando el emblema patrio en el frente de sus casas. Esta liberación y ordenamiento de Chile no es sino una causa de alegría en este mes en que reviven en la fiesta de los hombres y las mujeres que con su sacrificio nos dieron nuestra independencia».

En La Moneda, había diez cadáveres de los civiles. De los 32 sobrevivientes, catorce estaban heridos. El general Palacios ordena que los heridos sean llevados a la Posta Central de la Asistencia Pública, bajo custodia militar. Al oír esta orden, Miriam Rupert, secretaria privada del presidente Allende, finge un desmayo. Es la única mujer en todo el grupo de defensores. Es integrada al grupo de «prisioneros a la Posta Central». En la Posta, donde reinaba una confusión enorme por el elevadísimo número de muertos y heridos, que superaban los mil quinientos a esa hora, Miriam Rupert se las arregla para escurrirse por un pasillo, vestirse con un delantal blanco como «doctora», subir a una ambulancia que sale a recoger heridos y escapar.

En el interior de La Moneda, el doctor Enrique Paris comete un grave error. Se deja llevar por la ira del momento, y desde el suelo, a donde está boca abajo con las piernas abiertas y las manos sobre la nuca como los demás prisioneros, grita: «¡Asesinos... Mataron al Presidente!» Los soldados lo apartan de los demás cautivos y lo llevan a la presencia del general Palacios. Allí lo identifican. Paris,

enfurecido, grita que él vio como habían asesinado al Presidente. Palacios ordena que Paris sea llevado al Ministerio de Defensa. En un jeep lo trasladan al edificio que está a menos de doscientos metros de La Moneda.

Cuatro días más tarde, el 15 de septiembre, el doctor Enrique Paris aparece hecho un guiñapo humano, balbuceante, en el Estadio Nacional, convertido en campo de concentración por los militares insurrectos. Tiene la mirada extraviada. Lo confinan a un sector de las tribunas techadas del Estadio Nacional, con sólo una veintena de otros presos. Se le oye decir repetidamente: «Soy el buey Quiñones... el buey...» y sus compañeros le escuchan sollozar. A media tarde de ese mismo día, el doctor Paris, o lo que quedaba de él, salta sobre las balaustradas de la tribuna presidencial. Se luxa una pierna. Los soldados corren hacia él y le dan de culatazos en la cabeza. Docenas de culatazos. Sus compañeros ven esparcirse los sesos del cadáver de Enrique Paris sobre el suelo del Estadio Nacional.

Pero volvamos al 11 de septiembre, a las cuatro de la tarde, en el Palacio de La Moneda, o por lo menos a las ruinas del Palacio de La Moneda. A esa hora, ya estaba todo preparado para presentar al mundo el «suicidio» de Salvador Allende. La jefatura del espectáculo la había tomado el general Ernesto Baeza Michelsen, en comunicación directa con el general Javier Palacios y con los integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. A las 16 horas del martes 11 de septiembre, Baeza estimó que el general Palacios ya no tenía nada que hacer en el espectáculo y lo relevó para que se siguiera ocupando sólo de sus «deberes netamente militares». Es decir, de finalizar la ocupación de La Moneda, traslado de heridos, de prisioneros y recuento de bajas militares. Según testimonio no oficial, hubo ocho muertos y 43 heridos entre los militares, más un tanque Sherman dañado, pero no inutilizado. El parte oficial, sin embargo, dice «dos muertos y 17 heridos». No da cuenta de material dañado.

Pero no es eso lo importante para nuestro reportaje. Lo im-

portante es que el general Baeza, al relevar de su papel en el «espectáculo suicidio» de Allende al general Palacios, cometió un error. Y lo cometió porque Palacios, después de las cuatro de la tarde, ya no conversó más con el general Baeza ni con nadie involucrado en la operación de montar la escena, las declaraciones de testigos y de «informes periciales», para tener un relato coherente del «suicidio». El general Palacios Ruhman, ese día 11 de septiembre se retiró al cuartel general, trasladado a la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, y en los días siguientes se dedicó a asumir su parte en la «limpieza del centro de Santiago», para después preparar la participación de los cadetes en el Quinto Festival Sudamericano de Cadetes en Colombia, Bogotá, que debía empezar el viernes 21 de septiembre.

En suma, Palacios se quedó sólo con el «esquema general» de la historia oficial del suicidio simulado de Allende, y no con todos los «detalles perfeccionados» de las horas y días siguientes.

Por eso, al hacer declaraciones muy completas del hecho en Bogotá, las cuales reproducimos en las páginas anteriores de este reportaje, entró en contradicciones serias con la «versión oficial» a cargo del general Ernesto Baeza Michelsen.

Algunas comparaciones

Si ustedes vuelven a leer las declaraciones del general Palacios en Bogotá el sábado 21 de diciembre, se encuentran con las siguientes cosas:

1) Afirma que NO HUBO RENDICIÓN en La Moneda. Que sus tropas la ocuparon «dominando la resistencia» de combatientes que gritaban «el marxismo no se rinde».

2) El general Palacios encontró al doctor Guijón en el interior de Palacio presa de un ataque de nervios porque «temblaba y casi

no podía hablar». Es decir, tal como ocurrió, y sirvió para que lo eligieran como «testigo» bajo amenaza de acusarlo de «asesinato del Presidente».

3) El general Palacios dice que el «suicida» estaba «con la metralleta en las manos».

4) Agrega Palacios que «ordené a mis hombres que no tocaran nada». Llegaron los peritos de las tres armas chilenas. Comprobaron el suicidio. Se tomaron fotografías.»

5) Y termina el testimonio del general Palacios así: «Había también en la habitación una botella de whisky. Pedí a los legistas que establecieran si el Presidente había bebido algo, la prueba fue negativa. Allende no bebió absolutamente nada».

Estas son, en síntesis, las cinco afirmaciones principales del general Javier Palacios Ruhman, testigo presencial, según informe oficial del sitio del suceso del «suicidio» de Salvador Allende. Estas cinco afirmaciones fueron hechas el sábado 22 de septiembre de 1973, en Bogotá, porque, según las mismas palabras del general Palacios, «desgraciadamente, el señor Allende se suicidó. Me duele tener que decir todo esto. Pero ante las falsas versiones y calumnias que se están propalando sobre la realidad política de Chile, no hay más camino que el de la verdad. Y ésta es la verdad». La «verdad» de los cinco puntos que ya vimos.

Pues bien, 48 horas antes, el jueves 20 de septiembre, en Santiago de Chile, a miles de kilómetros de distancia de Bogotá, el general Ernesto Baeza Michelsen, ya como director general de Investigaciones (policía civil) daba a conocer el «informe oficial» sobre la materia, el cual era TOTALMENTE CONTRADICTORIO con las cinco afirmaciones posteriores del general Palacios.

Vamos a ver:

1) El general Baeza Michelsen dijo que las tropas de Palacios entraron a La Moneda DESPUÉS que ésta se rindió. Es decir, ahora resulta que hubo RENDICIÓN. ¿Por qué? la respuesta es simple: porque solamente si Allende se hubiera rendido, habría

habido alguna justificación para el suicidio. Entonces, Baeza Michelsen decidió que la versión oficial tenía que contemplar «la rendición» de La Moneda. Pero esto no lo sabía el general Palacios, que fue el encargado de tomar el lugar y, como dijo, tuvo que «dominar la resistencia» de los defensores «que nos recibieron a balazos».

Para darle «seriedad» a la tesis de la rendición, el general Ernesto Baeza Michelsen leyó a los periodistas, el jueves 20 de septiembre, el «testimonio» del doctor Patricio Guijón Klein (el cual, en diciembre de 1973, fue dejado libre incondicionalmente por las autoridades militares. Por supuesto, el doctor Guijón no cometió el error del doctor Enrique Paris). Este es el «testimonio»: «El Presidente dijo «ríndanse», que «la Payita salga primero» (la secretaria privada Miriam Contreras de Rupert), «yo saldré al final». Se produjo el movimiento. El ordenamiento. Alguien proporcionó una escoba y yo me saqué el delantal blanco de médico, que teníamos puesto para identificarnos, y lo di para que sirviera como bandera blanca. En ese momento salió todo el grupo y yo quedé más o menos al final. Cuando íbamos bajando hacia la puerta de Morandé 80, con la intención de rendirnos, de acuerdo a lo ordenado por el propio Salvador Allende, recordé que había dejado mi máscara de gases y volví a buscarla. Y justamente cuando voy en busca de ella pasé frente a la puerta de la habitación que había hacia el salón inmediatamente contiguo. Vi justamente frente a mí, en el lado derecho, sentado en un sofá, un sofá rojo, al presidente Allende en el preciso instante en que se disparaba con un arma colocada entre las piernas. Yo pude ver cómo el cuerpo se sacudía y el cráneo volaba hecho añicos. No pude precisar si fueron uno o dos disparos porque había un tenso tiroteo afuera que no me permitió reconocer los tiros del arma. Corrí inmediatamente hacia él para ver si podía prestar alguna ayuda, pero al llegar cerca de él me di cuenta que no había nada que hacer. El destrozo era tan grande que aseguraba una muerte inmediata. Desconcertado ante toda esta situación, ante este hecho, y sin hallar otra cosa que

hacer, yo ya había perdido contacto con el grupo, no había nadie en el salón, no hallé otra cosa que sentarme al lado de él y esperar lo que pudiera acontecer.»

Esta es una especie de testimonio perfecto, que debe haber complacido mucho leer al general Ernesto Baeza Michelsen. Pero, además del hecho probado más allá de toda duda de que NO HUBO RENDICIÓN en La Moneda, quedan algunos puntos oscuros: si el doctor Guijón y los demás estaban bajando por la escalera y él se había desprendido de su delantal blanco «de identificación», es decir, un seguro de vida en momentos tan dramáticos, ¿para qué volvió a buscar la máscara de gases?, ¿de qué le podría servir ahora, rendido? ¿No era mucho más útil su uniforme de médico, delantal blanco, y sin embargo se desprendió de él? ¿No aseguraba su vida caminando con el grupo rendido y no desprendiéndose de él? Y más todavía: si él, como médico cirujano experto, ve que un hombre se vuela «el cráneo hecho añicos», ¿por qué corre a tomarle el pulso, y no hace, como cualquier otra persona, lo elemental, que es correr hacia el grupo de personas rendidas buscando ayuda? Y, por último, si se da cuenta de que Allende se ha suicidado y está en un salón a unas docenas de pasos de la escalera que baja a Morandé 80, ¿por qué no camina esa docena de pasos, a la carrera, y grita que el presidente se había suicidado?

No, el doctor Guijón hace todo lo que le conviene al general Baeza para «demostrar» el «suicidio» de Allende. Y el doctor Guijón hace eso y no lo normal en una situación tan dramática. El doctor Guijón «escucha» que Allende da orden de rendirse. El doctor Guijón, en actitud «heroica», se despoja de su seguro de vida, el delantal blanco, para ponerlo en un palo de escoba como bandera de rendición. El doctor Guijón regresa sobre sus pasos para buscar una inútil máscara de gases y servir de «testigo ocular» al supuesto suicidio. Y lo peor: el doctor Guijón no grita, no chilla, no corre a avisar la terrible noticia a la hilera de rendidos... No, se queda allí, a solas con el supuesto cadáver, para esperar la llegada

del general Palacios y sus hombres, para servir de testigo. Arriesga una vez más el cuello de manera inexplicable. Y mucho más inexplicable si se sabe, como se supo más tarde, que era médico cirujano de Allende no por amistad con el Presidente, ni siquiera «por orden del Partido», ya que no pertenecía a ninguno, sino que «acepté el cargo, puesto que para uno, como médico, es un gran espaldarazo que un colega le solicite que sea el médico de un paciente de esa categoría».

Como se ve, el general Baeza se consiguió un testigo muy bueno, sin fallas, haciendo todo lo que tenía que hacer, como si supiera que iba a servir de testigo para caso tan importante. Y lo mejor es que su declaración lo hace aparecer como un hombre «frío, tranquilo».

Veamos ahora el segundo punto de contradicción entre el general Ernesto Baeza y el general Javier Palacios:

2) El general Palacios dice que encontró al doctor Guijón «al lado suyo o en un rincón» (no se acuerda bien el general, que tan buena memoria tiene para los detalles, como al decir «me acerqué al cadáver. El Presidente estaba sentado en la mitad del sofá tapizado de rojo, con la metralleta en las manos. El casco y la máscara de gases a un lado, los anteojos en el suelo. La cara estaba hinchada y la cabeza partida en dos, como una sandía»). Pero no se acuerda donde estaba el doctor Guijón. Era la duda, en Bogotá, sobre qué diablos habría hecho su general Baeza con el doctor Guijón, cómo saber en Bogotá dónde había puesto Baeza, en Santiago, al «testigo clave», si al lado del cadáver, en el sofá o en un rincón de una pieza, tal como realmente lo encontraron los soldados, presa de un ataque de histeria por el combate feroz que se desarrollaba en el Palacio, que NO SE HABÍA RENDIDO.

Pero sigamos con este punto dos. Palacios dice que Guijón «temblaba y casi no podía hablar», y aquí un agregado literario del general Palacios: «Me dijo: "Es el Presidente. Es el Presidente".» Pero el general Baeza dijo otra cosa. Recordemos que el general Baeza necesitaba un testigo «intelectualmente apto» para su

historia. El general Baeza dijo que «el doctor Guijón estaba junto al cadáver del Presidente, y cuando entró el general Palacios se identificó como médico personal del señor Allende y dio cuenta de los hechos».

Y para poner en nuevos aprietos la coherencia de la historia, el general Baeza cita de la declaración de Guijón esta frase: «Yo estaba sentado inmediatamente contiguo al Presidente» cuando entró «el general». Y ocurre que «el general» (Palacios), dice en Bogotá, el 22 de septiembre, que no se acuerda si Guijón estaba «al lado suyo o en un rincón».

3) Este punto es importante. De enorme importancia. Como vimos al examinar el informe pericial de la Brigada de Homicidios, resulta policialmente grotesco afirmar que un hombre que se suicida sentado, en una posición inestable, con un fusil ametrallador sujeto entre sus rodillas, quede muerto, sentado y ¡con el fusil ametrallador sobre sus rodillas! Bueno, ocurre que el informe pericial de la Brigada de Homicidios lo señala así, con todas sus letras. ¿Cómo reparar ese error? El general Baeza planificó una manera, en la cual, una vez más, debía intervenir el «testigo» salvador de circunstancias difíciles. Baeza ordenó a Guijón decir que él le había dado un manotazo al arma suicida, para alejarla de sí y evitar que los soldados creyeran que era un combatiente, y que, después, el general Palacios, en un «exceso de celo» para «no mover nada de la escena del suicidio», le había ordenado que la pusiera sobre las rodillas del cadáver de Allende y que, los policías civiles al «describir» la escena, habían hecho sólo eso, «describir» lo que vieron. Por ello el arma reposaba sobre las rodillas del cadáver porque Palacios ordenó a Guijón que la pusiera allí.

El jueves 20 de septiembre, Baeza Michelsen leyó esa parte de la declaración del doctor Guijón, el cual la ha repetido a los periodistas en entrevistas concedidas desde diciembre pasado, cuando salió libre incondicionalmente. El testimonio es el si-

guiente:

«En un momento dado retiré el arma porque yo estaba sentado inmediatamente contiguo al Presidente y entre los dos había muy poco espacio, entre el cadáver y yo, y el arma quedaba demasiado cerca. Entonces yo pensé que si en un momento dado entraban tropas podían ver que yo quisiera defenderme. Entonces decidí quitar el arma y colocarla en el extremo opuesto del sofá POSTERIORMENTE ESTO LO HICE VER AL GENERAL QUE ENTRO, QUIEN ME HIZO RESTITUIR EL ARMA A SU LUGAR».

Claro, la declaración es muy buena, pero ocurre que el general Palacios, en Bogotá, 48 horas después, decía esto otro:

«Me acerqué al cadáver. El Presidente estaba sentado en la mitad del sofá tapizado de rojo, CON LA METRALLETA EN LAS MANOS. EL CASCO Y LA MASCARA DE GAS A UN LADO, LOS ANTEOJOS EN EL SUELO. La cara estaba hinchada y la cabeza partida en dos, como una sandía».

La contradicción entre los dos testimonios es tan grande, tan brutal, que no necesita ningún comentario. Solamente reiterar que el general Palacios tenía justificación al cometer tan tremendo error en sus declaraciones: él simplemente estaba contando cómo habían dejado el cadáver de Allende los «expertos» del SIM, que construyeron la escena del «suicidio» con dos equivocaciones serias: dejar sentado el cadáver, y poner sobre sus rodillas la supuesta arma utilizada por el suicida.

4) Para completar el cuadro de «decir la verdad, nada más que la verdad», el general Palacios contó el 21 de septiembre en Bogotá que «ordené a mis hombres que no tocan nada». «Llegaron los peritos de las tres armas chilenas. Comprobaron el suicidio. Se tomaron fotografías.»

Esto es sólo parte de la verdad. Palacios, efectivamente ordenó a sus hombres que «no tocan nada»... ¡pero en el Salón Rojo de la Moneda, en el cual, ardiendo, estaba el cadáver del presidente Allende después de ser asesinado por la patrulla de penetración de

la Escuela de Infantería, minutos después de las dos de la tarde! El traslado del cadáver de Allende al Salón Independencia, a salvo del fuego del incendio provocado por los bombardeos, se hizo después de las tres de la tarde, y en esa tarea ya no tomaron parte los «hombres» del general Palacios, sino los miembros del equipo del Servicio de Inteligencia enviados por el general Baeza Michelsen para preparar la escena del «suicidio». Palacios recibió instrucciones desde Peñalolén, de parte del general Augusto Pinochet, para dejar entrar al recinto a los «jefes del servicio de sanidad de las tres armas y de Carabineros. Pero esos jefes NO CONCURRIERON a La Moneda. Eso, por supuesto, Palacios no lo supo, porque a partir de las cuatro de la tarde, más o menos, se desentendió de la trama para dedicarse a la «ocultación militar definitiva del recinto».

Entonces, lo que realmente ocurrió, fue tal como lo cuenta el general Ernesto Baeza Michelsen —desmintiendo, sin saberlo, al general Palacios— el jueves 20 de septiembre:

«Al constatarse la muerte del ex presidente Allende, el Mando Militar ordenó la concurrencia de detectives y peritos de la Brigada de Homicidios al Palacio de la Moneda, manteniendo en el mismo escenario de los hechos al doctor Patricio Guijón Klein, que aparecía como sospechoso integrante del GAP y posible autor del asesinato del Primer Mandatario». Estos policías fueron los que tomaron «setenta fotografías» del sitio del suceso.

En suma, Palacios dice que «llegaron peritos de las tres armas chilenas». El general Baeza dice que no, que fueron «peritos de la Brigada de Homicidios». Palacios dice que los «militares» tomaron las fotografías del sitio del suceso. El general Baeza dice que no, que fueron los expertos de la Brigada de Homicidios.

Y como un agregado lírico a esta suma de contradicciones infantiles, una frase del informe médico del cadáver de Allende, puesta ahí para «evitar dudas» respecto al «suicidio»: «Los análisis de la piel de las manos y barbilla demuestran la existencia de pólvora, provocada por el uso de arma de fuego».

Esto, en un suicidio simple, es prueba concluyente. La muestra de pólvora en las manos del suicida, demuestra que utilizó el arma suicida, pero ¿qué demuestra en el caso de Salvador Allende, que había estado combatiendo durante cuatro horas y media, desde las nueve y media hasta las dos de la tarde cuando fue acribillado por la patrulla de la Escuela de Infantería? Por supuesto que nada, porque después de cuatro horas y media de disparar contra las tropas invasoras, no sólo las manos de Allende, sino su rostro, sus ropas, todo él estaba cubierto de residuos de pólvora. Eso es concluyente.

5) El 22 de septiembre, el general Palacios fue concluyente al decir: «Había también en la habitación una botella de whisky. Pedí a los legistas que establecieran si el Presidente había bebido algo. La prueba fue negativa. Allende no bebió absolutamente nada.» Se presume que Palacios hizo esta afirmación después de haber hablado, en la noche del 11 de septiembre, en el Hospital Militar, con alguno de los médicos que hicieron la autopsia del cadáver de Allende.

Sin embargo, esta realidad, para la trama de Ernesto Baeza Michelsen no servía. Para un «suicidio» bueno de Allende, Baeza Michelsen necesitaba un «presidente borracho», lo cual, al mismo tiempo, servía para el intento de desprestigio personal, en el que estaban empeñados los generales. Entonces el director general de la trama hizo poner en el informe médico final lo siguiente: «El cuerpo de Allende presentaba un noventa por ciento de alcoholemia.»

Una rectificación

Al regresar a Chile, el general Javier Palacios se encontró con la novedad de que sus tropas habían tomado «un Palacio de Gobierno rendido». Entonces, modificó sus declaraciones de Bogotá, y en la primera semana de octubre de 1973, ante los periodistas demócratacristianos y de derecha, los únicos sobrevivientes del

periodismo chileno después del manotazo dado por los generales insurrectos a la prensa de izquierda, el general modificó su versión de la toma de La Moneda:

«En el momento de entrar por Morandé 80 se veía izada una bandera blanca en un palo, la que posteriormente resultó ser el delantal blanco de un médico y que fue puesto por la propia Payita, por orden del señor Allende. En esos instantes salían del edificio un número aproximado de 30 civiles, todos ellos miembros de la guardia personal (GAP), y muchos médicos que se rindieron ante nuestras fuerzas. Al subir al segundo piso de La Moneda, ésta ya estaba transformada en un infierno por efectos del fuego. Paralelamente recibíamos disparos sorprendidos de tiradores emboscados en algunas oficinas.»

Es decir, un gran cambio de una declaración a otra: en la primera no hay «bandera blanca» por ninguna parte, y sí existe «una resistencia» un «recibimiento a balazos»; tampoco hay «civiles» que salían rendidos en la primera declaración. Sólo hay combate violento, con defensores que gritan «el marxismo no se rinde».

En la segunda declaración, las cosas cambian: los civiles bajan rendidos, hay bandera blanca y algunos «disparos sorprendidos» de «tiradores emboscados». Quedaba claro que esta declaración fue hecha después de una larga conversación con el general Ernesto Baeza Michelsen.

Sin embargo, los porfiados hechos siguieron evidenciando al general Palacios en su segunda declaración «rectificada». Al contar su desplazamiento dentro de La Moneda, en orden cronológico, queda claro que corrió hacia el Salón Rojo. Es decir, no revisó primero los salones en buen estado, donde podría haber presuntos tiradores «emboscados» (entre esos salones estaba el Independencia, donde se afirmaría más tarde que Allende se habría suicidado), y en cambio, corre al Salón Rojo, que está incendiándose, y al despacho presidencial, que también se incendia. ¿Por qué? Claro, nadie le preguntó eso al general Palacios

en su entrevista de prensa, ni él habría respondido a esa pregunta. Y no lo habría hecho, porque el general Palacios corrió hacia el Salón Rojo para buscar el cadáver de Allende, que él sabía estaba en esas dependencias, según el relato del capitán Garrido, que le señaló cómo y dónde había ametrallado al ex Presidente de la República pocos minutos después de las 14 horas.

Dijo Palacios: «Mi impresión más profunda y fuerte fue ver incendiarse y destruirse el Salón Rojo y el gabinete presidencial, del cual solamente alcanzamos a salvar la espada de O'Higgins»... y el cadáver de Salvador Allende, debería haber agregado el general.

En seguida, la declaración «rectificada» del jefe de las fuerzas de asalto y ocupación del Palacio de Gobierno de Chile, pone sus palabras de manera más coherente con las del testigo fabricado por Baeza Michelsen, y rehuye los elementos principales de contradicción que ya vimos en los puntos 2 y 3 de nuestro examen anterior.

Relata Palacios, en octubre:

«Al continuar nuestro avance en el interior de La Moneda y abrir las puertas que daban acceso al Salón de la Independencia (salón privado del Presidente), nos encontramos con el espectáculo del señor Allende muerto, sentado en un sofá, por los efectos de dos tiros que él mismo se había disparado, colocándose la metralleta —regalo de Fidel Castro— bajo la barbilla, lo que le produjo una muerte instantánea. Al entrar en dicha sala, encontramos a un hombre joven, que al ser interrogado dijo ser el doctor Guijón, que atendía los servicios médicos de la presidencia. Sintió los disparos hechos por el señor Allende en los momentos en que abandonaba la sala, y volvió, pudiendo comprobar que después de haberles ordenado que se rindieran y abandonaran La Moneda, se quedó atrás, para suicidarse.»

Claro, al parecer, el general Palacios demostró ser un poco torpe para aprenderse declaraciones sobre sucesos que no ocurrieron, y su versión de lo que le dijo Guijón (de acuerdo al libreto

del «suicidio para armar» que montó el general Baeza) no es muy exacta, e incluso contradictoria, pero en grado menor. Lo principal es que ahora desaparece el Guijón «tembloroso y balbuceante» que describió Palacios en Bogotá, y entra en escena un Guijón aplomado, dueño de sí mismo, que se identifica y relata claramente las cosas. Es decir, esta pieza del armado encaja mejor en el «suicidio» preparado por Baeza Michelsen.

Sin embargo, una vez más, el general Palacios se deja llevar por las impresiones reales y agrega sin necesidad: «Debo confesar que no reconocí a Allende, por la forma pobremente vestida en que se encontraba y por las características del suicidio, que prácticamente le partió en dos la cabeza. Tenía las manos llenas de pólvora, producto del uso de las armas que había estado haciendo al disparar personalmente desde las ventanas de La Moneda en contra de la tropa que lo atacaba.»

Aclaremos un poco. ¿Qué cadáver no reconoció Palacios porque estaba «pobremente vestido»? ¿Se refiere al cadáver del Allende asesinado en el Salón Rojo por la patrulla de infantería a las dos de la tarde? ¿O se refiere al cadáver del Allende «suicidado» en el Salón Independencia, por personal del SIM, a las tres y cuarto de la tarde?

Si se refiere al cadáver del Allende asesinado por los soldados en el Salón Rojo, la impresión de Palacios es correcta, porque Allende vestía solamente una chomba de cuello subido y pantalones azules, arrugados, ahumados, manchados y sucios tras más de cuatro horas de combate; y la chomba perforada por una media docena de balazos en la región abdominal. Ese cadáver correspondía a un «no reconocí a Allende, por la forma pobremente vestida en que se encontraba.»

Pero si Palacios quería decir con eso que no reconoció al cadáver del Allende que los miembros del SIM pusieron más tarde en el Salón Independencia para simular un suicidio, entonces, está equivocado, y está planteando una duda tremenda sobre sus palabras, o sobre su equilibrio mental.

Ocurre que según el informe pericial de la Brigada de Homicidios, el cadáver del «suicida» Allende estaba vestido de la siguiente manera: «Una chaqueta de *tweed* color gris, abotonada en el botón inferior, de dos que tiene la prenda; pullover gris con figuras geométricas parduscas y de cuello subido, camisa sport blanca, pantalones marengo, calzoncillos blancos, zapatos negros Y PAÑUELO DE SEDA AZUL CON LUNARES ROJOS EN EL BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO.»

Es decir, un cadáver con chaqueta de *tweed*, correctamente abotonada y pañuelo de seda, azul y rojo, en el bolsillo superior izquierdo, pantalones marengo y zapatos negros. Eso no era precisamente un «cadáver pobremente vestido». El otro sí, el del Allende asesinado realmente por los soldados atacantes estaba pobremente vestido. La realidad y el mito se le cruzaron al general Palacios y en su declaración mezcló verdad y mentira: la verdad de que no reconoció el cadáver de Allende ASESINADO EN EL SALÓN ROJO, y la mentira que se refería al cadáver de Allende puesto posteriormente en el Salón Independencia para armar el «suicidio».

¿Qué hacemos con la noticia?

Como hemos visto en este reportaje, hubo serias divergencias de criterio para construir el suicidio de Allende, entre el general Ernesto Baeza Michelsen y el general Augusto Pinochet. El primero armó el espectáculo tratando de basar todo su «argumento» en la policía civil, mientras el segundo quiso que se hiciera apoyándose sólo en los organismos médicos y de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Esto provocó serias divergencias, hasta el punto que el miércoles 12 de septiembre, en la tarde, el general Ernesto Baeza Michelsen, a gritos, delante de funcionarios civiles de la policía de investigaciones, ofreció su renuncia al general Pinochet, gritando: «¡Esto nos pasa por trabajar con pijecitos hijos de puta!» El general

Baeza se refería a Federico Willoughby MacDonald, secretario de prensa de la Junta Militar, el cual había redactado un comunicado sobre «el suicidio» de Allende, que fue repartido a la prensa a las 14,30 horas del miércoles 12 de septiembre.

El comunicado de prensa había causado la ira de Baeza Michelsen porque contenía inexactitudes y errores, que más tarde podrían provocar problemas, sobre todo porque aparecía como «comunicado oficial de la Junta Militar de Gobierno».

La versión que daban los generales sublevados, veinticuatro horas después de la muerte de Allende, era la siguiente, según transmisión por la radio oficial:

«La Junta Militar de Gobierno de Chile anunció oficialmente que el ex presidente Salvador Allende se suicidó y que su cadáver fue inhumado este mediodía. El comunicado señala que:

1) A las 13.09 horas de ayer martes, Salvador Allende ofreció rendirse incondicionalmente a las fuerzas militares.

2) Para ese efecto se dispuso de inmediato el envío de una patrulla cuya llegada a Palacio de la Moneda se vio retrasada por la acción artera de francotiradores apostados especialmente en el Ministerio de Obras Públicas que pretendieron interceptarla.

3) Al ingresar esta patrulla en La Moneda, encontró en sus dependencias el cadáver del señor Allende.

4) Trasladado al Hospital Militar, una comisión médica integrada por los jefes de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, junto a un médico legista, constataron su deceso y dictaminaron el suicidio.»

La furia del general Baeza era bastante justificada, porque según ese comunicado oficial de la Junta Militar de Gobierno, la «batalla de La Moneda» había terminado poco después de las 13 horas, mientras que era público y notorio, y además sancionado por un comunicado del Ministerio de Defensa del día anterior, 11 de septiembre, que «el Palacio de La Moneda ha caído en manos de las fuerzas militares a las 14.50 horas».

Al mismo tiempo, este comunicado colocaba el «suicidio» de

Allende pocos minutos después de las 13 horas, mientras que en el anochecer del día 11 de septiembre, el prefecto de Investigaciones de Santiago, René Carrasco, había declarado a los corresponsales extranjeros de la Agence France Presse, United Press International y Associated Press, que «el personal de la Brigada especializada en estos servicios, comprobó la muerte del derrocado Mandatario, la cual se produjo aproximadamente entre las 13.30 y 14 horas de hoy».

Por último, el comunicado oficial señalaba que el cadáver de Allende había sido trasladado al Hospital Militar para ser examinado por los equipos de las Fuerzas Armadas, lo cual también era falso, ya que ese traslado se hizo cerca de las siete de la tarde, DESPUÉS que la Brigada de Homicidios cumplió el papel que el comunicado señalaba a «los jefes de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros».

El general Ernesto Baeza Michelsen hizo saber al Comando Conjunto que «ese tipo de declaraciones nos ponen en ridículo» y hace recaer «sobre nosotros» precisamente las sospechas que queremos evitar. ¡Las «sospechas» de que Salvador Allende había sido asesinado por los militares insurrectos!

Además, el general Baeza, en la tarde del día 12 de septiembre, tenía otro motivo grave de preocupación. Ocurre que los grupos armados civiles que participaban en el golpe de Estado, agrupados bajo el nombre genérico de Unidades Independientes por el Comando Operacional Conjunto Militar de Peñalolén, había puesto en el aire, sin autorización de los generales insurrectos, una radio de onda corta, la cual, a las cuatro de la tarde del día 11 de septiembre había transmitido la noticia de la muerte del presidente Allende, con un texto aproximado a éste: «Atención Chile. Atención a todo el mundo. Aquí Santiago Treinta y Tres. Este es Chile Libre. Allende ya es un cadáver. El capitán Roberto Garrido nos ha liberado de las garras del marxismo. Aquí transmite la Asociación de Chilenos Libres. Éste es Chile Libre. Allende ha sido ajusticiado por nuestros soldados gloriosos.»

El general Baeza, al conocer esta transmisión, en la noche del día 11 de septiembre, ordenó investigar el sitio en donde estaba esa radio clandestina de las Unidades Independientes, y se encontró con la sorpresa de que la emisión había salido del Ministerio de Defensa, y que, además, sus superiores inmediatos le sugerían que no siguiera investigando.

Por último, el general Baeza sólo tenía un motivo de satisfacción: el haber logrado que la noticia del «suicidio» fabricado de Salvador Allende se demorara veinticuatro horas, para ultimar detalles, perfeccionar declaraciones e impedir que grupos de civiles trataran de arrebatar el cadáver del ex Presidente a las Fuerzas Armadas, descubriendo los innumerables impactos que tenía en el cuerpo.

Su satisfacción era la de un hombre que había fabricado un suicidio muy importante, incluso consiguiéndose un testigo ocular insospechable, ya que era médico y civil. También había logrado apresurar el montaje del suicidio en el Salón Independencia de La Moneda, de tal modo que cerca de las seis y media de la tarde del día 11 de septiembre, pudo permitir que un periodista del diario «El Mercurio» entrara al escenario del espectáculo: era el jefe de fotografía del periódico más importante de Chile, Juan Enrique Lira, quien escribió: «Alumbrado por focos de los bomberos, el presidente Allende aparecía recostado sobre un sofá de felpa, con la cabeza totalmente destrozada; tenía una ametralladora hacia un lado. En ese momento pensé que se había disparado una ráfaga de más de dos balas por el estado que presentaba la cabeza del Presidente, posteriormente solamente se encontraron dos vainillas vacías.»

Los jefes militares permitieron que Lira y otros periodistas del canal de la Universidad Católica, permanecieran cerca de un cuarto de hora en el lugar.

La situación merece el comentario que el escritor chileno Fernando Alegría, profesor en la Stanford University (Estados Unidos), hizo en el número de diciembre de 1973 de la revista «Ramparts»:

«La Junta publicó un comunicado que apareció en los periódicos. Ellos dicen que Allende se suicidó y agregan que había copiosa cantidad de huellas de pólvora en sus manos, lo cual sugiere, de acuerdo con el mismo comunicado, que el Presidente estuvo disparando por largo tiempo. Conociendo a Allende como yo lo conocí, sin embargo, estoy convencido de que él murió luchando, con una ametralladora en sus manos. Él estaba resuelto a seguir combatiendo en La Moneda. Si la Junta está utilizando la palabra «suicidio» metafóricamente para describir el hecho de que Allende estaba solo frente a todo un ejército, entonces puedo aceptar el comunicado oficial, aun cuando estimo que su uso de las metáforas es deplorable.»

Notas

1) Desde la firma del tratado de Ayuda Mutua con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la influencia sobre los institutos militares chilenos fue creciente. Desde comienzos de la década de los 60, periodistas y partidos políticos de izquierda denunciaron estos hechos, haciéndose notable la campaña a partir de 1968, en que revistas como «Causa ML» (números 2 y 3 de ese año; y 7 y 10 de 1969) dieron a conocer copias fotostáticas de los textos utilizados en las diversas escuelas militares chilenas, que eran simples traducciones de los textos utilizados por el Ejército de EE.UU. Durante 1970 y 1971, la revista «Punto Final» denunció programas de cursos de anticomunismo en la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y en la Academia Naval de Playa Ancha, en Valparaíso. En 1972, los diarios «El Pueblo» y «El Rebelde», ambos de Santiago, denunciaron la presencia de miembros de la Misión Militar Norteamericana como «profesores invitados» de año completo en esas mismas academias militares. Esto, por supuesto, no es extraño a la *filosofía* del Pacto de Ayuda Militar (PAM). Las mismas fuentes anteriores citaban los siguientes hechos:

«En 1963, el Departamento de Defensa de los EE.UU. explicó en un documento al Congreso de su país, la filosofía del Pacto de Ayuda Militar en su relación con los Ejércitos latinoamericanos: El PAM también contribuye a los objetivos políticos de los Estados Unidos a través de sus programas de entrenamiento que traen a este país muchos líderes militares extranjeros... pues no

sólo sirve para mejorar la capacidad técnica del personal militar, sino también para exponerlos a los requerimientos de un responsable liderazgo militar en una sociedad contemporánea

«El 3 de junio de 1969, el secretario de Defensa yanqui, Melvin R. Laird, dijo ante el Congreso de su país: "...aseguro que el PAM hará cuanto pueda para asegurar que todo dólar invertido en ayuda donada tendrá su más efectivo uso en apoyo de la política y la seguridad de los Estados Unidos".»

"En 1963, el secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo ante el Senado norteamericano: "La asistencia militar y la económica están frecuentemente unidas en apoyo a los objetivos de los Estados Unidos, con Fuerzas Armadas nativas provistas por el programa de asistencia militar con instructores avezados y la Agencia para el Desarrollo Internacional aportando los elementos materiales... lo cual disminuye la vulnerabilidad de la población nativa hacia las lisonjas y amenazas de los agentes comunistas, comprometidos en el fomento de la insurrección".»

«En el año 1964, ante la misma Cámara de Representantes, el general Robert J. Wood, que era director de Asistencia Militar del Departamento de Defensa, dijo: "Hay en ejecución un Programa de Seguridad para la Alianza para el Progreso... que tiene como objetivo fundamental un liderazgo militar latinoamericano".»

Para profundizar este tema, ver *Estados Unidos y el nuevo equilibrio en América Latina*, de James Petras, «Revista de Estudios Internacionales», Santiago Chile, enero-marzo de 1969 pp. 490 y 518.

2) Las palabras entre comillas son una reconstrucción aproximada de lo dicho por los oficiales norteamericanos asesores de la conspiración que desembocó en septiembre de 1973, y se hace en base a los discursos, arengas y reuniones en buques de la Armada y centros militares hechas por oficiales golpistas a partir de mayo de 1973. Como se denunció en los primeros diez días de septiembre, en los diarios «Puro Chile», «Ultima Hora» y revista «Chile Hoy», los oficiales golpistas que arengaban desembozadamente a los marinos y aviadores principalmente, y que afirmaban su posición en que «los americanos nos apoyan y nos han dicho tal y tal cosa», son los siguientes: coronel Juan Soler Manfredini, director de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea; coronel Carlos Ottone Mestre, director de la Escuela de Aviación Capitán Avalos; el teniente segundo Jaime Olavarrieta, de la Escuela de Grumetes en Isla Quiriquina; el teniente Julio Meneses, del Hospital Naval de Valparaíso; el capitán de fragata Alberto Vázquez, comandante de la Base Aeronaval de El Bolloto; el capitán de fragata Martiniano Parra, de la Base Naval de Talcahuano; comandante César Guevara Fuentes, del Grupo 7 El Bosque, de la Fuerza Aérea en Santiago, y su segundo comandante Ivan Doren, así como sus ayudantes el teniente Ernesto González y cabo Florencio Gálvez. Uno de los oficiales que más facilidad de palabra tenía en los últimos meses antes del golpe para señalar que «los

americanos nos apoyan y nos dan asesoría técnica en todo», y contar detalles de las reuniones con los representantes del ejército de EE.UU. a partir de noviembre de 1972 para planificar el derrocamiento de Salvador Allende, era el coronel de aviación Ramón Gallegos Alonso, que fuera jefe de relaciones públicas de la Fuerza Aérea de Chile hasta agosto de 1973, y brazo derecho de la conspiración del ex comandante en jefe César Ruiz Danyau en la segunda quincena de ese mismo mes, junto con los oficiales Juan Pablo Rojas, Guillermo Navarro Vicencio, Raúl Vargas y Antonio Quirós, en Santiago. En Antofagasta, norte de Chile, el comandante de escuadrilla Juan Cvitanic, jefe de relaciones públicas de la Base de Cerro Moreno, era otro de los que contaban a sus amigos y trataba de hacer propaganda al golpe relatando detalles «del apoyo americano». También el comandante de grupo de Antofagasta, Patricio Araya Ugalde, a quien llamaban «el otro yo del general Ruiz Danyau». En el Grupo 10 de Los Cerrillos estaban Germán Fuchslocher y Carlos Alvarez, y en el Grupo 2 de Quintero (cerca de Santiago), el comandante de grupo Pablo Saldías Maripangue.

La gran mayoría de la información sobre las reuniones de oficiales chilenos con oficiales norteamericanos, a partir de noviembre de 1972, provienen de este tipo de infidencias, cuando, al parecer, los conspiradores se encontraban absolutamente seguros de que nada podría detener su maquinaria golpista. Por supuesto, hay otros tipos de fuentes también para conocer lo que pasaba en el interior del grupo conspirativo, realmente muy numeroso. Pero esas fuentes, por ahora, no se pueden citar, porque pondría en peligro las vidas de muchos chilenos, tanto civiles como militares, que siguen dentro de Chile en la fecha de publicación de este libro.

3) En estas elecciones parlamentarias, la Unidad Popular sacó casi el 44 % de la votación, lo cual, para el sistema político chileno era un verdadero triunfo, ya que ningún Gobierno chileno elegido democráticamente había logrado subir su porcentaje de votación con respecto al sacado al momento de su elección presidencial.

Un caso ilustrativo era el de Eduardo Frei: fue elegido en 1964 con el 56,0 % de los votos; en 1965, para las elecciones parlamentarias, ese porcentaje bajó a 42,3 %; tres años más tarde, su Gobierno sacó en las elecciones municipales de 1967 el 35,58 %; y en las parlamentarias de 1969, el 21,8 %. Para el sistema pluralista democrático existente en Chile hasta el 11 de septiembre de 1973, esta minoría relativa no era señal de ilegitimidad, sino simplemente de medida de apoyo o rechazo político a una gestión constitucional. Del mismo modo, en las elecciones presidenciales de 1958, el candidato triunfante, Jorge Alessandri Rodríguez sacó sólo el 31,2 %; pero era mayor cantidad que el segundo, Salvador Allende, con 28,5 %; el tercero, Eduardo Frei, con 20,5 %; y el cuarto, el radical Luis Bossay, con 15,4 %. Sin embargo, nadie cuestionó la legitimidad de la presidencia de Jorge Alessandri.

En cambio, el Gobierno de la Unidad Popular había hecho un camino al revés: de 36 % de los votos en 1970 había llegado al 44 % en 1973, lo cual mejoraba su posición relativa en el sistema pluralista democrático. Sin embargo, los conspiradores daban como «prueba» de la ilegitimidad del Gobierno de Allende que «sólo representaba a una minoría del 36 %», lo cual es un argumento falaz en el sistema político de Chile.

4) La versión de lo que ocurrió en esta reunión se conoció por boca del propio presidente Allende, quien habló con un grupo reducido de periodistas de la Unidad Popular, en la propia Moneda, en la noche del mismo día 8 de agosto. Infortunadamente, no estoy en situación de decir los nombres de esos periodistas, porque todavía están en Chile, algunos presos y otros en la clandestinidad. Y uno asesinado, como es el caso de Augusto Olivares Becerra.

5) La existencia de la cinta magnética, un sumario de su contenido y una versión de esta reunión, también fue dada por Allende a un grupo reducido de periodistas de la Unidad Popular para fundamentar su petición de no informar sobre estos sucesos ya que la situación estaba «extremadamente crítica». Los sucesos del día siguiente fueron casi públicos, incluso con arengas en los patios de las bases aéreas involucradas, con salidas y entradas de correos militares fáciles de identificar. Pero se respetó el acuerdo con Allende y los diarios de izquierda no informaron del hecho, en sus detalles, sino en general y de manera indirecta. Los periódicos de derecha callaron totalmente.

6) Durante la campaña presidencial, en 1970, muchos periodistas acompañaron día y noche, por sus viajes por todo Chile, a Salvador Allende, y al final de la jornada, en diversas ocasiones se planteó el problema de qué harían las Fuerzas Armadas si la Unidad Popular ganaba. Desde entonces, se supo por boca de Allende que «por lo menos tengo un general amigo, que es Torres de la Cruz». Y lo definía el propio Allende como «allendista». Incluso llegó a decir que su quinta antigüedad en el Ejército en la época (la lista era Schneider, Prats, Pinochet, Urbina, Torres de la Cruz, Bonillas) daba garantías suficientes. Más tarde, después de los sucesos de octubre de 1970, Torres de la Cruz volvió a ser citado por los asesores del Presidente en problemas militares como «leal». Cuando a partir de marzo-abril de 1973 comenzaron a ocurrir los allanamientos militares a las fábricas, funcionarios responsables de la Unidad Popular fueron a hablar con Torres de la Cruz en Punta Arenas (donde Allende lo había nombrado Intendente para «reforzar» la lucha contra el contrabando de armas de los grupos fascistas civiles desde Argentina), a fin de conocer qué pasaba en el seno del Ejército. Por supuesto, Torres de la Cruz informó que esos eran excesos propios del tipo de operación que significaban los allanamientos (la brutalidad, castigo a las obreras y obreros, etcétera).

7) El caso de Augusto Pinochet en el drama que vive Chile es muy particular. Hoy, en 1974, aparece como el jefe más cruel de una Junta Militar fascista. Y sin embargo, en 1973, hasta junio de ese año, los generales conspiradores dudaban mucho de Pinochet, sobre todo porque siempre se mostró partidario de la línea seguida por el comandante en jefe de la época, Carlos Prats, y porque muchos de los cursos de Estado Mayor que dictó se daban bajo el lema impuesto por Prats de «defensa de la constitucionalidad en caso de amotinamiento militar». El general Pinochet fue el último eslabón en cerrarse (en realidad, el general Mendoza fue informado más tarde, pero su importancia no es comparable con la de Pinochet), y la razón fundamental que dieron los generales Leigh, Bonilla, Brady y Arellano y el almirante Merino para «invitarlo» a ser jefe de la Junta, fue que con ello se impedían fracturas en el Ejército. Tal vez esta realidad de Pinochet, de ser ajeno por tanto tiempo al grupo conspirador, lo mantuvo fuera también del plan para asesinar a Allende. La participación de Mendoza en el plan de asesinato se justifica, porque desde 1971, había demostrado una aversión casi enfermiza a la Unidad Popular, llegando incluso a retardar la entrada de Carabineros para despejar las calles en la capital en las manifestaciones de oposición. Mendoza, en realidad, era conocido públicamente como «enemigo de la Unidad Popular» desde el comienzo del período de Allende.

2

¿Por qué asesinaron al General?

No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque no seamos capaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera —y no es que yo lo desee— llegará el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro. Esta es la gran responsabilidad política que tienen los EE.UU.

Salvador Allende, entrevista con «TIME», 19 de abril de 1971.

Entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende y la combinación de partidos políticos de izquierda que lo apoyaban tuvieron que afrontar siete intentos de insurrección militar contra la Administración civil.

Los siete intentos insurreccionales contaron con el apoyo de agencias gubernamentales y empresas privadas gigantes de los Estados Unidos, y por supuesto, con la participación de las organizaciones empresariales monopólicas de la industria, el comercio, la banca y la agricultura de Chile.

Sin embargo, no fue hasta el último trimestre de 1972 cuando todos esos sectores que empujaron, desde el primer día de la elección, para derribarlo, que se pusieron de acuerdo en un plan bien coordinado, con tiempo de realización prudente y, podría decirse, científicamente determinado.

La historia de los siete intentos militares por sublevarse, también es la historia de una pugna, en Washington, entre el poder militar y el poder civil norteamericano. Para mi país, esto se

expresó en la pugna entre el Pentágono, de enorme influencia en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas, y la Agencia Central de Inteligencia, ligada estrechamente a las directivas de la Democracia Cristiana y Nacional, y a los sectores más reaccionarios de las organizaciones empresariales Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio.

La historia de los siete intentos de insurrección militar es, también, la historia del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena en una etapa desesperada de su existencia en Chile, cuando, al final de la administración demócratacristiana de Eduardo Frei, veían venir encima de sus intereses una oleada temible de luchas populares, que habían roto el engaño de la «revolución en libertad», prometida por la Democracia Cristiana en 1964, y buscaban una salida propia a la profunda crisis económica que azotaba el país en 1970.

Estos dos sectores dominantes de la sociedad chilena, vieron en Salvador Allende, su programa y su combinación política, dos cosas contradictorias: una terrible amenaza para su dominio y una posibilidad de escamotear a los trabajadores chilenos su deseo de expulsar el poderío imperial de Estados Unidos y derrocar el poder de la oligarquía. Y esto último precisamente, utilizando a Allende como «dique de contención» de las ansias de centenares de miles de trabajadores chilenos por destruir el viejo sistema social de su país, y construir otro en que ellos fueran no sólo los protagonistas, sino también los objetos de todos los beneficios del nuevo sistema social.

Durante sus tres años de gobierno, Salvador Allende utilizó esa doble perspectiva en que lo veían sus enemigos políticos para desarmar conspiraciones, resolver crisis políticas y conti nuar al frente de la nación. Sólo cuando el Pentágono y la CÍA, las empresas multinacionales y la oligarquía chilena se pusieron de acuerdo en una sola óptica sobre Allende, éste quedó condenado irremediabilmente al destino que quisieran darle los militares

insurrectos. Y esa óptica única fue la siguiente: Salvador Allende ya no servía como «dique de contención». Igual que Frei en 1970, a Allende en 1973 le había fracasado el esquema de su programa. A Frei, sus reformas no le sirvieron para ocultar a los ojos de las masas que estaba protegiendo a los grandes empresarios monopólicos chilenos y norteamericanos, y la presión combativa de los trabajadores le obligó a desatar una represión muy fuerte sobre obreros, campesinos, empleados y estudiantes.

A Allende, su programa de desarrollo profundo del capitalismo de Estado, lesionando intereses de sectores empresariales norteamericanos y de una buena parte de la oligarquía chilena, no le abrió el «camino pacífico» hacia ninguna parte. Por el contrario, fue el detonante para que centenares de miles de obreros, campesinos, empleados y estudiantes se organizaran por su cuenta, al margen de Allende y su combinación política, para «seguir adelante» en la lucha por destruir el poder económico, político y social del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena. En 1973, el «dique de contención» empezaba a saltar hecho trizas por la fuerza de las masas. Entonces, sus enemigos se pusieron de acuerdo: no bastaba reemplazar a Allende; había que reemplazar el sistema de sujeción de todo el pueblo chileno al carro de quienes han vivido de su sudor y de su trabajo por siglos. Enterraron la democracia y la reemplazaron con el desempolvado cadáver del fascismo. Y en el derrumbe de la democracia chilena, fue aplastado no solamente Salvador Allende, sino también decenas de miles de chilenos.

Para hacer este trabajo, el imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena pusieron en marcha al pilar fundamental del Estado que habían creado en Chile las Fuerzas Armadas. De esa «puesta en marcha», habla la historia de estos siete intentos de insurrección militar. Su orden temporal es éste: 1) Septiembre-octubre de 1970; 2) marzo de 1972; 3) septiembre de 1972; 4) junio de 1973; 5) agosto de 1973; 6) siete de septiembre de 1973; y 7) el 11 de septiembre de 1973. Vamos a examinarlos en detalle.¹

El caso Schneider

Era el jueves 22 de octubre de 1970. Desde la noche del 4 de septiembre del mismo año, cuando el recuento de los votos en las elecciones presidenciales señalaron el triunfo, por un escaso margen de 30.000 electores en tres millones de votos emitidos entre tres candidatos, para Salvador Allende, candidato de una agrupación de partidos de izquierda, el país se había estremecido con los efectos de diversos intentos por impedir que Allende se hiciera cargo de la presidencia de la República.

Ese jueves 22 de octubre ocurrió un hecho que, trágicamente para los partidos políticos de la Unidad Popular, fue calificado por sus dirigentes como «la señal» de que las Fuerzas Armadas chilenas eran «una institución única en América Latina» que no tenían influencia «del imperialismo norteamericano ni de la oligarquía chilena» y que por eso mismo, «no constituían un factor de peligro» para el proceso de transformaciones socioeconómicas que suponía el programa de la Unidad Popular. Este error de información de lo que realmente ocurrió en el seno de las Fuerzas Armadas chilenas entre el 4 de septiembre y 22 de octubre de 1970, fue el punto de partida desde el cual Salvador Allende fue acumulando equivocación tras equivocación en su política respecto a las Fuerzas Armadas, concediéndoles, de hecho, todas las facilidades para que concretaran su sangriento asalto a la Administración civil el 11 de septiembre de 1973.

Volvamos al jueves 22 de octubre de 1970. Y hagámoslo en el lenguaje del parte policial del mayor Carlos Donoso Pérez, a cargo de la Vigésimo cuarta Comisaría de Carabineros de Las Condes (barrio oriente de Santiago).

«A las 8.20 horas, más o menos, en circunstancias que el señor comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, se dirigía a su despacho en el automóvil fiscal conducido por el cabo-chófer Leopoldo Mauna Morales, por la calle Martín de

Zamora en dirección al poniente, fue interceptado por un vehículo que chocó con el que viajaba el señor General; vehículo éste que fue rodeado por cinco individuos, uno de los cuales haciendo uso de un elemento contundente similar a un combo, rompió el vidrio posterior izquierdo y luego disparó contra el general Schneider, impactándolo en la región del brazo, en el hombro izquierdo y la muñeca izquierda, ocasionándole lesiones de carácter reservado, según pronóstico del Hospital Militar, donde fue llevado para su inmediata atención.»

El domingo 25 de octubre, el general Schneider falleció.

El suceso se interpretó oficialmente así:

a) El general Schneider fue asesinado por una banda de conspiradores «pagando con su vida su apego a la Constitución chilena».

b) El asesinato buscaba un pretexto «para una insurrección militar» que «impidiera el ascenso a la presidencia de Salvador Allende», pero «en una excepcional muestra de disciplina, el Ejército, herido tan profundamente por el atentado, reaccionó precisamente de la manera opuesta a la que buscaban los conspiradores, reiterando su adhesión a las reglas del juego constitucional».

c) El complot fracasó, a pesar de la brutalidad del «recurso extremo del asesinato político» utilizado por los complotadores para desencadenar la insurrección militar.

Sin embargo, la realidad era muy distinta.

El Ejército «en una excepcional muestra de disciplina», ¡pero con respecto al Pentágono!, no reaccionó como buscaba la fracción de los conspiradores que siguió adelante con el plan cancelado, porque una semana antes, Schneider había explicado cómo el Pentágono pensaba que «era mejor» permitir que Allende asumiera la presidencia de la República, seguir la táctica de «esperar y ver» y trabajar sobre condiciones «objetivas y de largo plazo para actuar sobre seguro, en caso de necesidad».

Incluso más todavía. Para impedir que la opinión pública

chilena se enterara de la sucia trama que se escondía tras el asesinato del general René Schneider, los altos mandos militares de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros, se pusieron de acuerdo para revelar parte de la trama, sacrificar con el retiro de las filas a una media docena de generales implicados, y permitir un «juicio suave» al ex general Roberto Viaux Marambio, jefe de la pandilla encargada de ejecutar a René Schneider y que estaba en contacto directo con los hombres de la ITT y de la CÍA.

En suma, al revés de lo que dijeron los políticos de izquierda en los tres años que siguieron a este asesinato, la muerte del comandante en jefe del Ejército chileno en octubre de 1970 señalaba el enorme grado de influencia que en él tenía el Pentágono norteamericano para cualquier política de liberación por parte del Gobierno de la Unidad Popular.

(En febrero de 1971, el autor de este reportaje conversó con uno de los encargados de la UP sobre las relaciones con las Fuerzas Armadas, explicándole todo lo que sabía sobre el asesinato de Schneider y lo que eso significaba. Éste le respondió: «Si tú publicas eso, te van a dar cadena perpetua, o fusilamiento, por traidor a la Patria al acusar de algo tan repugnante a nuestros gloriosos institutos armados.» En todo caso, se comprometió a comunicar a Salvador Allende la historia, llevándose una copia de un informe preparado por el autor de este reportaje. La respuesta vino en el Mensaje Presidencial ante el Congreso, del 21 de mayo de 1971, cuando, al referirse al papel de las Fuerzas Armadas «en el proceso de cambios de la vía chilena hacia el socialismo», Allende dijo que «a pesar de algunos agoreros y catastrofistas que dudan del patriotismo de nuestras fuerzas armadas... éstas, por su profesionalismo y respeto a la Constitución, son LA GARANTÍA del actual proceso de cambios».)

Desde ese momento, para los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular pasó a ser un axioma que el general René Schneider era «símbolo del soldado con conciencia cívica y del hombre que sirve a la Patria en la paz obedeciendo a las leyes»

(Salvador Allende, en su discurso de Santiago el 21 de diciembre de 1970).

Y, en un paso más adelante en la audacia política, Allende llegó a construir la tesis siguiente:

«Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organizado y disciplinado, de partidos políticos que entienden lealmente la unidad, de trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones y en la Central Unica, son la base granítica del proceso revolucionario. LO SON TAMBIÉN, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces legales; lo son, lo repito y lo subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las que rindo un homenaje, AL PUEBLO QUE VISTE UNIFORME, por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos» (Salvador Allende, discurso en el Estadio Nacional de Santiago, el 4 de noviembre de 1971).

Hay que tener claro que Allende se refería, y se refirió siempre cuando trató este tema, a los altos mandos militares. A nadie le cabía duda que la tropa, en un país donde existe la conscripción militar, eran hijos de obreros, campesinos y empleados con uniforme. Pero, el problema estaba con los mandos de esa tropa, su carácter de clase, sus tareas específicas en el armazón socioeconómico que se llamaba «Estado chileno». Nunca aceptó Allende discusión científica, objetiva, sobre ese tema. Nunca aceptó observaciones sobre a qué sectores de la sociedad chilena defenderían esos altos mandos en caso de una crisis generalizada de la estructura social chilena, causada por la emergencia de sectores populares en su camino hacia el poder y la participación efectiva en el desarrollo de una sociedad manejada hasta ese momento por una minoría oligarca y por los representantes de los grandes consorcios industriales, financieros y comerciales de los Estados Unidos.

El suceso que se cuenta a continuación, es típico de la actitud de Allende con respecto a las Fuerzas Armadas. A principios de abril de 1971, el senador Alberto Jerez, de la Comisión de Defensa del

Senado y «coordinador» entre los generales y el Gobierno de la Unidad Popular, llamó a su oficina en el centro de Santiago al autor de este reportaje, para plantearle, aproximadamente, lo siguiente:

«Como tú sabes, a fines de este mes Salvador va a dar una clase magistral a la Guarnición Militar de Santiago. Es una clase que se hará en la Academia de Guerra del Ejército, ante unos 800 oficiales. Salvador me pidió que le reuniera lo mejor que exista sobre las Fuerzas Armadas chilenas, y yo le propuse tu nombre para que le hicieras un informe, para él saber sobre qué terreno pisa. Salvador está de acuerdo. Él te conoce, y sabe que eres un experto en asuntos militares chilenos desde el ángulo político... Tienes siete días para hacerlo...»

En unas veinte páginas escritas a máquina, tamaño oficio y doble espacio, el autor entregó un informe que, poco más o menos, contenía los hechos que ustedes van a leer en este capítulo, correspondientes a los años que van desde 1964 a 1970. Además, el informe contenía un esbozo de interpretación de la situación, señalando el fuerte peligro para la estabilidad del Gobierno UP que significaba la presencia en las Fuerzas Armadas de los mismos altos mandos que antes de la toma del mando presidencial.

A fines de abril, durante el desarrollo de un encuentro de periodistas de izquierda, Alberto Jerez tenía el siguiente recado de Allende: «Salvador agradeció mucho tu informe, pero me dijo que no le serviría de nada, porque tú hablas allí de unas Fuerzas Armadas fantasmas, sacadas de los libros de Lenin, y que él trata con seres humanos de carne y hueso. Me dijo que te explicara que las Fuerzas Armadas chilenas son de un tipo especial, que Lenin no previó en sus libros...»

Infortunadamente para el Presidente constitucional de Chile, las Fuerzas Armadas «fantasmas» destruyeron el 11 de septiembre de 1973 su vida, el Palacio de la Moneda, la residencia de Tomás Moro y varias fábricas, además de asesinar a decenas de miles de trabajadores chilenos, encarcelando a otras decenas de miles y

destruyendo todas las libertades del pueblo chileno. Los «fantasmas» inauguraron para mi país el fascismo más brutal aplicado en el mundo desde la noche que cayó sobre el pueblo alemán Adolfo Hitler y sus nazis.

No cabe en los propósitos de este reportaje explicar por qué Salvador Allende, y la mayor parte de las directivas de los partidos políticos de la Unidad Popular, tuvo esa actitud ciega y suicida con respecto a los altos mandos militares de Chile. Pero, es importante dejar constancia del hecho.

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».

Un problema para EEUU

Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano decidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condiciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chile», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-

norteamericano de más de 500 millones de dólares de capital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total aproximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas clases sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vivían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propietarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.

En términos estadísticos, en 1964 la situación era, según estudios de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) creada por la Administración Frei, la siguiente:

Los obreros constituían el 50 % de la fuerza de trabajo y recibían el 21 % del ingreso total.

Los empleados sumaban el 22,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 27,2 % del ingreso total.

Los trabajadores por cuenta propia, eran el 21,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 17,6 % del ingreso total.

En cambio, los contratistas y rentistas eran sólo el 1,4 % de la fuerza de trabajo y absorbían el 26,4 % del ingreso.

El resto del ingreso (7,9%) correspondía al Gobierno, por sus propiedades e impuestos directos.

Estas desigualdades eran mucho más graves en el campo, donde trabajaba el 25 % de la población activa chilena. Allí, el 3 % de los propietarios agrícolas considerados como latifundistas, se apropiaban del 37 % del ingreso generado en el sector; mientras el 71 % de las familias que vivían en el campo recibían sólo el 33 %

del ingreso del sector.

Para mantener esta realidad, los sucesivos gobiernos radicales y conservadores, entre 1945 y 1964, habían montado un aparato represivo militarizado (el cuerpo de Carabineros) que, cuando se veía sobrepasado por la lucha de los trabajadores, era apoyado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército. Sin embargo, la principal forma de «mantenimiento del orden» social era el engaño político y la supresión de las organizaciones sindicales. (Entre 1945 y 1964, la población sindicalizada chilena había disminuido en más de un veinte por ciento.)

En el engaño político, la situación se reflejaba en que la alianza de los partidos conservador y liberal (organización política pura de la oligarquía agraria, comercial y financiera), mantenía un 30 % de la fuerza electoral. El partido radical (formado por funcionarios del Estado y empresarios industriales ligados a las empresas norteamericanas del cobre, más algunos sectores latifundistas) mantenía un 20 % de esa fuerza electoral. La Democracia Cristiana, por su parte, que sólo a fines de la década del 50 comenzó a ser importante, tenía un 16 % de la fuerza electoral (era un partido desgajado, en los años 30, del partido conservador, y que, en 1964, estaba formado por la oligarquía industrial y por los técnicos de más alto nivel ligados a las empresas monopólicas tanto chilenas como norteamericanas).

Por su parte, la combinación de los partidos socialista y comunista, a principios de 1964, había llegado al 25 % del electorado, con una constante tendencia a aumentar sus simpatías entre los centenares de miles de trabajadores golpeados por la miseria y la cesantía, los cuales presionaban diariamente para obtener una ley de sindicalización campesina, mejoramiento de salarios, facilidades para crear sindicatos de obreros y empleados, reformas agrarias y lo más importante, la nacionalización de las minas del cobre, hierro y salitre en poder de empresas de los Estados Unidos, así como la nacionalización de los servicios telefónicos y de generación de energía eléctrica para la capital y la zona central, también en manos

de empresas norteamericanas.

Así, la lucha presidencial de 1964, entre Salvador Allende (apoyado por una alianza socialista-comunista, más la mayor parte del partido radical a nivel de bases) y Eduardo Frei (jefe del partido demócratacristiano, más la alianza conservadora-liberal y un pequeño sector del partido radical), se dio en un contexto de una violenta campaña antiimperialista, un acuerdo generalizado sobre la urgencia de una ley de reforma agraria y una movilización de masas que no tenía precedentes en la historia del país. Incluso, los demócratacristianos, tomando la bandera del engaño político al pueblo, ya fracasados los radicales, los conservadores y los liberales, plantearon la necesidad de «una revolución», pero en «libertad», que proponía la expropiación del latifundio, la reforma bancaria, la expropiación de algunos consorcios industriales chilenos gigantes en manos privadas, la reforma tributaria y «un nuevo acuerdo» con las compañías del cobre Anaconda y Kennecott.

La situación amenazaba ser crítica para los grupos dominantes de la sociedad chilena, tanto norteamericanos como nacionales. Hasta ese momento, a partir de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos y las empresas Anaconda, Kennecott, International Telephone and Telegraph y American Foreign Power, principalmente, habían manejado al Gobierno chileno y su Cámara de diputados y senadores, a través de sus empleados pagados en el partido conservador, liberal y, sobre todo, en el radical. El presidente radical Gabriel González Videla, por ejemplo, después que dejó la presidencia de la República en 1948, fue premiado por sus patrones norteamericanos de la Anaconda, la Kennecott, la Anglo Lautaro y la Ford Motor, a quienes había protegido durante su Administración, nombrándolo presidente de la filial chilena de Radio Corporation of America, y vicepresidente del Banco Francés e Italiano. Así, entre 1948 y 1964, este Gabriel González Videla había pasado de ser un abogado sin ninguna fortuna, a uno de los hombres más acaudalados de Chile, solamente recibiendo el pago

de sus servicios prestados desde La Moneda al Gobierno y a las empresas de los Estados Unidos. Otro caso típico es el del hombre más importante de la directiva del radicalismo en esos mismos años: Rodolfo Michels. Michels era el encargado de «administrar» los fondos que la Anaconda Company aportaba anualmente para «financiar» al partido radical. Todos los proyectos de leyes sobre «inversión extranjera», trato tributario a las empresas del cobre, hierro, salitre, teléfonos y electricidad, antes de ser presentados al Congreso por los Gobiernos radicales y los que los siguieron, eran discutidos primero en las oficinas de la Anaconda Chuquicamata. Cuando Michels «se retiró» de la vida política y fue nombrado vicepresidente de la Anaconda en Chile, fue reemplazado por el «tesorero» del partido radical, Constantino Tallar, el cual, al mismo tiempo, era «contratista» de los trabajos habitacionales y de construcción de la Anaconda.²

En 1964, con el radicalismo fragmentado, con fuerte tendencia de las bases a sumarse a la combinación de izquierdas que apoyaba a Salvador Allende, el Gobierno de los Estados Unidos y sus empresas multinacionales estaban en un problema: ¿a través de quiénes manejar el Gobierno de Chile, si ya los radicales no tenían ninguna «chance» de constituir un grupo coherente con real acceso a La Moneda y al Parlamento? Se pidieron informaciones a Chile y Robert Haldeman, presidente de la Braden Copper (filial de la Kennecott), explotadora del mineral de cobre de El Teniente, en la provincia de O'Higgins, explicó cómo, a fines de 1963, había sostenido conversaciones con Eduardo Frei (abogado al servicio del grupo oligarca Osvaldo de Castro, estrechamente ligado al consorcio yanqui Anglo Lautaro), jefe de la Democracia Cristiana, candidato presidencial ya entonces para las elecciones de septiembre de 1964; el cual había pedido «ayuda financiera» a la Kennecott para la campaña presidencial, a cambio de una promesa formal de «no nacionalizar las minas de cobre» y de «pactar un acuerdo técnico» que «beneficie mutuamente tanto a Chile como a la Kennecott». Haldeman informó a su Gobierno que «es mi

opinión» que Eduardo Frei es «una persona de confianza», que «cree en lo que dice». El informe de Haldeman, agregado al de la Anglo Lautaro y de la propia International Telephone and Telegraph (ITT), en cuyo equipo ejecutivo figuraba uno de los hombres más importantes de la directiva de la Democracia Cristiana, Guillermo Correa Fuenzalida (a su vez, principal ejecutivo del grupo oligárquico-financiero-industrial del Banco de Chile, que manejaba un capital social de más de 600 millones de dólares), decidió al Gobierno de los Estados Unidos a formar, con ayuda de las empresas interesadas en «los sucesos de Chile», una caja electoral para la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964.³

Se reunieron VEINTE MILLONES DE DÓLARES, administrados por la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Washington), para financiar la campaña electoral de Eduardo Frei. El acuerdo fue ceder a la presión popular para una reforma agraria, sindicalización campesina y llegar a «nuevos acuerdos» que aparentaran nacionalizaciones, con la Anglo Lautaro para el salitre, la American Foreign Power para la electricidad, la ITT para los teléfonos y la Anaconda y la Kennecott para el cobre. Como «consejero» económico para «garantizar las medidas en favor del capital procedente de los Estados Unidos», se nombró a David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, y como «coordinador» entre los Rockefeller y Eduardo Frei, al ingeniero Raúl Sáez, de la Corporación de Fomento de la Producción (este Raúl Sáez, desde abril de 1974, es «asesor económico» de la Junta Militar que gobierna en Chile).⁴

Los veinte millones de dólares no fueron una mala inversión para los Estados Unidos. Eduardo Frei ganó las elecciones presidenciales con el 56 % de los votos emitidos. Pero Salvador Allende elevó su cuota de votación, de más o menos el 25 %, al 39 %. Esto preocupó mucho a los «sociólogos» de la American University de Washington (centro de estudios superiores administrado por el Pentágono para sus necesidades de dominio mundial), y

recomendó una serie de medidas para «evitar el peligro de subversión popular en Chile». Las medidas estaban centradas en una readecuación de la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacerse cargo de la situación en una «circunstancia extrema».

Los generales norteamericanos ordenaron a la Fundación Ford que hiciera uso de su control de algunas universidades norteamericanas y sudamericanas para iniciar un estudio científico de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas. El sociólogo Roy Hansen, de la Universidad de California, optó por realizar una memoria de graduación sobre el tema. Al mismo tiempo, en la American University, se iniciaron los estudios para realizar una investigación masiva, en profundidad, de la sociedad chilena, inserto en lo que se llamó el «Proyecto Camelot.»⁵. A fines de 1964, Roy Hansen llegó a Chile, se conectó con Alvaro Bunster en la Universidad de Chile, el cual después sería enganchado para el «Proyecto Camelot» (curiosamente, Alvaro Bunster fue embajador de Chile ante Gran Bretaña en la Administración de Salvador Allende) y a través de la hermana de Bunster, Ximena, obtuvo el *statu* de sociólogo-investigador. Pero el centro de las operaciones científicas de Hansen, naturalmente, estaba en las Fuerzas Armadas chilenas. Para operar allí se conectó con el secretario general de la Academia de Guerra del Ejército chileno: ¡coronel René Schneider Chereau! El coronel Schneider permitió al norteamericano Hansen el acceso ilimitado a la biblioteca de la Academia de Guerra, a sus planes de estudio y a entrevistas personales con el cuerpo de generales.

Al avanzar en su estudio, Hansen se encontró con que el Ejército chileno tenía una superestructura destinada a una tropa inmensamente mayor a la que manejaba (un general por cada mil hombres, es decir 32 generales para 32.000 hombres más o menos, y un coronel por cada doscientos hombres). Del mismo modo, vio que «la fuerza decisiva» en el aparato militar de mi país era el Ejército. Concentró, entonces, su investigación en él con la preciosa ayuda del entonces coronel René Schneider Chereau. El

resultado del trabajo de Hansen, considerado «secreto» para el Ejército chileno, se llamó *Cultura Militar y Declinación Organizativa: un Estudio del Ejército de Chile*. Una copia de su estudio ingresó al sector «clasificado» de la biblioteca de la Academia de Guerra del Ejército chileno; otra copia quedó en la Biblioteca de Sociología de la Universidad de California y el resto de las copias pasaron al Pentágono.

Años más tarde, en 1969, algunos periodistas chilenos tuvieron acceso a la copia «clasificada» existente en Chile, y un detalle de su contenido puede leerse en la edición número 21 de julio-agosto de 1971, de la revista «Causa MI», editada en Santiago de Chile.

La síntesis del trabajo financiado por la Fundación Ford y también por la Rand Corporation, podría ser esta:

En 1964, para Roy Hansen, las Fuerzas Armadas chilenas estaban en evidente peligro de desintegración a causa de su absoluta falta de participación en las decisiones importantes del país. Decía el sociólogo yanqui que, a pesar de que la opinión de las Fuerzas Armadas chilenas había sido decisiva para el desarrollo político del país, desde hacía cuarenta años se les estaba utilizando sólo como «fantasma aterrador», pero, al mismo tiempo, relegándolas a un papel indecoroso de guardianes de tercer orden del sistema imperante y, lo que es más, colocándolas en un quinto o sexto lugar en cuanto a nivel económico. Decía que, desde el golpe militar de 1924 (dado por la guarnición de Santiago para obligar a la mayoría oligárquica del Parlamento a aprobar leyes de reformas en los salarios y sistemas de previsión y salud de los obreros, a fin de impedir una «insurrección bolchevique» de las masas), los militares chilenos no habían tenido necesidad de intervenir activamente en política, y eso los había ido relegando al cuarto de los trastos inútiles por parte de las sucesivas Administraciones.

Señalaba Hansen que había un enorme peligro de desintegración de la estructura militar chilena, lo cual hacía «prever» que los altos mandos, para defenderse del naufragio, tendrían una marcada tendencia, en el futuro próximo, a tener una participación activa en

política y en las decisiones nacionales de los círculos dominantes.

Investigando sobre qué pensaban los generales del resto de la sociedad en que vivían, llegó a algunas conclusiones:

Un profundo desprecio por los civiles, a quienes los generales consideraban inútiles, corrompidos e ignorantes. Algunos generales opinaron que los parlamentarios, los políticos civiles y muchos funcionarios de alta jerarquía del Estado «no tienen idea de lo que es Chile, cómo hay que defenderlo de las agresiones externas y de la subversión», «son ignorantes», «y también incapaces de llevar a cabo cualquier tarea difícil». Los generales también opinaron que «La Patria» sólo puede ser defendida por las Fuerzas Armadas; los políticos civiles son incapaces. Que los civiles desprecian a los militares, pero recurren a ellos cuando sienten que no pueden frenar la «subversión del populacho». Sobre las opiniones políticas de los altos mandos, las estadísticas de Hansen fueron concluyentes: 10 % de derechas, 80 % de centro y 10 % de izquierdas. Pero, con la aclaración de que, para los altos mandos militares chilenos, «izquierdas» significaba el programa de reforma agraria, bancaria y nuevo trato con las empresas norteamericanas, de la Democracia Cristiana dirigida por Eduardo Frei. Así, para los generales, la combinación de partidos que había apoyado a Salvador Allende, era de «extrema izquierda» y no contaba con ninguna simpatía entre ellos.

Cuando, durante la primera mitad de 1965, el Pentágono quiso poner en práctica en la segunda parte de su proyecto de largo plazo de «preparación» de las Fuerzas Armadas chilenas como reserva para mantener la estructura de la sociedad burguesa chilena en caso de catástrofe de los políticos civiles, hubo problemas serios. Esa segunda parte era el «Proyecto Camelot», que tenía la intención de estudiar, clasificar y ponderar todos «los elementos de presión social, política y económica contra el sistema establecido» para lograr «un sistema de control de esas presiones». Cuando se iba a comenzar a aplicar, los militantes de partidos de izquierda de la Universidad de Chile lo denunciaron. El escándalo fue tan enorme

que la propia Democracia Cristiana, para cubrir las apariencias, apoyó una investigación del caso en el Parlamento. Los parlamentarios de izquierdas más un sector de demócratacristianos, calificaron el «Proyecto Camelot» como «un plan de espionaje de una potencia extranjera en contra de Chile», y el propio Gobierno de Washington tuvo que declarar, en junio de 1965, que «hemos sugerido a las autoridades correspondientes que se suspenda la aplicación del «Proyecto Camelot» en Chile y «en Colombia»

Pero el trabajo en las Fuerzas Armadas chilenas no se suspendió. Las misiones militares de los Estados Unidos (que tienen su sede en el propio edificio del Ministerio de Defensa de Santiago, vedado a los civiles chilenos) iniciaron una «asesoría a presión» sobre los planes de estudio de la Academia de Guerra, y recomendaron que todos los alumnos del último curso de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins (que prepara oficiales para el Ejército) y de la Escuela de Aviación Capitán Avalos (que prepara oficiales para la Fuerza Aérea), deberían pasar un período de instrucción de cuarenta días en los fuertes del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en la Zona del Canal de Panamá.

Esta «recomendación» del Pentágono al alto mando militar chileno, fue puesta en práctica en 1968 por el entonces director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y ya «hombre de confianza» del Pentágono en el Ejército chileno: ¡el general de brigada René Schneider Chereau!

Al mismo tiempo, Schneider, que era profesor de la Academia de Guerra, participaba activamente en la introducción de nuevas cátedras, que tenían que ver con economía política, administración estatal, comercio exterior, políticas de industrialización, historia de los partidos políticos chilenos, reforma agraria, reforma urbana, políticas bancarias, etc. Es decir, todo un plan de preparación de «administradores públicos», como parte importante de la instrucción de los nuevos generales del Ejército chileno. Del mismo modo, se introdujeron cátedras intensivas de estudios de «marxismo» a través de cursos sobre Marx, Lenin y Mao Tse-

tung.⁶

Desde 1968, el propio «profesor René Schneider», después de largas sesiones de trabajo con los miembros de la misión militar norteamericana en Santiago, comenzó a desarrollar la «teoría moderna de la seguridad nacional», que consistía en sostener que el verdadero significado de que «las Fuerzas Armadas son la garantía de la seguridad nacional» tiene un doble carácter: la de seguridad con respecto a los enemigos externos, y la de seguridad con respecto a los enemigos internos, y que, en las «condiciones actuales de Chile», los enemigos «internos» de la seguridad nacional son mucho más peligrosos, reales y latentes que los enemigos «externos»: Y, ¿quiénes son esos enemigos «internos»? Según la teoría del Pentágono, vía general René Schneider, son todos aquellos que, aprovechándose del descontento popular a causa de injusticias sociales y abusos de los poseedores de la riqueza, tratan de sacar a Chile del mundo «occidental y cristiano» en que nació y está destinado a seguir viviendo. Entre esos enemigos «internos», por supuesto, se inscriben con honores los «que propician el socialismo marxista».

Cursos similares y teorías semejantes se desarrollaban, al mismo tiempo, en la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros. Todos a cargo de «asesores norteamericanos de Inteligencia» y todos a través de altos mandos del tipo del general de brigada René Schneider Chereau.

Sin embargo, mientras el Pentágono daba primera prioridad en Chile al mejoramiento de sus relaciones con las Fuerzas Armadas nativas, el propio Gobierno de Eduardo Frei, demasiado ocupado en pavimentar el camino de los buenos negocios de las empresas gigantes de los Estados Unidos, no escuchaba las peticiones materiales de sus generales que, insuflados de un nuevo espíritu después de tres años de comenzar a adiestrarse para ser «maestros en el arte militar y en el arte del gobierno civil», exigían una mayor participación en el reparto de las riquezas generadas por el trabajo de los obreros y campesinos chilenos.

En 1969, comenzó a dibujarse con claridad una nueva situación crítica, social y económica. Transcurridos cinco años ya de la llamada «revolución en libertad» de Eduardo Frei, era notorio el fracaso. El desarrollo económico se había estancado a un nivel increíblemente bajo, llegando el crecimiento del producto geográfico bruto, en 1967, a 0,0 %; en 1968, a 0,6 %; y la proyección para 1969 indicaba no más de 0,7 %. Los precios de los alimentos subían constantemente: en 1967 tuvieron un alza del 14,5 %; en 1968 fue del 25,5 %; y la proyección para 1969 era de 30,7 %. En ese mismo año, las remuneraciones promedio de 1.300.000 obreros urbanos y agrícolas, eran TREINTA Y CINCO VECES MENORES a los ingresos promedio de unos 62.000 contratistas y propietarios a nivel capitalista. La reforma agraria, que había prometido hacer 100.000 nuevos propietarios, apenas había conseguido expropiar menos de un tercio de los latifundios. La deuda externa había subido de 1.896 millones de dólares en 1964, a un total de 2.765 millones en 1969, al tiempo que las empresas norteamericanas y extranjeras estaban retirando del país por concepto de utilidades, depreciaciones, amortizaciones e intereses MAS DE UN MILLÓN DE DÓLARES AL DÍA. Durante el Gobierno de Alessandri (1958 a 1964), el promedio anual de este retiro fue de 170 millones de dólares; mientras que Eduardo Frei, desde 1965 a 1969 lo había subido a más de 344 millones. Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda Pública de Frei, comunicaba en noviembre de 1969 que las remesas al exterior, por aquellos conceptos, sumarían alrededor de 450 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno había comprado a la American Foreign Power (explotadora de la Compañía Chilena de Electricidad) en 186 millones de dólares, maquinarias que valían menos de 40; había comprometido el pago de mil millones de dólares a la Anaconda Company, por una «nacionalización pactada» de Chuquicamata, el mayor centro cuprífero del mundo, por instalaciones que valían menos de 170 millones. Con la Kennecott Copper, había llegado a un acuerdo similar, pagando 80 millones de dólares por el 51 % de

instalaciones cuyo valor total no llegaba a los 70 millones en El Teniente (para conocer con mayor detalle esta situación, ver mi obra *El imperialismo yanqui en Chile*).

Todo esto, difundido entre el pueblo por los periodistas de izquierdas y las publicaciones patrióticas, había provocado un enorme sentimiento antiimperialista que se expresaba en la agitación constante de obreros, campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo la expulsión de las compañías norteamericanas y la expropiación de todas las empresas industriales con mayoría de capital de Estados Unidos que, durante la Administración de Frei, estaban produciendo el fenómeno de la «desnacionalización industrial» de Chile. Al mismo tiempo, la lucha campesina por la tierra había llegado al extremo de producirse tomas de latifundios por la fuerza, mientras la sindicalización en el campo había elevado su nivel de tres mil campesinos afiliados en 1964 a cerca de 120.000 en el último mes de 1969. En las ciudades, el promedio de huelgas obreras por mejores salarios triplicaba el promedio de la Administración anterior. Mientras, profesores y estudiantes se mantenían en constante combate por la reforma educacional en los niveles superiores. La situación era tan explosiva, que Eduardo Frei, pidió a Nelson Rockefeller que no pasara por Chile en sus visitas a Latinoamérica como paso previo a la preparación de su famoso *Informe sobre América Latina*; en el cual, ese mismo año, recomendaría al Gobierno de los Estados Unidos promover la toma del Poder en los países sudamericanos por parte de «la oficialidad progresista de la nueva generación», por ser la «organización más coherente» en las sociedades latinoamericanas. De esa «oficialidad progresista» a que se refería Rockefeller, formaban parte los altos mandos que se preparaban en la Academia de Guerra del Ejército chileno, bajo la asesoría y supervisión de las misiones militares norteamericanas.

En medio de esta tormenta socio-económica, a mediados de 1969, el general de brigada Roberto Viaux Marambio, comandante en jefe de la Primera División de Ejército, con sede en

Antofagasta, recogiendo el «sentir de la oficialidad joven» (coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes), hizo llegar una carta-petitorio al comandante en jefe del Ejército, Sergio Castillo Aranguiz, para su entrega al presidente Eduardo Frei. La carta-petitorio del general Viaux decía que «la seguridad nacional y la tranquilidad interna del país» dependían de las Fuerzas Armadas y que, «a nuestro juicio», el Gobierno de Frei, igual que los anteriores, no se ha preocupado por mantener en funcionamiento unas Fuerzas Armadas modernas, «bien equipadas y con participación efectiva en las grandes decisiones nacionales». La carta exigía la puesta en práctica de una «nueva política de Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas», sueldos de los altos mandos «de acuerdo con su alta jerarquía social y responsabilidad nacional» (Viaux se quejaba en el texto de la comunicación porque «un general de la República gana menos que un obrero calificado del mineral de cobre de Chuquicamata», lo cual era cierto), compra de material de guerra adecuado, y participación de la alta jerarquía militar en el desarrollo económico, político y social de Chile.

El general Viaux confiaba en que esa carta iba a servir para tener un diálogo de nuevo tipo con el presidente Frei, porque la había discutido con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división René Schneider Chereau, el cual, incluso, le había hecho sugerencias sobre la parte de la «participación» de los generales en la vida económica y política del país.

Pero Eduardo Frei no escuchó a René Schneider, y en cambio sí lo hizo con Sergio Castillo, el general comandante en jefe del Ejército, íntimo amigo personal y «freista» por y sobre todas las cosas. El general Roberto Viaux fue dado de baja el sábado 18 de octubre, relevándolo de su mando de la Primera División y llamándolo a Santiago. Viaux regresó a Santiago, y el martes 21 de octubre amaneció como jefe de una insurrección militar localizada en el Regimiento Tacna, con apoyo de la Escuela de Suboficiales, la Academia de Guerra y parte del Regimiento Blindados Número

2. Al mediodía del martes 21 de octubre, para los reporteros que cubrimos el suceso, estaba claro que el general Roberto Viaux contaba con el apoyo y la simpatía encubiertos de la mayoría absoluta de los mandos de Santiago, y que, técnicamente, si Viaux se lo proponía, no había nada que impidiera que Eduardo Frei fuera derrocado y reemplazado por un Gobierno militar sin disparar un tiro. Sin embargo, después de una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general René Schneider, el amotinado general Viaux hizo una proclama en que enfatizó que «mi movimiento no es contra el Presidente de la República», sino que constituye un recurso extremo «para llamar la atención» sobre la necesidad de colocar al Ejército en el lugar que le corresponde.

Al día siguiente, 22 de octubre, el general Roberto Viaux ponía fin a su insurrección, consiguiendo los siguientes puntos:

1) El comandante en jefe del Ejército, general Sergio Castillo se acogía a retiro... ¡y era reemplazado por el general de división René Schneider Chereau!

2) El general Viaux aceptaba irse a retiro, considerando que la presencia del general Schneider como comandante en jefe era garantía de que sus peticiones serían escuchadas.

El Pentágono había hecho una obra maestra en ese momento crítico para el dominio imperialista y oligárquico en Chile: había colocado al mando del Ejército, pilar fundamental de las Fuerzas Armadas chilenas, a un «hombre de nuestra absoluta confianza» y, lo más importante, «no ligado» a los partidos políticos.

El general Schneider obligó a Frei a cumplir con parte del petitorio original de Viaux: en enero de 1970, los sueldos de los generales fueron elevados desde un equivalente de 6 sueldos vitales a 12 sueldos vitales. Es decir, los generales pasaron a integrar el grupo superior del 2 % de los hogares chilenos que tienen mayores ingresos. Antes, estaban en el grupo del 10 % superior de los hogares con mayores entradas. (Sueldo vital es la cantidad mínima de remuneración fijada por ley, cada año, para los empleados del Estado y de las empresas privadas). Del mismo

modo, el presupuesto de gastos en material de guerra fue elevado en un 50 % para el año fiscal siguiente, y se comenzaron a estudiar planes de ampliación del número de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. (Esos planes de ampliación del número de oficiales sólo se hicieron efectivos a partir de 1971, bajo la administración de Salvador Allende)

Por otra parte, se acordó que el propio cuerpo de generales del Ejército estudiaría «un plan de acción» a largo y corto plazo, para poner en práctica la demanda del general Viaux de «dar una verdadera responsabilidad a las Fuerzas Armadas como la solución de los grandes problemas nacionales». Ese plan, en el año 1970, sería diferido por los propios generales, para ocuparse de la forma de intervenir «en busca de la paz social», en caso de que la lucha electoral por la contienda presidencial desembocara en enfrentamientos violentos entre distintas facciones políticas: situación que fue amenazante durante todo el año 1970 antes del 4 de septiembre, día de los comicios presidenciales de Chile.

Allende, presidente

En abril de 1970, la campaña presidencial estaba causando algunas sorpresas para los «expertos», que habían dado por «cadáver político» a Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (el senador socialista había sido derrotado tres veces en las campañas presidenciales de 1952, 1958 y 1964). Las encuestas de opinión pública demostraban que en los extremos norte y sur del país, en la concentración industrial de Concepción y en Santiago, las simpatías por Allende, sobre todo entre los obreros, campesinos y empleados, le aseguraban un porcentaje de votación superior al 35 %. Como la elección presidencial se daba con tres candidatos (los otros eran el ex presidente de la República Jorge Alessandri, y el senador demócratacristiano Radomiro Tomic) había «grandes posibilidades» de que Allende ganara estrechamente la votación del día 4 de septiembre del mismo año.

En la última semana de abril de 1970, hubo una reunión importante en la casa de Patricio Rojas, ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei, a la que asistieron el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar; el senador demócratacristiano Patricio Aylwin; el senador nacional (conservador) Pedro Ibáñez, y el director de la empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, Arturo Matte Larrain. El tema de la conversación fue único: cómo evitar que Salvador Allende fuera Presidente de la República si ganaba las elecciones en septiembre.

La Constitución chilena vigente hasta el asalto fascista militar a la democracia burguesa, establecía que si el candidato triunfante en las elecciones presidenciales «no obtiene la mitad más uno de la votación», entonces, cincuenta días después, el Parlamento «podrá proclamar Presidente a cualquiera de los dos candidatos que hayan obtenido las dos primeras mayorías». Es decir, el Parlamento podía elegir «al segundo». De esto se colgaron los contertulios de aquella reunión para comenzar una campaña de opinión pública con el propósito de hacer «elegir al segundo de Allende», fuera éste Tomic o Alessandri. A fin de dar un barniz de «legitimidad estatal» a esta maniobra, los contertulios acordaron pedirle al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, que declarara públicamente que las Fuerzas Armadas «garantizarían» la elección del segundo candidato presidencial, en caso de que fuera necesario.

Patricio Rojas habló con Schneider, y a través de Andrés Zaldívar, se obtuvo que Agustín Edwards ordenara al director de su periódico, «El Mercurio», que hiciera entrevistar al general comandante en jefe del Ejército. El día 8 de mayo de 1970, en primera página, apareció la entrevista al general Schneider, el cual, en síntesis, estableció los siguientes puntos:

«El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional».

«El Ejército es garante de elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo o por el Congreso Pleno». (Esta era la esencia de la cuestión: Schneider decía que los militares garantizarían la asunción como Presidente

de quien sacara el 51 % o más de los votos en septiembre — imposible para Allende—, o del segundo candidato, si el primero —Allende— sacaba menos del 51 %. Así cumplía con el encargo de la colusión democratacristiana-conservadora. Pero Schneider fue más allá, y habló de «garantizar» sólo una «elección normal». Esto abría la posibilidad de que los militares encontraran «anormal» una elección en que Allende sacara más del 51 % de los votos, y la anularan, para llamar a nuevas elecciones)

«La intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del país».

«Si se producen hechos anormales (convulsión interna), nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución». (En estos dos puntos, Schneider aclara que los militares no se abanderizarán con los partidos políticos, pero actuarán si se pone en peligro el sistema de dominio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional de la sociedad chilena —«la vida constitucional del país»—. Es el mismo argumento utilizado por los generales fascistas el 11 de septiembre de 1973 para destruir a sangre y fuego la democracia burguesa chilena, cuando se mostró inadecuada para defender los intereses de los dueños de Chile.)

«Quien tenga una inquietud grande con respecto a ciertas ideas, ciertas tendencias o ciertas actividades políticas y desee participar en ellas, lo mejor es que deje el uniforme y las abrace como un civil». (Schneider hacía una severa advertencia a un débil porcentaje de mandos medios del Ejército, que mostraba ciertas simpatías con la candidatura de Allende. En realidad, lo que Schneider ponía en práctica era una llamada de atención hacia una amenaza de «rebrote» de ideas progresistas en los mandos militares, después que durante los años 1961 y 1962 se había completado la tarea de limpieza interna, llamando a retiro a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con «ideas socialistas».)

Sin embargo, llegó el 4 de septiembre de 1970, y la situación

política se presentó de manera distinta a como la habían planificado los dirigentes reaccionarios de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas. Aun cuando los resultados fueron los previstos (Allende con 1.075.000 votos, el 36,3 %; Alessandri con 1.036.000 votos el 34,9 %; y Tomic con 824.000 votos, el 27,8 %); la «presión política» era muy distinta a lo pensado. El triunfo relativo de Allende, en la noche del 4 de septiembre, fue recibido por su millón de simpatizantes con una explosión de entusiasmo, se hicieron fiestas en las calles, manifestaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción y demás ciudades importantes... Y lo inesperado: grandes sectores de la juventud democratacristiana y de obreros de ese partido, en la misma noche del triunfo de Allende, salieron a unirse a las manifestaciones de la Unidad Popular, formando una especie de espontáneo «frente antiimperialista» que, evidentemente, hacía aventurado y brutal elegir, en cincuenta días más, como Presidente de Chile al segundo.

Además, el candidato Radomiro Tomic (el cual no estaba enterado del juego de su directiva manejada por Frei), al mediodía del 5 de septiembre acudió a la casa de Salvador Allende para «saludarte como el ganador y futuro Presidente». Allende frente a centenares de periodistas, abrazó a Tomic y le respondió: «Tu gesto moral consolida nuestra amistad de treinta años.»

Había que buscar «un nuevo método de escamotear el triunfo de Allende». Apresuradamente, durante todo el domingo 6 de septiembre, hubo reuniones secretas en las cuales participaron los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, por parte del candidato Alessandri; y los ministros de Hacienda, Andrés Zaldívar; de Defensa, Sergio Ossa Pretot; de Economía, Carlos Figueroa; y del Interior, Patricio Rojas, por parte del Gobierno de Eduardo Frei. Separadamente, también se reunieron ese día los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Carlos Guerraty; de la Marina, almirante Jorge Porta Ángulo; de carabineros, general Vicente Huerta; y el jefe de la guarnición de Santiago, general (de Ejército)

Camilo Valenzuela.

En seguida, el general Valenzuela y el ministro de Defensa, Ossa Pretot, tuvieron una conversación con el comandante en jefe del Ejército, general Schneider. La proposición era muy simple: Convencer a Eduardo Frei de la necesidad de impedir a toda costa el triunfo de Allende en el Parlamento, por medio de una insurrección militar que desembocara en la renuncia de Frei, el nombramiento de una Junta Militar de Gobierno y el llamamiento a nuevas elecciones presidenciales, en el plazo de seis meses, solamente entre dos candidatos. Para justificar la insurrección militar, se proponía un plan de caos social provocado por un «pánico financiero» y una «oleada de atentados terroristas».

El general Schneider estuvo de acuerdo pero puso dos condiciones: primera, que él no participaría en esa Junta Militar, retirándose del servicio activo en el momento de la proyectada insurrección; y segunda, que se informara de estos proyectos a la misión militar norteamericana, a fin de obtener «su apoyo» o servicios de «su experiencia».⁷

Desde la misma tarde del domingo 6 de septiembre, los conspiradores empezaron a poner en práctica lo acordado, comenzando una gigantesca red de llamadas telefónicas, advirtiendo a los usuarios que «los marxistas se quedarán con todo el dinero» y es necesario «retirar los ahorros y depósitos de cuentas bancarias». Desde el lunes 7 de septiembre, los locales de los bancos comerciales, estatales y de sistemas de ahorro y préstamo para construcción de viviendas amanecieron con largas filas de depositantes que deseaban retirar sus fondos. Dos semanas después de las elecciones, se habían retirado de las cuentas corrientes en el sector privado en los bancos comerciales y el Banco del Estado, 611 millones de escudos (unos 50 millones de dólares); de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado, se retiraron en el mismo período 54 millones de escudos (alrededor de 4,5 millones de dólares); los retiros en fondos de certificados de ahorro reajustable fueron de 11 millones de escudos (unos 900.000

dólares); y en las cuentas de ahorro y préstamo para construcción de vivienda, se retiraron 322 millones de escudos (más de 26 millones de dólares).

Los grandes monopolios comenzaron a exigir el pago al contado, por ventas que antes se hacían a plazos a base de materias primas, a los empresarios medianos y pequeños. Al mismo tiempo, los monopolios suspendían sus compras a las empresas medianas y pequeñas, con lo cual les provocaban un doble problema de financiamiento. Ésta fue una hábil maniobra para oponer los intereses de los pequeños y medianos empresarios a los de los obreros, campesinos y empleados que simpatizaban con Allende, ocultando la realidad esencial de la contradicción entre los grandes monopolios y el resto de la sociedad.

La parte del «pánico financiero» se completó con la fuga de divisas, la especulación de dólares en el mercado negro y el aumento artificial de viajes al extranjero, en maniobras ilícitas que contaban con la protección de los ministros de Hacienda y de Economía, que eran cómplices en el complot.

Las ventas de dólares para viajar al extranjero, que desde enero a agosto de 1970 mostraban un promedio de 5,3 millones de dólares al mes, subieron en septiembre a 17,5 millones y en octubre llegaron a 13,6 millones. El precio oficial del dólar era de 12,2 escudos por unidad, y en el mercado negro se llegó a cotizar a 70 escudos por unidad.

El día 13 de octubre, los dirigentes de la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado informaban que «los porcentajes de disminución del ritmo de actividad es del siguiente orden: Santiago, 53 %; Arica, 28 %; Antofagasta, 20 %; Coquimbo, 83 %; Valparaíso 30%; Colchagua, 50%; Concepción, 3 %, y los Angeles, 53 %». Alarmados, estos pequeños empresarios y artesanos señalaban que «en todo el país, las ventas han bajado en 38,4 %» y «tenemos existencia de trabajos solamente para 15 días y recursos para pago de jornales sólo para 20 días más».

El 23 de septiembre, cumpliendo con su parte en el complot, el

ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, pronunció un discurso por la cadena nacional de radio y televisión en que daba cifras aterradoras sobre el descalabro financiero y decía que «la situación económica del período postelectoral derivaba de factores psicológicos» y que «los resultados más que probables de esta situación serían el de un desastre económico completo y generalizado».

En suma, la parte de «pánico financiero» del complot para impedir que Allende fuera elegido Presidente en el Parlamento el día 24 de octubre de 1970, se cumplió a la perfección. ¿Qué les falló entonces a los conspiradores, que no pudieron impedir la elección de Allende? Les falló el Pentágono, y con él, el generalato de las Fuerzas Armadas chilenas. La historia es esta.

A través de Arturo Matte Larrain, uno de los dueños del gigantesco monopolio del papel Manufacturera de Papeles y Cartones, los conspiradores establecieron un puente entre el presidente Eduardo Frei y la International Telephone and Telegraph (ITT), la cual, en combinación con la Agencia Central de Inteligencia (CÍA), había decidido dar «todo su apoyo» a un golpe que impidiera la ratificación de Allende en el Parlamento chileno. Los «contactos» de Matte Larrain eran los ciudadanos norteamericanos Robert Berrellez y Hal Hendrix, ambos en el equipo de agentes latinoamericanos de la CÍA, y ambos funcionarios de «relaciones públicas» de la ITT (este doble cargo de relacionador público y agente de la CÍA parece ser muy socorrido en los Estados Unidos, ya que el actual Secretario de Prensa de la Junta, Federico Willoughby McDonald, chileno, figuraba hasta el día del golpe del 11 de septiembre de 1973 como «relacionador público» de la Ford Motor en América Latina).

Así, Arturo Matte Larrain, el día 8 de septiembre, había tenido ocasión de informar a Frei cómo la ITT estaba presionando en Washington para que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara una eventual Junta Militar que impidiera el nombramiento de Allende. Y como ya se había aprobado por varios consorcios

norteamericanos con intereses en Chile (Anaconda, Kennecott, ITT, Bank of America, First National City Bank, Anglo Lautaro y Chase Manhattan, entre otros), se inició el plan general de «presión», que consistía en que los bancos no deberían dar créditos o demorar los ya aprobados; las compañías deberían demorar en hacer entregas de productos, envíos de dinero, despacho de repuestos, etc.; retirar toda la ayuda técnica y «hacer presión sobre las compañías de ahorro y préstamo para que se declaren en bancarota». Matte le explicó a Frei que la ITT estaba dispuesta a poner todo el apoyo «económico» que fuera necesario, si el Gobierno de los Estados Unidos daba el visto bueno a la conspiración.

La respuesta de Frei, ese 8 de septiembre fue más o menos la siguiente: Yo no puedo hacer pedazos mi imagen de demócrata, por eso mismo, si el «desarrollo de la situación continúa», espero «que me derroquen a la luz pública y me exilien por un tiempo». Sin embargo, tienen todo mi apoyo personal, no haré nada por impedir que el colapso financiero y económico sirva de caldo de cultivo a una buena receptividad pública a un golpe militar que «ordene las cosas». Pero no haré nada, absolutamente nada que haga caer la sospecha pública sobre mí. Quiero cuidar mi imagen política por sobre todas las cosas.⁸

Más tarde, Matte, por intermedio de Hendrix de la ITT, recibió el recado desde Nueva York, del vicepresidente de ITT, Edward Gerrity, de que «convenciera a Frei de que tome un papel más activo, informando a Washington». Frei no se decidió nunca a dar ese paso.

Al mismo tiempo, el general de brigada Camilo Valenzuela jefe de la guarnición de Santiago, había hecho contacto con el ex general Roberto Viaux Marambio, y le había encargado la tarea de hacer «un equipo de choque» compuesto por personas «de confianza y con espíritu de combate», a fin de iniciar en todo el país un plan de atentados terroristas. El grupo de Viaux se formó, apoyado por otro grupo encabezado por Enrique Schilling,

secretario privado del senador radical reaccionario Julio Duran, y por un naciente grupo de jóvenes universitarios dirigidos por el abogado Pablo Rodríguez Grez, que fuera secretario- abogado de la campaña presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez.

Los terroristas, que comenzaron su labor en la segunda quincena de septiembre de 1970, contaron con la protección del general director de Carabineros, Vicente Huerta, y con la asesoría «técnica» de dos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM).

Todo estaba funcionando perfectamente en el esquema articulado la noche del domingo 6 de septiembre, excepto por dos detalles: el presidente Frei no colaboraba activamente, y el candidato triunfante Salvador Allende estaba estableciendo rápidamente contactos con representantes de las Fuerzas Armadas chilenas para «explicar su programa de Gobierno».

El embajador Edward Korry, de los Estados Unidos, se puso nervioso y comenzó a enviar recados a Eduardo Frei sumamente insolentes, incluyendo la frase «díganle que se ponga los pantalones de una vez».

Por su parte, Salvador Allende comenzó a hacer saber a los generales de las Fuerzas Armadas (tuvo conversaciones con el general Manuel Torres de la Cruz, Hermán Brady y René Schneider), que quienes se oponían a que fuera ratificado en el Congreso Nacional estaban cometiendo un error terrible, porque en la historia de Chile se había elegido al segundo en la votación por el Congreso Pleno. Porque «el millón de chilenos que me eligió» es un «destacamento de combate» que no aceptará tal decisión. Porque «mi programa» es un programa de «desarrollo del capitalismo de Estado » y no es socialista. Porque «las reformas» de mi «programa» son «la única salida pacífica que le queda a este sistema de vida para sobrevivir».⁹

Estas afirmaciones de Salvador Allende, por otro lado, habían sido repetidas a los dirigentes demócratacristianos que no estaban comprometidos en el golpe militar: Renán Fuentealba y Bernardo

Leighton, de enorme peso sobre la opinión de los miembros de la Junta de ese partido. De allí surgió la idea de hacer firmar a Allende un Estatuto de Garantías Democráticas, para ser incorporadas a la Constitución chilena, que servirían como un certificado de conducta «no marxista» de Allende. El día 8 de octubre, ese Estatuto ya estaba redactado y aprobado tanto por la Democracia Cristiana como por la Unidad Popular, lo que aseguraba que, por lo menos una gran mayoría de parlamentarios demócratacristianos votarían el 24 de octubre por Salvador Allende, dándole los votos suficientes para ser elegido.

Pero, al mismo tiempo que en la primera semana de octubre las conversaciones de Allende con el PDC daban sus frutos, también fructificaban sus recados y conversaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas. El general René Schneider había informado a la misión militar norteamericana en Santiago de todo lo que ocurría, y ésta, a su vez, al Pentágono. En el Pentágono se había evaluado la situación, y en los primeros días de octubre, la misión militar norteamericana informó a Schneider que «todo el plan queda cancelado». Se le explicó por qué y Schneider, el día 15 de octubre, en la Academia Politécnica del Ejército, dio una charla sobre el tema, repitiendo las instrucciones que le habían dado los generales de Washington:¹⁰

1) No debemos actuar torpemente en un momento tan delicado de la vida constitucional chilena. Las Fuerzas Armadas no pueden ahora «detener la evolución y los cambios». Nuestro deber «es aceptarlos» para cuidar de que se desarrollen en orden y sin descarrilar la tranquilidad social.

2) El «pesimismo y la pérdida de fe» pueden llevar a equivocarnos, a creer que «el enemigo marxista está a las puertas» y cometer un error de «caer en extremos» para combatirlo.

3) Un grupo muy importante de chilenos, en estos momentos, «no está dispuesto a dejarse arrebatar un triunfo electoral que cree les cambiará el curso de sus vidas». Nuestro deber es permitir que esas personas intenten su experimento, pero sin causar daños a los

demás. Sin causar daños a nuestra Patria, a nuestra vida institucional.

4) «El señor senador Salvador Allende nos ha dado seguridades» de que se mantendrá dentro de la Constitución y las leyes. De que sus «cambios programáticos» no representan un peligro para nuestro modo de vida occidental y cristiano. El señor senador me ha dicho personalmente algo en lo que estoy de acuerdo con él: en estos momentos, un Gobierno como el del señor Allende, es el único tipo de gobierno que puede impedir que estalle una insurrección popular violenta y trágica.

5) Las Fuerzas Armadas, que somos garantía de que esta sociedad siga siendo «occidental y cristiana», tenemos que «esperar y ver qué sucede en el futuro». El futuro nos dirá si tenemos que intervenir para volver a poner las cosas en su lugar, o si el señor senador Salvador Allende cumple su palabra de «encauzar» LA INQUIETUD popular y de «impedir la insurrección de los que nada tienen».

El Pentágono había dicho su palabra, y el comandante en jefe del Ejército chileno se la había hecho saber a los altos mandos. También se la dio a conocer al director general de Carabineros, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y al comandante en jefe de la Marina. Cuando éste, Jorge Porta Ángulo, se lo hizo saber al cuerpo de almirantes, cuatro de ellos se entrevistaron con el senador Salvador Allende, para preguntarle si era cierto lo que se decía en las Fuerzas Armadas acerca de su pensamiento político. Allende reafirmó todos los conceptos vertidos por Schneider. El almirante Porta Ángulo renunció a su comandancia en jefe, y fue reemplazado por el jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso), vicealmirante Hugo Barrios Tirado.

En suma, lo que había ocurrido fue que en la primera semana de octubre de 1970, el Pentágono había dicho NO al golpe militar en Chile, y los generales chilenos tenían el encargo de desarmar la maquinaria golpista ya en marcha. La decisión del Pentágono

causó un tremendo impacto en la CÍA, que confiaba en seguir adelante de todas maneras. Esta falta de coordinación entre el Pentágono, el propio presidente Nixon y la CÍA, provocaría una trizadura en el equipo conspirativo, que quedaría reducido al grupo de choque del general Roberto Viaux.

En los mensajes de Robert Berrellez y Hal Hendrix a la vicepresidencia de la ITT en Nueva York, a partir de septiembre de 1970, es notorio este problema de descoordinación con el Pentágono. Por ejemplo, en un documento fechado en Santiago de Chile el 18 de septiembre, y dirigido a Edward Guerrity, vicepresidente de la ITT en Nueva York, Hal Hendrix le comunica: «El martes en la noche (15 de septiembre), el embajador Edward Korry finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado, dándole luz verde para actuar en nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible — menos una acción tipo República Dominicana— para impedir que Allende tome el poder». El mismo informe agregaba que «debemos hacer cuanta presión podamos sobre el USIS (United States Information Service) en Washington para que dé instrucciones a la USIS de Santiago de que comience a mover los editoriales de «El Mercurio» alrededor de América Latina y hacia Europa».

El informe agregaba que «Arturo Matte Larrain cree» que Eduardo Frei todavía no se decide, que «hay que darle la presión adecuada» y que se «formará un equipo de periodistas» de «El Mercurio» para «crear buena imagen» para el golpe. (Citado de los documentos puestos a disposición de la comisión investigadora del Senado norteamericano sobre la ITT, en 1972, por el periodista Jack Anderson).

Es decir, el 15 de septiembre, Nixon aparecía dando «luz verde» para la conspiración, en circunstancias que el Pentágono todavía estaba «evaluando la situación» y no había decidido aún qué partido tomar.

El 30 de septiembre, Guerrity comunica al vicepresidente de la ITT chilena (Benjamín Holmes), que Jack Guilifoye, vice-

presidente en Nueva York de la ITT, había sostenido una «entrevista importante sobre el tema» con William Broe, director general de la CÍA para América Latina.

El 9 de octubre, ya quedaba claro que la ITT en Washington, que Nixon había «echado pie atrás» a su «decidida actitud de luz verde» del mes de septiembre, y el vicepresidente de la ITT en Washington, William Merriam, remitía un informe a John McCone, ex director general de la CÍA y ahora miembro del equipo ejecutivo de la ITT, en el que ironizaba diciendo que está «bastante sorprendido» de saber que la Administración Nixon está dispuesta a tomar una actitud dura «si Allende es elegido», y comentaba «ésta es la primera cosa comfortable que he oído».

A estas alturas, el Pentágono ya había hecho conocer su opinión a Nixon, y había ordenado a su hombre en Santiago, Schneider, que desmontara el golpe. Sin embargo, la ITT insistía, y desde Santiago, Hal Hendrix, director de relaciones públicas de la ITT para América Latina (y agente de la CÍA), transmitía a Edward Guerrity, el 16 de octubre, lo siguiente:

«Las posibilidades de un golpe de Estado son magras pero existen... Una figura clave de esa posibilidad es la del general de brigada en retiro Roberto Viaux Marambio». Pero advertía: «Es un hecho que la semana pasada Washington dio instrucciones a Viaux de echarse atrás. Se tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado... Al parecer, algunos emisarios le advirtieron a Viaux que si se movía prematuramente, su golpe sería comparable a una Bahía de Cochinos en Chile.»

Hendrix no estaba contando todo a Guerrity. Ocurre que el día 3 de octubre, el otro agente de la CÍA, y coequipo de Hendrix, Robert Berrellez, se había reunido con Roberto Viaux y su suegro Raúl Igualt en el Country Club de Santiago, para examinar la «noticia» de que Washington quería que Viaux cancelara el golpe. Viaux contó a Berrellez que había recibido un informe de parte del general Schneider, en que se daba por cancelado todo el plan. Berrellez fue de opinión de que «hay traición» en

alguna parte y convenció a Viaux de que siguiera adelante con el plan. Éste le comunicó que tenía pensado un autosequestro del comandante en jefe René Schneider, para provocar dos o tres días de tensión, y después derrocar a Frei y nombrar una Junta Militar de la que el general Camilo Valenzuela sería el jefe. Berrellez estuvo de acuerdo en cumplir con el «autosequestro», pero ahora como secuestro verdadero. También Berrellez había informado a Hendrix que Viaux se mostró furioso con Schneider y que estuvo de acuerdo en que, de haber «un traidor», ése tenía que ser el comandante en jefe del Ejército.

El día 20 de octubre, cuando ya el general Schneider había desmontado todo el dispositivo militar activo para el golpe vetado por el Pentágono, Hal Hendrix comunicaba a sus jefes en Nueva York:

«Hay una resignación general de que Allende gane fácilmente en el Congreso... A pesar de lo antes mencionado, queda en Chile un débil susurro de esperanza de que se monte un golpe militar para impedir que Allende llegue a la presidencia... Cierta personal militar continúa esperando que el ex general Viaux encabece una acción militar contra el especulador que no cumple sus compromisos, el presidente Eduardo Frei, antes del 4 de noviembre, para colocar las Fuerzas Armadas en el poder y así impedir que Allende lo asuma.»

Ese mismo día, el grupo dirigido por el ex general Viaux preparaba los últimos detalles para lanzarse en la aventura y utilizar al «traidor Schneider» como elemento detonante de la bomba para el «caos social» y el golpe militar. En la mañana del día 22, el ex general Viaux mandó a un equipo de su grupo a «liquidar al traidor», y el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército chileno, era acribillado a balazos en el interior de su automóvil Mercedes Benz. Agonizante, muere tres días después, cuando el Congreso Pleno había

elegido Presidente a Salvador Allende.

El 25 de octubre, Hendrix informaba a Nueva York: «Contra lo que todos esperaban, los militares no se movieron contra Allende el fin de semana. Se creía que el atentado era el prelude del golpe».

Es que el Pentágono había dicho a los generales chilenos que NO SE MOVIERAN, y éstos no se movieron aun cuando les asesinaron a su comandante en jefe, el cual, por cumplir las órdenes de Washington, había arriesgado su vida.

Allende se convirtió en Presidente de la República y estuvo de acuerdo con el sucesor de Schneider, general Carlos Prats González, en «investigar el crimen del general Schneider de modo de no provocar *un quiebre* en las Fuerzas Armadas». En otras palabras, no investigar las verdaderas causas del crimen de Schneider, el verdadero grado de complicidad de los generales chilenos con el golpe y con el Pentágono, y la real participación de Eduardo Frei y su grupo de ministros en el complot. Prats garantizaba a Allende la «lealtad» del Ejército, si Allende garantizaba a Prats no obligarlo a investigar. Fue el primer acuerdo «peligroso» que Allende tuvo con los generales chilenos, y que lo fueron colocando dentro de la línea de fuego de su poder real.¹¹

Las Fuerzas Armadas acordaron sacrificar a Vicente Huerta Celis, general director de Carabineros, al almirante Hugo Barrios Tirado, comandante en jefe de la Marina, y a Carlos Guerraty, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Los sustitutos fueron: el general José María Sepúlveda Galindo, en Carabineros; César Ruiz Danyau, en la Fuerza Aérea, y el almirante Raúl Montero, en la Marina. Todos ellos, junto con Carlos Prats, exigieron a Allende que no «removiera» generales (como era habitual cada vez que se cambiaba Presidente de la República), para «cuidar la estabilidad y la cohesión institucional». Allende, una vez más, aceptó.

Pero, aprovechándose del hecho que los militares no permitirían que se descubriera la verdad, Allende, desde ese momento, utilizó el asesinato del general Schneider como la supuesta demostración

de que «por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas chilenas son profesionales y respetuosas de la Constitución y las leyes». Allende, así, convirtió a Schneider en un símbolo de la «lealtad de la Patria». Y lo hizo a tal grado, que pronto, al menos por los hechos posteriores, se autoconvenció de ello, y perdió fatalmente de vista la verdad de que Schneider había obedecido órdenes del Pentágono hasta su muerte, y que la maquinaria que el Pentágono tenía en las Fuerzas Armadas chilenas estaba intacta, y él había estado de acuerdo en dejarla intacta siendo, como lo era, una maquinaria de muerte apuntada hacia su propio pecho.

¿Y ahora qué?

El baleo y posterior muerte del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, fue traumatizante para la generalidad de los mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Los mandos de nivel medio y superior, que no conocían el verdadero argumento de la trama golpista en que se había enredado Schneider, analizaron el suceso con la simpleza de un campesino: el general fue asesinado por la inepticia de los políticos.

La imagen del general en retiro, Roberto Viaux, que hasta octubre representaba «el renacimiento del ejército» para muchos mandos, estalló como una pompa de jabón, pero, una vez más, la razón dada fue: Viaux se corrompió al tomar contacto con los políticos.

En suma, dentro de la oficialidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, el comienzo del período presidencial de Allende coincide con un violento sentimiento de odio y desprecio a los civiles, que llegó a tomar la forma, en algunas asambleas improvisadas en el Club Militar de Santiago (curiosamente ubicado al lado de la Embajada de Brasil) de «¿y qué pasa si les quitamos pan y pedazo a estos payasos, y nos quedamos con todo?». La pregunta, con el correr de los días tomó el camino de la reflexión y los contornos de una contrapregunta: «¿Estamos los militares

preparados para hacernos cargo de todo?»

De improviso, para un observador externo, quedaba justificada la aparentemente inocua tarea emprendida por el Pentágono a partir de 1964 en las Fuerzas Armadas chilenas, al introducir en el estudio para los alumnos de las Academias de altos mandos, las cátedras de economía, política, desarrollo industrial, reforma agraria, etc. Quedaba justificada como la etapa de preparación de unas Fuerzas Armadas en un país colonizado; para afrontar con alguna posibilidad de éxito un momento de crisis del sistema de colonización. En Chile, a comienzos de 1971 se estaban gestando ese mismo par de circunstancias.

En ese momento, en el Ejército principalmente, comenzaron a tener importancia los «cabeza de huevo», es decir, un grupo de generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores que en la Academia de Guerra se venían preocupando desde 1970, intensamente, de «la realidad nacional» y sus «problemas». Estaban asesorados directamente por el Pentágono, a través de la misión militar de los Estados Unidos en Santiago, la cual los guiaba en el estudio de economía superior, macrosociología y microsociología y temas conexos.

Los «cabeza de huevo» tenían un brillante exponente, en 1970, en el mayor Claudio López Silva. Este graduado de sociólogo, planteó una tesis que se llamó *Las Fuerzas Armadas en el Tercer Mundo*, y que fue publicada internamente en el «Memorial del Ejército de Chile», número 356, por recomendación del director de ese boletín interno, general Pablo Schaffhauser, que al año siguiente sería jefe del Estado Mayor. La tesis planteada por el mayor Claudio López Silva podría resumirse en las siguientes ideas:

1) En el tercer mundo existe una fuerte tendencia a que los militares participen en política.

2) Las Fuerzas Armadas del tercer mundo son la única organización social coherente, capacitada y eficaz para enfrentarse a los problemas socio-económicos de los países subdesarrollados (esta

es, por supuesto, la misma tesis planteada por Nelson Rockefeller, en 1969, en su informe sobre los países de América Latina).

3) El «comunismo» es un enemigo real, pero «en innumerables ocasiones» los pequeños grupos de «oligarcas» que dominan una sociedad se valen del «fantasma del comunismo» para hacer intervenir a los militares en política, empujarlos a que derroquen Gobiernos, y servirse de ellos para recuperar sus posiciones de explotación.

4) La causa principal de la inquietud política en América Latina es la pobreza. Y la pobreza se produce por un reparto injusto de la riqueza. Si se hace un reparto equitativo de esa riqueza, entonces «no existirá subversión».

5) Estados Unidos tiene el deber de impedir la subversión en América Latina, ayudando en los programas de desarrollo.

6) La única forma correcta de enfrentarse al comunismo es realizando reformas en los sectores agrario, bancario e industrial, para hacer justicia «al obrero y al empresario».

7) Sólo las Fuerzas Armadas se han demostrado capaces de hacer cambios en las sociedades del tercer mundo sin que ello signifiquen un «caos social».

8) Las Fuerzas Armadas, en América Latina, son la única organización coherente que puede mantener a esos países en «el bloque occidental de naciones».

9) El problema del desarrollo económico de cada pueblo ha dejado de ser un problema de los políticos o de los grupos civiles. Es un problema básicamente de «soberanía nacional», que atañe primordialmente a las Fuerzas Armadas de ese país. Un país débil tiene un aparato militar débil. Un país económicamente fuerte tiene Fuerzas Armadas fuertes. Por eso, cuando los políticos civiles son incapaces de desarrollar la economía de un país, los militares deben intervenir para impedir que la soberanía nacional esté en peligro.

10) «La Constitución y las leyes» no son «entes sociales inalterables», sino estructuras legislativas que pueden cambiarse,

adecuarse o «destruirse», según sean las conveniencias de una nación para mantener su seguridad y su soberanía interna y externa.

Basados en esta especie de «decálogo», los «cabeza de huevo» planteaban la tesis, a fines de 1970, que la estructura económica, política y social de Chile estaba en crisis, una crisis profunda de la que, como «nación occidental», sólo se podía salvar si las Fuerzas Armadas, como organización «política y armada» se hacían cargo de la conducción de la sociedad entera.

El general Herman Brady Roche y los coroneles Washington Carrasco y Mario Sepúlveda Squella, todos ellos figuras eminentes del Servicio de Inteligencia Militar, eran una especie de «líderes intelectuales» del movimiento de los «cabeza de huevo» que planteaban una «explicación del fenómeno Allende», tan novedosa para el resto de los generales y altos mandos, que durante 1971 se discutió con minuciosidad en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas.

La interpretación decía que «Allende no es un peligro para el tipo de sociedad que nosotros, las Fuerzas Armadas, queremos». «Al revés, Allende es una seguridad para este momento crítico». Y argumentaban así: el nuevo Presidente de la República sabe que continuará en el cargo solamente si hace respetar la Constitución actual. En cambio, sus enemigos políticos harán todo lo posible por destruir la actual Constitución, ya que se mostró incapaz de impedir el triunfo de una agrupación izquierdista del tipo de la de Allende. Ahora bien, ¿qué necesitamos las Fuerzas Armadas en este momento? Necesitamos sólo una cosa, y en gran cantidad: TIEMPO. ¿Tiempo para qué? Tiempo para prepararnos, para adiestrar a nuestros cuadros para el momento en que tengamos que hacernos cargo de todo el aparato de la sociedad. Ese tiempo nos lo da el presidente Allende, el cual, cuidando de no salirse de la Constitución, y cuidando de no ponernos a nosotros en su contra, nos permitirá participar en la Administración del Estado, tratará de desarmar el intento del populacho por organizarse, intentará

desarmar políticamente los intentos golpistas de la derecha sin recurrir a la «insurrección popular», y con ello irá haciendo madurar adecuadamente las condiciones para que las Fuerzas Armadas, en el momento oportuno, entren en escena y funden «un nuevo orden social, sin políticos, sin odios de clases» y «ponga en cintura tanto a los patrones como a los obreros».

Basados en este pensamiento general, los «cabeza de huevo» nucleados en torno a Brady, Carrasco y Sepúlveda, señalaban a sus incrédulos compañeros que «tenemos que acercarnos a Allende, tenemos que convivir con sus políticos, tenemos que participar en sus reuniones». Y agregaban: tenemos que demostrarles que somos «allendistas», y ellos, desesperados como están por la falta de maniobrabilidad que tienen para sus planes de nacionalizaciones y expropiaciones, se aferrarán a estos «allendistas», los acercarán al aparato administrativo y los irán transformando en su verdadera base frente a la embestida de los latifundistas y monopolistas «recalcitrantes», así como frente a la embestida del populacho que tratará de empujarlos cada vez más a una situación que se parezca a la bolchevique en 1917. Todo ello nos dejará en situación inmejorable para intervenir con buenas perspectivas de éxito cuando sea necesario.

Los «cabeza de huevo» ganaron la adhesión de los demás grupos de altos mandos cuando plantearon claramente que «nuestro enemigo fundamental es el comunismo», «nuestra tarea fundamental es impedir que el comunismo, montado en la insurrección del populacho, se adueñe de Chile». Pero, «en este momento», con Allende en la Presidencia, «el comunismo no está a las puertas del cuartel», «está muy lejos todavía, existe el peligro de que después, más tarde, con el desarrollo de los acontecimientos, ni siquiera Allende pueda conjurar el peligro comunista. «En ese momento, tendremos que intervenir; no antes.»

Durante los años 1971, 1972 y 1973, los generales Herman Brady Roche, Orlando Urbina Herrera, Guillermo Pickering, Pedro Palacios Cameron (quien fue nombrado ministro de Minería en la

primera crisis de Gabinete de Allende), Rolando González Martins, César Raúl Benavides, y los coroneles (después generales) Washington Carrasco, Mario Sepúlveda Squella y Sergio Arellano Stark (actual jefe de la guarnición de Santiago y de la Segunda División), fueron considerados por el propio Salvador Allende y por sus colaboradores más cercanos como «hombres leales», e incluso, en el caso de Hernán Brady, como «marxistas». Este trabajo de engaño de los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia, no cabe duda, ha sido uno de los puntos más altos de inteligencia mostrados por los altos mandos militares en Chile en los últimos años.

Es conveniente tener en cuenta que cuando el canciller Clodomiro Almeyda, del partido socialista, viajó a La Habana en julio de 1971, lo acompañó en su reducida comitiva el coronel Washington Carrasco, el cual se ganó, en el viaje, las simpatías del canciller y de sus asesores políticos como «progresista» y una «promesa» como revolucionario. El 11 de septiembre de 1973, Carrasco, ya ascendido a general, era el jefe de la Tercera División, con asiento en la industrial ciudad de Concepción. Allí tuvo el récord de haber asesinado (o fusilado) en sólo tres horas, desde las cinco a las ocho de la madrugada del día 11, a 250 dirigentes sindicales obreros y campesinos. A la semana siguiente, por supuesto, como en todo el país, esa cifra ya se había más que cuadruplicado.

Este grupo de generales y coroneles, a través del senador Alberto Jerez, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (y más tarde la de Izquierda Cristiana), miembro de la Comisión de Defensa del Senado y una especie de «coordinador» entre Salvador Allende y los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, convenció al nuevo Presidente chileno de la bondad de la teoría de «las fronteras económicas», cuya síntesis era la siguiente. Las Fuerzas Armadas son garantes no sólo de las fronteras físicas de una nación sino también de sus «fronteras económicas», es decir, son responsables del desarrollo económico.

Ya el 4 de noviembre de 1971, en el Estadio Nacional, el presidente Allende, en su discurso de aniversario del primer año de Gobierno, al rendir homenaje a la «lealtad y disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros», planteó públicamente la teoría: «Destaco la forma en que ellos se han incorporado al proceso de defender nuestras fronteras económicas y su presencia en el acero, en el hierro, en el cobre, en la Comisión de Energía Nuclear. Ello coloca a Chile como un ejemplo que envidian muchos países del mundo».

En ese momento, altos mandos militares en servicio activo habían sido colocados por Allende en 265 cargos importantes del aparato económico nacional, incluyendo la Corporación de Fomento de la Producción y la Oficina de Planificación Nacional, los centros motores del desarrollo económico chileno. Representantes en servicio activo de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, eran miembros de los directorios de las nacionalizadas minas de cobre de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.

Pero los «cabeza de huevo» no se limitaron a llevar adelante su táctica de «prepararse para gobernar en el momento oportuno», solamente consiguiendo que Allende aprobara y pusiera en práctica la teoría de las «fronteras económicas». También agregaron la componente de «inteligencia» de esta preparación: colocaron en organismos claves de la administración económica del país a decenas de miembros del Servicio de Inteligencia Militar, de la Fuerza Aérea y de la Marina como «civiles». Es decir, sin que la administración de la Unidad Popular se diera cuenta que esos funcionarios pertenecían a los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Uno de los casos más notables de esta «infiltración» en el aparato técnico-administrativo de la Unidad Popular, lo fue la Corporación de Fomento. La revista chilena reaccionaria «Qué pasa», en su edición del 2 de noviembre de 1973, después del derrocamiento de Allende, al iniciar una crónica sobre la CORFO, entrevistando a su nuevo vicepresidente, el general de brigada

Sergio Nuño Bawden (quien fuera nombrado por el propio Allende, en 1971, gerente de una fábrica de explosivos filial de la CORFO), escribe la siguiente confidencia de éste:

«Todo este mundo complejo atrajo oportunamente la atención del Servicio de Inteligencia Militar y CORFO pasó a ser considerada un tema "clave". Esto se tradujo en curiosas anécdotas: el ex Secretario General de la institución, cuando se presentó voluntariamente después del 11 de septiembre al Ministerio de Defensa, se encontró con que un modesto funcionario administrativo que dos años antes había contratado, estaba allí como miembro del Ejército. Muchos fueron los empleados que luego del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas se llevaron sorpresas al ver ex compañeros vistiendo de uniforme».

Esta infiltración militar en el aparato civil, planificada específicamente, según definición de los «cabeza de huevo», para «darnos un adiestramiento que nos permita manejar el país», no se hizo solamente a nivel de la estructura económica del Estado. También se movilizó a nivel de la estructura política, colocando algunos de sus cuadros en cada uno de los partidos políticos de la Unidad Popular, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, en las organizaciones de periodistas de izquierda y en las organizaciones sindicales tanto de obreros, campesinos como empleados.

Así y todo, tal como lo habían previsto los analistas de los «cabeza de huevo» en sus discusiones de fines de 1970 para calmar a los demás altos mandos que se desesperaban por la presencia de Allende en La Moneda, el Gobierno de la Unidad Popular siguió integrando a esos altos mandos al aparato administrativo en lo que pareció ser una carrera desesperada por mantener «neutralizadas» a las Fuerzas Armadas.

Ya en mayo de 1973, cuando la conspiración militar era voz pública, el presidente Allende insistía en los viejos planteamientos de 1971, y en su mensaje anual al Parlamento, el día 21 de ese mes, leía lo siguiente:

«En una sociedad moderna, como la concebimos, las Fuerzas Armadas deben estar integradas plenamente. Deseo expresar la satisfacción del país por su desempeño, al igual que el de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus patrióticas tareas.

»Las primeras, además de cumplir su *rol* habitual, integraron junto a los representantes de los partidos populares y la Central Única de Trabajadores, el Gabinete que designará para poner término al paro subversivo de octubre.

»Ha sido preocupación permanente del Gobierno impulsar y dar satisfacción a los planes de desarrollo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para afianzar, aún más, el estricto cumplimiento de las tareas específicas que a ellas les encomienda la Defensa Nacional. Es así como, durante el año 1972, se promulgaron leyes destinadas a aumentar las plantas del Ejército y la Fuerza Aérea y se encuentra sometido a la aprobación del Congreso un proyecto que persigue el mismo fin para la Armada Nacional. A lo que debe agregarse el apoyo económico para el mejoramiento y ampliación de sus infraestructuras, así como para la renovación del material bélico y logístico.

«Esta política será continuada en respaldo del desarrollo económico, pues la seguridad y el desarrollo exigen una conjugación armónica cuyo desequilibrio sólo puede traer consecuencias negativas para el país. Razón por la cual el Gobierno HA PUESTO ESPECIAL ÉNFASIS en la participación de las Fuerzas Armadas en los programas socioeconómicos... El Gobierno continuará impulsando esta participación, que permite a Chile contar con un potencial humano de ALTA PREPARACIÓN MORAL E INTELECTUAL.»

Resulta chocante pensar que, en los mismos momentos en que Allende pronunciaba estas palabras, en Valparaíso los altos mandos del Cuerpo de Infantería de Marina adiestraban y proveían de material explosivo a dos grupos civiles (Patria y Libertad y Comandos de Ex Cadetes) para sus tareas de terrorismo «de

apoyo» a un «paro general de actividades empresariales» que se proyectaba desencadenar en los «próximos sesenta días». En el mismo instante que Allende decía esto, en la Academia de Guerra del Ejército, en Santiago, lo generales Sergio Arellano Stark, Javier Palacios Ruhman, César Raúl Benavides, Ernesto Baeza Michelsen y Herman Brady Roche, discutían «un plan general tentativo» para invadir Santiago, reducir los cordones industriales, paralizar la capacidad de movimiento de las organizaciones sindicales de la Unidad Popular, y atacar y rendir el Palacio de Gobierno. En ese mismo momento, en el Estado Mayor de la Armada, el jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, planteaba su famoso plan «de los tres tercios», que significaba «fusilar unos tres mil activistas responsables, encarcelar otros tres mil, y exiliar a tres mil dirigentes políticos de todas las tendencias» para «pacificar el país» y restablecer el orden. Para crear un Gobierno «de las Fuerzas Armadas».

Los duros

Pero aun cuando los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército se convirtieron en los «líderes intelectuales», no constituían la fuerza mayoritaria dentro de los altos mandos. Su poder residía, más que en el número, en su estrecho contacto con el Pentágono y su centro intelectual en Washington, la American University. Y ese contacto estrecho les había permitido, desde fines de 1970, construir una especie de *memorándum* con respecto a las líneas principales del Programa de Gobierno de la Unidad Popular, que sirvió para aglutinar a los diversos sectores políticos dentro de los mandos militares en torno a una «línea de conducta» cuyo esquema ya trazamos en las páginas anteriores.

Los puntos principales de ese *memorándum* eran los siguientes:

1) Las Fuerzas Armadas consideran «justo» que las riquezas básicas del país estén en manos del Estado chileno, porque eso

fortifica la economía nacional y, de paso, fortifica la capa ciudad de equipamiento de las Fuerzas Armadas. (Este pensamiento llegó a un climax agudizado en julio de 1972, cuando el general Carlos Prats, por encargo de su cuerpo de generales, planteó a Salvador Allende que «la administración de las compañías nacionalizadas del cobre debería estar principalmente en manos de técnicos militares, por considerarse una industria estratégica», y que «de las entradas provenientes de la venta del cobre se debería estudiar un financiamiento autónomo para las Fuerzas Armadas». Ello, en los hechos, significaba que los militares chilenos quedarían como entidad al margen del Parlamento para su financiamiento, lo que los habría convertido en un Poder dentro de otro Poder. Allende, en aquella época, encontró «razonable la idea», pero no tuvo tiempo, al parecer, para volver sobre el tema)

2) Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la nacionalización de las minas de cobre, pero, al mismo tiempo, también están de acuerdo en que «a las empresas norteamericanas que las explotaron se les pague una indemnización razonable». (El 4 de noviembre de 1971, Salvador Allende puso énfasis en este aspecto, en su discurso de primer aniversario, cuando la «presión militar» pro «indemnización para la Anaconda y la Kennecott» era muy fuerte, después de ser nacionalizadas las minas en julio de ese mismo año. Dijo Allende: «Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones de dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tienen las compañías son de 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, ESTAMOS PAGANDO UNA INDEMNIZACION INDIRECTA de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares». Este argumento, real y contundente, bajó la

presión militar sobre el tema. Pero de todos modos hizo subir la deuda externa de Chile, de un golpe, de más de 3.000 millones de dólares a más de 4.000, lo cual puso a la economía chilena todavía más en manos de los consorcios financieros norteamericanos.)

3) Las Fuerzas Armadas consideran necesario que se haga una reforma agraria que permita el desarrollo capitalista del campo, liquidando parte del poder de los latifundistas sobre la sociedad chilena. Esta reforma agraria debe servir de apoyo a la industrialización del país, como nuevo mercado y como productora de materias primas industriales. (Esta tesis, sacada de la Alianza para el Progreso, del asesinado presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que ya había provocado la ira de los latifundistas con la política agraria del Gobierno de Eduardo Frei, provocó una campaña iracunda de sus organizaciones contra los generales chilenos, a quienes acusaban de «gallinas», por permitir que Allende gobernara).

4) Las Fuerzas Armadas estiman que es «justo» que las instituciones de crédito (bancos) nacionales estén controlados o en manos del Estado chileno, para «ordenar» mejor el «crecimiento económico democrático» del país, el cual históricamente ha sido entrabado por los intereses particulares de algunos sectores poderosos de la empresa privada monopólica. Los cuales, con su actitud «recalcitrante», han puesto o están poniendo en peligro «la estabilidad de todo el sistema económico y social» en que se basa la sociedad chilena.

5) Las Fuerzas Armadas estiman necesario que los consorcios norteamericanos de la banca, la industria y el comercio («los más adelantados del mundo y los más eficientes»), participen, bajo un «reglamento claro y preciso que resguarde nuestra soberanía nacional», en el desarrollo industrial chileno y en la capacidad de capitalización de la economía nacional, porque «sin ese capital y tecnología de los Estados Unidos, NO PODREMOS SALIR DEL SUBDESARROLLO». (En mayo de 1971, en la reunión en Lima de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de

Desarrollo, el ministro de Hacienda de Chile y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista chileno, Américo Zorrilla, planteaba la misma tesis, diciendo: «En el marco del proceso revolucionario chileno, desempeñan su *rol* tanto el financiamiento externo como las inversiones de capitales extranjeros... orientados hacia los fines prioritarios que señalen las necesidades de nuestra economía... Para estas inversiones extranjeras está abierto el ancho campo de las áreas mixta y de propiedad privada, previo el acuerdo con el Estado que asegure tanto los legítimos intereses de aquéllas, como su debida orientación en beneficio del desarrollo del país». Tanto la tesis militar chilena como las palabras del ministro de Hacienda, tenían coherencia con el planteamiento del *Informe sobre América Latina*, de Nelson Rockefeller, en el que se decía: «Creemos que Estados Unidos debe encaminarse cada vez más hacia una relación de AUTÉNTICA ASOCIACIÓN» en sociedades mixtas con los latinoamericanos, en las cuales «la inversión privada extranjera pueda proveer conocimientos técnicos esenciales y capital».)

6) Las Fuerzas Armadas creen que todos estos cambios deben hacerse dentro de «nuestro sistema institucional, con respecto a la democracia formal y en solidaridad con el bloque occidental de naciones».

Sobre estos seis puntos planteados por los «cabeza de huevo» (que de aquí en adelante llamaremos generales «reformistas», para diferenciarlos de los otros grupos de generales que definiremos enseguida), los altos mandos militares consiguieron un criterio uniforme para afrontar el «fenómeno» que representaba la Unidad Popular. Sobre estos mismos puntos, el presidente Allende y parte de las directivas de la Unidad Popular consiguieron una especie de «entendimiento cordial» con las Fuerzas Armadas, y éstas, a su vez, influyeron en las directivas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Incluso las agrupaciones empresariales monopólicas privadas, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura, aceptaron el criterio de «esperar

y ver» de los generales «reformistas» y del Pentágono, bajo la línea general de que «Allende nos puede servir para apagar el incendio».

Un incidente ocurrido en agosto de 1971 señala cómo, durante los primeros nueve meses de ese año, el Gobierno de la Unidad Popular, reducido su programa a lo que las Fuerzas Armadas y el Pentágono querían, tenía el apoyo condicionado incluso de sus enemigos políticos. En aquella fecha, el Eximbank, organismo financiero del Gobierno de los Estados Unidos, cediendo a las presiones de la Anaconda y la Kennecott, negó a Chile un préstamo de 21 millones de dólares para compra de aviones Boeing de pasajeros para la Línea Aérea Nacional (LAN), con el fin de «presionar por indemnización para las empresas del cobre».

El diario «El Mercurio» del día 17 de agosto de ese año, al comentar esta medida del Eximbank, escribió: «Esta política norteamericana hace peligrar las relaciones interamericanas y constituye la repetición de antiguos errores históricos que se suponían comprendidos».

El propio Partido Nacional, expresión política de la oligarquía agrícola, industrial y comercial, el 16 de agosto emitía una declaración de airada protesta: «Actitudes y declaraciones como las que señalamos sólo contribuyen a entorpecer las relaciones internacionales y a dificultar la solución de los problemas» y «demuestran una lamentable falta de tino y de conocimiento de la realidad chilena».

Sin embargo, fue el diario oficial de la Democracia Cristiana «La Prensa», en su página editorial del 16 de agosto de 1971, la publicación que más claramente planteó el problema:

«La decisión de la que aparece como responsable el presidente del Eximbank tiene toda la torpeza de una provocación... Así el Gobierno norteamericano aparece una vez más, y prematuramente, identificado con intereses privados, olvidando un interés político superior... No es un misterio para nadie —y las misiones de vario orden que tiene Estados Unidos en Chile deben haberlo informado así a su Gobierno— que en el (Gobierno) de nuestro país, por el

momento al menos, coexisten dos tendencias. Hay la de un sector que desea conducir la revolución chilena dentro del respeto a la Constitución, sin violencia en el plano interno y sin crisis internacional. Hay otro sector que desea provocar una ruptura violenta que, necesariamente, ha de proyectarse también en el plano internacional. Son éstos los que piden o anuncian, de partida, que las empresas expropiadas no deben ser indemnizadas... El Eximbank ha comenzado a hacerle el juego a esta tendencia, que no quiere nada más que provocar, precisamente, tales reacciones... En pocas ocasiones, si las hay, SE HA OPERADO EN AMÉRICA LATINA UNA NACIONALIZACIÓN CON MÁS FORMALIDAD LEGAL —y hasta constitucional— Y MAS GARANTÍAS PARA LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS AFECTADAS».

En verdad, los representantes políticos de la oligarquía agrícola (ya en decadencia a partir de Frei en 1967 con la reforma agraria), comercial, financiera e industrial chilena, sabían perfectamente de qué estaban hablando cuando, en agosto de 1971, reprochaban al gobierno de Nixon haberse dejado llevar por las presiones de los consorcios Anaconda y Kennecott. La propia organización de la oligarquía industrial chilena, Sociedad de Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECONÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se

subordinen resoluciones de esta índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.

Fuerza y debilidad

Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz verde a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reactivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmente en la utilización de toda la capacidad productiva y en el aumento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en realidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índices de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se desmoronaría y, al desmoronarse, la enorme presión popular podría desbordarse más allá de los límites «razonables» establecidos por los dueños de Chile.

Por otra parte, la presión de los generales «reformistas» sobre Allende había logrado que la viga maestra del programa de la Unidad Popular (el traspaso de todos los monopolios en manos privadas chilenas o extranjeras) se redujera a una expresión

mínima. En efecto, para realmente expropiar los monopolios, se necesitaba traspasar al Estado, de un total de poco más de 35.000 establecimientos industriales y de distribución en todo el país, una cantidad un poco superior a 266 empresas de carácter monopólico. Allende prometió traspasar sólo 90 de ellas, dejando así en manos de la oligarquía y de los norteamericanos más del 50 % del capital monopólico. Más todavía: de esas 90 empresas monopólicas, sólo 53 iban a pasar a ser de dominio total del Estado, mientras las 37 restantes quedarían en la llamada «área mixta», en sociedad con esos mismos capitales monopólicos en manos privadas yanquis y chilenas.

Además, Allende había accedido a expropiar dentro de la «Constitución y las leyes» con lo cual el costo de la formación del área de propiedad social era gigantesco, traspasando a manos de los «expropiados» enormes cantidades de capital que les permitía seguir manteniendo un sustancial poder económico y de maniobra. Ya para agosto de 1971, las cifras eran elocuentes: un total comprometido de 10.946 millones de escudos (890 millones de dólares) para ese año. El detalle era el siguiente:

Compra de acciones de bancos comerciales.....	400 millones
Pago al contado por la expropiación de latifundios	320 millones
Compra de empresas industriales monopólicas.....	600 millones
Compra de tres bancos extranjeros.....	120 millones
Hierro, salitre y consorcios industriales yanquis	576 millones
Indemniz. «indirecta» a Anaconda y Kennecott...	8.830 millones

Por supuesto, todo esto provocaba una debilidad potencial en el plan económico del Gobierno que, en agosto de 1971, tenía confiados a los oligarcas chilenos en poder manejar «la situación» y mantener a Allende dentro del «cambio reformista» para «evitar la revolución». Pero, para conseguir que este esquema caminara, era importante que Estados Unidos no apareciera como lo que realmente era: el enemigo principal del pueblo chileno. Era importante que no se asfixiara la economía nacional, dependiente en lo principal del capital norteamericano, para permitir un

«relativo nivel económico» que no alentara a los obreros, campesinos y empleados a «seguir adelante en el proceso de transformaciones». Pero el Pentágono no había sido capaz de convencer a los asesores económicos de Nixon de mantener una «actitud prudente y flexible con respecto a Allende», y eran la Anaconda y la Kennecott las que estaban manejando a Nixon.

En este momento del desarrollo de la lucha de clases en Chile, es cuando comienzan a surgir dudas en el seno de los altos mandos militares. Aun cuando hacía apenas dos meses que la enorme presión popular había obligado a la mayoría reaccionaria en el Parlamento a plegarse a la minoría de izquierdas y aprobar por unanimidad la nacionalización de las compañías norteamericanas que explotaban el cobre, el sentimiento de «antiimperialismo en la base» no había desaparecido; al revés, aumentaba con los días.

Un grupo de generales, principalmente en el Ejército, dirigidos por Óscar Bonilla (ex edecán del presidente Eduardo Frei y muy ligado políticamente al grupo de Frei en la Democracia Cristiana); Manuel Torres de la Cruz, ultracatólico y una especie de «padre» del actual fascismo chileno, jefe de la Quinta División en el extremo sur; Carlos Forrestier, jefe de la División Blindada del norte; Hernán Hiriart, jefe de la División de Caballería con asiento en Valdivia, al sur; Ervaldo Rodríguez Lasa, jefe de la Tercera División, con asiento en Concepción; Alfredo Canales Márquez y Ernesto Baeza Michelsen, comenazaron a expresar opiniones contrarias a la tesis de «esperar y ver» de los generales «reformistas».

A este grupo de generales se les llamó los «duros». Ellos decían que los «reformistas» estaban equivocados en su apreciación de poder manejar a Salvador Allende, porque éste iría donde «el populacho lo arrastrara». Agregaban que la tarea principal del Ejército y demás Fuerzas Armadas, era convencer al Pentágono de la necesidad de derrocar a Salvador Allende y «reinstaurar un Gobierno democrático como el de Eduardo Frei».

Manuel Torres de la Cruz, por ejemplo, explicaba que «Allende

será incapaz de frenar los deseos de destrucción de los elementos marxistas» y hará todo lo posible por engañarnos y ganar tiempo para estar en situación de «virar el país como un calcetín». (Resulta grotesco este argumento de Manuel Torres de la Cruz, si consideramos que aparecía como «general allendista», amigo personal» del Presidente de la República, y al mismo tiempo era el que más opinión formaba entre sus mandos para derrocar a Allende.)

Los «duros» decían que debía montarse un «esquema de acción» parecido al de septiembre-octubre de 1970, ya abortado por las razones que vimos en este mismo capítulo. El esquema era el de nombrar una Junta Militar transitoria, presidida por Torres de la Cruz, para que «en un plazo de seis meses» llamase a nuevas elecciones presidenciales, con «Eduardo Frei como candidato».

Durante la segunda mitad de 1971 y los primeros ocho meses de 1972, la influencia de la tesis de los «duros» no tuvo gran peso en el seno del Ejército, aun cuando contaba con las simpatías del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, y de los generales Gustavo Leigh, César Berdichewsky y Carlos Van Schowen, así como del jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, y sus colegas Pablo Weber y Horacio Justiniano (los tres en estrecho contacto con la US Navy). Justiniano, entretanto, cumplía a cabalidad con su papel de «allendista», apareciendo ante Salvador Allende como «hombre progresista», «admirador de la Unión Soviética» y con una «lealtad a toda prueba».

Este grupo de los generales «duros» contaba con una característica que los generales «reformistas» no tenían: su estrecho contacto con figuras políticas como Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, y Patricio Phillips, Pedro Ibáñez y Francisco Bunes, del Partido Nacional.

Los constitucionalistas

El equilibrio y la marginación de la lucha política visible de las Fuerzas Armadas lo mantenían un grupo de generales encabezados por el propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats González. Sus figuras más conocidas estaban en el jefe de la Primera División, Joaquín Lagos Osorio; el jefe del Estado Mayor, general Augusto Pinochet Ugarte; el general Héctor Bravo Muñoz (que después sería enviado a la División de Caballería en reemplazo de Hernán Hiriart, cuando éste intentó una insurrección militar en marzo de 1972 y fue dado de baja); y los generales Javier Palacios Ruhman y Carlos Araya.

Carlos Prats era el vocero de los «constitucionalistas», cuya línea general de conducta era «apoyemos a Allende para que él nos apoye a nosotros». «Consigamos con Allende transformar nuestras Fuerzas Armadas en una institución de preparación inmejorable, de una situación económica elevada y de una capacidad efectiva.» Carlos Prats planteaba la tesis de que «debemos trabajar para formar "un Gobierno Allende-Fuerzas Armadas» que se base en la división de responsabilidades: Allende maneja a las masas de los trabajadores, y nosotros manejamos el país para que prospere. Tenemos que ayudar a Allende a golpear tanto a «los extremistas de derecha como a los de izquierda».

La tesis de Carlos Prats, hasta octubre de 1972, o más certeramente hasta marzo de 1973, fue la que tuvo mayor aceptación en los mandos altos, medios y bajos del Ejército y en los medios y bajos de la Fuerza Aérea y la Marina. En el cuerpo de Carabineros, el general director José María Sepúlveda Galindo era un adherente entusiasta a este modo de pensar.

Precisamente por su moderación, y porque permitía hacer el juego de «esperar y ver», los generales «reformistas» agrupados en la Academia de Guerra, y en estrecho contacto con el Pentágono, se mantuvieron como apoyo constante a Carlos Prats hasta que la situación de «estampida» de las organizaciones de obreros,

campesinos y empleados (en 1973) pusieron en peligro todo el sistema, haciendo surgir la necesidad de no sólo derrocar a Allende, sino de destruir la democracia burguesa para reemplazarla por el fascismo.

En suma, el comandante en jefe del Ejército dirigía a un grupo de altos mandos para llegar a la meta de un Gobierno Allende-FF.AA., con la participación de la Democracia Cristiana y con la exclusión de los sectores «extremistas» de los partidos comunista y socialista. Éste era el grupo de los «constitucionalistas».

Otro grupo de generales, el de los «reformistas», tenía la meta de «prepararse lo suficiente» para estar en condiciones de gobernar al país y formar un Gobierno puramente militar o con Allende solo, sin los partidos de la Unidad Popular. Ambos grupos de generales pensaban que, en todo caso, al llegar al Gobierno, no podían destruir todo lo ya andado en el cambio de estructuras económicas, y se debía seguir con el desarrollo del capitalismo de Estado.

Un tercer grupo, el de los «duros», a quienes se les llamaba también fascistas, propiciaba el derrocamiento inmediato de Allende, la instauración de un Gobierno militar muy breve, de sólo seis meses, y la entrega posterior de la presidencia de la República a un político del estilo de Eduardo Frei.

Todo esto ocurría desde el 4 de septiembre de 1970 hasta noviembre-diciembre de 1972, donde el desarrollo de las ideas en el seno de los altos mandos tomó un camino más definido. Esto refleja cómo, en ningún momento durante su mandato, el presidente Allende contó con la llamada «lealtad» de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Notas

- 1) El lector encontrará un relato del intento cinco en el primer capítulo de

este libro. Del intento uno en el segundo capítulo. De las insurrecciones militares dos y tres en el tercer capítulo. Y de los intentos cuatro, cinco y seis en el quinto capítulo. De la insurrección militar número siete, la del 11 de septiembre, por supuesto, están los detalles en todo el libro, especialmente en el primero, cuarto, quinto y sexto capítulos.

2) Gran cantidad de documentación probatoria de las remuneraciones ilícitas recibidas por Gabriel González Videla de parte de los consorcios norteamericanos aparecieron en la revista chilena «Vistazo», de noviembre y diciembre de 1962 y julio de 1964; y en mis artículos *La penetración imperialista en Chile*, en «Causa ML» números 1 al 9 y *La historia sucia de los políticos demócratas*, en el diario «Puro Chile», del 15 de marzo al 7 de abril de 1973. Lo mismo ocurrió con el caso de Rodolfo Michels, lo cual fue tan escandaloso que, en 1964, fue expulsado del Partido Radical al ganar la directiva de esa agrupación política la corriente de izquierda que más tarde apoyaría la candidatura de Salvador Allende. La expulsión fue por «mantener relaciones ilícitas con la compañía extranjera Anaconda». Sin embargo, la corriente de derecha del partido radical recuperó un año más tarde la dirección, y las relaciones con la Anaconda se reiniciaron.

3) Cuando en julio de 1971 se nacionalizaron las minas de cobre en Chile, Robert Haldeman huyó del país precipitadamente (estaba acusado de fraude tributario). En sus oficinas de Santiago de las minas de El Teniente, se encontraron documentos que probaban conversaciones, sobornos, acuerdos contra la propiedad estatal y «compras» de votación en el Parlamento chileno. Eran unas 70.000 carillas de documentos. La revista «Mayoría», de diciembre 1971 a enero de 1972, publicó copias de 100 de esos documentos, que reproducían las conversaciones de Frei con Haldeman en 1973, el informe de Haldeman a su Gobierno sobre Frei y documentos de sobornos a periodistas, parlamentarios y políticos por hacer propaganda a favor de las compañías norteamericanas en su trato tributario en Chile. El senador derechista Raúl Morales Adriazola fue enjuiciado por esto; pero la Corte de Apelaciones, aunque estableció que la documentación era verdadera, se declaró incompetente para juzgar a Morales Adriazola porque tenía fuero parlamentario... ¡y se negó a pedir el desafuero del senador para juzgarlo! Los periodistas sobornados eran en su mayoría demócratacristianos, encabezados por Carlos Sepúlveda, actual presidente del Colegio profesional chileno. Respecto a Guillermo Correa Fuenzalida, ver mayores detalles en *La Historia yanqui de un Presidente chileno*, serie publicada en «Puro Chile», desde el 17 al 28 de febrero de 1973.

4) La denuncia concreta, procedente de EE.UU. sobre el fondo de 20 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964, vino en el diario «The Washington Post» del día 6 de abril de 1973. Al citar un testigo,

el diario dice que afirmó: «La intervención del Gobierno de los EE.UU. fue escandalosa y casi obscena.» Relató cómo 100 hombres de la CÍA entraron en Chile para poner en práctica la campaña financiada por los 20 millones de dólares. Los partidos políticos de Izquierda PS y MAPU, después de esta noticia, recopilaron la publicación *La historia yanqui de un Presidente de Chile*, sobre las relaciones entre Frei y los consorcios norteamericanos, la revista «Causa ML», número 5, en que se denunciaba lo mismo, y la publicación «punto Final» del 8 de junio de 1973, *Acta de acusación contra Eduardo Frei*, para presentar una acusación constitucional contra el senador Frei, en el Parlamento chileno, por «prestar servicios a una potencia extranjera durante su gestión presidencial». La acusación, por supuesto, fue rechazada por la mayoría senatorial reaccionaria, pero los cargos eran tan verdaderos y documentados, que Eduardo Frei no pudo querellarse contra esas publicaciones. Las denuncias, además, contenían facsímiles de las cartas enviadas por David Rockefeller a Frei, y sus «instrucciones económicas» (publicadas previamente en revista «Mayoría», enero de 1972) junto a la designación de Raúl Sáez. He aquí algunos párrafos: «...entrevista del 12 de noviembre de 1963, entre Robert Haldeman, vicepresidente de la Braden, y Frei en la casa de José Claro Vial (yerno de Gabriel González Videla) a petición de Frei. Dijo Frei: "Estoy seguro que si yo soy presidente, no habrá problema en REBAJAR los altos impuestos actuales —ya sea por convenio, ley o contrato ley—. Aquí, en Chile, me siento más cerca de Braden que de la Anaconda... El señor Milliekn (de la Kennecott) es un hombre duro y seco. No pongo en duda su gran inteligencia, pero no tiene el calor humano y cordialidad que tenía mister Roy Glover (jefe mundial de la Anaconda), con quien hice muy buena amistad Y SIEMPRE ME AGRADECIÓ por haber votado a favor de la Ley de Nuevo Trato" Texto según versión del *memorándum* del funcionario de la Kennecott Manuel Illanes (periodista chileno), encontrado en las oficinas de El Teniente, en Santiago, después de la nacionalización» Otra cita: «En agosto de 1968, la publicación de EE.UU. llamada "Hanson's Latinamerican Letter" afirmaba, en su estudio sobre el Gobierno de Frei: "Ningún Gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo éste con los acuerdos que firmó. Su tratamiento excesivamente favorecedor, fue tan falto de equilibrio y de juicio y tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washington"»

5) La relación entre el Plan Camelot (para un detalle de él ver *Espionaje en América Latina*, de Gregorio Selser) y la investigación de Roy Hansen, quedó demostrada en las sesiones de la Cámara de Diputados de Chile, de junio a diciembre de 1965, convocadas por las revelaciones que sobre ese proyecto de espionaje hicieron los diarios "El Siglo", mayo, junio y julio de 1965; el reportero. Miroslav Popic y yo mismo, en Radio Portales de Santiago, en el programa dominical periodístico La Gran Encuesta, de junio y julio de ese mismo año.

Como

se demostró en las declaraciones de Juan de Dios Carmona, ministro de Defensa de Eduardo Frei en la época del escándalo, a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de la investigación de Hansen y la autorizó «porque no la consideró espionaje». El propio investigador Hansen escribe en su memoria que «los datos fueron recogidos durante una serie de tres viajes (totalizando quince semanas) a Chile entre 1964 y 1965. Se entrevistó a doscientos civiles chilenos, hubo entrevistas intensivas con treinta y ocho generales y se distribuyó un cuestionario a oficiales activos de la Academia de Guerra y la Escuela Politécnica». Agrega que sus viajes fueron entre diciembre de 1964 y junio de 1965, y que tuvo acceso a documentación de la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército de Chile. Por su parte, la introducción del Plan Camelot en Chile estuvo a cargo del sociólogo Hugo Nuttini, quien también comenzó por conectarse con Alvaro y Ximena Bunster, para iniciar los contactos con el fin de formar un equipo de trabajo. Pero una denuncia del sociólogo noruego Johan Galtung puso en alerta a los periodistas de izquierda y vino el escándalo a partir de mayo de 1965. Para un detalle de estos sucesos, ver mi libro *¿Golpe de Estado contra Frei?*

6) En agosto de 1968, en el número 2 de la revista «Causa ML», en mi artículo *La penetración norteamericana en las Fuerzas Armadas Chilenas*, hice las primeras denuncias documentadas sobre la introducción de cursos antimarxistas en la Escuela Bernardo O'Higgins. También las hizo la revista «Punto Final», en 1969 y 1970. Por otro lado, a partir de la violenta campaña presidencial de 1964, la expresión «occidental y cristiano», comenzó a ser usada por los derechistas como oposición al «mundo oriental y ateo», definiendo la lucha del capitalismo contra el comunismo. A partir de entonces, la expresión mundo «occidental y cristiano» pasó a tener el significado de mundo «no socialista», perdiendo la connotación religiosa de la expresión «cristiano». Discursos, libros y tesis docentes de la derecha y las Fuerzas Armadas traen esa expresión desde aquella época. La inauguración de los viajes del último curso de la Escuela Militar a la Zona del Canal, en 1968, se hizo en forma pública, con un discurso alusivo del entonces director de esa escuela, René Schneider Chereau. Respecto a la orientación global anticomunista de la enseñanza militar chilena, ver *Las FF.AA. de Chile en la vida nacional*, del teniente coronel Alberto Polloni.

7) Para un examen detallado de las reuniones conspirativas de los personajes políticos civiles y militares en la conspiración de octubre de 1970, ver *El Caso Schneider. Operación Alfa; Chile al rojo*, de Eduardo Labarca; *Chile: ¿una economía de transición?*, de Sergio Ramos; colección del diario «Puro Chile», de noviembre de 1970; y reproducción del informe del fiscal del proceso, en el diario «El Siglo» de 5 de junio de 1971. Para la participación del general

Schneider en el complot, denunciándolo de manera lateral, porque las condiciones políticas del momento no permitían destruir la imagen constitucionalista de Schneider, ver la revista «Causa ML», número 20, de enero-febrero de 1971, y el diario «El Pueblo», de febrero, marzo y abril de 1971 (en estas crónicas se denunciaba también la intromisión del Pentágono en el asunto). Como documento anexo al hecho de las maquinaciones de la ITT y la CÍA, ver *Documentos Secretos de la ITT*. La validez de las denuncias se prueba por el hecho de que nunca los afectados pudieron querellarse contra los autores de los reportajes y libros, aun cuando intentaron hacerlo.

8) La prueba más espectacular de la participación de Eduardo Frei en el complot fue dada por el propio general en retiro Roberto Viaux Marambio al confesárselo, en la cárcel, a la periodista Florencia Varas, la cual lo publicó en el libro *Conversaciones con Viaux*. De acuerdo a lo allí establecido, y en investigaciones posteriores al escándalo provocado por esta confesión (ése fue uno de los cargos principales para la acusación contra Eduardo Frei en el Parlamento chileno en 1973, cuando ese político era presidente del Senado), se descubrió que los magnates Arturo Matte Larrain (del clan económico Matte-Alessandri) y Guillermo Carey Tagle, abogado de la Kennecott Copper, eran los contactos entre Frei y el resto de los conspiradores, incluyendo a los norteamericanos. Viaux explicó a la periodista Varas detalladamente cómo Frei participó en la conspiración, pero pidió no ser asociado a ella públicamente. El general en retiro afirmó que parece que las vacilaciones de Frei llevaron a los norteamericanos a retirar repentinamente su apoyo al golpe.

9) Resulta trágico recordar ahora que Allende siempre insistió en su tesis de que su gobierno no era socialista, sino que preparaba las condiciones para caminar hacia el socialismo sin violencia y sin destrucción previas. Basándose en esa tesis, durante los tres años de su Gobierno trató de convencer a sus enemigos políticos de que si no se hacían las reformas del programa de la Unidad Popular, la violencia social estallaría irremediamente, motorizada por los sectores más desposeídos. Sin embargo, la cortina publicitaria de la derecha y de los Estados Unidos cubrió este verdadero pensamiento de Allende, y transformó a su Gobierno en «socialista», e incluso en «marxista», sin dar ninguna prueba de ello más que la reiteración publicitaria. Los discursos y entrevistas de prensa de Allende están repletos de referencias a su programa no socialista y a su tesis de que sus reformas eran la única forma de impedir el desmoronamiento del sistema social en que Chile vivía. Citemos sólo tres ejemplos.

Discurso de Allende el día primero de mayo de 1972, ante centenares de miles de trabajadores: «En primer lugar, claridad, entender bien, saber a dónde vamos, qué meta debemos alcanzar en esta etapa. Yo he dicho honestamente: el Gobierno que presido no es un Gobierno socialista. El Programa de la Unidad Popular no es

un programa socialista. Pero el Gobierno y el Programa inician la construcción socialista». (Citado de Salvador ALLENDE, *La Revolución Chilena*. Ediciones Eudeba, Buenos Aires, 1973, p. 146.)

«Nuestra resuelta ejecución de medidas revolucionarias incide sobre las causas de las tensiones sociales y hace posible, por ende, el orden público. En el Chile de hoy, la revolución social es garantía para el mantenimiento del orden público». (Citado del *Segundo Mensaje al Congreso Nacional*, 21 de mayo de 1972, publicado por la Editorial de Prisiones con esa misma fecha.)

«No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque seamos incapaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera, llegaría el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro». (Citado de una entrevista a Allende en la revista norteamericana «TIME», del 19 de abril de 1971.)

El lector encontrará más citas de Allende respecto a esto mismo en el capítulo quinto de este libro. Respecto al carácter «capitalista de Estado», de las reformas económicas del Programa de la Unidad Popular, ver *Chile, ¿una economía de transición?*, ya citado; y *Dos Años de política económica*, de Pedro Vuskovic (ministro de Economía de Allende), publicado en revista «UTE», números 11 y 12, enero-febrero de 1973. Una versión de la conversación de Allende con los generales fue dada por Luis Hernández Parker, en la audición Tribuna Política, 20 de octubre de 1970, en Radio Portales de Santiago.

10) Una versión de la charla dada por el general Schneider en la Academia fue conocida en la noche del día 15 de octubre en el seno del Comando de la Candidatura del senador Salvador Allende, lo que provocó una serie de artículos sobre el tema «constitucionalidad de las Fuerzas Armadas», los días 17, 18 y 19 de octubre de 1970 en los diarios «Ultima Hora», «El Siglo» y «Puro Chile», reiterando algunos de los conceptos vertidos por Schneider para demostrar que Allende sería elegido en el Congreso Pleno porque las Fuerzas Armadas no le tenían miedo al Programa de la Unidad Popular. Por su parte, el abogado Guillermo Carey Tagle (de la Kennecott) y el general de aviación Joaquín García, mezclados en el complot (ver *Chile al Rojo*, ya citado), comentaron en una reunión de amigos (en casa del senador Raúl Morales Adriazola), la noche del 18 de octubre, la charla de Schneider. Allí surgió por primera vez el nombre del coronel Thomas H. Jones, jefe de la Sección Ejército de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile, como el «causante» de la charla de Schneider que echaba por tierra las esperanzas de victoria en el complot montado por los generales conspiradores de septiembre-octubre de 1970. Jones había llegado a mediados de 1968 a Chile, y había sido constante acompañante de Schneider en las programaciones docentes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins. La revista «PEC», de la última semana de octubre de 1970,

por su parte, denunció concretamente a los «militares norteamericanos» como los causantes de la asunción a la Presidencia de Salvador Allende («PEC» era una revista de ultraderecha). Informaciones posteriores mostraron que el coronel Jones, junto con el agregado militar a la Embajada de los Estados Unidos, coronel Paul M. Wimert, habían estado estrechamente ligados a Schneider en esas semanas, manteniendo reuniones con otros mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea, principalmente, para explicarles la falta de oportunidad de impedir que Allende fuera Presidente. Con una escasa diferencia de tres días, los coroneles Jones y Wimert, fueron sacados de la Embajada de Estados Unidos en julio de 1971. Esto ocurrió después que desde el 14 de enero hasta el 25 de mayo de 1971, en un desusado ritmo de visitas, un almirante y un contralmirante de la Marina de EE.UU., un general de Ejército de los EE.UU. y un general del Aire del mismo país, visitaron los altos mandos militares chilenos, un promedio de cuatro días cada uno, al mismo tiempo que, entre diciembre y mayo de 1971, Allende se reunía catorce veces con los altos mandos militares chilenos en reuniones que el propio Allende calificó a los reporteros de diarios y radios como destinadas «a tratar del futuro de esas instituciones nacionales».

11) En noviembre de 1970, en las primeras instrucciones para los jefes de periódicos y medios informativos de la Unidad Popular, el presidente Allende les dijo (de lo cual el autor de este libro es testigo directo) que «el trágico suceso del crimen contra el general Schneider es de una delicadeza política tal, que nuestra responsabilidad política, de revolucionarios, es tratarlo como mejor convenga a los intereses del proceso que encabezamos». Y en seguida planteó a los responsables periodísticos que debían atenerse a las informaciones oficiales del fiscal militar encargado del proceso, en referencia a todo lo que tuviera que ver con personal uniformado supuestamente involucrado. Instrucciones posteriores más detalladas de los funcionarios subalternos de la Presidencia, añadieron que el suceso debía enfocarse como «aventura personal y aislada» de algunos generales. Allende había insistido, ante los periodistas responsables de la Unidad Popular que había que cuidar que las Fuerzas Armadas no se quebraran porque así su Gobierno conseguiría una mayor tranquilidad con respecto «a ese flanco» (éstas fueron sus palabras textuales). En verdad, el momento era muy peligroso porque estaban involucradas las guarniciones de Santiago y de Concepción, y los comandantes en jefe de la Marina, la Aviación y Carabineros. Es notable el hecho de que el comandante en jefe de la Tercera División, en esa época, fuera el general Eduardo Amagada Lasa (que tenía como su jefe de Estado Mayor al coronel Washington Carrasco. Este coronel, más tarde general, sería nombrado en la Tercera División como reemplazante de Arriagada Lasa durante la Administración Allende... ¡y se convertiría en uno de los principales integrantes de generales conspiradores encabezando la insurrección militar del 11 de septiembre de 1973! En diciembre de 1971, el diario «La Tribuna», de Santiago, mencionó el acuerdo

Prats-Allende, en comentarios sin firma.

3

El complot de los patrones

El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura para impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares.

(Tercer mensaje presidencial al Parlamento, de Salvador Allende, 21 de mayo de 1973)

El 15 de agosto de 1971, el diario «La Nación» de Santiago traía una entrevista con un obrero de la industria textil Yarur S.A., una de las empresas monopólicas de esa rama, corazón del imperio, oligárquico de los Yarur, grupo dueño del Banco de Crédito e Inversiones; industrias químicas, textiles y de alimentos; y empresas de distribución y de finanzas, en sociedad con el grupo norteamericano Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank. La industria había sido requisada por el Gobierno para cumplir «la meta anual» en ese aspecto, que señalaba la expropiación de las empresas del cobre, hierro, salitre, de la banca privada y de la industria textil y del cemento, además de algunas empresas de distribución. La Contraloría General de la República, bajo presión del grupo Yarur y del Chase Manhattan Bank, había dicho que «la requisición es ilegal».

Pues bien, el obrero de la industria Yarur S.A. respondía lo siguiente:

«No nos importa si la requisición es legal o no, nosotros no entregaremos la industria. Ni la Contraloría ni la Corte Suprema

nos harán volver atrás. Los trabajadores tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y no estamos dispuestos a seguir siendo explotados. Una cosa es lo que puedan decir los tribunales y otra muy distinta lo que hagamos nosotros... El Gobierno popular nos ha dado la posibilidad de tomar decisiones en la empresa que trabajamos. Nuestro objetivo es seguir adelante, incluso pasando por sobre la legalidad.»

Eso reflejaba un estado de ánimo popular muy definido.

En la primera semana de septiembre del mismo año, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz (ingeniero comercial, 40 años, empresario-gerente en la industria metalúrgica), leía en sesión de directorio un «alarmante informe» del servicio de estadísticas del cuerpo de Carabineros que señalaba cómo los obreros y campesinos estaban «barriendo» la «legalidad» y ocupaban predios agrícolas e industrias para hacer valer sus derechos salariales y, en algunos casos, para obligar al Gobierno a expropiar monopolios con cuyos dueños tenían acuerdo verbal de no expropiación. Para establecer una referencia, el informe apuntaba:

En el año 1969, hubo 118 ocupaciones de predios agrícolas; en 1970, último año de la Administración Frei, la cifra subió a 365 ocupaciones; pero ahora, en los primeros ocho meses de 1971, los campesinos han ocupado 990 predios agrícolas... ¡Cuatro ocupaciones por día!

En el campo industrial ocurría lo mismo. En 1969, había habido 23 ocupaciones de industrias por obreros en huelga; en 1970, esta forma de lucha de los trabajadores había elevado a 133 las ocupaciones; y en 1971, en los primeros ocho meses del año, las ocupaciones habían subido a 513 industrias... ¡Un promedio de más de dos ocupaciones diarias!

Para Orlando Sáenz y los directores de la organización de los oligarcas industriales chilenos, esto era una grave señal de que «no se podrá evitar el caos social» tratando de influir en la política económica y social del presidente Salvador Allende. Orlando

Sáenz dijo que «nuestros intereses están amagados, y nosotros somos el corazón de la economía nacional, por lo tanto son los intereses de Chile los que están en peligro».

El análisis de la situación, en verdad, era inquietante para el reducido grupo de oligarcas industriales, comerciales y financieros del país (un total de no más de 1000 personas que eran las dueñas de más del 60 % del aparato productivo nacional). Ellos habían aceptado, en principio, influidos por algunos generales de las Fuerzas Armadas, «sacrificar» una parte de su poder económico para «salvar al sistema». Pero los hechos de los primeros once meses de Gobierno de Allende mostraban que aunque el Presidente trataba por todos los medios de cumplir con lo pactado en octubre de 1970 respecto a su programa de transformaciones, la organización popular iba más allá que ellos (no conocía esos compromisos tampoco) y presionaba por el cumplimiento total del programa, que era la «expropiación del poder económico del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional».

Para la Sociedad de Fomento Fabril «ya era tiempo de poner atajo a esta situación». Orlando Sáenz se puso en contacto con Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (organización gremial de los latifundistas) y con Jorge Fontaine, presidente de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (y perteneciente al clan oligárquico de «El Mercurio»). Todos estuvieron de acuerdo, junto con los miembros de los directorios respectivos, que era necesario «poner a Allende contra la pared», partiendo de una campaña gigantesca de publicidad para quitar el apoyo de las masas al Gobierno, y después cambiarlo «constitucionalmente» antes de que cumpliera su período reglamentario de seis años.

Para poner en práctica la ofensiva anti Gobierno, Orlando Sáenz y sus asesores contaban con una realidad económica muy clara que les daba una tremenda capacidad de maniobra:

La Unidad Popular había logrado reducir el ritmo inflacionario (de un 32,5 % en 1970, cerraría con un 20,1 % en 1971) gracias a

una política de «reactivación económica» que consistía en el control de precios, la puesta en marcha a toda capacidad del aparato productivo interno, y el alza de sueldos y salarios bajos a niveles superiores al índice de inflación, y de los sueldos altos a niveles iguales al índice de inflación.

Esta reactivación económica llevaba en sí un peligro muy serio, en una economía de estructura monopólica y dependiente como es la chilena. Al llegar a su límite de expansión, si no existía paralelamente una gran acumulación de capital, podía haber desabastecimiento de productos (por el exceso de demanda) y la consiguiente alza de precios vía mercado negro, lo cual volvía a poner el dinero de sueldos y salarios en manos de la oligarquía, como había sido tradicional.

Al mismo tiempo, la política de limitación de precios, al ser hecha teniendo como base los costos de las grandes industrias monopólicas, de mucho mayor productividad, dejaba a éstas con un «margen de ganancias razonables», mientras golpeaba duramente a las pequeñas y medianas empresas, con costos más altos por su menor productividad.

La única salida para este callejón económico, desde el punto de vista del programa de la Unidad Popular, era la constitución de una poderosa área de propiedad social, que traspasara los monopolios en manos privadas al Estado. Con ello se podía cambiar la estructura de producción de todo el sistema (evitando el desabastecimiento), y limitar los precios con los costos de producción de pequeños y medianos empresarios, porque así el «sobrexcedente» captado por los monopolios, ya no en manos privadas, sino estatales, podía ser revertido a todo el sistema en forma de mayor acumulación de capital y servicios sociales, mejorando el *status* de los sectores más bajos de la población.

Pero ocurría que el área de propiedad social había sido limitada desde un comienzo en su tamaño, por el compromiso de Allende. Al mismo tiempo, los empresarios privados habían restringido su acumulación de capital (se terminaría 1971 con 11 % de baja en la

reinversión privada). Por otro lado, la limitación de precios tenía al borde de la bancarrota a muchos empresarios pequeños y medianos, y ya en septiembre se comenzaba a sentir los efectos del desabastecimiento en todo el sistema y la aparición del mercado negro.

El equipo de la Sociedad de Fomento Fabril planificó entonces, en varios puntos, el modo de destruir la plataforma popular del Gobierno de Allende:

1) Impedir por todos los medios la formación del «área de propiedad social» más allá de un límite que la hiciera inocua como directora de la economía nacional. Para ello se encargó a Eduardo Frei que se las arreglara para presentar un proyecto de reforma constitucional en el Parlamento (donde había mayoría de los partidos manejados por la oligarquía y el imperialismo yanqui). La tarea se encargó al senador demócratacristiano Juan Hamilton, en compañía de su colega de partido y de parlamento, Renán Fuentealba. Con esa reforma constitucional se pretendía «congelar legalmente» la formación del «área de propiedad social», nervio motor indispensable de todo el programa de la Unidad Popular.

2) Conseguir el apoyo de los pequeños y medianos empresarios (104.000 en el comercio al detalle, 34.000 en la industria y unas 150.000 familias en la agricultura), planteando las banderas de lucha de «mejores precios para los productos», seguridad contra «las expropiaciones» (cosa que nada tenían que temer por supuesto, estos pequeños y medianos empresarios) y «comercialización» sin control estatal. Todo lo cual beneficiaba doblemente a los monopolios privados.

3) Luchar contra toda forma de organización popular que apoyara al Estado en su control de precios (Juntas de Abastecimientos y Control de Precios), control de la producción (Comités de Vigilancia de la Producción, etc.) y control de las actividades conspirativas de la reacción (Comités de Unidad Popular, que fueron desarticulados por la misma Unión Popular como concesión

a la reacción en el período septiembre-octubre de 1970, describiéndolos como «organizaciones del marxismo dictatorial» para «estrangular la democracia»).

4) Promover la restricción en las inversiones privadas y el volcamiento del capital especulativo hacia el mercado negro (en 1972 y 1973 se destinaron más de CIEN MILLONES DE DÓLARES a este negocio por parte de los oligarcas), con el fin de desatar una inflación incontrolada, el consiguiente caos económico y la pérdida total de apoyo de masas al Gobierno.

5) Campaña de propaganda intensiva para demostrar que el quiebre de la economía era «el fracaso del socialismo», ocultando la cuestión central de falta de inversión y de capacidad de planificación y control del propio aparato estatal burgués para resolver la crisis «a favor de los sectores de menores recursos», en vez de hacerlo «a favor del sector monopólico privado chileno y extranjero».

6) Darse un plazo de unos siete a ocho meses (a partir de octubre de 1971, fecha de inicio de la campaña) para llegar a una situación política de deterioro ostensible del apoyo de masas al Gobierno, exigir un plebiscito para que el presidente Allende lo pierda y se rinda a los requerimientos económicos de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de la Producción y el Comercio.

Para poner en práctica estos seis puntos, se contaba con un poder económico y político de la oligarquía casi intacto (habían traspasado a manos del Estado, previo pago de acciones, menos de la cuarta parte de sus empresas), con mayoría en el Parlamento, con influencia total en el Poder Judicial y la Contraloría General de la República; con periódicos que significaban más del 80 % de la circulación diaria en todo el país, con radioemisoras que concentraban más del 50 % de la sintonía nacional, y con una estación de televisión en Santiago que acaparaba más del 60 % de la sintonía; por último, también contaban con lo más importante: «la neutralidad de las Fuerzas Armadas».

Los generales «reformistas», a través de Orlando Urbina Herrera y Washington Carrasco, habían hecho saber a Orlando Sáenz y sus asociados, que «si ustedes quieren cambiar de presidente como la Constitución lo permite, con plebiscito, entonces estamos de acuerdo, no entrabaremos esa acción». Los generales «constitucionalistas», a través de Augusto Pinochet, habían hecho saber lo mismo. Y los generales «duros» apoyaban el plan porque tenía que ver exactamente con lo que ellos planteaban desde septiembre de 1970.

Sin embargo, los generales «reformistas» insistieron en que ellos estimaban que «había un error de apreciación» en lo acordado por la Sociedad de Fomento Fabril. Que todavía no era tiempo «de entrar en temores», que la capacidad de Allende, su «muñeca política» como él mismo la llamaba, no estaba agotada para «calmar a los trabajadores y hacerlos entrar en razón».

Los dirigentes políticos del Partido Nacional, encabezados por Onofre Jarpa y los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, más los diputados Patricio Phillips y Fernando Maturana y el grupo de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, compuesto principalmente por su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, los senadores Juan Hamilton y Patricio Aylwin y el empleado del grupo Yarur-Rockefeller, Felipe Amunategui Stewart, son los que recibieron el encargo de la Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, de poner en marcha la campaña.

El día primero de octubre de 1971, la Sociedad de Fomento Fabril abrió el fuego al publicar un comentario sobre la gestión de la Unidad Popular, dando «un balance sobre los resultados alcanzados: el Gobierno profundamente afectado en su prestigio y expuesto a un juicio político; importantes sectores industriales vejados y damnificados en sus derechos; una opinión pública desconcertada y perpleja; y lo que es peor: ninguno de los objetivos buscados logrados».

Las ollas vacías

En noviembre de 1971 ya estaban desatados todos los efectos de desabastecimiento producidos por la redistribución de ingresos en los sectores más postergados de la sociedad chilena y la falta de flexibilidad del sistema productivo, de carácter capitalista y dependiente, que funcionaba con un criterio selectivo de consumo para las capas altas en cantidad más que suficiente y de déficit de consumo para gigantescos sectores de obreros y campesinos.

Las cifras preliminares de noviembre, decían que el consumo de aves, porcinos y patatas había aumentado en ese año en 16 %, 18 % y 55 %, respectivamente. El consumo de azúcar aumentaba en un 37 %. Pero el aparato productivo había tocado su techo, y la escasez de esos mismos productos en el mercado afectaba a amplios sectores de empleados, pequeños y medianos empresarios y que no estaban en el circuito de abastecimiento popular directo a través de sindicatos y federaciones de sindicatos.

En Santiago, principalmente, las colas de personas para conseguir una vez a la semana, o una vez cada quince días carne de ave o azúcar, eran impresionantes. El mercado negro de esos productos comenzaba a aparecer.

El 4 de noviembre, en la celebración del primer año de Gobierno, el presidente Allende pronunció un discurso ante unas ochenta mil personas, y se refirió al tema:

«Ha habido escasez transitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las masas, por la tendencia al acaparamiento de ciertos sectores que compran más de lo que necesitan. Si necesitan tres o cinco kilos de carne, y la encuentran en venta, compran diez o doce, y la guardan en su refrigerador. Hay una presión psicológica que hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay especulación en los barrios... En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno salieron de las fronteras de Chile más de

doscientas mil cabezas de ganado vacuno.»

«La presión psicológica» corría por cuenta de los medios de comunicación de masas, propiedad de los monopolios privados y de sus partidos políticos, que tenían en marcha una campaña de noticias destinadas a crear pánico de compra en la población.

En el mismo discurso, Allende trató de disuadir a centenares de miles de campesinos, obreros y empleados que viendo a los monopolios privados seguir mandando en la economía, buscaban como salida el ocupar las empresas monopólicas sorprendidas en acaparamiento, exigir su expropiación y ocupar los predios de los latifundistas que, por otra parte, servían de campo de adiestramiento para grupos fascistas, asesorados por expertos militares de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales del Ejército. Allende llamaba a eso «tomas indiscriminadas» para caratularlas de «extremismo de izquierda».

Dijo Allende: «Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez de revolucionarios. Estamos contra todas las tomas indiscriminadas de fondos que crean anarquía en la producción y que terminarán por lanzar a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños agricultores... Estamos contra las tomas de vivienda que perjudican a los trabajadores que juntaron sus cuotas para adquirirlas. Estamos contra las tomas de las pequeñas y medianas fábricas por los obreros; la estatización y la requisición de las empresas deben obedecer a un plan de Gobierno y no a la anarquía del impulso voluntario de unos cuantos.»

Es notable comprobar cómo, nunca en los tres años de Gobierno, ni Salvador Allende ni las directivas de los partidos comunista y socialista, estuvieron de acuerdo con la enorme movilización de las masas que pugnaban por salir adelante en su lucha contra la oligarquía y el imperialismo de los Estados Unidos. Siempre frenaron, en la medida de sus fuerzas, las manifestaciones de «sabiduría política instintiva de los trabajadores», que trataban

de obligar a Allende y la Unidad Popular a expropiar de una vez a las principales empresas monopólicas industriales, auténtica llave maestra de todo el plan económico de Gobierno, para poder cambiar la estructura de producción del país. En 1971, esto era posible, aun en el caso de hacerlo al mismo tiempo de ceder en «negociaciones largas para ganar tiempo» con la Anaconda y la Kennecott. Pero la ocasión fue desperdiciada por el afán de Salvador Allende de «mantener tranquilas a las Fuerzas Armadas», incluso sabiendo que en aquella época su cohesión era muy frágil y no estaban de ninguna manera en buena posición para intentar un golpe insurreccional con posibilidades de victoria. Probablemente, sí la movilización de las masas se hubiera alentado y organizado en vez de desarticulado y frenado, el «frente de lucha antiimperialista y antioligárquico» hubiera tomado una dimensión tal que hubiera sido imposible para las Fuerzas Armadas chilenas y el imperialismo norteamericano salir en defensa del antiguo orden económico.

Pero volvamos al desabastecimiento. Durante todo el mes de noviembre de 1971 las directivas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional promovieron una manifestación pública para expresar «la protesta del pueblo por el hambre que aflige a nuestros hogares».

En la tarde del 2 de diciembre, desde el barrio alto de la ciudad de Santiago, donde se concentra el 90 % de las personas que más ingresos económicos tienen en Chile, se descolgaron unas cincuenta mil mujeres, flanqueadas por jóvenes de los grupos de choque de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la naciente organización fascista Patria y Libertad. La abrumadora mayoría de estas mujeres eran las esposas de gerentes, altos ejecutivos y empresarios grandes y monopólicos, además de empleados de alto nivel de renta. Eligieron como símbolo del desfile ollas vacías y cucharas. Cada manifestante portaba una olla vacía, de aluminio, y una cuchara. Golpeando una con la otra, el ruido era ensordecedor y atemorizante. Así, tronando,

las mujeres del barrio alto de Santiago bajaron hasta el centro de la ciudad y, provocando un enfrentamiento con los carabineros quisieron rodear el Palacio de La Moneda. El enfrentamiento se produjo. Y durante dos o tres horas, al anochecer de ese día, todo el barrio central fue escenario de una batalla campal entre la policía militarizada y las mujeres manifestantes.

En aquella tarde, el autor de este reportaje vio el «embrión» de lo que sería más tarde, a partir del 11 de septiembre de 1973, la más increíble ferocidad desatada de un ser humano sobre otro. Mujeres muy bien vestidas, de hermosas figuras y delicado caminar, que uno había visto siempre en los estrenos de gala del cine o del teatro, o en los comedores de restaurantes elegantes limpiándose delicadamente la boca, gritaban desaforadas por las calles las groserías más increíbles contra el presidente Allende. Una de esas frases: «Allende maricón, ya no sirves ni para el colchón.» Vi a varias de ellas echarse encima de jóvenes que gritaban: «Viva Allende», golpearlos con las ollas y, en un caso, después de tener atrapado a un niño de unos 15 años, dos mujeres, una de las cuales llevaba un collar de perlas, lo sujetaron contra el suelo, le reventaron los pantalones por la cintura, se los bajaron y comenzaron a golpearle en los testículos mientras una chillaba: «Capemos a este hijo de puta» y se esforzaba por sacarle los genitales por entre los calzoncillos. La llegada de una patrulla salvó al niño.

Esta horrible brutalidad en ciernes mostrada por las mujeres del barrio alto el 2 de diciembre de 1971, tomaría una dimensión apocalíptica a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando decenas de miles de hombres, mujeres, ancianos y hasta niños fueron torturados con un salvajismo sin límites, llegando al extremo de la violación en grupo de prisioneras y de la castración de prisioneros por las Fuerzas Armadas, por simple distracción, a la voz de «bajémosle la moral a estas

mierdas marxistas».

La marcha de las ollas vacías obligó a Allende a declarar «zona de emergencia» la ciudad de Santiago, que quedó bajo jurisdicción militar por algunos días. Había sido la primera etapa de la campaña para tratar de derrocar a Allende «por medios legales».

El área social

El 9 de febrero de 1972, la mayoría demócratacristiana y nacional en el Parlamento cumplió con las órdenes impartidas por la Sociedad de Fomento Fabril poco más de cuatro meses antes: aprobó una reforma constitucional para fijar las normas del «Área de Propiedad Social», cuyos autores habían sido Jos senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba. (Juan Hamilton estaba ligado a los magnates de la construcción Soza Cousiño y a los monopolistas del hierro Klein, los cuales, aunque chilenos, tenían todos sus capitales en Suiza y Canadá. Estos Klein fueron muy favorecidos por el Gobierno de Eduardo Frei, y le instalaron al ex Presidente y a otros políticos demócratacristianos una cadena de hoteles de lujo en la Costa Brava, España, como pago por esos favores recibidos.)

La «reforma constitucional» de Hamilton y Fuentealba era una verdadera bomba de tiempo: el presidente Allende estaba obligado a promulgarla porque, si no lo hacía, rompería la letra de la Constitución política, cosa que esperaban los opositores para destituirlo. Y Allende no podía promulgarla porque su texto era simplemente un congelamiento del «Área de Propiedad Social», dejándola inútil como herramienta de activación y ordenamiento del aparato productivo nacional a fin de cumplir los planes de la Unidad Popular. Una síntesis de esa reforma constitucional permite señalar los siguientes puntos:

1) Dejaba «dar en administración», por «razones técnicas», las compañías nacionalizadas del cobre a la propia Anaconda o a la Kennecott. Es decir, permitía revertir la nacionalización de un

modo lateral.

2) Dejaba como «área de propiedad privada definitiva» a empresas monopólicas tan enormes como la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa central del grupo oligárquico Matte-Alessandri. (En Chile había once clanes oligárquicos dueños de la mayor y mejor parte de la economía nacional, en estrecha asociación con capitales de los Estados Unidos.)

3) Dejaba a salvo de expropiaciones «la distribución del petróleo y sus derivados», lo que significaba la libertad de negocio de la Esso Standard Oil, de los Rockefeller, y de la Shell, inglesa, asociándose con grupos empresariales como la COPEC, de la familia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, componente de otro de los once clanes.

4) Declaraba ilegales todos los traspasos de monopolios privados a propiedad del Estado anteriores al 20 de octubre de 1971, con lo cual dejaba reducida prácticamente a cero el área de propiedad social, a menos que el Parlamento aprobara esos traspasos, en discusión «caso por caso».

5) Obligaba a que el Gobierno enviara al Parlamento cada caso de nuevo monopolio a expropiar, para que esta expropiación fuera aprobada por el Parlamento. Como en el Parlamento había mayoría de la reacción, era fácil prever que el «área de propiedad social» no crearía jamás, a menos de conquistar la mayoría parlamentaria para el Gobierno en marzo de 1973, fecha constitucional para el cambio de la Cámara de Diputados completa y la mitad del Senado.

Con esta descarada defensa de los intereses monopólicos norteamericanos y chilenos, la mayoría del Parlamento pretendía poner contra la pared al Gobierno Allende. Si aprobaba la promulgación de la reforma, su esquema económico se desfondaba; si la rechazaba, se ponía fuera de la Constitución. Era la segunda etapa en la campaña iniciada por los políticos reaccionarios por mandato de la Sociedad de Fomento Fabril.

Un ministro general

Durante todo el mes de febrero, marzo y primera semana de abril, la campaña desatada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional «para defender a los consumidores del desabastecimiento, el alza de los precios», el «mercado negro» y «el sectarismo de la Unidad Popular» estaba alcanzando el punto máximo. Su éxito en muchos sectores, fue notorio en las elecciones para nuevas directivas de sindicatos de empleados. En ellas los candidatos de la Unidad Popular eran derrotados por los demócratacristianos e incluso por los nacionales. Un ala del partido radical, encabezada por su ex presidente, senador Luis Bossay Leiva, que había formado el Partido de Izquierda Radical, abandonó el Gobierno y se pasó a la oposición, planteando que «no podemos aceptar ser cómplices en un proceso que tiende a salirse de la Constitución y no resuelve los problemas de las masas». Luis Bossay Leiva y demás miembros principales del PIR recibieron grandes sumas de dinero de la oligarquía para «formar el partido».

El 6 de abril, Allende respondió con un golpe de efecto. Reorganizó su Gabinete, con la novedad de nombrar ministro de Minería a un general de brigada en servicio activo, Pedro Palacios Camerón. Con esto, Allende pretendía mostrarle a los opositores que planteaban ya «la resistencia civil», que tenía «en un puño» a las Fuerzas Armadas; y como sucede en todo régimen de dominación de una clase sobre otra, quien tiene las Fuerzas Armadas es la clase que domina. Sólo que en Chile parecía haber un contrasentido bastante grave: las Fuerzas Armadas eran de la burguesía, y el Gobierno de Allende pretendía ser del proletariado. ¿Cómo podían estar apoyando las Fuerzas Armadas de una clase al pretendido dominio de otra?

Cuando en los primeros días de abril de 1972 Allende planteó al general Carlos Prats González la necesidad de incluir a un militar en servicio activo en el nuevo Gabinete, éste le respondió que lo

consultaría con su cuerpo de generales. Los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo con los «constitucionalistas» en que era bueno aceptar este ofrecimiento, por un tiempo corto, para que «uno de nuestros hombres se adiestre en esas tareas». El general Palacios fue nombrado en Minería, precisamente donde más les interesaba a los generales «reformistas», para conocer todo el detalle de la organización, administración y ejecución de la minería del cobre nacionalizada.

Sin embargo, la discusión entre los generales para aceptar este ofrecimiento no fue tan simple y sin problemas como parece. Hacía menos de treinta días que un par de altos mandos de los llamados «duros» había cometido la torpeza de intentar una insurrección militar sin consultar con el Estado Mayor, provocando que los Servicios de Inteligencia de la Unidad Popular los detectaran, con lo cual el alto mando encabezado por Prats no le había quedado más remedio que tomar medidas disciplinarias contra los complotadores.

Fue en marzo de ese año, en Temuco, donde se descubrió que el coronel Julio Canessa Roberts, connotado fascista, estaba articulando un aparato de sabotaje a la producción agrícola en complicidad con los latifundistas del lugar, y esperaba presentar el hecho consumado de un acuartelamiento de su regimiento en Temuco, más algunos regimientos de Valdivia y Osorno, para obligar a Allende «a respetar la Constitución». Canessa también tenía conexiones con la organización de Patria y Libertad de la zona, a la cual proveía de adiestramiento paramilitar y de armas para la práctica de tiro, al mismo tiempo que protegía el contrabando de armas automáticas calibre 22 desde Argentina, para los arsenales de Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus.

Estas actividades fueron denunciadas al presidente Allende por la policía civil, Allende las denunció a Prats, y la junta de generales acordó trasladar a Julio Canessa Roberts a Santiago, destinándolo a la Escuela de Suboficiales.

Los generales, incluyendo a Prats, sabían que Julio Canessa no

era más que una pieza en un equipo más grande, formado por el general de brigada Hernán Hiriart, jefe de la División de Caballería en Valdivia, y el general de brigada Alfredo Canales Márquez, del cuerpo de generales de la guarnición de Santiago. Pero nada de esto se le comunicó al presidente Allende, quien quedó satisfecho con el traslado de Canessa; traslado que le quitaba el mando de tropas.

Por eso, al discutirse en abril la inclusión de un militar en el nuevo Gabinete de Allende, los «duros» se mostraron totalmente en desacuerdo porque «ello significaría que nosotros apoyamos a un marxista.» Prats y los «reformistas» lograron convencerlos de que el Gobierno de Allende no era marxista, y las Fuerzas Armadas quedaban en situación de retirar a su ministro, cuando fuera conveniente mostrar «repudio público y notorio» a la política de Allende.

En su discurso anual a los trabajadores, el día primero de mayo de 1972, el presidente Allende advirtió al pueblo sobre parte de lo que estaba pasando, y refiriéndose a la reforma constitucional de Hamilton-Fuentealba, la definió como un intento «que anularía las conquistas alcanzadas en el campo del área social de la economía» y que «detrás de esta actitud apunta inclusive la amenaza de destituir al Presidente de la República. No me inquieta, no me inquieta en lo personal este hecho. Me preocupa porque es mi obligación defender la Constitución». Y agregó: «Lo único que me inquieta es que se barrerán las bases de la constitucionalidad chilena, que se quiere cambiar el juego y que se quiere, por lo tanto, precipitar a este país a una lucha muy dura y muy profunda». Para enseguida señalar sus «obligaciones» como Presidente, cuya enumeración desconcertó a los trabajadores que lo escuchaban:

«Es mi obligación, y la voy a cumplir, defender los preceptos constitucionales.

»Es mi obligación evitar el enfrentamiento.

»Es mi obligación rechazar toda violencia, física, económica y social.

»Es mi obligación impedir que haya un baño de sanere en Chile.

»Es mi obligación defender las conquistas de los trabajadores y la Revolución chilena.»

Pero ocurre que, cotidianamente, para los trabajadores que escuchaban a Allende, la idea de «defender los preceptos constitucionales» era una traba para ellos mismos, para su organización naciente, para impedir el sabotaje, los atentados, el mercado negro, la especulación y el abuso de los monopolistas que, a través de sus bandas fascistas adiestradas por personal de las Fuerzas Armadas, hacían día a día contra todo el aparato económico de la nación. Y los jueces, el Parlamento, la letra de las leyes y los «preceptos constitucionales» servían para defender a los saboteadores y entorpecer la labor de vigilancia y aumento de la producción de los trabajadores.

Avanzar o no avanzar

Mientras por un lado el presidente Allende decía en sus discursos que el pueblo debía organizarse en Juntas de Abastecimientos y Precios, Consejos Comunales Campesinos, Comités de Producción, Comités de Vigilancia de la Producción, etc., para «defender la Revolución»; por otro, los trabajadores veían como, a través del control de esos organismos por parte de las directivas políticas de los partidos de la Unidad Popular, se transformaban en organizaciones para paralizar la movilización de las masas, para impedirles que se prepararan para el verdadero enfrentamiento que se veía venir: el pueblo con las Fuerzas Armadas de la burguesía y del imperialismo.

En el seno del Gobierno, había una discusión profunda al respecto. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic (independiente de izquierda hasta ese momento, y miembro del partido socialista a partir de 1973), planteaba, como lo escribiera más tarde en un documento publicado por «Revista de la Universidad Técnica del

Estado», que el meollo de las dificultades estaba «en todo lo que significa el carácter de clase del Estado burgués, dentro de cuyas características todavía vigentes han venido encauzándose las nuevas realizaciones. Toda su estructura, incluso su reflejo en el marco jurídico y hasta en la organización del aparato administrativo, se había configurado para atender a los intereses del capitalismo y la dependencia, preservar el dominio monopólico y excluir cualquier forma de acceso y participación de los trabajadores. Con ello chocan las nuevas exigencias, esterilizando gran parte de los esfuerzos y agudizando una contradicción que *sólo podrá resolverse mediante la sustitución de ese Estado burgués por la construcción de un Estado de otro carácter, de un Estado Popular*; la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del área social, a través de su presencia decisoria en los Consejos de Administración y otros mecanismos; las formas recién iniciadas de extensión de esa presencia a los diferentes niveles de decisión administrativa; las formas todavía en germen de su control sobre el área privada; la organización de los trabajadores y el pueblo en las Juntas de Abastecimientos y Precios, para ejercer un mayor control sobre el proceso de distribución; los organismos comunales, los «cordones industriales» y muchas otras iniciativas, algunas de ellas multiplicadas en la respuesta de los trabajadores a la ofensiva reaccionaria de octubre; todas ellas constituyen otras tantas manifestaciones en esa dirección, que corresponde *profundizar y ampliar urgentemente, tanto para asegurar el carácter del proceso revolucionario como para asegurar los problemas inmediatos*».

Vuskovic planteaba (y con él una minoría de las directivas del partido socialista y el MAPU) que la única forma de impedir el colapso cuando la burguesía y el imperialismo recurrieran a «su reserva estratégica de dominio» (las Fuerzas Armadas) era crear «una gigantesca movilización de masas con objetivos concretos de controlar el aparato productivo y prepararse para el enfrentamiento militar entre las clases».

Y formulaba teóricamente su tesis diciendo:

«En este período, los avances en la realización del programa han sido suficientemente grandes como para motivar la más enconada reacción del imperialismo y la burguesía, pero todavía insuficientes como para privar a la burguesía nacional de la posibilidad de utilizar el poder económico que conserva en toda suerte de acciones de obstrucción y sabotaje a la economía. Ello quiere decir, entre otras cosas, que la conducción económica no se realiza en un plano de dominio político que permita concentrar la preocupación en las tareas constructivas. Por el contrario, en ella se expresa toda una lucha política no resuelta, que convierte las acciones económicas en instrumentos de esa misma lucha. De ahí que en cada problema económico que hoy se afronta no sea difícil identificar la acción deliberada del imperialismo y la burguesía».

Con mayor precisión, Vuskovic decía que la burguesía se había propuesto la tarea de hacer fracasar la política económica del Gobierno, para quitarle apoyo popular primero y derrocarlo después, porque «a pesar del número de empresas incorporadas al área social, de la estatización de los bancos y de la extensión de la reforma agraria la burguesía sigue detentando un poder económico suficientemente importante como para proponerse esta tarea con algunas posibilidades de triunfo».

Y especificaba: «Se trata, en primer lugar, de que aún no se completa el área de propiedad social en los términos previstos. Importantes actividades monopólicas o estratégicas continúan en manos de sus propietarios capitalistas, constituyendo una fuente de cuantiosos ingresos y un instrumento de dominio sobre otras empresas. En segundo lugar, el área social no ha llegado a constituirse en el sector efectivamente dominante, capaz de imponer los términos de funcionamiento y de situar en un marco general de decisiones la gestión de las empresas que, de acuerdo al programa, continúan y continuarán integrando el área privada de la economía. Tampoco se concretan en ésta, formas efectivas de control por parte de los trabajadores... En tercer lugar, no se ha

logrado imponer de modo definitivo una redistribución real del ingreso en favor de los trabajadores y del proceso de acumulación».

Con estos planteamientos, el entonces ministro de Economía Pedro Vuskovic, pretendió convencer a Salvador Allende y a su principal apoyo, la directiva del Partido Comunista de Chile, de la necesidad imperiosa de «dar un salto adelante» basándose en una «gigantesca ofensiva de masas», aprovechando que «todavía las fuerzas reaccionarias y su aparato armado del Estado burgués no tienen la cohesión suficiente como para intentar una contrarrevolución armada». Si no lo hacemos ahora, se completaba la tesis, después será tarde, y la crisis económica servirá de pretexto para la insurrección armada de la burguesía y el imperialismo.

Pero, contra Vuskovic estaba el planteamiento de la directiva del partido comunista, a través de Orlando Millas y Luis Corvalán, quienes plantearon que «eso no se puede hacer. Nuestra tarea ahora es impedir que se provoque a los enemigos». De acuerdo con el presidente Allende, estimaron que era bueno «tomar en cuenta los argumentos del generalato de Santiago», que «nos han hecho saber (en mayo de 1972) que están muy preocupados por el aumento exagerado de la inflación, el desorden con que algunos trabajadores de la ciudad y el campo ocupan empresas, y la baja producción en el área privada».

El 17 de junio, el presidente Allende cambió sus ministros. Los dos hechos más destacados: la salida del ministro de Minería, general de brigada Pedro Palacios Camerón; y la del ministro de Economía, Pedro Vuskovic.

El general Palacios Camerón fue retirado del ministerio por acuerdo de los generales de la guarnición de Santiago, que estimaron, por imposición del grupo de los «duros» en combinación con los «reformistas», que «no podemos permitir un miembro de las Fuerzas Armadas en el Ministerio, cuando sabemos que el nuevo Gabinete será dominado por los comunistas, «esto es una

mala imagen para nuestros institutos armados, que son antimarxistas por doctrina y fundamento».

El ministro Pedro Vuskovic salió porque el partido comunista exigió el control completo de la parte económica del Gabinete para aplicar su política «de convivencia nacional». A través de Orlando Millas, que sería sucesivamente ministro de Hacienda y de Economía, la bandera del nuevo «muñequo» de Salvador Allende se resumiría en las siguientes palabras: «Para avanzar hacia el socialismo, así como más adelante para construir el socialismo, lo que debe estar en primer lugar es el desarrollo de la producción en todos los campos de la economía nacional. Nada hay sin ello».

La directiva del Partido Comunista de Chile y Salvador Allende, habían impuesto la tesis de congelar el proceso bajo el lema de «consolidar lo que tenemos, primero, para después avanzar». Pero ocurría que lo «que tenemos» era lo que definía Vuskovic: un poder económico sustancial en la burguesía, un área social de la economía inocua para poder impedir el sabotaje de la producción por parte de los enemigos del Gobierno, unas Fuerzas Armadas en constante preparación para «el asalto final al Poder» y una clase trabajadora frenada en sus ímpetus revolucionarios, desarticulada a diario por todos esos factores combinados y objeto de una relativamente exitosa campaña de propaganda de la oligarquía y el imperialismo.

Nuevo complot militar

Las fuerzas políticas, parlamentarias, judiciales y gremiales desatadas por la ofensiva planificada por la Sociedad de Fomento Fabril para llegar a la meta de derrocar «legalmente» a Salvador Allende, habían comenzado a recibir desde muy temprano el apoyo de los organismos controlados por la Agencia Central de Inteligencia en Chile. Esta ayuda no sólo procedía de los *items* «gastos varios», «gastos de representación» o «propaganda» de las grandes empresas monopólicas chilenas, sino también de empresas

multinacionales como la ITT (que en mayo de 1972 fue requisada por el Gobierno por fraude tributario y por haber participado abiertamente en la conspiración de septiembre-octubre de 1970), la Anaconda y la Kennecott (que habían declarado una verdadera guerra contra el Gobierno de Allende, incluyendo el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, como comenzó a ocurrir a partir del 30 de septiembre de 1972 en Europa).

El esquema del «golpe legal» civil consistía en provocar el deterioro de la situación económica; la acción psicológica a través de los medios de comunicación de masas; una labor de penetración en las Fuerzas Armadas; y la preparación de grupos paramilitares para terrorismo de «apoyo» al deterioro económico.

Entre los grupos terroristas fascistas había dos que sobresalían por su organización y financiamiento: Patria y Libertad y Comando de Ex Cadetes. Habían tenido un origen distinto, pero, con el desarrollo de la situación, habían llegado a tener financiamiento, asesoría y adiestramiento común.

Patria y Libertad fue fundado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, del comando de la candidatura de Jorge Alessandri en 1970. Este abogado estaba ligado por medio de Roberto Zúñiga, a los intereses financieros del grupo Matte-Alessandri, de los Edwards y de «los demócratas radicales» en contacto con la Anaconda. En Patria y Libertad figuraba el periodista Rafael Otero Echeverría, antiguo servidor incondicional del imperialismo norteamericano, que lograría infiltrarse por un corto tiempo en la agencia cubana Prensa Latina, en Santiago, robándole después dinero y equipos. Otero Echeverría, desde muchos años antes, se había integrado a la Internacional anticomunista, dirigida por la CÍA, y era un protegido del grupo oligárquico de los Yarur, el cual también aportó dinero a Patria y Libertad desde sus comienzos.

Patria y Libertad fue planificada y creada como grupo fascista, bajo la directa supervisión del entonces secretario de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, Keit W. Wheelock. Este personaje

aparece en el libro-denuncia *Quién es quién en la CÍA* con una serie de acciones, en diversos países del mundo, destinadas a derribar Gobiernos por cuenta de los consorcios gigantes de los Estados Unidos. Sin embargo, sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron los suficientes porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífice intelectual del asesinato «por traición» del general René Schneider. Sólo la Marina, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo al adiestramiento y provisión de armas de gran calibre a Patria y Libertad. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe militar, el teniente coronel Osear Haag Blaschke, para contrabandear armas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindados Número 2.

Este grupo fascista se vinculó estrechamente a los latifundistas de las provincias sureñas, llegando a dominar la radio Sociedad Nacional de Agricultura, en Santiago, y teniendo entre sus miembros dirigentes a Benjamín Matte, presidente de ese organismo gremial oligárquico. Los oligarcas industriales, por su parte, pusieron al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz, como «miembro secreto» de la directiva nacional («jefatura», según el lenguaje de los fascistas), para vigilar, sobre todo, el buen uso de los fondos que los grandes industriales ponían a disposición de los terroristas.

El segundo grupo era el Comando de Ex Cadetes, que surgió después de que el director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, coronel Eduardo Labbé, se negó, en diciembre de 1971, a rendir honores militares a Fidel Castro, de visita entonces en Chile.

Labbé era del grupo de los «duros». Estaba estrechamente vinculado a los generales Alfredo Canales Márquez y Hernán Hiriart, y cuando se descubrieron los complots de esta gente en

marzo de 1972, Labbé fue llamado a retiro.

El Comando de Ex Cadetes tenía como «contacto» con la Embajada de los Estados Unidos al periodista chileno Federico Willoughbly McDonald, que desde hacía años se cubría con la fachada de «jefe de relaciones públicas de la Ford Motor Company en Chile». Willoughbly McDonald, valiéndose de su condición de civil, pero al mismo tiempo estrechamente relacionado al equipo de la CÍA en la Embajada de los EEUU (formado por Joseph F. Manus, Daniel Arzac, Dean Hinton, Frederick Lastrash, Keith Wheelock, Arnold Isaacs, Donald H. Wiplers, Raymond A. Warren, James Anderson y John B. Tripton), tuvo la misión de «contactarse» con altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Los mismos clanes oligárquicos que financiaban a Patria y Libertad financiaban el Comando de Ex Cadetes, sólo que este gasto era mucho menor porque este comando, al revés que Patria y Libertad, era un grupo fascista de acción, de «encargos» y de «banco de información» sobre las actividades de la gente de izquierdas. Era realmente un grupo satélite de la CÍA en Chile, y fue uno de los que formó parte del «plan Yakarta», aparecido en 1973, para asesinar a dirigentes y periodistas de la Unidad Popular. En septiembre de ese año, los generales fascistas obtuvieron del Comando de Ex Cadetes una gran ayuda para buscar, ubicar, torturar, interrogar y asesinar a miles de dirigentes populares.

A mediados de 1972, se estimaba que el Comando de Ex Cadetes estaba compuesto de unos 350 miembros repartidos, principalmente, en Santiago, Valparaíso y Concepción.

En septiembre de 1972, cuando estos grupos fascistas habían comenzado a cumplir con su parte en el plan de la Sociedad de Fomento Fabril y sabotearon líneas férreas, puentes, caminos y torres de alta tensión, además de asaltar y golpear a dirigentes sindicales y políticos de nivel medio y bajo, la situación económica se deterioraba rápidamente debido a la imposibilidad de controlar, por parte del Gobierno, la acción de los grandes empresarios

privados para bajar la producción, no invertir, especular y paralizar el aparato productivo en sectores alternativos.

En esos días, la Sociedad de Fomento Fabril ya había pasado la voz a sus agentes en la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el poder judicial, la Contraloría y los organismos gremiales empresariales y los profesionales en manos de representantes directos de la oligarquía, que «es necesario pasar a la última etapa»: la etapa del paro general de los patrones de todo el país.

En una fiesta en Viña del Mar, una noche, se reunieron altos jefes de las Fuerzas Armadas, y entre ellos, el general de brigada Alfredo Canales Márquez y el contralmirante Horacio Justiniano. El general Canales, muy borracho, confidenció a Justiniano que «tenemos en la sartén al hijo de puta». «Hijo de puta», en el lenguaje del señor general, quería decir «el Presidente de la República». Y agregó: «Este mes lo cagamos». El contralmirante Horacio Justiniano quedó muy preocupado, porque él nada sabía de que se proyectara un golpe militar. Ya en Santiago, le preguntó al general Prats de qué se trataba. Prats consultó con sus generales de la guarnición de Santiago, y éstos llegaron a la conclusión de que Alfredo Canales Márquez era «un peligro para la seguridad de las Fuerzas Armadas» al hablar así cuando se emborrachaba. El cuerpo de generales estuvo de acuerdo en que no se podía realizar «una planificación adecuada para vencer al enemigo (el Gobierno de Allende) atacándolo oportunamente y valiéndonos de sus debilidades, si hay personal nuestro que lo pone sobre aviso».

La reunión de los máximos mandos del Ejército en Santiago se había hecho sin la presencia de Canales Márquez, y allí se acordó llamar a retiro al general para evitar el alerta en el Gobierno. Se estuvo de acuerdo en «denunciar a Canales ante el presidente Allende» y decirle que el SIM había descubierto a tiempo el complot, el cual no tenía ramificaciones serias. Con eso, dijeron los generales, «continuamos haciendo confiar a Allende en nosotros, y podremos seguir a la expectativa de los hechos, sin interferir con las maniobras de los partidos políticos para sacar a Allende del

Congreso». A Canales, los generales le dieron la explicación de que había sido el propio presidente Allende quien había llamado a Prats para denunciarle el comportamiento de Canales en la unión social de Viña del Mar, y había exigido su retiro de las filas.

Esto fue lo que el 14 de septiembre de 1972 denunció públicamente Salvador Allende como «el plan septiembre» para «derrocarlo». Se basó en las informaciones que el general Prats le había llevado. Pero lo que Allende no sabía era que en verdad había un plan, pero en octubre.

Octubre de 1972

En ese plan, planificado por la Sociedad de Fomento Fabril, y febrilmente apoyado por la CÍA, no figuraban las Fuerzas Armadas. Era una conspiración civil para detener al país, ponerlo al borde del colapso total y obligar con ello a renunciar a Allende, tras perder un plebiscito que debía convocar como única manera de sacar al país de la paralización. La SOFOFA y la CÍA estimaban, en septiembre, que octubre era una buena fecha porque ya la situación de «enflaquecimiento del apoyo popular al Gobierno es mucho, por las alzas, colas para comprar alimentos, escasez de todos los productos y la inoperancia del Gobierno».

El día 10 de octubre, a propósito de un proyecto del Gobierno de formar una compañía estatal de transporte camionero en la provincia de Magallanes, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín (hombre ligado al «sindicalismo libre» de los Estados Unidos), paraliza a sus asociados en todo el país «en señal de protesta contra la dictadura estatal marxista». Se pliegan a su paro la Confederación del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille (democratacristiano del equipo de Frei), «en defensa de la libertad de trabajo», y lo siguen la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular (dirigida por democratacristianos), Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad

Nacional de Agricultura, Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros y Colegio Médico. Se suman técnicos y empleados de algunos bancos comerciales todavía no estatizados... En suma, todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño sector de empleados se declaran en paro indefinido y levantan como bandera lo que llaman «el pliego de Chile». El «pliego» contenía exigencias políticas de variado orden, pero su esencia era destruir todo lo avanzado en la aplicación del programa de la Unidad Popular.

El presidente Allende nombra «interventor» en la locomoción colectiva de Santiago al general de brigada Hermán Brady Roche, director de la Academia de Guerra. El general Brady, del grupo de los «reformistas», hace todo lo necesario que, al revés de lo que le pedía Allende, los microbuses y taxibuses no se pongan en movimiento. Alega que hay tres mil quinientos vehículos de ese carácter en Santiago, que la guarnición de la capital tiene menos de siete mil hombres, y como tendría que poner un soldado en cada microbús y taxibús para que pudiera trabajar protegido de los sabotajes de los comandos fascistas, haciendo dos turnos de ocho horas tendría que ocupar siete mil soldados solamente en eso, dejando sin guarnición militar la ciudad. La excusa era esa, pero la verdad era otra.

El general Brady estaba recibiendo instrucciones de su grupo de generales «reformistas» para «dejar que Allende se ahogue solo». «No le demos apoyo de ningún tipo, pero sin que se note.»

Pero, de improviso, comenzó a surgir un personaje que ni los miembros de la Sociedad de Fomento Fabril, ni la CÍA, ni los generales de las Fuerzas Armadas habían tomado en cuenta. Ocurre que mientras los parlamentarios demócratacristianos y nacionales, a través de las radios y diarios con ediciones extra, vociferaban todo el día que «el país ha caído en un colapso», «todo Chile está detenido», «los trabajadores exigen que Allende renuncie o llame al plebiscito», en las calles, caminos, asentamientos campesinos,

fábricas, oficinas públicas y poblaciones se comienzan a ver camiones transportando carga, vehículos llevando pasajeros, miles de obreros, silenciosos, con los puños cerrados y la mirada hosca, caminando por las calles hacia su trabajo todos los días; máquinas funcionado, arados labrando la tierra. En suma, el país caminando. Caminando a medio tranco, es cierto, pero caminando. Todos los patrones en sus casas y los trabajadores haciendo caminar las fábricas. Todos los grandes dueños de la tierra en la ciudad y los campesinos haciendo germinar la tierra.

Comenzó a verse una movilización popular gigantesca. Obreros, campesinos y empleados, reforzados por los estudiantes, salieron a combatir el paro patronal.

El Gobierno había decretado zonas de emergencia (control militar) en las veinticinco provincias de Chile, pero no se veía ni un solo soldado allanando casas de patrones para obligarlos a ir a trabajar. Sin embargo, se veían miles de obreros trabajando. A medias, es cierto, porque tenían que formar brigadas de choque para repeler los criminales atentados de los fascistas. Pero impedían el colapso económico.

En las barriadas industriales de Santiago, comenzaron a aparecer con personalidad propia los llamados «cordones industriales». Se habían comenzado a formar en junio de ese mismo año, llevados por la necesidad de combatir de alguna manera el sabotaje patronal, el mercado negro, la especulación y la escasez de materias primas industriales. Habían nacido como «organizaciones de trabajo, comercio, planificación laboral y defensa contra los enemigos de clase» en la zona industrial de Los Cerrillos, al sudoeste de Santiago. Habían sido vilipendiados por algunos políticos de los propios partidos de la Unidad Popular, calificándolos de «organizaciones extremistas contrarrevolucionarias» manejadas por «ultras».

Ahora, en octubre, mostraban su fuerza. Hacían caminar la industria, ocupaban los monopolios industriales, y sin patrones, sin técnicos, sin gerentes, los hacían caminar. Hacían asambleas y se

discutía esto: «¿Qué plazo les fijamos a los momios (reaccionarios) para que vuelvan a trabajar?» O también: «Debemos organizarnos en brigadas armadas populares para derrotar definitivamente a nuestros enemigos... Los militares están ayudando a los patrones con su pasividad... El problema tenemos que resolverlo nosotros mismos, el pueblo».

Los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas recibían informes diarios sobre la «movilización popular.» Y también otro tipo de informes. Informes internos de «las instituciones». Con el espectáculo del país funcionando sin empresarios, sin patrones, algunos mandos militares habían expresado, admirados: «Estos rotos se la pueden», o algo más específico: «El Gobierno de Allende nos merece respeto... Está haciendo algo extraordinario.»

Es decir, la puesta en tensión de todas las fuerzas durante el desarrollo del «plan octubre», había dejado al descubierto la existencia de un grupo de mandos militares «simpatizantes de Allende». La situación era grave para quienes habían pensado que había total coherencia ideológica en la estructura militar.

Y se hacía más grave si, como lo señalaban los informes del SIM, había «un número cercano a los ochenta mil obreros movilizados sólo en la provincia de Santiago». Era como para pensarlo: ochenta mil obreros en ánimo de combate, con una guarnición militar de cinco o seis mil hombres.

Los generales «reformistas», «duros» y «constitucionales» se reunieron para fijar «una táctica para el difícil momento». Se llegó a un acuerdo general de «apoyar a Allende para una salida política». ¿Por qué? Porque de ese modo se puede «detener a tiempo la furia popular», la cual las fuerzas armadas «difícilmente podrán destruir sin entrar en una guerra civil prolongada, de desgaste», que dejaría al aparato militar, aun en el caso de vencer, semidestruido e inerme «frente a sus enemigos externos», y fácilmente «vulnerable frente a los enemigos internos»; porque la economía está tan deteriorada que si sumamos el efecto del actual

paro al que vendría con una guerra civil, «nos desmoronaríamos», pasando a ser «los parias de América Latina» y «nuestro país se desmembraría»; porque los políticos civiles «se han demostrado incapaces de obligar a Allende a renunciar».

Al mismo tiempo, los oligarcas de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, viendo el mismo paisaje de movilización popular, y siendo testigos de la «pasividad» de las Fuerzas Armadas, instruyeron a sus políticos para que buscaran una «salida política de transacción», abandonando la meta, por ahora, de derrocar a Allende.

En el Gobierno, por consejo de algunos dirigentes del partido socialista, se le sugiere a Allende que nombre un Gabinete que tenga al general de Ejército y comandante en jefe Carlos Prats González como ministro del Interior (cargo equivalente a vicepresidente de la República), para dar una imagen de fuerza y de «apoyo al Gobierno» de las Fuerzas Armadas.

Se hace la proposición al general Prats, éste consulta con sus generales y con los mandos superiores de la Marina y la Fuerza Aérea, y se llega a la conclusión de que la proposición es buena porque permite las alternativas siguientes: Controlar desde el Ministerio del Interior (a cargo de todo el aparato policial chileno) las actividades de los trabajadores y sus organizaciones «no clásicas», a fin de estudiarlas con precisión; avanzar en la tesis de los generales «constitucionalistas» de llegar a formar un Gobierno Allende-FF.AA.; dar un respiro a una situación crítica en grado máximo, para llegar hasta las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, que son una «oportunidad absolutamente constitucional» de destituir constitucionalmente a Allende y reemplazarlo por un «demócrata probado»; tener tiempo para «revisar los mandos de las instituciones», puesto que habían sido detectados «focos de opinión extremista» entre ellos, y cambiarles destinación, quitándoles mando de tropa a los que lo tuvieran; fijar una táctica adecuada al momento para la idea general

de los altos mandos militares de «prepararse para gobernar el país».

Sin embargo, estos razonamientos no les fueron comunicados a los cómplices del «plan octubre», Eduardo Frei y Onofre Jarpa, principales interesados en fomentar un golpe militar que pudiera conducir, a uno de ellos, a la presidencia. A estos políticos se les explicó que las Fuerzas Armadas no estaban todavía en situación de manejar el país, y por eso no habían podido hacer nada en el paro.

El 2 de noviembre, Allende anuncia cambio de Gabinete: ministro del Interior, el general comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González; ministro de Obras Públicas, el contralmirante Ismael Huerta; ministro de Minería, el general de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda.

El 5 de noviembre, Allende sale por dos semanas del país, en gira a Argelia, URSS, Marruecos y Cuba, y cortas estancias en Caracas y Lima. Queda como jefe de la nación el general Prats. Cuando Allende regresa Prats le entrega el mando constitucional. Parecía el mejor momento de seguridad para el Presidente y, sin embargo, no lo era.

3

Los Generales dicen "okey"

La situación no era buena para Allende porque, mientras él viajaba por diversos países, en Washington, el Latinamerican Desk del Pentágono analizaba lo sucedido durante el paro del mes de octubre, y llegaba a la conclusión de que era necesario planificar, antes de que fuera tarde, «en cooperación con las Fuerzas Armadas chilenas» el derrocamiento de Allende. El Pentágono, a partir de la experiencia de octubre, había llegado a la conclusión que «la insurrección popular en Chile está en el punto de despegue» y hay que impedirle hacerlo. Del mismo modo, estimó que Salvador Allende «ya no estaba en posición de controlar la insurrección popular» y, por eso mismo, resultaba inocuo no contribuir a derrocarlo y reemplazarlo por un régimen duro, de fuerza, que desarticulara la organización de los trabajadores a fin de prevenir el peligro subversivo «desde abajo».

Durante los catorce días que Allende estuvo fuera de Chile, en Washington, los generales del Pentágono, sin consultar o informar a Nixon, su Presidente, decidieron dar «luz verde» para que los generales chilenos intentaran derrocar a Allende de una manera eficaz, drástica y segura.

Cuando en noviembre de 1972 Salvador Allende fue recibido por el general Carlos Prats, Vicepresidente de la República, y le hizo entrega del mando de la nación, ya estaban en la capital los emisarios del Pentágono para iniciar las conversaciones con los generales chilenos dispuestos a intentar la gran aventura militar. Y en esa aventura, por decisión del Pentágono, debía quedar fuera Carlos Prats González. De tal modo que ni Prats ni Allende sabían, el 19 de noviembre de 1972, que los días del Gobierno constitucional estaban contados, y los habían contado en inglés.

Y el asunto no era como para tomarlo en broma. El informe *Octubre en Chile* preparado por el Latinamerican Desk, había sido puesto en la mesa del presidente del cuerpo de generales responsables de divisiones administrativas en el Pentágono, el almirante Thomas Moorer. Y el señor almirante había dado su aprobación a las «conclusiones» del informe.¹

Y los hombres del Pentágono en la Embajada de los Estados Unidos en Chile conocedores en detalle de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas, al revés que la CÍA que siempre tuvo una sorprendente ignorancia sobre el pensamiento de los altos mandos militares chilenos (lo cual la hizo cometer errores graves tanto en su complot de septiembre-octubre de 1970 como en el de octubre de 1972), se conectaron con «los hombres precisos».

Ya en noviembre de 1972, los enviados del Pentágono hablaron con el general Gustavo Leigh Guzmán, segundo hombre de la Fuerza Aérea; con el vicealmirante José Toribio Merino, segundo hombre de la Marina; con los generales «reformistas» Washington Carrasco, Herman Brady y Sergio Arellano Stark; con los generales «duros» Manuel Torres de la Cruz y Óscar Bonilla; y con el general «constitucionalista» Héctor Bravo Muñoz. Les dijeron escuetamente: Hay que prepararse para derribar a Allende y reemplazarlo por un Gobierno duro, fuerte, que haga trizas la estructura de poder naciente de los trabajadores. Es una carrera contra el tiempo. Se trata de «nuestra supervivencia». Si «el populacho tiene vía libre para seguir el camino de octubre, en un año o dos nos arrollará». Y los enviados del Pentágono establecieron un razonamiento que se esparció, más tarde, como reguero de pólvora por las filas de los altos mandos chilenos. El razonamiento, aproximadamente, era así:

Los informes de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. demuestran que el Perú se está preparando para una guerra con Chile y recuperar las provincias perdidas en la guerra del siglo pasado. De fuentes fidedignas sabemos que los generales peruanos se están armando con blindados pesados y

harán compras en la Unión Soviética (por supuesto, los enviados del Pentágono no contaron a los generales chilenos que ellos habían planificado suspender las ventas de armas al Perú, precisamente para obligar a los gobernantes peruanos a reponer su parque en el mercado de la Unión Soviética, y tener así «excusa estratégica» para iniciar una campaña contra el Perú, una vez resuelto el problema chileno). También sabemos que el Perú cuenta con una división aerotransportada para su ataque a Chile, y ha construido una carretera central, muy amplia, de norte a sur, que llega al límite con Chile. El Perú atacará en uno o dos años más, tal vez tres, aprovechándose del momento en que la economía chilena esté destruida por el marxismo. Chile no es la Unión Soviética de 1917, no podrá resistir ese ataque y será vencido. Nuestros cálculos nos señalan eso. Solamente una alianza con Brasil podrá detener «los afanes revanchistas» de los peruanos. Pero el Gobierno brasileño nos ha informado que apoyará a Chile solamente si hay un Gobierno de confianza. Nunca apoyará al actual. La situación es simple: la supervivencia de Chile como nación no sólo está amenazada por el marxismo que quiere conquistarlo totalmente para que sirva de base a la Unión Soviética contra los Estados Unidos y «todo el mundo civilizado», sino también por los enemigos externos que quieren desmembrar su territorio y recuperar las ricas tierras minerales del extremo norte. Perú recibiría el apoyo de Argentina, nosotros (el Pentágono) podríamos sujetar a Bolivia (no sabemos por cuánto tiempo), pero con el Gobierno de Allende funcionando, las Fuerzas Armadas chilenas serían derrotadas. Ustedes (los generales chilenos) comprenderán la responsabilidad que se echan encima al enterarse de estos hechos.

El «informe» del Pentágono fue como un narcótico para muchos generales. Era la «justificación» para participar en la trama para el derrocamiento de Allende. Estados Unidos les había dado una justificación «patriótica» para inclinarlos al lado que temían: de destruir la democracia burguesa chilena. Muy pocos generales

pusieron en duda el informe del Pentágono. Entre esos pocos, estaba el general Carlos Prats González, comandante en jefe. La palabra que utilizó para definirlo fue «grotesco».

Pero el general Carlos Prats, en verdad, ya no importaba nada. Después de haberse unido estrechamente, a partir de noviembre, los generales «reformistas» y «duros», existía una mayoría sustancial a favor del derrocamiento de Allende. Por lo demás, la ayuda ofrecida por el Pentágono y su anuncio de que el Gobierno brasileño también estaría a su lado, daba mayores ímpetus a la idea de reemplazar el Gobierno civil por uno militar, «sin plazo fijo de término».

Los generales chilenos, en la reunión final con los enviados del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, hicieron una contraproposición que fue aceptada. Dijeron que darían de plazo a «los organismos constitucionales» chilenos para que derrocaran a Allende hasta marzo de 1973. Si en esa fecha los partidos demócratacristiano y nacional no eran capaces de sacar dos tercios de parlamentarios para destituir al Presidente por simple mandato del Congreso, entonces se prepararían rápidamente para dar un golpe militar eficaz, drástico y masivo.

La maquinaria quedó alineada en su punto de partida.

El fracaso político

En enero de 1973, en la ciudad de Viña del Mar, se reunió la directiva ampliada de la Sociedad de Fomento Fabril. El tema de discusión era obvio: un resumen de la fracasada campaña del año anterior para derrocar al Gobierno constitucional. Se leyó un resumen hecho por las autoridades oficiales del Gobierno, en noviembre de 1972, sobre los efectos materiales del «paro de octubre»:

«El paro patronal de octubre perseguía la caída del Gobierno Popular y en esto fracasó rotundamente. Pero en lo que logró golpear al país fue en sus objetivos económicos. Provocar un

desbarajuste en los transportes, en la circulación y en la distribución de los productos de consumo, de las materias primas y combustibles. Pese al esfuerzo de los obreros que mantuvieron en funcionamiento las industrias, pese al empeño de la juventud que suplió con su trabajo voluntario la carga, descarga y movilización de los productos, pese a la protección de las Fuerzas Armadas, el enemigo logró inferir serios e irreparables daños a la economía nacional, a la producción presente y futura.

Durante los 26 días del paro patronal se perdieron importantes volúmenes de productos perecederos, entre ellos más de 10 millones de litros de leche que no pudieron llegar a las plantas. Hubo que sacrificar miles de cerdos y aves que no alcanzaron a recibir el alimento. El no traslado oportuno de las semillas, de los fertilizantes, implicó que habrá bajas de siembras y de los rendimientos que podrían haberse logrado en numerosos cultivos. Gran cantidad de industrias, aunque no se paralizaron, debieron disminuir su producción para no agotar sus existencias de materias primas. Las fundiciones de Paipote, Potrerillos, Ventanas y Chagres dejaron de producir más de 5.000 toneladas de cobre porque se interrumpió el transporte de concentrado desde los grandes yacimientos mineros. A otras fábricas les afectó la disponibilidad de combustible. Se atrasaron muchos proyectos de construcción e inversión. Quedaron postergadas reparaciones urgentes porque no llegaron a tiempo elementos, piezas o equipos indispensables. Todo ello condujo a la baja apreciable en la producción de octubre lo que repercutirá en el índice del año y de los próximos meses.

»Desde el punto de vista financiero, el Gobierno experimentó la pérdida de los ingresos de las plazas de peaje; se dejaron de percibir los impuestos de la compraventa —la más importante de las recaudaciones tributarias— y se mermaron considerablemente otras fuentes impositivas. Ello significó nuevos déficit financieros y emisiones monetarias adicionales para evitar males mayores.

«Con todo, la reacción no se la pudo. Se mostró más grande la

fuerza del proletariado, de la aplastante mayoría de los campesinos, de la juventud, las mujeres, los sectores patriotas de la pequeña y mediana industria, el comercio y los transportes que desafiaron las amenazas de los golpistas. El pueblo consciente y organizado, comprobó su capacidad para sostener la vida del país en las más difíciles condiciones.

»La lección de octubre es que la reacción, con todos los inmensos recursos y el respaldo de la conspiración internacional, puede ser derrotada.»

Los asistentes a la reunión de la oligarquía industrial en Viña del Mar estuvieron de acuerdo en que este breve informe del Gobierno era correcto: se había herido gravemente a la economía nacional, pero no a la voluntad de combate de los obreros, campesinos, empleados y demás sectores que apoyaban el Programa de la Unidad Popular. Se había puesto la producción nacional al borde del colapso, pero el Gobierno de Allende seguía en pie y en aparentes mejores condiciones que antes. Se había conseguido que las Fuerzas Armadas no actuaran con decisión en favor del Gobierno; pero, al final de los 26 días críticos, frente a la atemorizante movilización del pueblo, había aparecido integrando el Gabinete del presidente Allende, como Vicepresidente de la República, un general.

Sin embargo, también estuvieron de acuerdo en que había que seguir en el empeño de botar a Allende. Durante el paro de octubre, solamente en los 26 días que duró, habían gastado los oligarcas industriales más de 100 millones de dólares en pagos a gentes en huelga. Ese dinero provenía, en gran parte, de sectores industriales brasileños, argentinos y venezolanos. Y esa gente quería resultados, no excusas.

Examinando la situación con mayor precisión, los oligarcas industriales notaron que el alza del costo de la vida en diciembre de 1972, había terminado con un 99,5 %, record de inflación para Chile, y que el aparato productivo estaba tan deteriorado en octubre, que la escalada de la escasez de alimentos y productos

esenciales era tremenda y las colas para conseguirlo duraban días enteros en diversos barrios de la capital. En suma, se podría predecir que durante los meses de enero y febrero de 1973 habría una estampida inflacionaria, un deterioro considerable de las condiciones de vida y, por lo tanto, una capacidad de «influir favorablemente en la opinión pública para que vote en contra del Gobierno en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973».

Se acordó entonces pedir apoyo, principalmente, a empresas multinacionales de los Estados Unidos y a las asociaciones industriales de Brasil, con ello se pretendía formar una «caja electoral» para los candidatos a parlamentarios de la Democracia Cristiana, Partido Nacional, Democracia Radical y otros grupúsculos de derecha. La caja resultó enorme. En sólo siete días, entre el sábado 17 y el viernes 23 de febrero de 1973, el candidato a senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva, gastó en propaganda de diarios, revistas, afiches, folletos, televisión, radio y movilización callejera, dos millones de dólares.

La Sociedad de Fomento Fabril creía, en enero de 1973, que con esas condiciones de deterioro económico, jamás vistas en Chile hasta entonces, los candidatos de la reacción llenarían los dos tercios de los escaños parlamentarios. De esta forma, cuando el 21 de mayo siguiente comenzara a funcionar el nuevo Parlamento, Allende podría ser destituido constitucionalmente.

Sin embargo, a pesar de haberse fijado esa estrategia a corto plazo, en la reunión de Viña del Mar se previó una alternativa. La alternativa de que «la UP saque más de 40 % de los votos». Si esto ocurría, «aunque parece muy remoto», «nuestra única salida es la guerra civil». De modo que al finalizar su reunión en Viña del Mar, la oligarquía industrial chilena acordó, al mismo tiempo que poner todas sus fuerzas al servicio de la campaña electoral, no dejar en ningún instante de alimentar a los grupos fascistas Patria y Libertad, Comando de Ex Cadetes, etc., para que siguieran cumpliendo con sus tareas de sabotaje y de infiltración en las

Fuerzas Armadas.

La Sociedad de Fomento Fabril discutió con la Sociedad Nacional de Agricultura y con la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y estuvieron de acuerdo, en general, con los mismos puntos.

Se desató la campaña electoral con el lema público por parte de los reaccionarios de «conseguir los dos tercios para destituir a Allende». El lema del candidato a senador nacional por Santiago, Onofre Jarpa, era: «No nos hace falta un nuevo Parlamento, sino un nuevo Gobierno».

Sin embargo, la campaña electoral, por parte de los partidos de derecha, se dio de tal modo, que pronto eran muchos los que daban cuenta que la elección misma era un mero pretexto. El diario de izquierda «Puro Chile», por ejemplo, durante todo el mes de febrero denunció en sus editoriales que «a la Sociedad de Fomento Fabril, a la Sociedad Nacional de Agricultura y a la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, no les interesa que sus políticos, como Frei y Jarpa, lleguen al senado para «legislar». Les interesa que lleguen para derrocar al Gobierno de Allende de alguna manera recubierta de «constitucionalidad». Así, en esencia, para la derecha en este país, la obtención de los dos tercios en el Parlamento es apenas un accidente. Se puede dar o no se puede dar. Si lo consiguen, destituirán a Allende después del 21 de mayo. Si no lo consiguen, llevarán adelante su complot para destituirlo de todas maneras, recurriendo a los altos mandos fascistas que en nuestras Fuerzas Armadas se han dejado engañar por sus cantos de sirena. El peligro del golpe comenzará en la misma noche del 4 de marzo. El imperialismo norteamericano ya ha dado orden a sus lacayos en Chile que derroquen al Gobierno constitucional de cualquier manera. Por eso, el pueblo tiene que estar alerta. No tiene que dejarse engañar con la idea de que «en las elecciones se resuelve el problema del Poder». En las elecciones no se resuelve nada. El problema del Poder se resuelve preparándose para enfrentarse a los fascistas en su propio terreno y con sus propias

armas. Claro, es cierto que hay que luchar para que el enemigo no saque los dos tercios en marzo. Pero eso es fácil conseguirlo. Se ve en la calle, en las poblaciones, en las fábricas y los asentamientos campesinos. Lo duro es lo otro. Y eso hay que conseguirlo. Organizar, los obreros como dirigentes, a los campesinos, empleados y demás sectores patriotas entre los pequeños y medianos empresarios, para formar un muro imbatible para la contrarrevolución fascista, y enseguida destruirla con sus propios métodos».

Este tipo de editorial en el diario «Puro Chile» causaba muchos problemas en el seno de la Unidad Popular (excepto en un sector importante del partido socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde había el mismo pensamiento que en el periódico), la cual, bajo el mando personal de Allende, y con el apoyo total de la directiva del partido comunista, había afrontado las elecciones parlamentarias de marzo como «la única» tarea de las organizaciones populares, que habían demostrado una enorme fuerza durante el paro empresarial de octubre de 1972. Basándose en esta línea general, se había dado una lucha muy fuerte por reemplazar las directivas de los cordones industriales, que estaban en manos de sectores avanzados del partido socialista, del MIR, del PCR y de partidos independientes de izquierda, por cuadros que siguieran la senda indicada por Salvador Allende y sus ministros comunistas: a «Hacer la revolución es producir».

Sin embargo, la idea de los cordones industriales era otra. Era la de formar «batallones de masas» para detener la contrarrevolución armada. Esto fue catalogado de «infantilismo de izquierda» por las publicaciones oficiales de la UP controladas por el Presidente y por los partidos que le acompañaban.

Para los redactores de diarios como «Puro Chile» el problema también estaba, además de consolidar el pensamiento de «prepararse para la lucha», en advertir al pueblo de que la conspiración fascista tenía hondas raíces en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sin que esta denuncia significara el cierre del periódico

por «injurias a las Fuerzas Armadas». Este hecho refleja cómo estaban atadas las manos de los izquierdistas en ese momento por todo el aparato «legalizante» del proceso que se desarrollaba en nuestra sociedad.

Las elecciones

Para nadie fue una sorpresa los resultados de las elecciones parlamentarias. Dos o tres semanas antes del 4 de marzo, un informe de «sondeo de la opinión pública» realizado en Santiago, Valparaíso y Concepción para el grupo demócratacristiano de Eduardo Frei, indicaba que la Unidad Popular bordearía el 40 % de los votos. Es decir, estaba claro que la oposición no iba a sacar los dos tercios necesarios para destituir a Allende y reemplazarlo por el Presidente del Senado mientras se llamaba a nuevas elecciones presidenciales.

Los propios candidatos demócratacristianos y nacionales montaron la trampa psicológica en que cayeron. Públicamente hicieron toda su propaganda en el sentido de «sacar los dos tercios». Cuando en la noche del 4 de marzo estuvo claro que la Unidad Popular había sacado casi el 44 % de los votos, la masa reaccionó como si la combinación de partidos de Gobierno hubiera obtenido una «aplastante» victoria sobre las maniobras de la oligarquía y el imperialismo. En las propias palabras de Salvador Allende, la interpretación que se dio al resultado de las elecciones, por parte de la Unidad Popular, fue la siguiente, según el texto incluido más tarde en su Mensaje al Congreso del 21 de mayo de 1973:

«Las elecciones parlamentarias del 4 de marzo han demostrado algo que desespera a algunos de nuestros adversarios: el funcionamiento regular de los mecanismos político-institucionales a través de los cuales se expresa la voluntad popular. Contrariando los designios de quienes no han cesado en sus intentos de destruirlos, porque veían en las elecciones «una meta sin destino»,

la jornada del 4 de marzo fue clara manifestación de defensa del régimen democrático.

»Por otra parte, la significación del resultado electoral la da el contexto histórico en que ha tenido lugar. La política gubernamental se ha traducido en el apoyo masivo que han recibido los partidos políticos que lo sustentan, *el más alto que Gobierno alguno haya alcanzado en los últimos veinte años tras veintisiete meses de gestión*. El 4 de marzo ha sido reafirmada la vía chilena al socialismo.

»De ahí que, en la consulta nacional del 4 de marzo, se manifestara no sólo el respaldo al Gobierno, sino la reafirmación de una voluntad revolucionaria. Es algo más que un simple deseo de cambios. En una coyuntura económica tan desfavorable como la que atravesamos, es la decisión popular de avanzar hacia el socialismo.»

El mismo día 5 de marzo, el siguiente de las elecciones, el entusiasmo de las masas recibe un balde de agua fría. En todos los cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos y juntas de abastecimientos y control de precios se habían organizado reuniones para «analizar el resultado electoral y dar un salto adelante en la formación del poder popular», bajo la forma general de «mejorar nuestra preparación para afrontar la contrarrevolución armada». Pero estas discusiones se hicieron inocuas porque no pudieron comenzar, ya que el propio presidente Allende y la directiva del partido comunista, iniciaron ese día una violentísima campaña contra «los ultraizquierdistas» que «objetivamente» le hacen el juego al imperialismo y a la oligarquía. Y se comenzó una campaña por volver por otro camino a la consigna de «Hacer la revolución es producir». Se lanzó la de «y ahora, a producir para la revolución».

Poco a poco, los ecos de octubre, que habían renacido en marzo, se fueron apagando para volver a la pugna entre los conceptos de si prepararse para la lucha contra el fascismo armado «es una provocación» o «es una acción revolucionaria». Y los días

siguieron pasando sin que a la conspiración que se desarrollaba en el seno de las Fuerzas Armadas, con un gigantesco apoyo de las oligarquías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la chilena, fuera tomada como un peligro real, y ante la cual no había otra defensa que la movilización de los trabajadores de manera correcta para esa condición objetiva.

Los generales, okey

A la semana siguiente de las elecciones, el grupo de generales en contacto directo con los emisarios del Pentágono, se reunieron varias veces para determinar sus próximos pasos. Una cuestión estaba clara: los políticos civiles habían fallado, no existía esperanza alguna de que Allende fuera destituido por las maniobras de los Frei, Jarpa y demás parlamentarios. Por eso mismo, había que cumplir con las órdenes del Pentágono: hacer el trabajo completo, a cara descubierta, y sin escudarse en los otros grupos de la oligarquía chilena y del imperialismo norteamericano.

En verdad, ya no había angustia en los generales y almirantes. Mientras los políticos se dedicaban en enero y febrero a su campaña electoral, los generales y almirantes se habían dedicado a «estudiar» y a «reflexionar». Habían echado un vistazo a la historia de Chile, en lo corrido del siglo, a la situación latinoamericana y mundial. Habían profundizado en la historia del movimiento obrero, del movimiento campesino y de los partidos de izquierda del país. Habían estudiado los problemas económicos y las crisis periódicas del sistema en la nación. Habían buscado luces... ¡y las encontraron! Fue en un folletito llamado «La Nueva República», que era sencillamente el programa presidencial del candidato derrotado en 1970, Jorge Alessandri Rodríguez. Los generales estaban de acuerdo con los planteamientos generales de esa «nueva República», producto del pensamiento del presidente más conservador que tuvo Chile en los últimos treinta y cinco años.

Las ideas principales escritas en «La Nueva República» eran éstas: «Sólo un gobierno autoritario», que imponga «orden»,

«disciplina» y «rechazo a la politiquería» podrá resolver los problemas de Chile.

«Se trata, entonces, de sustituir la lucha de clases divisionista por una vigorosa conciencia nacional, eminentemente unitaria y solidaria...

»El aporte del capital extranjero al desarrollo económico permite hacer crecer la inversión sin necesidad de postergar los beneficios sociales a una población que los necesita.

»La unidad, la solidaridad y la ulterior movilización de los chilenos serán posibles únicamente si son precedidas por un vigoroso renacer del espíritu nacional.»

Por ejemplo, «los jóvenes estudiarán más y marcharán menos».

«Son muchos los factores que conspiran contra la nacionalidad. El más importante es aportado por el marxismo internacional, representado en Chile por los partidos socialista y comunista».

Estas citas de La Nueva República eran buenas para los generales que habían dicho *okay* al Pentágono.

Pero no lo decían todo. No decían, por ejemplo, que los generales pensaban que el «desquiciamiento de nuestra sociedad» había comenzado a ser un factor grave no solamente desde 1970, con la inauguración del Gobierno de «los factores que conspiran contra la nacionalidad», «los partidos comunista y socialista», sino desde mucho antes, desde 1964, cuando «la Democracia Cristiana, un partido que tiene claras vinculaciones internacionales que lo pueden hacer antipatriótico, dejó en libertad las fuerzas del desquiciamiento con la sindicalización campesina, la reforma agraria sobrepasada y su populismo que soliviantó las aspiraciones del pueblo, con un deslumbramiento que atentó contra el orden».

No decían tampoco que los generales pensaban que, por eso mismo, porque el proceso de «desquiciamiento» había sido tan largo, ya todo el cuerpo de nuestra sociedad está corrompido por falta de «unidad nacional». Que habían sido los «políticos de todos los partidos» los que, por afanes electorales o por deseos de aparecer como «progresistas y avanzados», se constituían en los

verdaderos responsables de la situación y que, por esta razón, el país necesitaba «un saneamiento total». Tampoco decían que los generales chilenos estimaban correcta la apreciación de los generales del Pentágono de que «las Fuerzas Armadas eran la única organización coherente, nacionalmente uniforme, que podía emprender la tarea de la reconstrucción del país»; y que no había ninguna combinación política civil que estuviera en condiciones de emprender una tarea, después de derrocado Allende, que llegara a la meta de desarticular todos los factores del «desquiciamiento»; es decir, la organización sindical obrera y campesina, las juntas de abastecimientos y control de precios, consejos campesinos, consejos comunales, cordones industriales y partidos políticos de izquierdas.

En suma, los generales en contacto directo con el Pentágono estaban de acuerdo en los siguientes puntos principales:

1) El Gobierno que reemplazara al de Salvador Allende debía ser solamente militar, con la inclusión de las tres armas y de Carabineros.

2) Este nuevo Gobierno debía buscar apoyo en los civiles solamente considerándolos como técnicos en materias específicas, y no como miembros de partidos políticos.

3) Todas las ideologías «foráneas» deberían ser erradicadas de Chile, con la acción «moralizadora» de las Fuerzas Armadas.

4) La crisis económica tenía una sola salida: la de que todos los chilenos se pusieran a trabajar, sin tener ninguna oportunidad de participar en discusiones políticas, y que los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, prestarán un sustancial apoyo financiero.

5) Para conseguir ese apoyo financiero había que dar «seguridades al capital extranjero», comenzando por discutir una compensación «razonable» a las compañías norteamericanas del cobre, cuyo mecanismo podría ser anulando el descuento de las rentabilidades «excesivas» planteadas por Allende. (Esto significaba que se dejaba de restar 774 millones de dólares a las

indemnizaciones fijadas en octubre de 1971. Es decir, Chile debería pagar a la Anaconda y la Kennecott una cantidad cercana a los 500 millones de dólares.)

La segunda parte de las discusiones de los generales en la primera y segunda semanas de marzo de 1973, estuvo centrada en cómo llevar a la práctica esas ideas.

Como primera medida, se estableció la de iniciar una labor de «convencimiento» de los generales «constitucionalistas» que todavía seguían apoyando la tesis del comandante en jefe, general Carlos Prats, de «ir forzando las cosas hasta llegar a un Gobierno de Salvador Allende con las FF.AA.». Carlos Prats había informado al cuerpo de generales, en múltiples ocasiones, sobre todo a partir de octubre de 1972, que «hace falta esperar un poco». El presidente Allende ha dicho en reiteradas ocasiones que está aburrido ya de los partidos que lo acompañan, porque no son capaces de dirigir al pueblo por el camino del orden social y la dedicación al trabajo». Carlos Prats expresaba su opinión, a los mandos que se la quisieran escuchar, que el presidente Allende «está llegando a un punto en que se quedará solo, y no tendrá más alternativa que gobernar con las Fuerzas Armadas». Carlos Prats había informado, pocos días antes de las elecciones de marzo que, a su manera de ver, «Allende es un brillante político, de muy buenas intenciones, que desea lo mejor para su pueblo y que tiene la decisión total de impedir una insurrección sangrienta, ya sea de parte de los extremistas de derecha como de los extremistas de izquierda».²

Para los generales «reformistas» y «duros» todas estas informaciones del comandante en jefe del Ejército no eran más que justificaciones para «sus ambiciones personales». Lo que Carlos Prats deseaba, según estos altos mandos militares, es transformarse en el «delfín» de Allende, llegar a 1976 como el candidato presidencial de los partidos de izquierda. Las ambiciones personales «están haciéndole traicionar a la institución», argumentaban personajes como Manuel Torres de la Cruz.

Entonces, todo les indicaba que era correcto dejar fuera de juego a su comandante en jefe, aislarlo de sus simpatizantes en el cuerpo de generales, y sacarlo del buque en el momento indicado para dar el golpe y derrocar a Allende. En ese momento, el general Augusto Pinochet Ugarte, jefe del Estado Mayor y segunda antigüedad del Ejército, aparecía como «constitucionalista», y los conjurados decidieron centrar sobre él la mayor fuerza de las presiones para conseguirlo como aliado, sobre todo para evitar el efecto de debilidad que tendría el insurreccionar a las Fuerzas Armadas descabezando a las dos antigüedades más altas del Ejército.

Del mismo modo, se acordó «trabajar» a los mandos de Carabineros, y se eligió a César Mendoza Duran, como «el primer contacto», ya que había demostrado tener una alta capacidad de odio respecto a Salvador Allende y un neto repudio «a los marxistas».

Respecto a su participación en el Gabinete de Salvador Allende, estimaron que había que pedirle que formara uno sin militares, presentándole la idea de que «ya las Fuerzas Armadas cumplieron con el propósito de garantizar unas correctas elecciones generales y de pacificar los ánimos a partir de octubre pasado». Pero, al mismo tiempo, decidieron dejar en sus puestos a los demás militares que estaban en cargos estatales de responsabilidad con un doble objetivo: el de mantener información fresca «y oportuna» sobre las maniobras internas de los altos funcionarios de la Unidad Popular, y anular influencia en la tropa de los mandos leales a Salvador Allende, que habían mostrado sus simpatías «extremistas» a partir de octubre de 1972; y que, como en el caso del general de aviación Alberto Bachelet Martínez, nombrado por Allende en la Secretaría Nacional de Distribución, estaban «dando un mal ejemplo de lealtad a los extremistas» al conceder entrevistas en las que se avalaban las ideas de quienes pensaban que las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, formadas por «el populacho», debían ser quienes controlaran la buena distribución

de los alimentos en el país. (El general Bachelet fue apresado el día 11 de septiembre, cuando se presentó al Ministerio de Defensa, llevado al campo de torturas de la aviación en la base aérea de Los Cerrillos hasta octubre, y en seguida trasladado a la Cárcel Pública, donde murió el 12 de marzo de 1974, al no poder recuperarse del brutal castigo físico a que fue sometido por los equipos de interrogadores de la Fuerza Aérea chilena.)

Cuando los generales en contacto con el Pentágono estaban discutiendo estos detalles de su operación para derrocar a Allende, los principales mandos de tropas del Ejército, espina dorsal del complot, estaban distribuidos de la siguiente forma. De norte a sur:

División Blindada, con asiento en Iquique, de la provincia de Tarapacá. Comandante de división el general de brigada Carlos Forestier Haebgsen, del grupo de los «duros».

Primera División, con sede en Antofagasta, provincia de Antofagasta. Comandante de división el general Joaquín Lagos Osorio, del grupo de los «constitucionalistas» y entusiasta partidario de la tesis del general Carlos Prats González de formar un Gobierno Allende-FFAA.

Segunda División, con asiento en Santiago, provincia de Santiago. Comandante en jefe el general de brigada Mario Sepúlveda Squella, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas», violento partidario de la desaparición de los políticos civiles de todos los colores, pero con serias contradicciones con otros generales «reformistas», como Herman Brady Roche, en la lucha por el liderato de la situación, lo que le hacía acercarse al general Carlos Prats. Era, junto con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares, el único «reformista» que planteaba abiertamente que «el derrocamiento debe darse en dos etapas» —la primera un Gobierno Allende-FF.AA., y la segunda con las Fuerzas Armadas solamente—, «a fin de evitar un derramamiento de sangre inútil». El general Sepúlveda Squella era, al mismo tiempo, comandante en jefe de la guarnición de Santiago, que comprende ocho regimientos. De ellos, la Escuela

de Suboficiales, el Regimiento Blindados Número 2 y la Escuela de Telecomunicaciones, estaban comandadas por coroneles del grupo de los «duros»; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, por un coronel «reformista»; y la Escuela de Infantería, los regimientos Buin, Tacna y Ferrocarrileros de Puente Alto, por coroneles «constitucionalistas».

Tercera División, con asiento en la ciudad de Concepción, provincia de Concepción. Comandante en jefe el general de brigada Washington Carrasco Fernández, del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas» y ligado estrechamente al Pentágono.

División de Caballería, con asiento en la ciudad de Valdivia, provincia de Valdivia. Comandante en jefe el general de brigada Héctor Bravo Muñoz, aparentemente del grupo de los «constitucionalistas» pero, de hecho, en el grupo de los «reformistas», haciendo el juego de infiltrado en el primer grupo, motivado por razones de ambición personal. Era otro de los comandantes de división en estrecho contacto con el Pentágono.

Quinta División, con asiento en la ciudad de Punta Arenas, provincia de Aisén. Comandante en jefe el general de división Manuel Torres de la Cruz, del grupo de los «duros», virtual jefe de éstos, mientras aparecía como «amigo personal de Allende» y «gran apoyo» para el general Prats. Torres de la Cruz sería encargado de «experimentar» en su división la actuación conjunta de Ejército, Fuerzas Aéreas, Marina y Carabineros contra las organizaciones obreras, vistiendo las operaciones del inocente ropaje de «allanamientos en busca de armas para cumplir la ley sobre control de armas y explosivos».

Como se ve, ya en la primera quincena de marzo de 1973, la alianza de los grupos «reformista» y «duro», más la posición personal del «constitucionalista» Bravo Muñoz, daba un abrumador dominio a los generales que habían decidido decir *okey* al Pentágono y derrocar a Salvador Allende.

Por eso no sorprende la tranquilidad con que los conspiradores

tomaron la tarea, y la lentitud con que fueron montando una a una todas las piezas de su maquinaria infernal para dejarla caer sobre el pueblo de Chile en el momento preciso. Actuaban sobre seguro.

Y tanta fue su tranquilidad, que pudieron llegar al perfeccionismo de actuar con los políticos civiles que los estaban empujando al golpe desde 1970, haciéndoles creer que ellos, los generales, eran un instrumento de esas figuras políticas. El caso que revela toda la dimensión de lo que afirmo es el de Eduardo Frei Montalva, jefe de la fracción más reaccionaria de la Democracia Cristiana. Los generales actuaron en forma tan impecable en este sentido, que Eduardo Frei, aun dos o tres semanas después del golpe del 11 de septiembre, estaba convencido de que al derrocamiento de Allende seguirían rápidamente las elecciones y él sería el candidato de «salvación nacional». Con este propósito Eduardo Frei trabajó hasta el agotamiento desde el Senado de Chile, donde llegó con las elecciones del 4 de marzo de 1973, para convencer a los generales que derrocaran a Allende. Los generales, durante la conspiración, le hicieron creer que así era en efecto, y obtuvieron lo que querían: apoyo masivo de las organizaciones controladas por esos grupos políticos reaccionarios. Fueron tremendas las alabanzas que en los primeros días después del golpe hicieron a los «militares salvadores de la Patria» los políticos, organizaciones y periodistas demócratacristianos. Dieron discursos, se pasearon por el mundo y escribieron libros para alabar a los «héroes con uniforme». Sólo meses después, ya en diciembre, se dieron cuenta con angustia de que habían sido utilizados por los generales, que estaban fuera del juego y, lo más horrible, que habían estado glorificando a un grupo de personas que dirigían una carnicería humana contra centenares de miles de chilenos. Carnicería tan enorme que tenía horrorizado al mundo. Se dieron cuenta que cada palabra escrita en favor de los militares después del 11 de septiembre, equivalía al cadáver de un civil chileno, a una mujer violada por la soldadesca, los oficiales e incluso por mandos de altísima graduación, a un hombre castrado con bayoneta, a un cadáver flotando sobre el río Mapocho con las

manos atadas a la espalda y la huella de una ráfaga de ametralladora en su pecho, a un Salvador Allende asesinado con planificación fría, a un Pablo Neruda dejado morir por negársele atención médica, durante cinco días, para que ocurriera específicamente eso: que muriera.

Ahora o nunca

Pero no fueron sólo los altos mandos militares chilenos los que se reunieron rápidamente después de la noche del 4 de marzo de 1973. Los dirigentes máximos de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio también lo hicieron. Y en sus reuniones, la tesis que habían planteado después del paro de octubre de 1972, quedó reconfirmada. La tesis de que «es imposible derribar a Salvador Allende por medios constitucionales». Es decir, que el fracaso de los políticos tipo Frei y Jarpa para cumplir con el encargo de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, demostrado en octubre, había vuelto a demostrarse en marzo.

Se decidió entonces concentrar todos los esfuerzos en empujar a las Fuerzas Armadas contra Allende. Los monopolistas industriales, comerciales, financieros y agrícolas de Chile razonaron de dos maneras:

1) Solamente si hay un verdadero caos económico, político y social las Fuerzas Armadas se verán obligadas a intervenir y depondrán a Allende.

2) Una vez depuesto Allende, las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el orden social, político y económico y nosotros planificaremos una nueva forma de desarrollo del país.

El día 28 de marzo —veinticuatro horas después de que Salvador Allende admitiera la sugerencia de los generales y cambiara de nuevo la composición de su Gabinete, sacando de él a los representantes de las Fuerzas Armadas—, Orlando Sáenz, pre-

sidente de la Sociedad de Fomento Fabril, hace publicar en «El Mercurio» su intervención de dos días antes como memoria anual de su gestión, en la que se encuentran las líneas generales de los razonamientos aprobados.

Sáenz dice que «la salida de las Fuerzas Armadas del Gabinete» prueba que «ellas han repudiado al Gobierno», porque significa el caos para una nación y eso atenta contra su seguridad y soberanía. Dice que «el propósito de los marxistas» es «destruir a Chile», de modo que no hay que extrañarse de la gravísima crisis económica que afecta al país, y señala que la única salida es un Gobierno «integrador», «fuerte y eficaz», que «haga del Estado un árbitro, pero no un monopolista que asfixie», que tenga la participación activa del «poder gremial», es decir, de las organizaciones de grandes empresarios. Con vocación de profeta, Orlando Sáenz indica que es importante «estar preparados» porque los días que vendrán serán muy difíciles, graves y críticos; en ellos «se decidirá quién triunfa en Chile, si el caos marxista o la democracia». Pide a todos los «demócratas» del país luchar sin descanso, sin tregua, hasta vencer al marxismo», y señala el buen deseo de que «el Presidente de la República escuche nuestras voces».

Pero ésta era sólo la forma pública, o publicable en un periódico como «El Mercurio», cabeza de serie de la conspiración civil, de algo mucho más concreto. Orlando Sáenz, en representación de la Sociedad de Fomento Fabril, había pedido a Eduardo Frei, que a fines de mayo sería elegido Presidente del Senado de Chile, y por lo tanto en «la línea de sucesión de Allende» si éste era declarado «inhábil» para el cargo por el Congreso, que cumpliera una tarea especial, en cooperación con su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona. La tarea era entrar en conversaciones «precisas, francas y directas» con el general Oscar Bonilla Bradanovic para formar un esquema de derrocamiento de Allende y para pedirle que él, como «buen amigo de ambos», hablara con los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet para plantearles las mismas ideas.

Por su parte, Jorge Fontaine, en representación de la

Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, se contactó con los políticos nacionales Onofre Jarpa, presidente de ese partido; Patricio Phillips y Pedro Ibáñez Ojeda, todos senadores, para que «se acerquen» al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danayau; al comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; y al general de división Manuel Torres de la Cruz.

Se les dijo a estos políticos que había que hablarles con franqueza a los generales y almirantes, y garantizarles una «gran campaña publicitaria» en favor de «un Gobierno de las Fuerzas Armadas». Que ellos (la Sociedad de Fomento Fabril y demás organizaciones empresariales) pondrían en práctica la difusión de la idea «poder militar» en contra de la de «poder popular». Que se encargarían de crear dificultades constantes de transporte, comercialización y producción, de tal manera que el aparato productivo nacional se paralizaría completamente. Que, siguiendo las instrucciones que los generales pudieran dar, ellos, pondrían sus órganos de prensa («El Mercurio», Canal 13 TV de la Universidad Católica, radios Minería, Balmaceda, Cooperativa, Sociedad Nacional de Agricultura, etc.) para «desprestigiar» a quienes ellos deseasen, y «prestigiar» a quienes quisiesen, si eso ayudaba a los propósitos finales.³

También se les dijo que garantizasen a los generales «un rápido aumento en el desprestigio de Allende entre los trabajadores», porque las organizaciones sindicales controladas por los partidos demócratacristiano y nacional «promoverán un aumento de las huelgas exigiendo mayores salarios y sueldos».

Pero no sólo con los políticos hablaron los dirigentes de la oligarquía chilena. Hablaron también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia Manzano, latifundista expropiado y accionista de media docena de monopolios industriales. Le pidieron que iniciara una campaña de declaraciones para poner en duda «la legalidad» de las actuaciones del Gobierno, y que hablara con «los mandos militares que usted

pueda», para influirlos en una decisión que «sirva para librarnos del Gobierno de Allende». Lo mismo hicieron con el controlador general de la República, Héctor Humeres, para que redoblara sus esfuerzos en declarar fuera de la ley todas las adquisiciones, requisiciones o intervenciones en las industrias monopólicas por parte del Estado.

El último día de marzo de 1973, una vez más, la oligarquía chilena y el imperialismo de los Estados Unidos habían puesto a todos sus peones en el punto de partida para una nueva carrera contra el Gobierno constitucional de Chile. Pero, al revés que en ocasiones anteriores, ahora estaban realmente TODOS los peones del sistema en el punto de partida.

Notas

1) La intromisión del Pentágono en los esfuerzos de la oligarquía chilena para derrocar a Allende fue denunciada por Julio Zapata Bernaldes, en una serie de artículos en el suplemento dominical de «Puro Chile», en diciembre y enero de 1972 y 1973 respectivamente, titulados: *Anatomía de un golpe de Estado, Cómo la gran burguesía quiere derrocar a Allende, El fascismo como técnica del golpe de Estado, Estados Unidos detrás de Frei y Jarpa, La Sociedad de Fomento Fabril y El imperialismo: golpe*. Estos reportajes revelaban la orientación general de las instrucciones de aislar al general Prats, dejar en segundo plano a los políticos, crear el «poder gremial», base del fascismo, y llevar a los altos mandos militares a formar un bloque conspirativo. La revista «Punto Final», de marzo y abril de 1973, retomó estas denuncias acerca de los planes del Pentágono. En julio de 1973, después de que el día 20 de ese mes el general Washington Carrasco viajó a Santiago para hablar con su comandante César Guevara Fuentes y quince oficiales más de un esquema para que «Santiago pueda ser atacado por aviones desde La Serena, Quintero y Concepción», salieron a la luz pública más detalles de la intromisión del Pentágono (publicados en «Chile Hoy», de agosto y septiembre de 1973).

2) En octubre de 1972, a propósito de la táctica a seguir para derrotar la

conspiración patronal, se produjo la primera crisis entre las directivas del partido comunista y el partido socialista, y entre Carlos Altamirano y Salvador Allende, dirigentes máximos de los socialistas. Allende entendía que Altamirano se desbarrancaba por el «ultraizquierdismo», y lo hacía saber en alta voz a quien quisiera escucharlo. Esto se reflejó en violentísimos ataques personales a Carlos Altamirano, desde el diario «Puro Chile», en noviembre y diciembre de 1973, por columnistas y redactores simpatizantes de Allende y de la directiva del partido comunista. En enero de 1973, a propósito de una discusión sobre las Juntas de Abastecimientos y Precios (organizaciones populares para controlar la especulación y la distribución de los alimentos) con el ministro de Hacienda Fernando Flores, el Presidente gritó, delante del equipo de prensa de «La Moneda», que los partidos de la UP le tenían aburrido, que eran «una bolsa de gatos» y que no sabían guiar al pueblo. Desde meses antes, a partir de la crisis de diciembre de 1971, por la marcha de las ollas vacías montada por la derecha, Allende había expresado semipúblicamente estas mismas ideas, lo que aprovechaban los diarios de derecha, especialmente «La Tribuna», para incluso titular en primera página sobre el tema *{Allende hasta la coronilla con la UP, de «La Tribuna», primera semana de septiembre de 1972}*. Tal vez por estas circunstancias, el general Prats opinó ante sus colegas militares que Allende estaba a punto de «estar maduro» para unirse con las Fuerzas Armadas en su Gobierno. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que el Presidente nunca tuvo esa intención, aun cuando sus declaraciones públicas pudieran inducir a pensar lo contrario. Sobre esta crisis de conducción y trizadura en la cúpula de la Unidad Popular, hay mayor material de juicio en el capítulo quinto de este libro.

3) A partir de abril de 1973, los diarios «El Siglo», «Ultima Hora», «Puro Chile», y las revistas «Punto Final», «Chile Hoy», «De Frente» y "El Rebelde" denunciaron constantemente las andanzas conspirativas de Juan de Dios Carmona, Patricio Phillips, Eduardo Frei y Pedro Ibáñez; y de los generales Oscar Bonilla y César Ruiz Danyau, además del almirante Marino. La situación llegó a su clima en agosto de 1973, cuando Allende aceptó el retiro de Ruiz Danyau y se decidió a pedir el retiro de Óscar Bonilla junto a otros cinco generales y del almirante Merino en la segunda quincena de septiembre. Pero el golpe vino antes. Ver el documento de Joan Garcés, ya citado, y el detalle de estos sucesos en el capítulo quinto de este libro.

5

El general no es honorable

Usted tendrá siempre mi lealtad incondicional, Presidente.

(Respuesta dada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército chileno, al presidente Allende, ante una pregunta por teléfono hecha por Allende el 7 de septiembre de 1973, cuando la Marina pretendió sublevarse)

1972 había sido un año brillante para las Fuerzas Armadas chilenas en sus relaciones con el poder ejecutivo. El presupuesto para gastos militares había llegado a una cifra récord de 360 millones de dólares, lo que constituía el 4,6 % del Producto Nacional Bruto del país, y ponía a Chile a la cabeza de los países latinoamericanos (excluyendo Cuba), porcentualmente, en gastos militares. Incluso en cifras totales, Chile, con sus 360 millones de dólares, sólo estaba detrás de Brasil, con un presupuesto de 1.105 millones de dólares, y de Argentina, con 889 millones de dólares, en la lista de presupuestos militares desde México al sur.¹

Además, los cursos en los fuertes militares del Ejército de los EEUU en la Zona del Canal de Panamá, se habían intensificado, y la asistencia de oficiales y suboficiales chilenos era mucho más nutrida.

Pero no sólo era eso. Gran cantidad de dólares de ese presupuesto tan abultado había sido destinada para mejorar el armamento liviano del Ejército y de Carabineros, lo cual ponía en un mejor pie de combate «contra la subversión interna» (de

acuerdo a los entrenamientos impartidos en la Zona del Canal de Panamá) a las Fuerzas Armadas chilenas. Incluso el presidente Allende había echado adelante el proyecto de una extensa zona fronteriza con Argentina, en las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, la cual, además de servir para iniciar planes pilotos de explotación de maderas y productos agrícolas, servía para adiestrar al Ejército y la Fuerza Aérea en «operaciones combinadas contraguerrillas».

Había sido un año excelente para las Fuerzas Armadas chilenas, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente Allende había estado de acuerdo, desde 1970, con el cuerpo de generales de no modificar absolutamente nada de los planes de estudio, adiestramiento y cultura impartidos en los cuarteles, que eran confeccionados mayoritariamente en el seno del Ejército de los Estados Unidos en Washington.²

Y más todavía, durante 1971, a iniciativa del Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los altos mandos tuvieron un sustancial aumento. Por ejemplo, los generales de brigada pasaron de 12 sueldos vitales a 16 sueldos vitales, lo cual quería decir que obtenían un mejoramiento adicional del 33 % al obtenido por todos los trabajadores y empleados del país. En el año 1972, estos sueldos de generales de brigada subieron de 16 sueldos vitales a 21 sueldos vitales, lo cual significaba un aumento por sobre todos los demás chilenos que vivían de una remuneración de más del 31 %. Acumulando las cifras, teníamos que en los dos primeros años de Gobierno de Salvador Allende, los sueldos de los generales habían obtenido un mejoramiento de 75 % por sobre los ingresos producto de sueldos o salarios de los millones de otros chilenos.

Esto dejaba a los generales entre los 50.000 chilenos de más altos ingresos del país, de un total de tres millones que trabajaban.

Pero no sólo en el equipamiento, adiestramiento «antisubversivo» y situación económica personal había sido un buen año, para los generales y demás mandos militares.

A mediados de 1972, por una idea conjunta de los generales

«reformistas» y «duros», se le comunicó a Juan de Dios Carmona que propiciara, por cuenta de su partido, el demócratacristiano, la dictación de una Ley Sobre Control de Armas, que dejara en manos de los mandos militares, a su entero arbitrio, el control de las armas en manos de los civiles. La idea fue encontrada buena por el Presidente Salvador Allende, y los parlamentarios de la Unidad Popular, junto con los parlamentarios de la oposición, aprobaron esa ley, que llevaba el número 17.998.

En esencia, el texto de la ley permitía que los organismos de justicia militar podían ordenar el allanamiento de cualquier domicilio a las tropas, para buscar armas, en cualquier momento, circunstancia o lugar.

Al aprobarse esta ley tan buena para las Fuerzas Armadas, Salvador Allende dijo que «ésta es una herramienta en manos del pueblo para combatir a los saboteadores fascistas, porque las Fuerzas Armadas chilenas son una garantía de constitucionalidad y rectitud». Los hechos posteriores probaron que esto no era así. Que lo que se había dado era un instrumento formidable de poder a unas Fuerzas Armadas manejadas por oficiales al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena.

Y esos oficiales utilizaron este formidable instrumento. Y lo comenzaron a utilizar en forma sistemática, a partir de marzo de 1973 cuando, decidido ya el destino final del Gobierno constitucional, se trataba de estructurar una forma «rápida, eficaz y drástica» de llevar a cabo el derrocamiento. Por iniciativa del general de división Manuel Torres de la Cruz, planteada en marzo de 1973, inmediatamente después que los generales en contacto con el Pentágono comenzaron su operación final contra el Gobierno chileno, se acordó utilizar la Ley Sobre Control de Armas y Explosivos para seis propósitos principales:

- 1) Evaluar la real capacidad de combate de los obreros y campesinos, según fuera su protesta a los allanamientos que se iniciarían de manera masiva y mortificante para ellos.

- 2) Evaluar la cantidad de armas en poder de las organizaciones

de masas y políticas de la izquierda.

3) Adiestrar a la tropa de las tres armas de los institutos militares en operaciones contra la población civil.

4) Adiestrarse en la coordinación de mando conjunto para las Fuerzas Aérea, Marina y Ejército.

5) Medir la capacidad de respuesta política de los partidos de la Unidad Popular.

6) Adiestrar psicológicamente a las tropas para que «comiencen a ver a los obreros, campesinos y estudiantes como sus enemigos».³

Los allanamientos a fábricas, locales sindicales, asentamientos campesinos, sedes de partidos políticos de izquierdas e incluso domicilios particulares de dirigentes populares, comenzaron a aumentar gradualmente en número y rudeza ejercida por las tropas al mando de oficiales fascistas.

Durante abril, mayo y junio se hicieron allanamientos en promedio de tres por semana. Ya en julio, este promedio subió a casi uno por día y en agosto fueron más de 45 en todo el mes.

El carácter de estos allanamientos lo dan las estadísticas del mes de julio de 1973. Hubo 24 en total. Y de ellos, diez fueron contra fábricas, tres contra oficinas de Gobierno, cuatro contra partidos de la Unidad Popular, tres contra casas de estudio de organizaciones populares... y sólo dos contra grupos fascistas armados.⁴

Y ocurre que en ese mismo mes, se habían hecho 128 atentados con armas de fuego y explosivos contra dirigentes de la Unidad Popular, sedes políticas y puentes, torres de transmisión eléctrica y periódicos de la Unidad Popular. Mucho más que eso todavía: los propios organismos fascistas como Patria y Libertad, habían hecho pública su responsabilidad por más de setenta de esos atentados. Sin embargo, nunca se allanaron los locales de grupos fascistas, ni domicilios de dirigentes.

De los 128 atentados cometidos por fascistas civiles, las fiscalías militares, navales y aéreas encargadas de investigarlos,

declararon como «de autor desconocido» a 122.

Un caso típico fue el del atentado a la casa del contralmirante Ismael Huerta Celis, ex ministro de Obras Públicas del presidente Allende, miembro del grupo conspirador del vicealmirante José Toribio Merino y más tarde, después del golpe, nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar. El contralmirante Huerta vivía en Viña del Mar, y fue lanzada una bomba de alto poder explosivo a su antejardín. La policía civil descubrió al autor del atentado, un miembro de Patria y Libertad. Cuando los detectives lo llevaron a la casa de Huerta para reconstruir la escena, el contralmirante le dio la mano al saboteador, le palmoteó la espalda, le invitó a pasar a su casa y le ofreció café. Y acabó diciéndole, delante de los detectives: «No te preocupes, hombre. Ya arreglaremos todo esto. Dime qué necesitas en la cárcel y yo hablaré con tu abogado».

El informe de este extraordinario suceso fue pasado al presidente Salvador Allende, porque era evidente que se trataba de un autoatentado, para dar imagen de «caos social», y en el cual estaba involucrado un contraalmirante en servicio activo. Pero Salvador Allende dio orden de no hacer público el incidente.⁵

Pero fue sólo en los primeros días de agosto de 1973, cuando el general Manuel Torres de la Cruz llevó sus planes de utilizar la Ley Sobre Control de Armas hasta un punto de poner a prueba los «seis puntos» de su teoría para «preparar el terreno» en el asalto final al Gobierno constitucional de Chile. En esa fecha, reuniendo cerca de dos mil hombres de tropa de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, de la guarnición de la austral ciudad de Punta Arenas, donde era comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, el general dirigió una operación de cerco y allanamiento al «barrio industrial», cuya principal industria era la textil Lanera Austral. Para la operación utilizó tanques, cañones sin retroceso montados en jeeps, carros de asalto, helicópteros y vuelos rasantes de aviones. La novedad de la operación estaba en que había un «mando conjunto», bajo la supervigilancia del Ejército en la

persona del general Manuel Torres de la Cruz. Las tropas y aparatos de guerra de la Fuerza Aérea estaban al mando del general José Berdichewski; las de la Marina, bajo las dirección del contralmirante Horacio Justiniano; y las de Carabineros, con el mando del general Hernán Fuentealba. Todos ellos de acuerdo «en la necesidad de terminar con el Gobierno de la Unidad Popular de una vez».

La operación de cerco, reducción de obreros y obreras, y allanamiento, comenzó en la helada madrugada y duró más de ocho horas. El centro del objetivo estaba en la textil Lanera Austral, donde no había más de doce personas en ese momento, de las cuales siete eran mujeres obreras. Los soldados entraron a la carrera, destrozando puertas, quebrando vidrios a culatazos y sacando a tirones a los obreros y a las obreras al patio, cuya superficie estaba congelada por el intenso frío de ese lugar (a 53 grados de latitud sur). Los prisioneros fueron obligados a tenderse en el suelo congelado, boca abajo y con las manos en la nuca, durante seis horas, mientras los oficiales y la tropa registraban la fábrica rincón por rincón. Las mujeres fueron encañonadas por los fusiles ametralladores, a las voces de los soldados «¿dónde están las armas, putas de mierda?». Un obrero, que estaba en esos momentos en el servicio higiénico, defecando, y por lo tanto no se dio cuenta de qué era lo que pasaba, fue sacado, tal como estaba, con los pantalones en las pantorrillas, por los soldados, y semitriturado a culatazos, contra el suelo, mientras le gritaban «¡esto es para que aprendas a obedecer, maricón comunista!». Otro obrero, que estaba cerrando las llaves del agua caliente en una ducha, llamado Alberto González Bustamante, fue baleado por la espalda y muerto en el acto. El jefe del Servicio de Inteligencia en Punta Arenas, se instaló en el mismo lugar de los hechos para interrogar a los obreros detenidos, a quienes les ofreció la siguiente alternativa, según pudimos comprobar semanas más tarde los reporteros que hablamos con ellos: «Si me firman una declaración en que atestigüen que hallamos toneladas de armas escondidas, no

los acusaremos de resistirse a las Fuerzas Armadas. Si no, por ese cargo van a ir presos por un buen tiempo». A las mujeres las amenazaron con violarlas allí mismo, pero las amenazas no se cumplieron. Ninguno de los obreros firmó la declaración que pedía el oficial del Ejército. El resultado del gigantesco operativo militar fue realmente grotesco: un revólver calibre 22, marca Star, argentino, utilizado por el cuidador nocturno de la fábrica.

Pero el suceso, por la muerte del obrero González Bustamante a manos de la tropa, causó conmoción pública entre las organizaciones de izquierda. El diputado socialista Mario Palestro, de la comuna de San Miguel (Distrito Pedro Aguirre Cerda) de Santiago, declaró enfurecido en la Cámara de Diputados que el «general Manuel Torres de la Cruz deshonoró nuestras Fuerzas Armadas... Es un demente, un asesino... Se cree un reyezuelo y un sátrapa».

La directiva del partido socialista exigió a Salvador Allende que llamara a retiro al general Torres (una facultad privativa de los presidentes de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973). Allende habló con el entonces comandante en jefe subrogante del Ejército, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, para «exigirle» que destituyera a Torres de la Cruz. El general Pinochet le dijo que a su entender, y al entender del cuerpo de generales del Ejército, el «comandante en jefe de la Quinta División cuenta con toda la confianza del Estado Mayor», y que, por eso mismo, no se podía hacer nada. Pinochet, en un gesto típico de su acción doble, de traición a Allende a partir de julio de 1973, le expresó que «hay que esperar un poco, que las aguas se calmen, para limpiar los altos mandos de gente sin criterio político, Excelencia». Por su parte, el general Carlos Prats, ya fuera de toda capacidad de influir en el Ejército, ni siquiera fue consultado por Allende en este incidente.

Así, en vez de ser destituido Manuel Torres de la Cruz, la comandancia en jefe del Ejército se querrelló judicialmente contra el diputado socialista Mario Palestro, por «injurias graves y ofensas al Ejército de Chile».

El 29 de agosto, el periódico «El Mercurio», publicó en forma destacada en su página número dos, una crónica que se titulaba *El general Torres de la Cruz y las Actividades de la Quinta División*. En parte del texto, escrito por una reportera, se decía: «Manuel Torres de la Cruz es un hombre robusto, y sin ser alto resulta imponente, su gesto es siempre amable... firmemente amable. El primer encuentro con el comandante en jefe de la Quinta División del Ejército, con asiento en Punta Arenas, se produce a bordo del avión que lo trasladaba a su jurisdicción; en Santiago, se había negado a hacer declaraciones a la prensa, aduciendo que se encontraba fuera de ella. Bajo inmediatamente después de él; antes de pisar la escalerilla del avión se vuelve y me dice con serenidad y satisfacción: «Va a ver algo que puede interesarle». En la losa del aeropuerto Presidente Ibáñez se encuentran formados los oficiales de la Marina, la Aviación y el Ejército; están el contralmirante Horacio Justiniano y el comandante subrogante de la Fuerza Aérea, Eduardo Clavijo. El titular, José Berdichewski, lo iría a saludar horas después, a su llegada del extranjero»...

«El Mercurio» había entendido «el mensaje» del general Torres de la Cruz, en el sentido de que las tres armas del aparato militar chileno estaban sólidamente unidas detrás del comandante en jefe de la Quinta División, y como en esa fecha ya muchos sectores oligárquicos sabían que «el golpe es en cualquier momento», se figuraron que Manuel Torres de la Cruz sería el jefe de la futura Junta Militar... y comenzaron a «dar una buena imagen pública de él». La crónica cumplía este cometido en algunos párrafos escogidos como estos:

«¿Su opinión acerca de los militares en el Gobierno?

»...*off the record*.

«Como militar y como hombre, ¿qué cualidades admira en el ser humano?

»La franqueza y la lealtad; por eso, detesto lo contrario, la hipocresía y la falta de hombría.

»¿Cuál es la misión específica del Ejército en este momento en

Chile?

»*Seguir manteniendo la seguridad interna de nuestro país, protegiendo la soberanía y luchando para que quienes no conocen nuestras Fuerzas Armadas no continúen tratando de dividir las, lo que no lograrán...*»

Todo este suceso, ya a fines de agosto de 1973, probaba que la maquinación militar montada por orden del Pentágono de los EE.UU. para derribar a Salvador Allende, destruir la democracia burguesa chilena, reemplazarla por un Gobierno fascista incluso más brutal que el de Brasil, y articular un «frente común» en el cono sur de América Latina contra el progreso y el desarrollo de los pueblos, ya estaba funcionando.

Demostraba también que el general Manuel Torres de la Cruz había evaluado bien el grado de desarticulación de los partidos de la Unidad Popular, la posición indecisa y suicida de Salvador Allende y el partido comunista de Chile, al plantear su tesis «de los seis puntos» en los allanamientos masivos. El había dicho que «los marxistas no se atreverán a pararnos... nos tienen un miedo pánico». Y los hechos lo estaban demostrando. El había dicho «no se atreverán a empujar al populacho contra nosotros, porque también le tienen miedo pánico el Presidente y sus apoyos comunistas». Y los hechos, desgraciadamente, seguían demostrándolo.

Los allanamientos protagonizados por las tropas de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros, a lo largo de todo Chile, habían sido hechos con una brutalidad sin límites. Habían destrozado maquinarias, muebles de modestos obreros en sus casas, ropas, libros, herramientas, archivos de regionales de la Central Única de Trabajadores. Habían golpeado brutalmente a hombres, mujeres e incluso niños indefensos. Un batallón de la Fuerza Aérea, en Santiago, había allanado el Cementerio Metropolitano, en el sur de la ciudad, de noche, desplegando un gigantesco aparato de guerra incluso con helicópteros artillados. Sus enemigos habían sido dos cuidadores del cementerio, a quienes

golpearon y mantuvieron arrodillados con las manos en la nuca durante nueve horas, bajo una lluvia intensa. En ese allanamiento destrozaron más de cincuenta ataúdes, tirando los restos de los muertos en la superficie, y dejándolos allí, confundidos unos con otros, actuando brutalmente también contra los deudos de esos muertos.

Y lo más increíble, desde el punto de vista de la «justificación pública» del inmenso aparato de «búsqueda y destrucción contra las cosas» que desataron durante cinco meses los generales chilenos en contacto con el Pentágono, es que NUNCA encontraron otras armas que aquellas portadas por los vigilantes nocturnos de los locales atacados. Y además, después de esas inmensas movilizaciones de gente en pie de guerra, exhibían como «armas encontradas», largos listones de madera, cascos de obreros de la construcción, varillas de coligüe (una especie de bambú chileno, mucho más delgado) y herramientas de trabajo personales, calificándolos de «objetos contundentes».

Todos estos listones y varillas eran las utilizadas para portar banderas en los desfiles, y para ser usados como defensa contra los ataques de los grupos fascistas civiles en las manifestaciones públicas. Es típico el caso del allanamiento a la sede de la Central Única de Trabajadores (organización de los trabajadores y un sector de los empleados de Chile, que agrupaba a casi un millón de afiliados) en la ciudad de Osorno. Esa sede era al mismo tiempo casa habitación de un obrero. En el patio interior de su casa tenía una plantación de porotos (frijoles blancos), la cual exige, para que las plantas tomen sol, un armazón de listones por donde las guías de la planta suban aferrándose. Pues bien, las tropas requisaron esos listones del pequeño huerto (veinticuatro listones de metro y medio de largo) como «armas».

Y ocurre que mientras las tropas del aparato militar chileno, en acción conjunta, ponían en práctica la etapa de «ablandamiento y reconocimiento» contra el pueblo de Chile, con el pretexto de «desarmar» a quienes propician «la violencia en el país», había

generales que estaban protegiendo a los grupos fascistas como Patria y Libertad para que contrabandearan armas desde Argentina y Bolivia.

En el norte, el comandante en jefe de la División Blindada (Sexta División), general de brigada Carlos Forrestier Haengsgen, protegía al grupo de contrabandistas de armas dirigido por Roberto Thierne, segundo jefe de Patria y Libertad, y el ex capitán de Ejército Arturo Marshall (complicado con el ex general Roberto Viaux en la conspiración para asesinar al general René Schneider en 1970), que tenían a las ciudades de Salta, en Argentina, y Oruro, en Bolivia, como centro de operaciones. Por allí entraban explosivos, armas automáticas y municiones bajo la protección de Forrestier. Este general era católico (al igual que Manuel Torres de la Cruz), definido por sus amigos como «El Nazi» y latifundista expropiado por la reforma agraria durante el período de Salvador Allende.

En el centro-sur del país, el general de brigada Washington Carrasco Fernández, comandante en jefe de la Tercera División (con asiento en Concepción), daba protección no sólo a los miembros de Patria y Libertad al guardarles sus arsenales terroristas, incluso en las casas de oficiales de su Estado Mayor, sino también a los Comandos Rolando Matus, del Partido Nacional, y los Comandos de Ex Cadetes, del agente de la CÍA Federico Willoughbly McDonald. Este general Carrasco, estrechamente ligado al Servicio de Inteligencia Militar, en relación directa con el Pentágono (su relación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es tan grande, que en diciembre de 1973, la Junta Militar lo designó jefe de la Misión Militar en la Embajada de Chile en Washington, para tener «al hombre preciso en el lugar correcto», arriesgando dejar la Tercera División en manos de un general sumamente inepto, como es Agustín Toro).⁷ Además el general Washington Carrasco Fernández tenía relaciones directas con la oligarquía chilena a través del senador nacional Francisco Bulnes Sanfuentes, empresario monopolista y socio del consorcio

norteamericano WR Grace. El general Carrasco formaba parte de los «reformistas».

Por su parte, el comandante en jefe de la División de Caballería, general de brigada Héctor Bravo Muñoz, protegía los adiestramientos que los latifundistas de la provincia de Valdivia hacían para afrontar el creciente movimiento campesino de liberación, que exigía más tierras y la expropiación de los latifundios, sin pago alguno para los empresarios de la tierra y considerando en esa expropiación toda la maquinaria y las instalaciones de las haciendas. El general Bravo Muñoz estaba ligado estrechamente al Pentágono de los EEUU a través del general Mario Sepúlveda Squella, que fuera comandante de la Segunda División del Ejército y de la guarnición de Santiago hasta el 24 de agosto de 1973, fecha en que renunció al conocer los planes para asesinar al Presidente Allende simulando un suicidio (lo mismo ocurrió con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares hasta ese mismo día en que renunció por las mismas razones). Bravo Muñoz era ultracatólico, como Manuel Torres de la Cruz, y formaba parte del grupo de los generales «constitucionalistas» encabezados aparentemente por Carlos Prats González.

Ultimo mensaje

Cuando el 21 de mayo de 1973, el presidente Allende leyó ante el nuevo Congreso Nacional, elegido el 4 de marzo, su mensaje anual a la nación, la situación era explosiva desde todos los ángulos posibles. El costo de la vida había tenido un alza, en los últimos doce meses, de 195,5 %. El día 16 de mayo, los stocks de combustibles líquidos (gasolina y parafina) se habían agotado, y el gas licuado estaba en serios problemas de abastecimiento. A tal punto, que el Gobierno mexicano despachó a Chile un buque tanque velozmente, para salvar las necesidades de combustible de la entrada del invierno en Chile, a petición desesperada de Salvador Allende.

Había realmente un descalabro económico mayúsculo, producto del sabotaje sistemático del capital monopolista en manos privadas chilenas y yanquis, y del imperialismo de los EEUU, durante los tres años del Gobierno elegido en septiembre de 1970. Sólo como referencia, daremos algunos antecedentes.

«Las líneas de crédito de la banca norteamericana comenzaron a disminuir inmediatamente. De 219 millones de dólares que tenían otorgados en líneas de crédito en agosto de 1970 bajaron rápidamente a 32 millones al promediar 1971. Lo propio aconteció con los organismos bancarios internacionales y las instituciones financieras de Estados Unidos. El ministro Orlando Millas, en su exposición del estado de la Hacienda Pública, señaló que entre 1964 y 1970 Chile contrató en el BID, el BIRF, AID y el EXIMBANK créditos por 1.031 millones 806 mil dólares, lo que hacía un promedio anual cercano a los 150 millones de dólares. En 1971 este volumen disminuyó a 40 millones de dólares y se ha reducido a CERO en el curso de 1972 (Hugo Fazio: *El Bloqueo Financiero*, «Revista de la Universidad Técnica del Estado», enero-febrero de 1973).»

«Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Estado, dijo en Nueva York que "en cuanto a la caída de los préstamos externos e inversiones en Chile no parece necesario buscar ninguna razón exótica". Bray manifestó que la moratoria unilateral de Allende en los pagos de la deuda externa adoptada el año pasado "ha dañado seriamente el crédito de Chile" (Cable de la agencia United Press International, de 6 de diciembre de 1972).»

«Cuando estos contactos sean llevados a cabo (el *memorándum* escrito al presidente de la ITT, el 20 de octubre de 1970, se refiere al doctor Henry Kissinger, mister Meyer y mister Irwin, del Departamento de Estado, al secretario William Rogers y al presidente Nixon), nosotros exigiremos que los representantes norteamericanos de los bancos internacionales tomen una acción decidida en contra de cualquier petición de préstamos de los países que expropian compañías norteamericanas o ejerzan acciones

negativas contra el capital privado extranjero. Y, como parte de nuestra acción total, debemos pedir a nuestros amigos del Congreso que alerten a la Administración norteamericana, avisándoles que de continuar un tratamiento inadecuado del capital privado norteamericano, esto traerá como consecuencia una reducción de los fondos de los contribuyentes norteamericanos en los bancos internacionales. (Parte de los documentos de la ITT, dados a conocer por el periodista yanqui Jack Anderson).»

«La Kennecott Cooper está tratando de lanzar un bloqueo internacional legal a los embarques de cobre chileno... La batalla en el Tribunal de París no podría haberse producido en un momento peor para Chile, que obtiene alrededor de un 70 % de sus divisas de la venta del cobre... Este país ya está hirviendo con la inquietud política y social y se está balanceando al borde de la bancarrota. Obviamente la ofensiva de la Kennecott perjudicará posiblemente las futuras ventas de cobre a los clientes que no desean arriesgar disputas legales y posiblemente atrasos costosos en las entregas.

»Los ejecutivos de la Kennecott están decididos a mantener esta situación candente sobre Chile. La oficina de Manhattan del Consejero General, Pierce McCreary, que está dirigiendo la campaña, tiene el aspecto de una sala de guerra. Su escritorio está sembrado de informes de embarques y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar las rutas de los barcos.

Desde aquí, McCreary mantiene una estrecha vigilancia sobre los barcos que entran o salen del puerto chileno de San Antonio, el único lugar desde donde se embarca el cobre de El Teniente. Actualmente está observando los movimientos de por lo menos seis barcos que se dirigen a Europa cargados con el metal de El Teniente; cuando lleguen enviará a sus agentes allí para recibirlos con órdenes judiciales (Revista "Time", del 6 de noviembre de 1972).» Por supuesto, la revista «Time» no podía agregar en su crónica que a la Kennecott en Nueva York le llegaban los informes de los zarpes de los barcos con cobre desde San Antonio, vía marina de los Estados Unidos, a través de los mensajes

provenientes de la Primera Zona Naval de Valparaíso, bajo el mando del vicealmirante José Toribio Merino. Es decir, el espionaje para la Kennecott se efectuaba en un puerto chileno, por medio de ¡oficiales traidores a su patria en Chile!... El vicealmirante Merino es hoy día uno de los «salvadores de la Patria», como miembro de la Junta Militar. Este hecho fue denunciado por «El Rebelde» (Santiago, octubre 1972).

«...después de la decisión tomada por la mayoría de los organismos internacionales de crédito de cesar todas sus actividades en favor de Chile, la ofensiva sobre el cobre, conducida con el apoyo tácito del Gobierno norteamericano y lanzada por la Democracia Cristiana, se unen en una misma y vasta operación que tiende literalmente a estrangular la experiencia emprendida después de octubre de 1970 por el presidente Allende ("Tribuna", de Lausana, del 17 de octubre de 1972.)»

Pero no era solamente el bloqueo financiero imperialista de los Estados Unidos (bloqueo solamente contra la economía global chilena, pero dejando a salvo el financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, que en el mismo período recibieron préstamos norteamericanos cuantiosos, incluso para comprar un avión Hércules C-130, para 90 paracaidistas, con su equipo completo, por valor de 5 millones de dólares, y varias naves de guerra menores y equipamiento liviano para «lucha contra subversión interna,⁵ y el sabotaje sistemático de los monopolios, chilenos los que habían descalabrado a tal punto la economía del país. Se sumaba a ello la falta de flexibilidad del sistema financiero internacional que, incluso con los préstamos de la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, impedía zafarse de los efectos destructivos del cierre de los préstamos norteamericanos. Se sumaba también un notable porcentaje de incapacidad de los mandos medios en el aparato económico de la Unión Popular, incluyendo (aunque en número muy minoritario) casos de corrupción administrativa y de desvíos de dinero hacia el financiamiento de cajas electorales y de pago de funcionarios de algunos partidos políticos. Sin embargo,

en una relación cuantificada de las causas de la cuasi bancarrota económica del país en el primer trimestre de 1973, el porcentaje de la inepticia y la corrupción de miembros responsables de la Unidad Popular es mínimo, comparado con el sabotaje sistemático, brutal y sumamente despiadado de los monopolistas privados chilenos y norteamericanos. Incluso más, se podría afirmar científicamente que aun en el caso de que no hubiera habido ni inepticia ni corrupción en algunos sectores de la Unidad Popular, el descalabro económico habría sido tan significativo como era en ese momento.

En todo caso, la situación se podía resumir con algunos aspectos como éstos:

a) Por primera vez en la historia de la gran minería del cobre chileno, el mineral de Chuquicamata no tuvo utilidades en 1972, y acusó una pérdida cercana a los 5 millones de dólares. La falta de repuestos y su reemplazo a tiempo, por el cierre del mercado norteamericano, fue la causa principal.

b) En 1972, la enorme industria textil Sumar, estatizada en 1971, arrojó pérdidas por 132 millones de escudos (unos 11 millones de dólares).

c) La Corporación del Cobre informa que la mina de cobre de Chuquicamata tuvo una baja de producción de 15000 toneladas en 1972 en comparación con 1971. El mineral de cobre de La Exótica marca una baja de 4000 toneladas en el mismo período, y el mineral de El Salvador una disminución de 2000 toneladas.

d) El balance al 30 de junio de 1972, señala para la Distribuidora Nacional (DINA) del sector estatal, una pérdida de 20 millones de escudos y un endeudamiento con el sistema tributario y de seguro social del Gobierno de 172 millones de escudos.

e) La Compañía Chilena de Electricidad (que fue comprada por el Gobierno de Frei a la American Foreign Power de los EE.UU. en 1970, por 186 millones de dólares, teniendo instalaciones que valían sólo 18 millones de dólares), acusa en 1972 una pérdida de 250 millones de escudos.

f) En mayo de 1973, el ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo,

declara a los periodistas que como resultado del bloqueo externo, han dejado de funcionar la mitad de las grúas de un sector del puerto de Valparaíso. Por la misma causa de falta de repuestos, hay 250 locomotoras de la Empresa de Ferrocarriles del Estado paralizadas, de un total de 500 locomotoras que posee la empresa.

Ninguno de los efectos relatados brevemente más arriba podrían haber sido evitados sustancialmente desde el punto de vista económico, ya que tenían su origen en una presión constante (sobre una economía capitalista dependiente del imperialismo norteamericano) de las fuerzas monopólicas privadas chilenas y extranjeras, con una meta bien precisa: provocar el descalabro del aparato productivo para obligar a los trabajadores, azotados por la miseria consecuente, a quitarle su apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, y dejarlo a merced del esquema de derrocamiento. Y no podrían ser evitadas porque el programa político, económico y social de los dirigentes de la Unidad Popular no era socialista, no estaba dirigido por los trabajadores y se había metido en una batalla por el poder económico dentro de las propias leyes de funcionamiento del capitalismo monopólico dependiente del imperialismo, dejando así en manos de la oligarquía y los consorcios transnacionales la mayor capacidad de maniobra. Un ejemplo de la debilidad extrema de la posición meramente desarrollista, y no socialista, de todo el programa de Gobierno de la Unidad Popular, lo da el estrangulamiento externo considerando sólo cuatro factores: el bloqueo financiero, el cambio en el precio mundial del cobre, el aumento de los precios mundiales de los alimentos y la presión interna por importar más alimentos.

Los efectos combinados de estos cuatro factores significa que para los años 1971 y 1972, el país perdió MIL CIENTO CINCO MILLONES DE DOLARES. El bloqueo financiero significó la necesidad de remitir al exterior 200 millones de dólares por concepto de movimiento de capitales; la baja del precio del cobre, de 64 centavos la libra en 1970, a 49 centavos en el 71 y el 72, lo que costó al presupuesto nacional una menor entrada de 460

millones de dólares en esos años; el alza de los precios mundiales del trigo en un 51 %, la mantequilla en un 88 %; la carne congelada en un 40 % y el azúcar en un 86 % (precios del mercado de Nueva York), acumuló un mayor gasto de 275 millones de dólares en el bienio; y el aumento en volumen de las importaciones de trigo (300 mil toneladas en 1970 contra más de 500 mil toneladas en 1971) y de leche descremada (3.800 toneladas en 1970 contra 38.400 toneladas en 1971) significó un aumento de los gastos de 50 millones de dólares para 1971 y de 120 millones de dólares para 1972.

Si a esto sumamos que, para 1973, el Gobierno debía pagar 493 millones de dólares por concepto de amortizaciones e intereses de la deuda externa (duplicada en el período de Eduardo Frei y aumentada en casi mil millones de dólares por Allende a causa de la nacionalización de las minas de cobre, hierro, salitre y expropiación de algunas industrias norteamericanas), tenemos un cuadro de debilidad extrema en el sector externo, causada precisamente por lo contrario que argumentaban quienes planificaban el derrocamiento de Allende. Es decir, por no ser un programa económico ni político socialista el del Gobierno de la Unidad Popular, sino el de un reformismo desarrollista profundo.

La medida exacta del problema externo lo da el hecho de que el TOTAL de los ingresos en divisas de Chile, anualmente, no supera los 1.200 millones de dólares.

Esto quería decir que por el bloqueo externo, manejo de los precios mundiales por el imperialismo norteamericano, pago obligado de una deuda externa hipertrofiada y la importación de aumentos indispensables, el Gobierno se veía obligado a gastar 1046 millones de dólares anuales, lo que dejaba disponibles para importación de maquinarias, repuestos, combustibles y materias primas industriales la escuálida suma de menos de 150 millones de dólares anuales. Eso, naturalmente, produjo una paralización gravísima del aparato productivo nacional, metiendo a su economía en una espiral inflacionista gigantesca.

Ahora bien, si a esto agregamos el sabotaje interno de los aliados chilenos de los consorcios multinacionales como la ITT, Anaconda, Kennecott y bancos como el Chase Manhattan y el First National City, el cuadro se completa. Dos datos para la comprensión:

1) Solamente en 1972, los grupos monopólicos chilenos desplazaron más de 100 millones de dólares desde la reinversión a la especulación, y dejaron de reinvertir capitales en el aparato productivo privado (más del 60 % del total nacional) en un orden del 54 %

2) La mayoría política al servicio de los intereses norteamericanos y oligárquicos chilenos en el Parlamento, solamente aprobó durante el año 1972 veinte proyectos de leyes que significaban un mayor gasto de 60.000 millones de escudos con un financiamiento de sólo 12.000 millones de escudos. ¡Es decir, obligó al Gobierno a emitir billetes sin respaldo productivo, por este solo concepto, por la enorme suma de casi 4000 millones de dólares! ¡Cerca de la mitad del producto nacional bruto! Con esto, además, se impidió que los empresarios monopólicos privados chilenos y extranjeros ayudaran al financiamiento de la economía nacional por medio de mayores tributaciones, trasladando la carga económica a los hombros de los obreros, campesinos, empleados y empresarios pequeños y medios, los que pagaban principalmente los efectos inflacionarios de estas gigantescas emisiones de billetes sin respaldo.

Sin embargo, todo este cuadro de tragedia económica provocado por la conspiración monopólica chilena-norteamericana para crear las condiciones «objetivas» del derrocamiento de Allende, había tenido una respuesta no calculada por los conspiradores. A medida que el caos económico se agravaba quedaba más claro el sabotaje de las fuerzas reaccionarias, y las organizaciones populares, al margen de las directivas de los propios partidos de la Unidad Popular, habían ido transformando lo que se bautizó como «poder popular para aumentar la producción» (discursos de

Allende y directivas públicas del Partido Comunista de Chile en 1970, 1971, 1972 y 1973), en un esbozo de «poder popular para hacer la revolución». Ya en mayo de 1973 estaba claro tanto para los directivos de la Unidad Popular como para los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas y sus líderes ideológicos en el Pentágono, así como para los dirigentes de la oligarquía nacional, que había en el seno de la clase obrera, de los campesinos y los empleados, un movimiento «independiente» que, sacando experiencia de los años 1971 y 1972, había llegado a conclusiones bien claras sobre cómo salir de la crisis económica, política y social en que estaba sumida la democracia burguesa chilena.

Grandes sectores del partido socialista, incluyendo a su secretario general Carlos Altamirano; el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), llegaron a la conclusión de que la tesis del Partido Comunista de Chile y del propio Salvador Allende englobaba en el concepto de la «vía chilena hacia el socialismo» y basada en la subjetiva idealización de un supuesto «tránsito pacífico al socialismo», había entrado en bancarrota. Que incluso constituía un freno a la revolución chilena por ser un factor de debilidad, ante las conciliaciones con los monopolios privados chilenos y norteamericanos, y un enorme peligro de que todo el aparato reformista semiconstruido por Salvador Allende fuera destruido, junto con la democracia burguesa, para dar paso al fascismo. Y que, por eso mismo, el pueblo chileno se hallaba ante una coyuntura histórica en la que: o tomaba el camino de prepararse para destruir «las fuerzas de reserva estratégica del imperialismo y de la oligarquía en Chile: sus Fuerzas Armadas» y para expropiar todo el poder económico y político de la oligarquía y el imperialismo en Chile, o serían atacados por una contrarrevolución armada que implantaría el fascismo. Esto hizo que estos sectores de la Unidad Popular se sumaran a las tesis sustentadas desde muchos años antes por grupos de izquierda revolucionaria como el Partido Comunista Revolucionario, pero sin haber logrado dar

forma, hasta ese instante, a una táctica adecuada para las condiciones chilenas.

Como una manera de evitar que el pueblo tuviera que afrontar una contrarrevolución armada inerme, esos grupos políticos trataron durante todo el año 1973 (hasta septiembre) de impulsar la movilización de miles de obreros y campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo al Gobierno avanzar en el proceso de expropiaciones, exigiendo control de los trabajadores en las industrias y empresas del área social, exigiendo que los funcionarios ineptos y corrompidos, los burócratas y los dirigentes sindicales reformistas fueran sacados de sus cargos y reemplazados por auténticos representantes de los obreros, campesinos y empleados; exigiendo la aplicación drástica de las propias leyes burguesas contra los sabotadores de la economía nacional, y por último, planteando la necesidad de una enorme movilización a nivel masivo, en constante actitud de vigilancia y de combate que neutralizara el complot fascista de las Fuerzas Armadas por el tiempo suficiente para lograr una organización obrera armada capaz de oponerse a los intentos del Pentágono y de los altos mandos chilenos por colocar a Chile en el yugo de los grandes consorcios yanquis dócilmente.

Infortunadamente, toda esta movilización se vio entrabada, perseguida e incluso denunciada por los propios dirigentes políticos cercanos a Salvador Allende y del Partido Comunista de Chile, y cuando los militares en contacto con el Pentágono dieron la señal de partida para la destrucción de la democracia burguesa el 11 de septiembre de 1973, no había todavía una preparación adecuada de defensa, ni armas en manos del pueblo, ni un criterio uniforme para asumir la defensa de la democracia contra el ataque fascista.

Sin embargo, todo este fenómeno de «emergencia política» de grandes sectores del pueblo chileno, era lo que había hecho decir al Pentágono, en su «informe de octubre», que «la insurrección popular estaba en el punto de despegue» en Chile y que era

necesario impedirle que «despegara», para lo cual ordenó a los generales chilenos servidores del imperialismo norteamericano que derrocaran a Allende «lo más pronto posible» y en «el momento más adecuado» para impedir un enfrentamiento «dudoso» con ese naciente «poder popular» al margen del manejo que hasta ahora habían hecho de él el presidente Allende y sus apoyos políticos como el Partido Comunista de Chile.⁹

El 21 de mayo de 1973, en su Mensaje al nuevo Parlamento chileno, el presidente Salvador Allende, que sabía tan bien como el que más que «el nuevo poder popular» se le escapaba de las manos, trató de utilizar ese «fantasma que recorre Chile» para asustar a la oligarquía y convencerla de que le diera tiempo para «encauzar» las inquietudes populares e impedir que se transformaran en una revolución cabal.

De manera dramática, el presidente Allende fue exponiendo ese día su «petición de mayor plazo» a los enemigos políticos que habían decidido derrocarlo porque «ya no es capaz de impedir la insurrección popular». Dijo: «El dinamismo de un proceso revolucionario libera energías reprimidas, hiere intereses dominantes, genera fenómenos sociales que pueden ser guiables Y QUE EL GOBIERNO SE HA FORZADO EN CONTROLAR... Pero, para que esto culmine satisfactoriamente, se necesita un régimen institucional flexible.»

Y Allende propuso una reforma de todo el aparato del Estado burgués para «controlar» los «fenómenos sociales nuevos», y así impedir que destruyeran todo el sistema de dominio de la burguesía. Pero los parlamentarios que lo estaban escuchando ese día 21 de mayo de 1973 estaban representando el pensamiento del Pentágono, de sus subordinados entre los generales de las Fuerzas Armadas chilenas y de la oligarquía chilena que, desde noviembre de 1972 y marzo de 1973, habían dado por terminado el «experimento reformista para impedir la revolución» habiendo estimado que «la subversión del populacho» ya no se detiene ni con reformas ni con Allende ni con Frei... Se detiene con el

fascismo en su expresión más cruel y despiadada. Y por eso no escuchaban las llamadas angustiosas de Allende, como ésta:

«Más que los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre nuestra democracia. Como pueblo y como nación pocos peligros aparecen más graves ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente. Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama humano, además de catastróficos efectos económicos... Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer mensaje: "Si la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas —física, económica, social o política— llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo". El enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el momento ha sido posible contener dentro de los límites razonables, o sofocar cuando se ha desbordado... No son los campesinos hambrientos de pan y de justicia que se toman —procedimiento que no compartimos— un pedazo de tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada, porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear las condiciones de una guerra civil, los verdaderos propulsores de la violencia... Para nadie puede ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente

emerge una nueva estructura de relaciones sociales.»

Y pedía Allende que le dejaran asistir a ese parto social porque *«la jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mismos. Comités de Dirección del Área Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Comunales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970. En pugna con la estructura de la antigua clase dominante, las instituciones de la naciente organización social están buscando, ensayando, criticando y recreando su propio estatuto de trabajo y disciplina.»*

El presidente Allende resumía que el «aparato del Estado se habría paralizado» a consecuencia del sabotaje interno y externo que soportaba su Gobierno, si no hubiera ocurrido «la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden» (resulta notable esta afirmación, el 21 de mayo de 1973, cuando Allende se aferraba a la idea de que los altos mandos militares podían ser convencidos por él para ayudarlo en su experimento, aun cuando era notorio que los generales estaban conspirando para derrocarlo en cualquier momento).

Por último, en su dramático mensaje al Parlamento, Allende pidió a la mayoría parlamentaria reaccionaria que lo ayudara a crear una «nueva institucionalidad» y que él, a cambio, se esforzaría «en controlar» el movimiento de obreros, campesinos y empleados que pugnaba por la revolución. Y para poner pruebas en sus palabras, terminó su mensaje con un llamado a los trabajadores a trabajar y sólo a trabajar... ¡precisamente en los momentos en que sus enemigos ya flectaban las piernas para lanzarse al cuello del pueblo y degollarlo! Estas fueron sus palabras:

«El Gobierno Popular apela a la conciencia y sentido de clase de todos los trabajadores. Sus logros sociales, sus libertades

políticas, sus organizaciones, su poder para desafiar a la fuerza del capitalismo nacional e imperialista y su capacidad para edificar la nueva sociedad son grandes instrumentos. La reacción nacional e internacional pueden destruirlos. Pretenden arrasar las conquistas de los trabajadores. Ante una amenaza tan real y presente, los trabajadores no permitirán que se les use. Sus reivindicaciones económicas no pueden ser utilizadas por la burguesía contra el Gobierno y el proceso revolucionario. La disciplina social y el esfuerzo consciente deben marcar la ruta del trabajo. Chile exige mayor producción, una mayor productividad.»

Pero ya nadie quería escuchar a Salvador Allende entre los servidores políticos de la oligarquía y el imperialismo. La orden había llegado desde Washington y, por mucho que Allende se esforzara por convencerlos, su destino estaba marcado: debía ser derrocado. Las palabras del diputado nacional (y miembro secreto de la organización fascista Patria y Libertad), Hermógenes Pérez de Arce, comentando el mensaje, fueron elocuentes: «Este mensaje sólo puede servir para convencernos de cuán necesario es para nuestro país deshacerse de esta generación de demagogos... Que el señor Allende deje de hablar... y dé paso en Chile... a quienes sepan gobernar.»

Nuevo paso adelante

En verdad el presidente Allende tenía razón para estar desesperado. La ofensiva reaccionaria pedida por los generales en contacto con el Pentágono estaba llegando a una violencia tremenda. El mes de mayo marcaba ya el segundo mes de una gravísima huelga de los trabajadores de El Teniente, mineral de cobre nacionalizado. La huelga había comenzado el 20 de abril y estaba siendo manejada por el grupo de Frei en estrecha alianza con la organización fascista Patria y Libertad.

De acuerdo a los cálculos correctos de los reaccionarios, la crisis económica debía provocar un gran aumento de las huelgas de

trabajadores por mayores aumentos de sueldos y salarios, lo cual, una vez más, serviría para agudizar esa misma crisis económica, ya que el Gobierno Allende era incapaz de ensayar una salida de la crisis que echara sobre los hombros de la oligarquía el peso de pagar las consecuencias vía mayores tributos a las ganancias de capital e incluso la renta personal. En este esquema, sobre todo a través de las organizaciones sindicales de la Democracia Cristiana, los propios dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril se encargaron de influir en las huelgas de los trabajadores.¹⁰

Un caso típico fue el de la huelga de El Teniente en la que se exigía un sobreaumentado de salarios del 41 %. A través de Guillermo Medina, dirigente máximo de los trabajadores en huelga, la Democracia Cristiana se apoderó del movimiento reivindicativo y transformó la lucha justa de esos obreros por mayores salarios en un arma contra el aparato de Gobierno de la Unidad Popular, para minarlo, cumpliendo con las instrucciones de los generales. El dirigente Guillermo Medina fue puesto en contacto con el periodista Manuel Fuentes Wedling, de la jefatura de la organización Patria y Libertad, y era este Fuentes el encargado de escribir los discursos de Medina, tanto en El Teniente como en Santiago (así se descubrió más tarde, después del abortado *putsch* del 29 de junio, que desarmó la jefatura de Patria y Libertad y permitió el allanamiento del domicilio de Fuentes, donde se encontraron los borradores de discursos dichos por Medina en abril y mayo).

La huelga duró más de dos meses y, durante mayo, fue transformada en el centro de un movimiento huelguístico general controlado por la Democracia Cristiana para acorralar al Gobierno. El 23 de mayo, unos veinticinco mil estudiantes pertenecientes a centros de alumnos de la Universidad de Chile controlados por el PDC paralizaron sus actividades en apoyo de los mineros de El Teniente. El mismo día, la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, también en manos del PDC, hizo igual paralización de actividades. La situación se hizo más clara ese día, cuando en

Rancagua, ciudad cercana a El Teniente, grupos de choque fascistas y del PDC asolaron la ciudad, transformando una manifestación pública «en apoyo de la huelga» en un ataque con armas de fuego, pedradas y otras armas contundentes a la Intendencia de la ciudad y al local regional de los partidos comunista y socialista. El jefe de las Fuerzas Armadas de la ciudad, teniente coronel Cristian Ackercknecht, desplegó sus soldados, ¡pero en contra de los atacados!, y allanó el local del partido socialista «en busca de armas». La situación era bastante ridícula porque mientras los soldados del teniente coronel Ackercknecht entraban «a la guerra» en el local del partido socialista, a pocos metros de ellos, en la calle, miembros del grupo fascista Patria y Libertad ocultaban sus revólveres bajo sus chaquetas o transformaban sus bastones de ataque en «astas de banderolas».

La acción antisocialista del jefe militar de la ciudad provocó una declaración enfurecida de la directiva nacional del partido socialista (a la cual pertenecía el presidente Allende), exigiendo la destitución de su cargo del teniente coronel Ackercknecht. Pero no ocurrió así. El comandante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet, envió más tropas a la ciudad, por lo cual puso al mando a un oficial de mayor graduación, el coronel Sergio Ibáñez, pero al mismo tiempo emitió una declaración pública en que decía, «en forma enfática», que «las medidas adoptadas por el oficial a cargo de la Zona de Emergencia el día 23 de mayo cuentan con mi más irrestricto apoyo, respaldo y conocimiento».

Una vez más, frente a la tamaña insolencia política del jefe del Ejército chileno, las directivas de los partidos de la Unidad Popular guardaron silencio, y los generales conspiradores siguieron montando su esquema de ocupación militar de todo el país «para una fecha no determinada».

Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por Eduardo Frei para hacer de la huelga de El Teniente «el detonante» para la renuncia o derrocamiento de Allende, esto no ocurrió porque los generales estimaron que «no estamos preparados

todavía» y porque las organizaciones populares no dominadas por el PDC respondieron con una movilización que puso en marcha, parcialmente, El Teniente.

La actuación de Manuel Fuentes Wedling, sin embargo, es importante en este episodio porque nos permite mostrar cómo, para llevar adelante la conspiración, incluso altos dignatarios de la Iglesia Católica se mezclaron en maniobras que llegaron al asesinato. Los hechos ocurrieron así:

En marzo de 1973, por orden del cura Raúl Hasbún, (secretario del arzobispo de Santiago), se instaló en Concepción un canal de televisión filial del Canal 13TV, del que él era director, sin permiso legal. El Gobierno, cumpliendo con las leyes, montó un aparato electrónico para interferir las transmisiones de ese canal pirata de televisión (el 5) en la ciudad de Concepción. El cura Raúl Hasbún, entonces, se contactó con Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad, para pedirle «ayuda» para «resolver» el problema de las «interferencias». Hasbún le pidió a Fuentes que buscara «un grupo de personas audaces» que destruyeran las instalaciones electrónicas del Gobierno en Concepción, que estaban impidiendo que Canal 5TV saliera al aire en buenas condiciones. Manuel Fuentes reunió a Michael Vernon Townley Welch, alias «Juan Manolo», adiestrador de armamento de Patria y Libertad por cuenta de la CÍA y a los chilenos Rafael Undurraga Cruzat y Gustavo Etchepare. Con ellos formó un «equipo comando» que quedó a las órdenes del cura Raúl Hasbún, el cual planificó todos los detalles para entrar en la casa de la calle Freire 382, de Concepción, en donde estaban los equipos electrónicos del Gobierno.

El «comando» entró en la casa el 18 de marzo de 1973, robó los equipos, también asesinó al cuidador de la casa, un obrero pintor de brocha gorda llamado Jorge Tomás Enríquez González.

La investigación y el juicio que pendían sobre el cura Raúl Hasbún por «autoría intelectual» de asesinato y robo con homicidio fueron interrumpidos por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, lo cual le salvó definitivamente, al menos mientras exista

Junta Militar, de responder por sus conexiones con la CÍA y con Patria y Libertad.

Pero no solamente eran personajes como el sacerdote Raúl Hasbún —que con sus comentarios sabatinos en Canal 13TV de la Universidad Católica atizó continuamente la hoguera de odio contra el pueblo por más de dos años—, los que actuaban en Chile por cuenta del Pentágono, la CÍA y los consorcios norteamericanos.

Había senadores que, por lo menos no como Hasbún que amparó asesinos, se transformaron en contrabandistas de armas, bajo la protección del Poder Judicial y de los generales conspiradores. Es el caso del senador Pedro Ibáñez Ojeda.

Este parlamentario está conectado a un grupo oligárquico de Valparaíso, cuyo principal giro económico es la importación de maquinaria agrícola y la industria del café instantáneo (Sí Café). La firma Ibáñez Ojeda (del hermano del senador y propia) se dedica a importar principalmente desde Brasil. Pues bien, durante 1972 y 1973, el senador Pedro Ibáñez Ojeda puso a disposición de Patria y Libertad sus conexiones con la oligarquía brasileña para importar armas desde los puertos brasileños... dentro de las cajas de maquinaria agrícola y productos enviados a su firma. Este sistema de contrabando de armas para nutrir a los grupos terroristas fascistas chilenos funcionó sin problemas durante más de un año.

En realidad, el traficante de armas, senador Pedro Ibáñez Ojeda, era apenas un engranaje en una maquinaria enorme montada en Brasil para, a través de la Sociedad de Fomento Fabril Chilena, canalizar los fondos para el sabotaje de la economía chilena y la alimentación de los grupos fascistas. Grupos privados brasileños de grandes empresas, entre los que figuraban el magnate de la imprenta Gilberto Hubles, en colaboración con monopolistas de la metalurgia y la banca, utilizaron correos de envíos de dinero a Chile como Aristóteles Brumond, adscrito al equipo de la CÍA en Brasil, o como el ingeniero Glaycon de Paiva, nervio motor del llamado Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES),

fundado en 1961 con asesoría de Washington, para «prevenir» un levantamiento popular en las Administraciones de Janio Quadros y Joao Goulart. (Para un estudio más profundo de este IPES, ver mi libro *Estados Unidos en Brasil*, Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1965.) Estos grupos brasileños estaban detrás, en lo financiero y en lo ideológico, de los equipos de «expertos» de la Democracia Cristiana del grupo de Frei y del Partido Nacional, en la coordinación del sabotaje político al Gobierno de Allende. Orlando Sáenz estaba en contacto permanente con los brasileños de estas organizaciones, así como con grupos similares de Argentina, Venezuela v los EE.UU.

Nueva insurrección militar

En el mes de junio de 1973, la organización fascista Patria y Libertad, impresionados sus dirigentes por la efectividad de su trabajo terrorista, por la enorme penetración que habían logrado entre los organizaciones latifundistas del sur del país, y por la amplia protección que recibían de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, decidieron montar una aventura por su cuenta. El jefe de los conjurados, Pablo Rodríguez Grez, decidió montar una insurrección militar en Santiago, que, esperaba, sería como encender un barril de pólvora en todo el país, y provocaría la rápida caída de Allende, su reemplazo por una junta cívico-militar compuesta por los presidentes del Senado (Eduardo Frei), del Poder Judicial (Enrique Urrutia Manzano) y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Rodríguez consultó con el general en retiro Roberto Viaux Marambio, preso en la Penitenciaría de Santiago desde noviembre de 1970 por el «caso Schneider», y le mostró los hechos. Por ejemplo, que los atentados terroristas marcaban un record impresionante: durante el año 1973, cinco atentados dinamiteros, a balazos, a golpes y asaltos contra personas o lugares de la Universidad Popular en enero; 29 en febrero; 28 en marzo; 57 en

abril y 105 en mayo... (de esos atentados, sólo cien habían sido investigados habiendo caído presos 83 hechos... ¡Y todos habían sido dejados libres por los tribunales de justicia!); que la Corte Suprema de Justicia, a petición expresa del director del departamento de personal del Ejército, general Oscar Bonilla («hombre de Frei», dijo Rodríguez Grez, repitiendo la definición que le daban Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton en cualquier reunión social en Santiago), el 26 de mayo había enviado un oficio público al presidente Allende, sumamente insolente, en que le representaba «por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales» y le advertía «no ya una crisis del estado de derecho, sino una perentoria o inminente quiebra de la juricidad del país»; que el prestigio interno del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, estaba por los suelos; que no sólo conspiraban algunos altos mandos militares, sino también Frei, Jarpa y otros políticos de derechas; que la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, opinaba que las condiciones estaban maduras para provocar un golpe militar-civil; que los latifundistas chilenos, a través de Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, estaban de acuerdo en que había llegado el momento de derrocar a Allende; y que, por último, la organización Patria y Libertad contaba con «la lealtad» de por lo menos un regimiento de Santiago, el Blindados Número 2, ya que su comandante, el teniente coronel Roberto Souper Onfray era miembro activo de la organización fascista y, además, hermano de su dirigente regional (en Concepción) del mismo grupo.

El general en retiro Viaux Marambio (que estaba siendo protegido abiertamente por la Corte Suprema, al serle rebajada la pena de presidio de veinte años de cárcel que le correspondía por su responsabilidad intelectual en el asesinato del general René Schneider Chereau, a sólo dos años) estuvo de acuerdo con Rodríguez Grez y le dio un esquema. Según contó Rodríguez Grez más tarde a Benjamín Matte, y éste, borracho, pocos días antes del

intento insurreccional del 29 de junio, en su casa, a un grupo de amigos, el esquema era así: primero, provocar de algún modo un escándalo en el que el general Carlos Prats fuera el protagonista para «suicidarlo moralmente», obligando a las Fuerzas Armadas a pensar que «ya no se puede aguantar más»; y segundo, atacar La Moneda con los tanques del Regimiento Blindados, presentando a los mandos de Santiago «el hecho consumado».

Como se ve, el esquema era una especie de repetición mejorada de lo que Viaux pretendió hacer en octubre de 1970. Patria y Libertad se dio a la tarea confiando mucho en el desarrollo mecánico de las cosas, y concentró sus esfuerzos solamente en preparar los dos «detonantes»: el desprestigio de Carlos Prats y el levantamiento contra el Palacio de La Moneda de las tropas de tanques de Santiago.

En la mañana del 26 de junio, martes, comenzó a funcionar la insurrección con la complicidad de un regimiento de Santiago. Se montó un «incidente callejero» en el cual debía ser linchado, o por lo menos golpeado brutalmente por la multitud, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Se utilizó como señuelo a una mujer llamada Virginia Cox, cuya apariencia de hombre (esa mujer era conocida en la alta sociedad santiaguina por su lesbianismo casi «profesional») era el centro de toda cuestión. Se trataba de que a la hora de mayor concurrencia de automóviles desde el barrio alto de la capital hacia el centro, el automóvil de Prats debía ser molestado, interceptado y puesto en peligro de chocar varias veces, por otros dos automóviles, mientras, desde un tercero, Virginia Cox molestara al general hasta exasperarlo. Se esperaba que Prats creyera que la Cox era hombre (tal como ocurrió) y que arremetiera físicamente contra ella, lo cual provocaría un lío considerable en el lugar, con indignación manejada por dos hombres adiestrados para ello, que iban en los otros dos automóviles de la operación, y el general sería golpeado y, en el mejor de los casos, linchado. Toda la operación fue preparada por la CÍA norteamericana, a través del periodista Manuel Fuentes

Wedling, de Patria y Libertad.

Así ocurrió cerca del mediodía del martes 26 de junio. A la salida del barrio alto de Santiago, y después de que durante veinte cuadras el automóvil del general Prats fue cruzado, tocado, y a veces empujado por otros dos, y después que Virginia Cox, desde su automóvil pequeño, le hiciera muecas groseras, gestos con las manos y le gritara «viejo maricón», el comandante en jefe del Ejército interceptó al auto de Virginia Cox, sacó su pistola de reglamento, bajó de su automóvil y encañonó en la cabeza a la mujer. Sólo en ese momento el general Prats se dio cuenta que Virginia Cox no era hombre, sino mujer. Pero ya más de un centenar de personas rodeaba la escena, y uno de los provocadores trató de iniciar el linchamiento gritando: «¡General maricón, eres como Allende, sólo te atreves con las mujeres!» Sin embargo, por una casualidad, estaba en el grupo un chófer de taxi que cogió al general Prats de un brazo y a tirones lo metió en su taxi y lo llevó al Ministerio de Defensa. Más tarde, el chófer declaró a los periodistas: «Me di cuenta de que la gente quería linchar al general. Si no lo saco, lo matan. Había tipos que le dieron de empujones, le gritaban de todo y azuzaban a los demás para que hicieran lo mismo... Para sacar mi taxi tuve que meter el acelerador a fondo y empujar a varios que querían obstruirnos el paso.»

Pero el automóvil del general Prats quedó en el lugar. Desinflaron las llantas y escribieron, con pintura amarilla, en el parabrisas y el techo, las palabras «generales gallinas» y «Prats maricón». En el lugar de los hechos estaban, desde el principio, periodistas de la radioemisora Minería, perteneciente a la oligarquía industrial, y de «El Mercurio». Los periódicos, radios y cadenas de televisión de la reacción informaron del suceso, desde la tarde misma del 26 en el sentido de «general Prats ataca a una mujer que le sacaba la lengua», y afirmando con sus crónicas la tesis de ser «un cobarde», una persona que «no puede ser jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas».

Al día siguiente, miércoles 27 de junio, en la página dos del

diario «El Mercurio», apareció un larguísimo artículo firmado por Carlos Vicuña Fuentes, un anciano intelectual reaccionario, titulado *Un llamado a la Gente Sensata*. El artículo decía, en síntesis, que «el país ya no aguanta más la situación actual», nuestras Fuerzas Armadas son la reserva moral que debe salvar la República», es «necesario que un Gobierno militar tome las riendas de la nación» y «después de pasado un tiempo prudente, entregue el mando a un grupo selecto de personas probadamente sabias e inteligentes»

El mismo día, en el casino de oficiales del Regimiento Blindados Número 2, un capitán trató de convencer a sus compañeros oficiales que «debemos ir a la Comandancia en Jefe con los tanques, para pedir la salida del maricón de Prats y la renuncia de Allende». El capitán fue arrestado por los miembros del Servicio de Inteligencia de la unidad y llevado al Ministerio de Defensa. Al día siguiente, 28 de junio, el comandante de la unidad, teniente coronel Roberto Souper Onfray, comunicó al equipo dirigente de Patria y Libertad que «la comandancia me ha relevado de mi cargo, mañana tengo que entregar el mando al coronel Ramírez, ¿qué hago?»

Pablo Rodríguez Grez y Benjamín Mette le dijeron que insurreccionara la unidad. El día 29 de junio, a las nueve de la mañana, después de un baleo en el interior del regimiento contra oficiales que se opusieron (murieron 8 militares), a bordo de seis tanques Sherman, el regimiento Blindados Número 2 rodeó La Moneda, asaltó el Ministerio de Defensa y liberó al capitán apresado el día 27. Pero, la insurrección había cometido un pequeño error: Salvador Allende NO estaba en el Palacio de Gobierno; estaba en su residencia del barrio alto, al otro extremo de la ciudad, en la calle Tomás Moro.

Desde las nueve a las once de la mañana, espacio en el cual los tanques de Souper dispararon más de quinientos tiros, los conjurados de Patria y Libertad y el propio teniente coronel Souper esperaron en vano que «los detonantes» montados desde el día 26

surtieran su efecto. Ningún otro regimiento de Santiago se plegó al asedio de La Moneda. Ninguna radio fue tomada por efectivos militares. Ni Eduardo Frei, Presidente del Senado, ni Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema dijeron nada. ¿Qué había pasado?

Había pasado que los generales y almirantes conspirados no tenían seguridades todavía de que Augusto Pinochet, segundo general del Ejército, estuviera totalmente convencido de la operación derrocamiento; aun cuando la «estrategia general del derrocamiento» estaba terminada, según estudios de los generales Sergio Arellano Stark, Hermán Brady Roche, Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, ocurre que no se habían iniciado conversaciones con el general César Mendoza Duran, de Carabineros (aun cuando se le eligió a él como «contacto», ya a fines de marzo, los generales postergaron las conversaciones hasta poder presentarle un cuadro militar completo, y eso en junio todavía no ocurría), y que no había sido terminado el esquema de acción en Santiago, que debía coordinarse con una intensa «campana política a partir de julio, para desembocar en septiembre» que colocara a Allende en la «ilegalidad» a los ojos del Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría.

Entonces, cuando el general Carlos Prats, por orden de Allende, se fue a la Escuela Militar de Santiago, a las nueve y cuarto de la mañana del 29 de junio, «para sofocar el motín», se encontró con que «los generales están reunidos discutiendo la situación». Sólo una hora y quince minutos después, los generales, sin la presencia de Prats, estuvieron de acuerdo en «sofocar el motín». Carlos Prats (sin saberlo) a la cabeza de los generales conspiradores, se dirigió a los distintos regimientos de Santiago, para hacerlos salir a sofocar el levantamiento.

El general Prats se dirigió a la Escuela de Suboficiales porque estaba comandada por el coronel Julio Canessa Roberts, elemento ultrafascista cuyos pasos conocimos en capítulos anteriores. El general Augusto Pinochet se puso a la cabeza del Regimiento Buin,

cuyo comandante era «constitucionalista». El general Óscar Bonilla fue enviado al regimiento sublevado, el Blindados Número 2, por recomendación de Orlando Urbina Herrera, Inspector General del Ejército y con grandes ambiciones de ser «líder» de un movimiento «militar reformista» que reemplazara a Allende. La recomendación se justificaba porque Bonilla, «duro» y conspirador, era una de las pocas personas capaces de convencer a los sublevados del regimiento para que depusieran las armas «esperando una ocasión propicia».

Más tarde, de camino a La Moneda, al general Prats se sumó el general Guillermo Pickering, «reformista», jefe de los Institutos Militares; mientras, el jefe de la guarnición de Santiago, el general «reformista» Mario Sepúlveda Squella, ordenaba que la Escuela de Infantería (al mando de un coronel «constitucionalista»), la Escuela de Telecomunicaciones (al mando de un coronel «duro») y la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales (al mando de un teniente coronel «reformista») avanzaran desde el noroeste y el sur hacia La Moneda.

El general Prats había pedido a Salvador Allende que ordenara a las Fuerzas de Carabineros retirarse del escenario de la operación de «cerco» de los amotinados. Allende accedió y limitó la acción de Carabineros a cuidar su residencia de Tomás Moro.

En un esfuerzo desesperado, los fascistas de Patria y Libertad dinamitaron la planta transmisora de Radio Portales, del partido socialista. Pero ya no había nada que hacer. A las once y media de la mañana, los insurrectos se rindieron en las propias calles adyacentes a La Moneda, mientras tres tanques al mando del teniente coronel Souper escapaban hacia la sede del regimiento Blindados Número 2, para rendirse ante el general Óscar Bonilla.

Pablo Rodríguez Grez, Benjamín Matte y otros dirigentes de Patria y Libertad se refugiaron en la Embajada del Ecuador.

A las ocho de la noche de ese mismo viernes, frente al Palacio de La Moneda, el presidente Allende convocó al pueblo para dar «un informe sobre los hechos». Los obreros reunidos, unos veinte

mil, gritaban consignas como «armas para el pueblo», «crear poder popular», «a cerrar el Congreso», «fuera de Chile los yanquis, ahora».

Allende hizo un discurso que finalizó con este párrafo: «Mañana, de nuevo las usinas a levantar su humo para saludar a la patria libre; de nuevo al trabajo a recuperar las horas que significó el paro del jueves; mañana cada uno a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile y por el pueblo... Compañeros trabajadores: tenemos que organizamos. Crear y crear el Poder Popular, pero no antagónico ni independiente del Gobierno, que es la fuerza fundamental y la palanca que tienen los trabajadores para avanzar en el proceso revolucionario».

Grupos de trabajadores, esa noche, se fueron caminando hacia sus casas gritando eufóricos: «¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!»

Larga reunión

A la mañana siguiente del 29 de junio, se reunieron casi todos los generales de la guarnición de Santiago, agrupados bajo el liderato de Herman Brady, Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Sergio Arellano Stark, Javier Palacios y Óscar Bonilla. Se leyó un informe del SIM que decía que «entre las nueve y las once de la mañana», en los cordones industriales de Los Cerrillos y Vicuña Mackenna, se había reunido un contingente de más o menos diez mil obreros, en preparación para avanzar al centro de Santiago a combatir con las tropas blindadas amotinadas». Se estableció que el «amotinamiento» había sido «causado por la mala influencia de personas civiles sobre nuestros mandos», y que «esta situación da una mala imagen de la cohesión del Ejército». Se acordó instruir a todos los mandos de unidades en el país «suspender todo tipo de contacto con la organización Patria y Libertad» y «mantener informado al Estado Mayor, cotidianamente, de lo que ocurra en las áreas de jurisdicción respectiva». Se dio un instructivo general

a todo el aparato central del Ejército de «constante alerta», de «aumentar el ritmo de los allanamientos de fábricas y sedes de partidos de la Unidad Popular y de la Central Única de Trabajadores, para limpiar la población civil insurreccional de elementos bélicos». Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de comenzar «una educación rápida y sistemática de la tropa y suboficiales, con charlas y pequeñas reuniones lideradas por oficiales de alta graduación en las que se señale terminantemente que la Patria está en peligro, que los marxistas preparan una invasión del país con ayuda peruana y que está llegando la hora de dar la vida por la nacionalidad chilena».

(En varios regimientos de Santiago, desde julio en adelante, diversas compañías eran despertadas en la madrugada, se las llevaba al salón de proyección de cine, se les hacía ver películas sobre la lucha de la selva en Vietnam, concluyendo con una pequeña charla sobre «el peligro comunista mundial contra nuestras mujeres, hijos y padres», y se lograba, así, mantener constantemente con los nervios en tensión a parte de la tropa.)

La reunión de la mayoría de los generales de la guarnición de Santiago en la mañana del sábado 30 de junio, fue sólo el primer paso de una decisión tomada apresuradamente por los altos mandos en el círculo más íntimo de la conspiración. Esa misma tarde, los generales Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark fueron designados por acuerdo de Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella, Javier Palacios, Orlando Urbina Herrera y Guillermo Pickering para conversar con el general Augusto Pinochet, ponerlo en antecedentes de lo que se tramaba y pedirle que se sumara a la conspiración como «el líder del Ejército».

Las reuniones con Pinochet duraron toda la tarde del sábado 30 de junio, parte del domingo primero de julio y la mañana del lunes 2. De acuerdo con informaciones filtradas posteriormente, en esos tres días, al parecer, se fijaron los detalles ideológicos más importantes del golpe militar en gestación, incluyendo la necesidad de sacar del cuadro de la sociedad chilena a todos los partidos

políticos, para «poner en práctica la patriótica tarea de limpiar el cerebro de los chilenos, infiltrados de la ideología marxista».¹¹

La decisión de Pinochet de sumarse a la conspiración, aceptando el ofrecimiento de ser «el líder de la operación», fue comunicada con alborozo al general Gustavo Leigh Guzmán y al vicealmirante José Toribio Merino. El primer fin de semana de ese mismo mes, la misión norteamericana en el Ministerio de Defensa chileno también fue informada de que el círculo conspirativo se había cerrado al más alto nivel. En la segunda semana de julio, el general Óscar Bonilla fue encargado de conversar con el general de Carabineros César Mendoza Duran para sumarlo a la conspiración. Mendoza Duran aceptó sólo después que se le aseguró que formaría parte de la posible Junta Militar de insurrectos, desplazando a su superior en Carabineros, José María Sepúlveda Galindo.

Así, la primera mitad de julio de 1973, fue una época de júbilo en el Pentágono norteamericano al comprobar que «sus generales» en el Ejército chileno estaban articulando un esquema golpista de enorme magnitud.

Los peones

En las conversaciones del general Augusto Pinochet con los generales en contacto directo con el Pentágono, se acordó presionar a los dirigentes políticos Eduardo Frei y Onofre Jarpa y a los jueces de la Corte Suprema para acelerar una campaña intensa de desprestigio «constitucional» del presidente Allende, y de llegar a una situación de «opinión pública» en que «no hubiera dudas para el común de los chilenos, que los militares chilenos tenían que derrocar a Allende para *volver a la legalidad*».

La maquinaria militar para poner en movimiento a los políticos funcionó de manera increíblemente eficaz. Los deseos de Eduardo Frei y de Onofre Jarpa de provocar un golpe militar para después quedar, uno de ellos, como nuevo presidente de Chile, fueron una

tierra sumamente abonada en donde germinó la semilla de los generales que querían «salvar» a Chile por cuenta del Pentágono.

En la misma primera semana de julio, y al parecer por idea del general Augusto Pinochet, muy preocupado por los resultados electorales imprevistos de las elecciones de marzo de 1973, se acordó pedir «a los contactos civiles» una investigación «que demuestre» que en marzo de 1973 hubo «un gigantesco fraude». Con eso, esperaban los generales, se pondría en duda todavía de manera mucho más fuerte, la «legitimidad» del Gobierno de Allende. Esta tarea recayó en el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Jaime del Valle, simpatizante del grupo fascista Patria y Libertad.¹²

En poco menos de dos semanas, estuvo «listo» el «estudio científico» de Jaime del Valle y un equipo de ingenieros dirigidos por Santiago Moran, ligado a la oligarquía metalúrgica chilena. El encargo de los generales había sido cumplido. El «estudio» decía (basándose en 29 casos de fallas de inscripción electoral, en un total de más de tres millones de votantes) que «el Gobierno había cometido fraude en marzo de 1973», «falsificando» por lo menos 400 mil votos. Pero, lo importante, era que el «documento» terminaba así:

«Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir... Es evidente que en una coyuntura de esta naturaleza, el pueblo chileno se enfrenta con una tarea de gran envergadura que ya no puede eludir. *Ésta es la de reconstruir la democracia creando la nueva institucionalidad que la garantice eficazmente*».

¡Era la idea que los generales querían ver escrita en ese informe! La idea, metida en la cabeza de miles de chilenos a través de la repetición de «documentos» como éste en diarios, revistas, radios y canales de televisión: había que crear «una nueva institucionalidad». Tarea, por supuesto, reservada a los militares.

El 8 de julio, el presidente del Senado, Eduardo Frei, hizo pública una declaración que la noche anterior había sido revisada por los generales Óscar Bonilla y Sergio Arellano Stark. La declaración la firmaba también el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, del mismo partido que Frei, y empresario ligado al monopolio de la locomoción colectiva particular de Santiago. El documento decía: «Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más graves crisis en el orden político, económico, social y moral que ha conocido en su historia». Más tarde agregaba detalles parciales de la situación política y señalaba «a esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que divide al país». (Por supuesto, sin mencionar la campaña de prensa de la derecha chilena, que calificaba cotidianamente a Allende de «borracho» y «maricón», que acusaba al general Prats de «vendido por unos dólares más», que pedía a los chilenos que se sumaran a la teoría de que «el mejor marxista es el marxista muerto»; y tampoco no mencionaba el sabotaje a la economía chilena de parte de los organismos financieros de los Estados Unidos, del propio Frei, de la oligarquía chilena; ni la ola de sabotajes dinamiteros, a balazos y a golpes de las organizaciones fascistas, que habían elevado la marca en junio a 115 atentados. Más tarde, en junio, llegarían a 128 y en agosto a 300 mensuales.)

Y en un ejemplo realmente brillante de cinismo, la declaración Frei-Pareto, encargada por Bonilla-Arellano, afirmaba: «Los sectores democráticos que representamos no están armados. Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, conforme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradición quebrantada. Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación.»

Y agregaba que «nos parece fundamental» que el Gobierno «promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despachada por el Congreso» (se trataba del proyecto Hamilton-Fuentealba,

que congelaba el área de propiedad social, reducía su alcance y significaba la destrucción del programa económico de la Unidad Popular).

Un asesinato

La situación se deterioraba por momentos en julio de 1973. Según datos incompletos, entre enero y mayo de 1973, el capital especulativo en manos de la oligarquía nacional había llegado a la enorme cifra de 250 millones de dólares, con lo cual hicieron trizas el ya debilitado equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes de consumo. La restricción en la reinversión de capital, según un pre-estudio de la Sociedad de Fomento Fabril, iba a llegar, en los primeros seis meses de 1973, a porcentajes superiores al 50 %.

También, a esa altura de la situación, al sabotaje económico se sumó una intensa campaña para denunciar la ineptitud demostrada por un número de funcionarios estatales de los partidos de izquierda encargados de administrar «el área de propiedad social», es decir, las empresas estatizadas. Estos funcionarios, conocidos como «interventores», hicieron de la corrupción y la inepticia administrativa un arte, provocando descalabros sectoriales en la producción. Los oligarcas y los imperialistas norteamericanos se aprovecharon de esta realidad parcial para presentar la fábula económica de que «el marxismo» había desmoronado el sistema productivo chileno y que, por lo tanto, «el socialismo» no servía para Chile y había que reemplazarlo por un Estado fascista corporativo.

Las cifras del alza del costo de la vida, que reflejaban la escalada del sabotaje económico reaccionario e imperialista y la incapacidad de algunos sectores de la Unidad Popular para manejar la situación, eran las siguientes:

diciembre de 1970 a diciembre de 1971	22,1 %
diciembre de 1971 a diciembre de 1972	163,4 %
enero de 1972 a enero de 1973	180,1 %

mayo de 1972 a mayo de 1973 238,5 %

Esto significaba que en los primeros cinco meses de 1973, la inflación iba saltando a un promedio mensual de 14,6 %. Después fue peor. Las cifras para julio de 1973, en relación con el mismo mes del año anterior, daban un índice increíble de 323,6 % de inflación anual, el mayor del mundo. Esto quería decir que el promedio mensual había subido a 42,55 %. Según esto, la perspectiva para diciembre de 1973 era de una inflación anual de 500 %.

Con este paisaje de fondo trabajaban los diversos círculos conspiradores de la derecha, pero con contradicciones entre sí.

El punto de vista de la Democracia Cristiana, encabezada por Frei, era distinto al del Partido Nacional, encabezado por el senador Onofre Jarpa. Mientras Frei se debatía en el dilema de utilizar a las Fuerzas Armadas como «disuasivo» contra Allende y, en el caso de llegar a un apoyo cierto para una dictadura militar, maniobrar para que los generales dejaran el poder lo más pronto posible en manos de civiles (en las manos de Frei, por supuesto), la posición del nacional Jarpa era más dura.

Jarpa estimaba que «la única salida posible para mantener la paz social por largo tiempo, es una dictadura militar». Por eso, todos sus esfuerzos eran para empujar a los generales y almirantes por este camino.

Esto provocaba una contradicción y muchas fricciones en la oposición. Sobre todo porque el grupo de Frei tenía conversaciones secretas con Allende, para «llegar a un entendimiento», a un acuerdo con el partido demócratacristiano para congelar las reformas, desviar el inmenso caudal revolucionario que se acumulaba en las filas de los trabajadores en todo el país, y detener la posibilidad de que los militares se sintieran tentados de dar un golpe militar y quedarse «para siempre» en el Gobierno, como ocurrió en Brasil en 1964.

Esto, naturalmente, se reflejaba también en el seno de los altos mandos militares, sobre todo en el Ejército, pilar fundamental de

cualquier insurrección militar. A mediados de julio de 1973, ya estaba claro en el seno de los generales del Ejército el acuerdo por «terminar con el proceso Unidad Popular», pero no estaba nada de claro el «cómo». El general Carlos Prats, comandante en jefe, había acuñado la tesis de un gobierno Allende-FF.AA., con la firma de una «paz política» con la Democracia Cristiana y la participación restringida del Partido Comunista de Chile y una parte del socialista, basando su argumentación en que «sólo así impediremos que los trabajadores más extremistas se insurreccionen». A esta tesis se adherían los generales Joaquín Lagos Osorio, Herman Brady Roche, Washington Carrasco Fernández, Héctor Bravo Muñoz, Mario Sepúlveda Squella, Guillermo Pickering y Orlando Urbina Herrera pero con variantes. Mientras Lagos Osorio no hacía objeciones al plan Prats, lo mismo que Orlando Urbina Herrera; los otros cinco generales decían que el Gobierno «transitorio» debía ser solamente con Allende-FF.AA., por «un tiempo corto», para preparar las condiciones para implantar un Gobierno «puramente militar» y poner en ejecución los acuerdos del Pentágono. Los generales Óscar Bonilla, Sergio Arellano Stark y Javier Palacios, en cambio, encabezaban otro grupo, al que se había sumado Augusto Pinochet. En éste se consideraba que la etapa de gobierno Allende-FF.AA era innecesaria.

Con este último grupo estaban los generales César Ruiz Danyau y Gustavo Leigh Guzmán; y los almirantes José Toribio Merino, Horacio Justiniano, Sergio Huidobro, Patricio Carvajal y Pablo Weber.

Solo, pugnando por ser el «líder de la sublevación», estaba el general Manuel Torres de la Cruz, que era el único que decía que «tenemos que operar ahora, de inmediato».

Fue con este marco cuando José Toribio Merino, jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, ordenó a un grupo del Servicio de Inteligencia Naval asesinar al edecán naval del presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters. Tarea que se puso en

práctica el 26 de julio de 1973, con todos los detalles que ya he relatado anteriormente, en el primer capítulo de este libro.

Este asesinato ordenado por los conspiradores de la Marina, permitió a los servicios de contrainteligencia del partido socialista, detectar un plan del Partido Nacional, en combinación con la Agencia de Inteligencia a través del Comando de Ex Cadetes, para asesinar al presidente Allende. La CÍA, después de su error que llevó a Patria y Libertad a intentar la insurrección militar del 29 de junio, estimó que solamente el asesinato de un «pez gordo» podía provocar el caos necesario para que los militares se «movieran». El 27 de julio, viernes, los servicios de contrainteligencia socialistas descubrieron que había movimientos en el Partido Nacional, en relación con una «gran operación» para el 4 de septiembre de 1973, que tenía como objetivo asesinar a Salvador Allende. El plan se descubrió por las infidencias de un parlamentario ligado estrechamente a los grupos fascistas cuando, en la noche del 27 de julio, dijo en una casa particular que «el asesinato de Araya (el edecán naval, ocurrido la noche antes) puede echar a la basura nuestros propósitos». El parlamentario se mostró preocupado por la conmoción nacional que provocaría el asesinato del edecán naval (él no sabía que había sido planificado por el Servicio de Inteligencia Naval), ya que las investigaciones para descubrir a los asesinos podrían levantar la tapa con respecto a la muerte de Allende.

El primero de agosto, Allende denunció esto al general Carlos Prats, y el comandante en jefe del Ejército informó a su cuerpo de generales. Los generales estuvieron de acuerdo en que era «una aventura» el asesinato de Allende, y tomaron medidas para desbaratar el plan a través del SIM. Una vez más, la CÍA se embarcaba en cosas no aprobadas por el Pentágono y entorpecía los planes de los generales.

Veinte días más tarde, sin embargo, como vimos en el primer capítulo, los generales en contacto con el Pentágono cambiaron de opinión y decidieron asesinar a Allende, pero simulando un

suicidio, después de haberse hecho cargo de todo el país por medio de una ocupación militar a sangre y fuego.

El asesinato del edecán naval de Allende precipitó las cosas desde el ángulo de los conspiradores civiles, que estimaron que era el momento de desencadenar «un nuevo paro de octubre». El mismo 27 de julio los dueños de camiones de todo Chile comenzaron un paro, alegando que «no se han cumplido los acuerdos por los cuales suspendimos la huelga de octubre de 1972». Tres días más tarde, León Vilarín, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Chile, declara que «este paro termina cuando se acabe el Gobierno de Allende». En Santiago, ese mismo día, Frei conversa con un grupo de amigos, en su casa, y les dice que su indecisión ha terminado, que «creo que sólo las Fuerzas Armadas pueden salvar a Chile».

El martes 31 de julio, el general Carlos Prats se reúne con 250 oficiales de la guarnición de Santiago, para discutir, por iniciativa de los oficiales, «la situación política, la grave crisis económica y las amenazas de sectores obreros contra las Fuerzas Armadas». Los 250 oficiales le piden a Prats que le diga al presidente Allende que «los oficiales del Ejército creen que si no se llega a un acuerdo con la Democracia Cristiana, y si no se incorpora a las Fuerzas Armadas el manejo total del área de propiedad social y se declaran fuera de la ley los corodones industriales, entonces, tendrán que actuar los militares».

Allende contrarresponde sacando a relucir los documentos que tenía sobre la complicidad de altos jefes navales en el asesinato del edecán Araya Peters, y pretendiendo dar un golpe de efecto — como se relata en detalle en el primer capítulo de este libro—, obliga a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros a aceptar cuatro ministerios en su Gabinete, que comienza a funcionar el 9 de agosto como «la última oportunidad».

El día anterior, 8 de agosto, el Colegio de Abogados de Chile, dirigido por Alejandro Silva Bascañán, magnate de las finanzas, emite una declaración siguiendo la campaña pedida por los

generales conspiradores. En ella dice que se dirige a la opinión pública «en cumplimiento del deber de conciencia de movilizar a los más amplios sectores ciudadanos frente al quebrantamiento del Estado de Derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos».

Llama a apoyar todo lo que signifique debilitar al Gobierno constitucional.

Cae Prats

Veinticuatro horas antes de la declaración del Colegio de Abogados, el martes 7 de agosto en la noche, los militares golpistas del alto mando de la Marina, habían decidido poner en marcha la idea de su vicealmirante José Toribio Medina, de presentar el golpe militar que se preparaba como una «respuesta» a un pretendido «golpe rojo». Los Servicios de Inteligencia de la Marina habían detectado una reunión pedida por alrededor de 200 suboficiales y marinería, en Talcahuano, para denunciar que desde el mes de junio, los mandos de los buques de la armada dirigían arengas a la tripulación, en alta mar, diciéndoles que «es necesario sacar de la Moneda al marxista Salvador Allende», «los marinos tenemos el deber patriótico de derrocar el actual Gobierno». Altamirano, junto con Miguel Henríquez, secretario general del MIR, y Óscar Garretón, del MAPU, explicaron a los suboficiales y marineros la situación política chilena y el peligro que representaban los oficiales fascistas, cuyas actuaciones estaban al servicio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional. Plantearon la necesidad de hacer conciencia entre la marinería que «no se debe obedecer a los oficiales fascistas» si éstos ordenan un alzamiento contra el Gobierno.

El vicealmirante Merino y sus asesores del Servicio de Inteligencia estimaron que con ello tenían material suficiente para montar un «golpe rojo» en la Armada, y el 7 de agosto anunciaron oficialmente que se había descubierto una «subversión» en los

buques de guerra «Almirante Latorre» y «Blanco Encalada», dirigida por Altamirano, Henríquez y Garretón. Se anunció el arresto de medio centenar de marineros y suboficiales, encabezados por un cabo de apellido Cárdenas.

En los días siguientes, los reporteros de los diarios de izquierda lograron saber cómo, en las bases navales de Talcahuano y Valparaíso, estos marineros estaban siendo obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales, que horrorizaron a la opinión pública. Se descubrió en el Hospital Naval de Valparaíso a un marinero al cual le habían sido reventados, a golpes, los testículos. Esposas de los detenidos relatan las torturas y se logra establecer tres tipos de ellas:

a) Un tambor de petróleo abierto, lleno de orines y excrementos humanos, es utilizado para sumergir la cabeza del «interrogado» hasta el punto de la asfixia, cada vez que se niega a responder o a reconocer alguna culpabilidad que los interrogadores quieren.

b) Colgados los prisioneros boca abajo, con las piernas abiertas, de una barra para hacer gimnasia, desnudos, reciben golpes con una fusta en el escroto, en el nacimiento de los testículos.

c) Los prisioneros son obligados a arrastrarse, desnudos, por una «piscina» llena de piedras quebradas a martillo, sobre la cual, a treinta o cuarenta centímetros del suelo, hay una fuerte malla de acero que impide levantarse. Los prisioneros deben reptar entre la malla y las piedras filudas, varias veces, durante los interrogatorios.

Los familiares de los marineros presos dan nombres de capitanes del Servicio de Inteligencia Naval a cargo de las torturas, y se publican.¹³

Esto sirve para agudizar los deseos de enormes sectores del pueblo de organizarse para «impedir la insurrección militar». Periódicos como el «Puro Chile» y «Noticias de Última Hora» se destacan por sus investigaciones sobre este suceso, además de dar a conocer hechos vergonzosos ocurridos durante el motín militar del 29 de junio, en que los soldados que ocuparon los edificios

adyacentes al Palacio de La Moneda, saquearon los bolsillos y los escritorios de los empleados de esas oficinas públicas. Incluso se descubren verdades hilarantes como la del edificio de Tesorería, al lado oeste de Palacio, donde los soldados saquearon dinero, relojes, anillos de oro de los empleados y... ¡dos quesos y cuatro sandwiches que tenían para almorzar!

La presión sobre los políticos civiles comienza a ser más fuerte. El grupo de Gustavo Leigh, César Mendoza y José Toribio Merino, el día 20 de agosto, después del fracasado *putsch* del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz, ya había acordado el asesinato de Salvador Allende, y el 21 reciben la buena noticia:... Eduardo Frei ha manejado la situación muy bien y en no más de 48 horas se tendrá un acuerdo de la Cámara de Diputados declarando la «inconstitucionalidad» del Gobierno de Allende y conteniendo un «texto» tal como lo pidieron los generales Bonilla y Arellano Stark.

En realidad, el acuerdo sería aprobado el 22 de agosto, pero los generales en contacto con el Pentágono ya lo tenían el día 21 en su poder. En su parte fundamental decía que la Cámara acordaba «representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República», y les decía a los comandantes en jefe que eran ministros: «representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde PONER INMEDIATO TÉRMINO A TODAS LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS que infringen la Constitución y las leyes»...

Ese mismo día 21 de agosto, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional organizan una manifestación de «mujeres», frente a la casa del general Carlos Prats, ministro de Defensa todavía,

para pedirle que se vaya y que deje a los demás generales «crear el poder militar». La manifestación había sido pedida por los generales en contacto con el Pentágono para «ablandar el ánimo» del general Prats, ya que habían acordado enviar al general Óscar Bonilla a la casa del comandante en jefe titular del Ejército, para pedirle «en nombre del cuerpo de generales; que renuncie... porque usted es una vergüenza para nuestra institución, por su apoyo demasiado leal al Gobierno de Allende». Bonilla tenía el encargo, además, de decirle a Prats que no podía resistirse porque «tenemos todas las medidas tomadas para limpiar de una vez la honra de nuestras Fuerzas Armadas».

Pero, dejemos que relate ese gravísimo momento el economista español Joan Garcés, asesor personal de Allende y testigo directo de estos hechos, según lo hizo en un documento a la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de octubre de 1973:

«El día martes, la derecha organiza una manifestación de mujeres ante la casa del ministro de Defensa. Las mujeres le insultan soezmente y le exigen que abandone las filas del Ejército. El servicio de Inteligencia fotografía a las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. Esa tarde, el general Prats, enfermo y en cama, es visitado por el general Bonilla —hombre de Frei, cuya mujer se encontraba entre los manifestantes— quien le aconseja que renuncie como comandante en jefe titular del Ejército. Pocos minutos después de la partida del general Bonilla llega el presidente Allende a casa del general Prats. Este le manifiesta su impresión de que en el Ejército se está tramando una traición, y conversa con el Presidente sobre las medidas adecuadas para hacerlo fracasar.

»De regreso a su residencia particular, el Presidente recibe la visita del ministro del Interior y del general subrogante de Carabineros, general Urrutia. Tiene invitados a comer a varios generales del Ejército y, al frente de ellos, Augusto Pinochet. Objeto de las conversaciones: medidas contra el golpe de Estado en gestación. Pasada la medianoche, el Presidente convoca a los

dirigentes de los partidos de la coalición de Gobierno y de la Central Única de Trabajadores, para manifestarles que, ante la gravedad de la situación militar, de acuerdo con los altos mandos del Ejército, ha resuelto llamar a retiro a los generales complicados en el intento de golpe. En previsión de que el ejercicio de sus facultades constitucionales de llamar a retiro a los generales que han perdido su confianza provoque una revuelta militar, manifiesta que el alto mando del Ejército ha estudiado la articulación de un plan de defensa del Gobierno con la colaboración de las fuerzas regulares y sindicatos obreros. Cerca de las dos de la madrugada, el Presidente es informado de que acaba de llegar el alto oficial que tiene que ultimar con el Gobierno y la Central Única de Trabajadores el plan de defensa antigolpe para el día siguiente. Yo mismo vi a ese general. Se llama Augusto Pinochet».

Este relato de Joan Garcés nos revela cómo la ingenuidad política de altos dirigentes de la Unidad Popular, incluyendo al presidente Allende, permitió que «el líder de la insurrección militar», por acuerdo de los altos mandos en contacto con el Pentágono, conociera todo el despliegue de las fuerzas obreras en Santiago, como «responsable» de un plan de defensa antigolpe... Del golpe que él mismo estaba articulando en conjunto con la Marina, Aviación y Carabineros.

Al día siguiente, 22 de agosto, el general Prats reunió a los generales integrantes de la junta institucional, y les pidió que redactaran una declaración de «desagravio» a su persona y cargo, por la manifestación de las mujeres del día anterior. De los 22 generales presentes, dieciocho se negaron a hacerlo seguramente para evitar sospechas de Prats; los generales Pinochet, Brady, Sepúlveda y Pickering votaron a favor de la petición de Prats.

De inmediato, el general Prats concurre a La Moneda y presenta la renuncia a Salvador Allende. Leamos lo que dice Joan Garcés en el documento que citamos anteriormente:

«Ante esta situación, el general Pinochet manifiesta al presidente Allende que es conveniente aceptar la renuncia del general

Prats, como una medida para apaciguar las exigencias en su contra de la Aviación y la Marina. A cambio del retiro del general Prats, Augusto Pinochet se compromete a asumir la Comandancia en Jefe titular del Ejército, y llamar a retiro esa misma semana a seis generales implicados en la preparación del golpe de Estado. Encabezando la lista el general Bonilla, hoy su ministro del Interior».

El 23 de agosto, el general Prats deja de ser comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa. Acogido a retiro, escribe una carta pública de renuncia al Jefe del Estado, en un gesto de nobleza, previniéndolo que «renuncio porque ya no puedo detener» las fuerzas golpistas. Es decir, avisa a todo Chile que el golpe militar está en marcha. Pero su carta tiene poco eco.¹⁴

El 23, en la tarde, en una reunión de generales conspiradores, los generales Sepúlveda y Pickering, reciben las instrucciones para movilizar las tropas de Santiago en el «día D» (todavía no fijado y puesto tentativamente a partir de septiembre). En ese momento, Pickering y Sepúlveda se enteran que el golpe se dará sobre la base de «dar de baja» a unos seis mil dirigentes medios sindicales, políticos y de masas en las primeras horas del golpe, destruir concentraciones obreras y poblaciones humildes con fuego de tanques y aviación, y que se calcula que «con unos cincuenta mil muertos en los primeros tres o cinco días de combate habremos limpiado el terreno». Más que eso, cuando protestan indignados por esta táctica de asesinato y destrucción, de algún modo se enteran del plan para asesinar al presidente Allende y reciben instrucciones de no hablar con nadie porque «ni siquiera Pinochet» lo sabe. Pickering y Sepúlveda presentan sus expedientes de retiro del Ejército de inmediato, y el día 24 dejan de pertenecer a las filas. Al mando de la guarnición de Santiago y de la Segunda División es nombrado el general de brigada Herman Brady Roche y, de hecho, el general Sergio Arellano Stark reemplaza a Pickering.

Mientras tanto, Pinochet se las arregla con Allende para no

despertar sospechas y no pedir el retiro de los generales metidos en la conspiración. Joan Garcés lo cuenta así:

«En los últimos días de agosto el propio general Pinochet pide al Presidente de la República postergar el retiro de los generales golpistas para la Junta Calificadora del Ejército, a celebrar en la segunda mitad de septiembre. Justificación: ésta sería una resolución «institucional» interna, que él impondría como comandante en jefe. Con ello se preservaría al Presidente de la crítica de querer retirar a generales por motivos políticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en varias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Estado. Esto había sido personalmente conversado por el presidente Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».

Y la Marina

El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos navales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como comandante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la

institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le tenían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allende se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar. ¿Cuántos otros oficiales fueron arrestados o asesinados por quienes hoy imponen su sangrienta traición en Chile?».

Ese 31 de agosto, también, los organismos civiles al servicio de los generales golpistas habían avanzado un paso más en la conspiración. El Colegio de Abogados, «a petición de diversos colegiados», había preparado un informe «jurídico» sobre si cabía «pedir al Congreso Nacional que declarara la inhabilidad constitucional del Presidente de la República». El Colegio de abogados decía, en ese informe, que sí se podía. Y se hacía la siguiente reflexión, por cuenta de los propios generales:

«Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar determinada por una de dos causas posibles. El Presidente voluntaria y conscientemente, y con propósitos no confesados, se ha propuesto violar sistemáticamente las bases fundamentales de nuestro sistema institucional, o bien el Excelentísimo señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo».

En ambas alternativas se «justificaba» aparentemente la destrucción de la democracia burguesa chilena por parte del aparato militar de la burguesía, y su reemplazo por un sistema más seguro:

el fascismo.

Los últimos días

El diario «El Mercurio» reflejaba ya el 31 de agosto la situación nacional. En su primera página, traía una noticia procedente de Valparaíso que decía así:

«Con la firma del juez naval, vicealmirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, se presentó la petición de desafuero contra el senador socialista, Carlos Altamirano, y del diputado mapucista, Óscar Garretón.

»La petición de desafuero se fundamenta en el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marineros que intentaron apoderarse de dos buques de la Armada para desencadenar una guerra civil». ¹⁵

Ya había 20 provincias, de las 25 que tiene Chile, en que los dueños de camiones y colegios profesionales manejados por demócratacristianos y nacionales estaban en huelga.

También en primera página, con ilustración fotográfica del general en retiro en uniforme, «El Mercurio» informaba:

«El próximo martes viajará a Paraguay el general (R) Roberto Viaux Marambio, quien saldrá en libertad a las 24 horas del lunes. Viaux cumplirá en dicho país la pena de extrañamiento a que lo condenó la justicia militar en relación a los procesos acumulados por los sucesos del Regimiento Tacna y los que culminaron con la muerte del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército. El general (R) Viaux debe cumplir una condena de cinco años fuera del país.»

En la segunda página del mismo periódico, había un «estudio» titulado *Impedimentos Constitucionales para el Desempeño Presidencial*, preparado por un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Al lado, en la sección de «comentarios», uno titulado *La Patria y la Conciencia Militar*, que terminaba con el siguiente párrafo: «En consecuencia, y de modo

especial para los militares, obedecer y colaborar con este Gobierno es traicionar a la patria.»

En páginas interiores, una declaración del presidente de la Cámara de la Construcción de Chile, organismo que reunía a los empresarios monopólicos de esa actividad, en la cual se leía: «El problema de Chile se soluciona con un sentido patriótico que correspondería al señor Allende acoger y que ha sido reiteradamente pedido por toda clase de instituciones y gremios en Chile, y es que se vaya»...

El 2 de septiembre, domingo, el periódico izquierdista «Puro Chile» provocaba una conmoción nacional, al publicar una larga entrevista con el reo José Luis Riquelme Bascuñán, «cargado» con el asesinato de Araya Peters por la Armada y el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La entrevista, rompiendo la comunicación del reo, hecha por el director del periódico, Miroslav Popic, demuestra más allá de toda duda que el día del asesinato, Riquelme estaba en su casa, que dos días después fue «cargado» con una confesión falsa, que había sido torturado en los subterráneos del Ministerio de Defensa, con la aprobación del fiscal, Aldo Montagna, y que había capitaneos de la Marina y de Carabineros implicados en un caso de «ocultar a los verdaderos asesinos».

Parte del relato de Riquelme, cuando fue torturado en el subterráneo del Ministerio de Defensa, a fines de julio, decía:

«Imagínese, ahí fueron unas torturas salvajes. Hay una pila de cuestiones que a uno le hacen adentro.

«¿Recuerdas algo?

»Ponían dos sillas, una aquí y otra allá. En una los pies y en la otra las manos. De repente le amarraban los pies con alambres, en los tobillos, entonces estaba usted así afirmado en el aire. Haga cuenta que el medio estaba vacío, colocaba las manos en las sillas y de repente usted quedaba derecho donde le aplicaban la corriente. De repente le colocaban los cables en la cintura, por aquí y «pum». En una me sentaron y me colocaron unos cables de

repente ya sentí un golpe refuerte aquí, en la «cuchara» (corazón), como que me iba a ahogar y desde entonces que no me siento bien. Pa' que le digo. Saltaba y me hacían saltar. De repente uno estaba allá cuando luego estaba aquí, al otro lado...»

La denuncia de «Puro Chile» acercaba peligrosamente al conocimiento público el hecho de que el edecán naval de Allende había sido asesinado por sus propios compañeros de armas, en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia, a través del Comando de Ex Cadetes.

El 3 de septiembre transcurrió a la espera de «qué ocurriría el cuatro», para la celebración del tercer aniversario de la victoria de Allende en 1970. Tanto para la Unidad Popular como para los partidos de oposición, era un instante de «medir las fuerzas». Para los generales en contacto con el Pentágono, iba a ser un día de ensayo general.

El 4 de septiembre fue, a partir del mediodía, una jornada festiva. A las ocho de la noche había desfilado frente a la Tribuna Presidencial en la Plaza de la Constitución, un contingente de más de 700.000 obreros y campesinos, empleados y estudiantes, niños y mujeres venidos desde toda la provincia y de las provincias fronterizas. Fue una gran demostración de apoyo al Gobierno por parte de sus partidarios, que estaban sufriendo los efectos de un descalabro económico mayúsculo. Pero los gritos no eran sólo de «Viva Allende» «Viva la Unidad Popular». Eran, más que nada, de «Armas para el pueblo», «Hasta cuándo retrocedes Allende», «Sólo el pueblo armado derrotará al momio armado».

Durante todo el día, aviones de la Fuerza Aérea de Chile sobrevolaron la ciudad, especialmente los barrios industriales del sector sur y las calles centrales, para fotografiar las concentraciones de trabajadores dispuestas para el desfile de aniversario. Hubo sobrevuelos sobre La Moneda y en la noche «ejercicios de bombardeo simulados, con rockets, en blancos de tarros de gasolina de 200 litros, en la Base Aérea El Bosque», con aviones Hawker Hunter.

Hubo fiesta en las calles de Santiago hasta la medianoche pasada. Y hubo reunión de urgencia en la Fuerza Aérea, analizando las fotografías obtenidas durante el día. El cálculo lo decía: unas seiscientas a setecientas mil personas en Santiago y provincias fronterizas, dispuestas a seguir apoyando al Gobierno constitucional. Gustavo Leigh comentó entre sus subalternos que «si el tiempo sigue pasando, estos huevones izquierdistas van a ganar lejos las elecciones del 76». «Ahí sí que tendríamos a los comunistas en nuestro cogote.»

Los opositores civiles también se asustaron y organizaron para el día cinco una enorme manifestación de mujeres, frente a la Universidad Católica de Santiago, para pedir «la renuncia de Allende» y «un Gobierno de militares». Se producen batallas campales en las calles entre adversarios y simpatizantes de la marcha convocada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional.

Las noticias de provincias eran lamentables. Diez y quince atentados dinamiteros por día contra fábricas, sedes políticas de izquierda, domicilios de dirigentes de obreros y campesinos. El transporte terrestre casi totalmente paralizado. Las actividades del servicio estatal de salud, también en paro. Paros parciales de estudiantes, comerciales y profesionales, agrupados en organizaciones manejadas por los partidos de derecha.

El general Pinochet, el 5 de septiembre, había dicho a Allende que «ahora no es igual que octubre», las Fuerzas Armadas «no podemos garantizar nada» porque la Marina, la Fuerza Aérea y algunos de «nuestros generales quieren que usted se vaya... o cumpla con lo que le pide el Congreso». No podía Allende declarar zonas de emergencia bajo control militar, como en 1972.

El 7 de septiembre, Allende acordó rendirse. En la mañana de ese día llamó a su despacho de trabajo al general Augusto Pinochet y a siete generales de la guarnición de Santiago, y les dijo que había decidido anunciar, «el lunes o martes, o tal vez el miércoles con mayor seguridad», su decisión de llamar a plebiscito para

dilucidar «el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento» y promulgar totalmente «la reforma constitucional sobre área de propiedad social de la Democracia Cristiana». Los generales recibieron la noticia «con un gesto de asombro» (según la frase que usó Allende para contarle este suceso a Joan Garcés, la noche del lunes 10 de septiembre). Allende les dijo que así «pacificaremos el país», ya que esos son los motivos del conflicto civil actual. «Nadie podrá decir ahora que el Presidente de la República no respeta a los otros poderes del Estado». Les explicó que, según sus cálculos, la decisión la podría anunciar el martes o miércoles, porque «este fin de semana tengo que dedicarlo a convencer a la Unidad Popular... y eso va a ser duro».

La decisión de Allende tomó de sorpresa a los generales (todos los que asistieron estaban en el complot montado por el Pentágono a partir de noviembre de 1972). Se reunieron en el propio despacho del comandante en jefe en el Ministerio de Defensa, a una cuadra de La Moneda, para llegar a una simple conclusión: había que derrocar a Allende ANTES de que anunciara su decisión de poner fin al conflicto con la Democracia Cristiana liderada por Eduardo Frei. Se discutió cuántos días se necesitaban para poner en marcha la *blitzkrieg* preparada desde meses antes para arrasarse el Gobierno constitucional, la organización obrera, campesina y de empleados, y destruir la democracia burguesa chilena. «Setenta y dos horas», fue la respuesta técnica del general Sergio Arellano Stark, asistente también a la reunión.

Augusto Pinochet fijó la fecha: el martes 11 de septiembre, a partir de la medianoche del día lunes.¹⁶

El 7 de septiembre fue un día realmente agitado. Cerca de las tres de la tarde, en Santiago se recibieron noticias de que la Escuadra Chilena, surta en la bahía de Valparaíso, lista para zarpar a unirse con la flotilla de guerra de Estados Unidos para la Operación Unitas anual, se había sublevado, se negaba a zarpar, hasta que «el almirante Montero sea retirado de las filas y el almirante Merino sea nombrado nuestro comandante en jefe».

El general Augusto Pinochet informó al nuevo ministro de Defensa, Orlando Letelier, que él estaba dispuesto a ir a Valparaíso para hablar con los «insurrectos». Viajó en helicóptero, acompañado de otros cuatro generales del Ejército. En Valparaíso se entrevistó con Merino, le comunicó la gravedad de la situación planteada por la decisión de Allende de quitar la base de sustentación pública al golpe militar, y el acuerdo de la mañana en el Ministerio de Defensa, de dar el golpe el día 11 de septiembre.

Cuando Pinochet volvió a Santiago para informar al Ministro de Defensa que «todo está en calma», «la escuadra zarpará según itinerario previsto el día lunes 10», lo que realmente estaba ocurriendo era que las listas de cerca de veinte mil dirigentes medios de organizaciones populares, para ser asesinados por los militares insurrectos a partir de la mañana del golpe, ya estaban saliendo a provincias desde las oficinas de los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las listas de los dirigentes superiores para ser apresados (unos tres mil), también seguían el mismo camino, y los funcionarios encargados de tener preparadas las proclamas del día de la insurrección ya estaban escribiendo el borrador para ser examinado por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y José Toribio Merino.

Estas listas habían sido «completadas» a través de una petición especial a las misiones militares norteamericanas en Santiago, que las pidieron a la CÍA en Washington, para ser entregadas a los generales insurrectos. Eran muy detalladas: nombre, domicilio, edad, profesión, estado civil y amigos personales más cercanos (entre dos y cinco nombres generalmente).

Como una ironía del destino, en la noche del 7 de septiembre, el cuerpo de generales de Carabineros dio una cena a la que invitó a Salvador Allende. A esa cena también asistió el general César Mendoza Duran, quien se portó muy obsequioso con el Presidente. (En verdad, ese día Mendoza todavía no había sido notificado por los generales Pinochet, Leigh y el almirante Merino de que el golpe se haría el martes próximo. El estaba en una conspiración contra

Allende y la mayoría de sus propios generales, pero no sabía fecha, ni forma, excepto en lo que concernía al equipo restringido para la preparación del asesinato del propio Allende.) Este hecho, en la mañana del 11 de septiembre, tal vez hizo que Allende se refiriera a Mendoza, en su último discurso transmitido sólo por Radio Magallanes, a las nueve y cuarenta de la mañana, como «ese general rastrero».

El sábado 8, en la mañana, el presidente Allende citó en su despacho al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh; al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero Cornejo; y al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte. El Presidente les pidió que como una consideración al momento difícil que vivía el país, y a que en la próxima semana iba a hacer el anuncio de su rendición política, «moderaran» la aplicación de la Ley Sobre Control de Armas, para no «exasperar» a los trabajadores. Los comandantes en jefe le dijeron que siempre habían tratado de impedir «excesos» en esos procedimientos, y ahora impartirían instrucciones especiales en ese mismo sentido.

En realidad, el sábado 8 de septiembre fue aburrido para los reporteros. Y mucho más para los reporteros del diario «El Mercurio» que estaban en un departamento del piso decimotercero del Hotel Carrera, con equipo fotográfico provisto de enormes teleobjetivos, desde el día 2 de septiembre. Ese día, la gerencia de «El Mercurio», en conocimiento de que «algo gordo va a pasar en La Moneda uno de estos días», arrendó un departamento por tiempo indefinido allí, y puso de guardia permanente a un equipo de reporteros. No estaba claro para «El Mercurio» si iba a ser el asesinato de Allende o de algunos de los generales, pero impartió instrucciones a sus reporteros de vigilar cada segundo del día la puerta de La Moneda con sus teleobjetivos.

El Juramento

El 9 de septiembre, domingo, desde las once de la noche, la

pesada maquinaria militar puesta en marcha para aplastar al pueblo chileno dio otra vuelta en su eje. A esa hora, en casa del general Augusto Pinochet Ugarte, y después de «una comida social», se reunieron el propio Pinochet, el general Gustavo Leigh; el vicealmirante Sergio Huidobro, director de la Escuela de Infantería de Marina (que adiestraba a los grupos fascistas civiles) y el vicealmirante Patricio Carvajal.

La reunión duró desde las once de la noche del día 9 a las dos de la mañana del lunes 10. Fue una reunión, por lo que parece, de «afinamiento» y «comprobación» de la «operación». Según informes posteriores, se supo que en la tarde del 9, los generales Pinochet y Leigh habían hablado con el general Mendoza, de Carabineros, para que montara su aparato para el martes 11. Y los vicealmirantes Huidobro y Carvajal, también en la tarde del mismo día, habían hablado con el almirante Merino para que se las arreglara para arrestar al almirante Montero en la medianoche del día 10.

Según una declaración a la prensa chilena del general Gustavo Leigh, hecha en noviembre de 1973, allí también «se firmó un documento que guardamos en estricto secreto». Probablemente se trata de un documento que detalla los nombres de los conspiradores, para que así ninguno traicionara la insurrección al martes 11.

Pero lo importante es que a las cuatro de la madrugada del día 10, o sea dos horas después de terminada la reunión de los conspiradores en casa de Pinochet, un coronel del Ejército chileno, vestido de civil concurrió a la casa del embajador de los Estados Unidos, Nathanael Davis, donde también estaban dos miembros de la misión militar norteamericana en Santiago.

Después de esa reunión nocturna, ocurre un hecho singular: los Servicios de Contrainteligencia radial de la izquierda interceptan un mensaje en clave procedente de los aparatos de radio norteamericanos utilizados en el Ministerio de Defensa, que instruyen a la «fuerza de tarea» de la Operación Unitas, compuesta de

tres destructores y un submarino, que se separen; que dos destructores permanezcan «a más de doscientas millas de Valparaíso, mar afuera», y un destructor y el submarino a más de doscientas millas de Talcahuano, porque la Operación Unitas «puede postergarse indefinidamente».

Esa misma madrugada, la misión militar brasileña es puesta en alerta por los militares chilenos, y se les pide que «el día 11 no salgan a la calle, hasta nuevo aviso».

Todo esto puede explicar lo que para algunos políticos norteamericanos resultó un misterio. La agencia ínter Press Service indicaba: «Los destructores Tunner, Tatonall y Vesole, y el submarino Clagamore se dirigían en la noche anterior al golpe hacia aguas jurisdiccionales chilenas. Fueron detenidos justo en el límite, y separados en dos grupos, por una oportuna advertencia radial de la Embajada norteamericana en Santiago, diez horas antes de que estallara el sangriento golpe de Estado.»

Y también puede explicar el siguiente cable de la agencia española EFE, del 13 de septiembre, procedente de Washington, que decía: «El presidente Nixon supo con anticipación de los preparativos del golpe de estado en Chile, pero el Gobierno norteamericano decidió no informar al presidente Allende, reveló hoy el diario "The Washington Post". En una información que aparece en la primera página del matutino de la capital federal, se confirmó que los Estados Unidos habían sabido por lo menos doce horas antes del golpe militar que derrocó al presidente Allende en Chile. Según el periódico, un oficial del Ejército chileno informó a otro oficial del Ejército norteamericano en Chile del plan contra Allende. La información fue entonces pasada a los más altos niveles de Washington y se tomó la decisión de no intervenir, según el "Washington Post".

»El periódico informó que estos detalles fueron revelados ayer por Jack Kubish, secretario de Estado Adjunto norteamericano y coordinador de la Alianza para el Progreso, a un grupo de senadores norteamericanos integrantes del Subcomité de Re-

laciones Exteriores para Asuntos del Hemisferio Occidental».

El lunes 10, en La Moneda, había una especie de tranquilidad. El único dirigente político que dio una pista de lo que estaba pasando, fue el dirigente de un pequeño partido de la UP, la Acción Popular Independiente, Rafael Tarud, quien, después de conversar con Allende, señaló: «Le dije que el API es partidario de solucionar el conflicto del transporte de inmediato, por ley; de promulgar las reformas constitucionales del proyecto Hamilton-Fuentealba y otros hechos que significarían la paz social.»

En la tarde, a las seis, en el décimo piso del Ministerio de Defensa, el ministro Orlando Letelier citaba a los directores de diarios y revistas de Santiago para decirles que «la situación tenía una solución política que pronto se dará a conocer por el propio Presidente», que pedía a los directores de medios informativos que «en las noticias sobre los allanamientos de la Ley Sobre Control de Armas no pretendieran incorporar a las Fuerzas Armadas a la política contingente». La sensación de Letelier era de optimismo, de confianza en que el discurso de Allende del martes iba a resolver la cuestión y que «todo estaba en calma».

Sin embargo un signo ominoso fue notado por más de un reportero: ninguno de los tres comandantes en jefe asistió a la conferencia del ministro de Defensa, cosa absolutamente inusual.

La verdad era que, a esa misma hora, en los pisos inferiores del mismo edificio donde Letelier hablaba con los directores de diarios, los generales complotadores preparaban los últimos detalles de la ocupación militar del país, a sangre y fuego, a partir de las próximas seis horas, para cumplir con la orden que el Pentágono norteamericano había dado diez meses antes, en noviembre de 1972.

Notas

1) En el aspecto presupuestario, la dedicación del Gobierno de Allende por dar un tratamiento especial a las FF.AA. fue realmente notable. Cifras obtenidas de *El Estado de la Hacienda Pública*, de los ministros de Hacienda Américo Zorrilla y Orlando Millas, para 1971 y 1972, daban los siguientes indicadores:

En 1971, el presupuesto en escudos para las FF.AA. era el 8,9% del presupuesto fiscal total. Para 1972, subió al 10,2 %.

En 1971, el presupuesto en dólares para las FF.AA. era el 13,1 % del presupuesto fiscal en dólares. Para 1972, subió a 14,6 %.

En 1971, el presupuesto de Defensa era sólo 17 % mayor que el de Salud. En 1972 el presupuesto de Defensa ya era 35 % mayor que el de Salud.

En 1971, el presupuesto de Defensa equivalía al 49,5% del presupuesto de Educación. En 1972, el presupuesto de Defensa ya era el 61,3 % del de Educación.

El 16 de noviembre de 1971, se aprobó que el Ministerio de Hacienda entregara un presupuesto extra de 390.972.000 escudos (unos 32 millones de dólares) para iniciar un plan quinquenal de la UP para equipar de viviendas a las Fuerzas Armadas (se proyectaban unas 7.000 viviendas para oficiales y suboficiales). En el diario «La Nación», del 15 de enero de 1972, se informaba que el general Óscar Bonilla, director de Personal del Ejército, había pronunciado un discurso en la entrega de 56 nuevas viviendas a los oficiales, diciendo: «Sólo estamos comenzando. Rotunda e inmovible es nuestra decisión y nuestra convicción de seguir adelante... La institución se ha planteado esta iniciativa y luchará por ella, consciente de que defiende algo vital para cada uno de sus integrantes.» Y agregaba el mismo periódico: «Por su parte, el funcionario de Gobierno que asistió a la ceremonia de entrega de casas, dijo que "en el nuevo plan para este año, se contempla un número mayor de viviendas para entregar en forma extraordinaria al cuadro permanente del Ejército".»

2) Para un detalle adicional sobre estos planes de estudio confeccionados en el Pentágono norteamericano, ver «Causa ML», núm. 8, mayo de 1969, que publicó el texto completo del Manual FM 31-15,

utilizado por los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, en sus cursos de postgraduados en la Zona del Canal de Panamá. Esta publicación causó «violentas polémicas» en Chile (Alain LABROUSSE, *L'Experience Chilienne*, París 1972, p. 152). Ver «Causa ML», núm. 2, septiembre-octubre de 1968. Más documentación sobre el mismo tema se encontrará en *Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile* Alain Joxe, «Causa ML», núm. 21, julio-agosto de 1971, p.p. 20-25, artículo mío sobre las FF.AA. y la Unidad Popular.

Al respecto, en el libro de Labrousse podemos leer: "Pero incluso antes de que entrase en vigor el nuevo reglamento del general Schneider (se refiere a la concurrencia a Fort Gulick, en postgrado, de los cadetes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins), entre 1950 y 1965, ya 2.064 militares chilenos habían sido preparados en los Estados Unidos y 549 fuera de los Estados Unidos, es decir, en las escuelas antiguerrilla de los países sudamericanos.»

3) Una denuncia sobre estos «seis puntos» del general Manuel Torres de la Cruz se publicó en el periódico oficial de los cordones industriales de Santiago, «Tarea Urgente», en junio de 1973. Este periódico tenía 45.000 ejemplares de venta, principalmente entre los obreros, y era confeccionado por cuadros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un sector del partido socialista. La denuncia afirmaba que a través de «oficiales de Carabineros patriotas» se había logrado obtener esta información que revelaba a Manuel Torres de la Cruz como un conspirador. Sin embargo, los sucesos del 29 de junio de 1973 (amotinamiento militar) sepultaron esta espectacular denuncia en la tormenta noticiosa sobre el alzamiento, y no se revivió hasta agosto-septiembre de 1973, en los diarios «Puro Chile» y «Las Noticias de Última Hora». En estas mismas publicaciones se denunció el origen militar de esa Ley de Control de Armas, a través de la conexión de Juan de Dios Carmona y el general Osear Bonilla, poniendo énfasis en el carácter antipopular de la legislación aludida. Ver «Aurora de Chile», agosto de 1973 (periódico del partido socialista de 35.000 ejemplares de tirada).

4) Las estadísticas de los allanamientos provienen de síntesis hechas por «Última Hora», revista «Punto Final» y diario «Clarín» a fines de agosto y principios de septiembre de 1973. Lo mismo ocurre para los

atentados y sabotajes de las organizaciones fascistas, reproducidas después en cables de PRENSA LATINA en el diario «El Expreso» de Lima, del 13 al 30 de septiembre de 1973.

5) En marzo de 1973, el periodista Eugenio Lira Massi, en su columna *La columna impertinente*, que aparecía tres veces a la semana en el diario «Puro Chile», y Fernando Rivas Sánchez, en el mismo periódico, denunciaron de manera lateral este suceso sin nombrar al contralmirante Ismael Huerta Celis. Ambos columnistas presentaron la anécdota como probatoria de que había «altos mandos militares» involucrados en la conspiración para derribar al Gobierno constitucional, y que esos altos mandos protegían a los saboteadores y dinamiteros de los grupos terroristas de derecha.

6) Los generales Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella y Washington Carrasco, además de los coroneles Augusto Lutz (después del golpe militar ascendido a general de brigada y nombrado secretario general de la Junta Militar, ascendiendo al cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Militar hasta diciembre de 1973) y Sergio Julio Polloni Pérez (ascendido en diciembre de 1973 a jefe del SIM), formaron el equipo central del SIM durante los tres años de Gobierno de la Unidad Popular. En su oficina del SIM en el Ministerio de Defensa (noveno piso, oficina número 85) este grupo era el encargado de coordinar el trabajo con los asesores de Inteligencia Militar del Ejército de los Estados Unidos, encabezados, según denuncia del periódico «Tarea Urgente», en enero de 1973, por el coronel Thomas H. Jones (el día 21 de julio de 1971, al retirarse de Chile, el coronel Jones fue condecorado con La Estrella al Mérito Militar, en ceremonia presidida por el general Carlos Prats González). Todos ellos, junto al coronel Manuel Contreras Sepúlveda, comandante del Regimiento de Tejas Verdes (en el puerto santiaguino de San Antonio) y el comandante de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, teniente coronel Dante Marchesse, son graduados de la Escuela de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., en especialidad de Inteligencia, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá. De este equipo del SIM, los generales Brady y Carrasco, y los coroneles Lutz y Polloni, hacían frecuentes viajes al Southern Command, a través del puente aéreo existente entre ese comando militar norteamericano y los Servicios de

Inteligencia de los Ejércitos de América Latina (para Chile ese puente aéreo está constituido así: Base Aérea de Los Cerrillos, en Santiago; Base Aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta; y Albrook Airfield, en la Zona del Canal). Para que el lector tenga una idea de lo que significa esta ligazón directa entre el Comando Sur del Pentágono y los generales chilenos, voy a reproducir una pequeña crónica de Francois Schlosser, aparecida en «Le Nouvel Observateur», número 467, 28 de octubre de 1973: «Los panameños lo llaman el muro de la vergüenza. Es la barrera de alambre y rejas que separa al universo sudamericano de la "Zona del Canal", bajo jurisdicción norteamericana. Tras el tejido de alambre reina el *american way of Ufe*. Enormes edificios albergan los servicios de un organismo que hoy hace temblar a América Latina: el Southern Command. Su última victoria: Chile... El Southern Command es al mismo tiempo una central de información, una "universidad militar", pluridisciplinaria, y una base operacional. En la escuela antiguerrilla, miles de oficiales y suboficiales latinoamericanos se entrenan para la guerra contra la subversión. Los oficiales reciben una formación técnica completa en las diversas escuelas militares diseminadas por la Zona del Canal: Escuela de telecomunicaciones, Escuela de Estado Mayor, Escuela de Aviación, etc. Construcciones subterráneas, locales excavados en las rocas alojan el centro neurálgico de un sistema de comunicaciones que cubre todo el continente... Aquí, los responsables norteamericanos se encuentran en contacto directo, por teléfono, o por teletipo, con sus corresponsales instalados en todas las capitales sudamericanas donde su papel es más importante que el de los embajadores norteamericanos "oficiales". Una red aérea se superpone a la de telecomunicaciones. Para trasladarse a Río, Santiago, etc., los agentes civiles y los "alumnos" militares del Southern Command disponen de sus propios aviones, de sus propios aeropuertos... La creación del Centro se remonta a los comienzos de la década de 1960. Significa una opción estratégica realizada por Washington. Después del fracaso de la Alianza para el Progreso para la «subversión» castrista, los norteamericanos decidieron jugar la carta de los militares... En las Escuelas Militares de la Zona en Panamá nació un mito: el de la «solidaridad» de los soldados sudamericanos. La acción psicológica dio excelentes resultados. Tema: «Tenemos las mismas preocupaciones, somos patriotas, queremos reformas y tenemos un enemigo común: el comunismo.» Entre los oficiales y los suboficiales católicos del Sur, generalmente provenientes de las clases medias, estas

fórmulas simplistas bastaban casi siempre para cimentar una conciencia política elemental. 35.000 de ellos recibieron las enseñanzas del Southern Command. Formaban los cuadros de los ejércitos que tomaron el poder en Brasil, en Bolivia, en Chile, etc.»

En el «New York Times» del 23 de octubre de 1973, firmado por Drez Middleton, se publicaron detalles también del significado del Southern Command, como elemento de control del Ejército norteamericano sobre la mayoría de los generales latinoamericanos. Párrafos de esa crónica: «Nos mantenemos en contacto con nuestros graduados y ellos se mantienen en contacto con nosotros», dijo el director coronel William W. Nair... La escuela imparte 38 cursos separados, todos ellos en español. El año pasado, 1.750 oficiales, cadetes y hombres de tropa de 17 países completaron sus cursos... Diseminados a través de América del Sur y del Caribe hay más de 170 graduados de la Escuela Militar de EE.UU. para las Américas; entre ellos se cuentan varios jefes de estados mayores y directores de Inteligencia... Los cuatro departamentos de instrucción de la escuela son: Comando, Operaciones de Combate, Operaciones Técnicas, Operaciones de Apoyo...»

Los generales Brady, Carrasco y Sepúlveda son casos típicos de estos graduados. El más viejo de ellos, Brady, tuvo la siguiente trayectoria: en 1943 fue jefe de la Zona Militar de Chuquicamata, en 1946 se graduó en el Southern Command; en 1947 y hasta 1953, fue nombrado delegado del Ejército en la Corporación de Fomento de la Producción; en 1959 viajó a Fort Benning, EE.UU., para un curso militar; después pasó al Comando de la VI División Blindada en el norte del país; jefe de Estado Mayor de la II División, comandante de la II División, y actualmente (1974) jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas. El general Carrasco, con los mismos diplomas militares en los EE.UU., es ahora Jefe de la Misión Militar chilena en Washington.

7) Agustín Toro Dávila fue ascendido a general de brigada en octubre de 1973, en forma apresurada, cuando todavía estaba en la Embajada de Chile en México, como adicto militar. Toro, de oscura trayectoria, era, sin embargo, amigo de extrema confianza del general Augusto Pinochet. El senador Bulnes Sanfuentes, elegido por la provincia de Concepción, realizaba frecuentes viajes a esa provincia y, sin secreto de ninguna especie, visitaba permanentemente a Carrasco en su oficina de comandante en jefe de la III División (denuncias en «Punto Final», «El

Rebelde» y «Puro Chile» de agosto-septiembre de 1973).

8) «Los militares chilenos han tenido una larga y estrecha relación con los Estados Unidos, y el Pentágono estima que los 90.000 soldados, marinos, aviadores y carabineros (la fuerza policial nacional) chilenos, están entre las mejores Fuerzas Armadas del continente. Entre 1950 y 1970, Chile recibió más ayuda militar (175,8 millones de dólares) que cualquier otro país latinoamericano, excepto Brasil. Esto significa alrededor del 10 % del presupuesto total de Defensa en el mismo período. Las mayores cantidades de ayuda fueron proporcionadas antes de las elecciones de 1964 y 1970, para aplacar el descontento en los militares, el cual podría ser utilizado por los fuertes partidos de izquierda. Este alto nivel ha sido mantenido durante los tres años últimos, incluyendo proyectos garantizados para 1974, el cual totaliza 45,5 millones de dólares. Esto es el doble del total correspondiente a los cuatro años previos. En un momento, cuando la ayuda económica se había sumergido a menos de 4 millones de dólares, esto significaba una liberalización de la ayuda militar a Chile. (En cifras, significa que entre 1971 y 1974, Estados Unidos proporcionó 11,37 millones de dólares anuales a las FF.AA. chilenas, contra un promedio anual de 5,75 millones de dólares entre 1967 y 1970, y un promedio anual de 8,98 millones de dólares entre 1950 y 1966.)

»La Fuerza Aérea de EE.UU. tiene una relación particularmente estrecha con sus colegas chilenos, construida por la Misión de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Santiago durante los últimos 20 años. Más del 70 % de la Fuerza Aérea chilena está constituida por aviones y helicópteros construidos en los EE.UU. Actualmente, los militares chilenos están esperando un embarque de 20 cazas A-4B Skyhawk, que eran de la U.S. Navy, utilizados previamente en Vietnam, los cuales están en un aeropuerto en la Davis-Monthan AFB en Arizona. En efecto, la pasada primavera los Estados Unidos ofrecieron conceder crédito a Chile y otros cuatro países latinoamericanos para comprar cazas F-5E Freedom. La oferta es particularmente significativa ya que el presidente Nixon debe firmar un documento especial para pasar sobre las restricciones acordadas para vender armamento refinado a los países subdesarrollados. Esto puede sea hecho solamente si el Presidente determina que tal financiamiento es importante para "la seguridad nacional de los EE.UU.", lo cual, obviamente, él hizo en este caso... Durante las audiencias del Senado

sobre ayuda exterior, el senador Inouye también cuestionó la lógica de conceder créditos militares a un país que había expropiado intereses norteamericanos. El almirante Raymond Peet justificó esta política hacia Chile en el comité del Senado. Explicó que los Estados Unidos prefieren que los países subdesarrollados "compren americano" en vez de que miren hacia otra parte para equipo militar... Más todavía, según Peet, «una de las grandes ventajas conseguidas por los EE.UU. de tales programas de ventas al extranjero es la considerable influencia que se deriva de proporcionar apoyo para esos aparatos aéreos". Proveyendo cazas F-5E o Skyhawks, preservaría cierta orientación pronorteamericana entre los militares chilenos en un momento de tensión entre los Gobiernos de los dos países.

»La Marina chilena también ha continuado recibiendo créditos militares y llevando a cabo maniobras conjuntas con la U.S. Navy. En efecto, el día del golpe, buques norteamericanos estaban en ruta hacia Valparaíso para hacer maniobras de rutina, pero se desviaron después de un breve encuentro con un navío chileno.

»El suministro de material es solamente una de las tácticas que usa Estados Unidos para influir a los militares chilenos. En los últimos 20 años, más de 4.000 oficiales chilenos han sido adiestrados en los EE.UU. y en las escuelas norteamericanas de la Zona del Canal de Panamá. El general Pinochet, cabeza de la Junta Militar, sirvió como agregado militar en la Embajada chilena en Washington, y fue varias veces al U.S. Southern Command en la Zona del Canal. Pinochet es conocido por ser duro, y en 1972 advirtió: "Espero que el Ejército no tenga que salir a las calles, porque si lo hace, sale a matar". Además, de acuerdo a la revista "Newsweek" del 24 de septiembre de 1973, los otros miembros de la Junta chilena, Gustavo Leigh, de la Fuerza Aérea; almirante Toribio Merino, de la Marina; y el general César Mendoza Duran, de Carabineros, han estado todos algún tiempo en los Estados Unidos. Y en 1971, una misión militar norteamericana de alto nivel visitó a los líderes militares chilenos. (Ver nota 17.)

»Los Carabineros también han recibido ayuda norteamericana a través de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo. El programa bombeó cerca de 2,5 millones de dólares desde 1961, pero fue terminada en 1971 por el gobierno UP. En 1970, de acuerdo a un artículo del "Washington Post" del 1 de octubre de 1970, el asesor de la OSP estacionado en Chile, Joseph Vassile, fue expulsado por

estar comprometido en un complot terrorista de derecha para desacreditar al presidente Allende. Vasile fue transferido a Vietnam, donde trabajó en un programa de pacificación. Los Carabineros están jugando un importante papel en la Junta y lo más seguro es que caigan, cada vez más, bajo la influencia de los militares.»

Por último, como un ejemplo de la dependencia de la Fuerza Aérea chilena de la norteamericana, este dato: en 1971, la Fuerza Aérea chilena hizo 21 "vuelos logísticos al exterior». Los 21 vuelos fueron a los Estados Unidos (tomado del diario «La Nación», marzo de 1972, con ocasión del 42 aniversario de la Fuerza Aérea chilena, a cuya celebración asistió como invitado especial el jefe "de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John D. Ray).

9) Como establecimos en la nota 2, la existencia y reconstrucción del «informe de octubre» del Pentágono fue obtenida por algunos sectores de la izquierda a través de los discursos, arengas y reuniones semipúblicas de mandos medios militares con su tropa. Pero, por supuesto, también hubo información adicional y bastante exacta, al parecer, de algunos oficiales leales a la democracia chilena, cuyos nombres el autor no puede citar porque todavía están en servicio activo en Chile y «no han sido detectados por los Servicios de Inteligencia de los generales insurrectos. Ese informe del Pentágono había sido un cambio radical en su actitud de «esperar y ver» mantenida hasta octubre de 1972, y que reflejaba el pensamiento de un sector importante de los consorcios multinacionales norteamericanos que influyen sobre el Gobierno de Washington. Este sector, encabezado por el grupo Rockefeller, se oponía a la actitud dura y de destrucción inmediata del Gobierno de Allende por parte de grupos como la ITT, la Anaconda y la Kennecott. Esta dualidad de criterios explica lo ocurrido en 1970, 1971 y 1972 en Chile, cuando las Fuerzas Armadas, manejadas por el Pentágono, se mantuvieron al margen de la situación política en desarrollo, para entrar después en 1973 en la senda del golpe. Para un estudio detallado de la dualidad de criterio entre los grupos de consorcios norteamericanos respecto a Chile y su Gobierno Allende, ver *The Chilea Road To Socialiim*, de Dale Johnson, ya citado; *U.S. Policy in the Making: Chile, to Accommodate or Crush*, y *The Coincidence of Infernal and External Counterrevolutionary Forces*. También se sugiere ver mi obra: *El imperialismo yanqui en Chile*.

Una ilustración de las causas del «esperar y ver» lo pueden dar estos

párrafos sacados de la versión de «NACLA», de Nueva York, de las sesiones del Council on Foreign Relations of United States. En la sesión del 14 de diciembre de 1970, Jérôme I. Levinson, del BID, dice: «La experimentación de diversos sistemas políticos en Latinoamérica es inevitable. El proceso cambiante de las sociedades latinoamericanas promoverá variaciones en el *statu quo* de la propiedad norteamericana en el hemisferio. Pero los intereses norteamericanos no son incompatibles con el desarrollo social de Latinoamérica. Podemos llegar a acuerdos con los cambios como ha sucedido en México.» Covey T. Oliver, del Departamento de Estado, decía: «Se debe dar a Chile todas las oportunidades para que logre éxito con su nuevo Gobierno. Tal como no se puede considerar a Cuba como un fracaso, a causa de los efectos de la política norteamericana después que Castro subió al poder, hay que darle a Chile una oportunidad.» Y Walter Sedwitz, de la OEA, dice en la misma sesión: «Si el Gobierno fracasa, habrá una radicalización en Chile y un problema de seguridad para Estados Unidos.»

Por supuesto, esta actitud cambió cuando en Chile comenzó a gestarse un movimiento revolucionario de masas incontrolable por los partidos de izquierda a medida que pasaba el tiempo y, por lo mismo, fuera del alcance de controlar por el clásico juego democrático burgués, tan sólido en Chile. Ya no se trataba de «variaciones» en el *statu quo* de las inversiones norteamericanas, sino de revolución social y expulsión de las inversiones norteamericanas del país. Eso unió a los consorcios en un solo criterio y, coherentemente, al Pentágono: fin para el Gobierno de Allende.

10) Esta «incapacidad» de Allende para salir de la crisis tenía su fundamento en que la alianza entre los partidos Demócrata Cristiano, Nacional y Demócrata Radical, impedía toda legislación en el Parlamento que permitiera, vía impuestos a la oligarquía, reducir el déficit fiscal y controlar la especulación desenfrenada de los grandes magnates de la industria y el comercio; y vía la aprobación de una ley contra los delitos económicos, frenar la escandalosa forma en que los industriales, comerciantes y latifundistas saboteaban la economía nacional. En el Parlamento, elegido en 1969, las fuerzas estaban así: Partidos de Gobierno: 80 diputados y senadores; Democracia Cristiana: 75 diputados y senadores; Partido Nacional y Democracia Radical: 45 diputados y senadores. Así, la mayoría opositora era de 120 a 80, lo que bloqueaba toda iniciativa legislativa y permitía barrenar políticamente al Gobierno

con «acusaciones constitucionales» a los ministros de Estado. En los 33 meses de Gobierno, Allende tuvo que cambiar 22 veces la composición de su Gabinete, a causa de estas maniobras. Estaba lejos el 24 de octubre de 1970, cuando el Parlamento votó así: 153 senadores y diputados por Allende como Presidente; 35 por Alessandri y 7 en blanco.

Esta especie de empate político entre el Parlamento y la Presidencia, se mantuvo aun después de marzo de 1973, cuando el Gobierno aumentó a 84 sus senadores y diputados, y la oposición disminuyó a 111. Por eso, el 18 de julio de 1971, el secretario general del partido socialista, Carlos Altamirano decía: «Las fuerzas políticas de Chile se encuentran transitoriamente en un empate social. Frente a este empate nuestra estrategia se orienta a romperlo y a utilizar esa ruptura para impulsar un fuerte proceso de movilización de masas... y radicalizar el proceso revolucionario.» Esta táctica fue rotundamente rechazada por Salvador Allende y la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de Chile, que jugaron siempre a la tesis de «no radicalizar» y «consolidar lo conquistado». Esto llevó a Allende y al PC de Chile a plantear la idea de conversar con la Democracia Cristiana, contra lo cual se alzaron el PS y el MAPU. La revista del MAPU, «De Frente», número 12, del 29 de junio, denunciaba que «la burguesía, encabezada por Frei y Jarpa, ataca por partida doble, intentando derrocar al Gobierno u obligarlo a transar... Hacen entrar a la cancha a generales sediciosos... Calientan el clima para el momento de la insurrección fascista... Lo que pretende la DC es que la propia Unidad Popular se haga el harakiri, congelando el proceso, reprimiendo a los que exigen avanzar, separándola así de su base social más genuina... Para el caso de que el Gobierno se mantenga firme, la DC cuenta y sabe que sus aliados preparan la otra salida». Por su parte, la revista «Chile hoy», también socialista, explicaba en ese mismo mes que el diálogo con el PDC era sólo un pretexto de los generales golpistas para «utilizar las inaceptables exigencias planteadas para reforzar la embestida final contra el proceso revolucionario». Y eso fue así: cuando Allende anunció su rendición política para el 11 de septiembre, los generales fijaron ese día para el golpe; querían impedir, precisamente, que Allende se rindiera.

11) La primera referencia oficial que los chilenos tuvieron de esa idea quirúrgica de los generales insurrectos (antes los diarios de izquierda habían informado sobre este pensamiento cavernario de los generales

conspiradores, sobre todo en agosto y septiembre), fue la misma noche del 11 de septiembre de 1973, cuando por cadena nacional de TV, el general Gustavo Leigh explicó que el golpe se había dado para «extirpar el cáncer marxista en Chile». El 19 de septiembre, en el diario «El Mercurio», el general Pinochet declaraba que «cuando hayamos extirpado el tumor maligno del marxismo... el país recuperará todas sus libertades, ya que es por ellas que nosotros hemos luchado». El día 11 de abril de 1974, la Junta Militar emitió una *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, en que se escribe que «resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos», y qué para ello «ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía» (cable AP, fechado en Santiago de Chile, el 11 de marzo 1974, reproducido en «La Estrella de Panamá», el 13 de marzo de 1974). El 18 de junio de 1974, «La Estrella de Panamá» publica en la primera página de su segundo cuerpo un cable AP, desde Santiago de Chile, bajo el título *Reorganizarán educación con enfoque antimarxista*, que comienza así: "Alrededor de 600.000 profesores y maestros iniciaron ayer una consulta nacional de dos días para estudiar la reorganización de un enfoque antimarxista de la educación.» Y agrega que el documento repartido por la Junta Militar para ser aprobado, señala que «la educación no aceptará la participación de profesores que promuevan la enseñanza de doctrinas nacionales o foráneas, como el marxismo». Los profesores tienen que indicar a las autoridades militares, personalmente, si están de acuerdo o no con este documento. En Chile hay estado de «guerra interna», «estado de sitio» y «suspensión de las garantías individuales».

12) La petición de los generales, sobre todo por parte de Pinochet, resultaba doblemente cínica porque el día 6 de marzo de 1973, el comandante en jefe subrogante del Ejército, general de división Augusto Pinochet, al mando de las fuerzas militares en todo el país que «garantizaron una elección democrática, limpia y sin incidentes, y con absoluta imparcialidad», emitía una declaración pública utilizando esa misma frase. Lo mismo hacía el director del Registro Electoral, Andrés Rillon, demócratacristiano, treinta días más tarde, después que los Colegios Escrutadores (formados todos con mayoría demócratacristiana y nacional) revisaron UNO POR UNO todos los votos. Rillon dijo que había sido «una de las elecciones más limpias de la historia de Chile». Sus palabras aparecieron en todos los periódicos nacionales de la época.

13) Los torturadores eran el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, capitán Gajardo; el capitán de Infantería de Marina Koller; el capitán de Inteligencia Naval Acuña; los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia y Maldonado; y el subteniente de Infantería de Marina Boetsch. Las torturas se realizaron en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano, y en la Academia Naval de Valparaíso. (Denuncias de «Ultima Hora», «Puro Chile», «Clarín», «Punto Final» y «Chile Hoy», agosto y septiembre de 1973.

14) Un párrafo de la carta de Prats decía: «Al apreciar, en estos últimos días, que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebra de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno Constitucional» (copiado de «Chile Hoy», número 64).

15) El segundo párrafo de la noticia dejaba al descubierto toda la falsedad que había en la maniobra de Merino de culpar a Carlos Altamirano, Garretón y Enríquez de «subversión» en la Marina, para tener el pretexto del «golpe rojo». Sucede que ahora Merino no solicitaba el desafuero de estos parlamentarios por «subversión» (claro, no podía presentar prueba alguna al Senado ni a la Cámara de Diputados), sino por «el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marineros», lo cual, era de toda evidencia que significaba **POR HABER DEFENDIDO PUBLICA Y REITERADAMENTE A LOS MARINEROS ACUSADOS FALSAMENTE DE INTENTAR UNA SUBVERSIÓN**; es decir, por defender a acusados de subversión. La verdad es que a estas alturas de la conspiración militar, sus jefes no se cuidaban ni siquiera de mantener el pudor intelectual de hacer coherentes sus declaraciones, acusaciones y dichos.

16) Son notables las *coincidencias* entre los movimientos de los generales insurrectos chilenos y la misión diplomática y militar de los Estados Unidos en Santiago. Ocurre que en la mañana del 7 de septiembre, los generales acordaron derribar a Allende el día 11, cuatro días más tarde y «el embajador de EE.UU. en Chile, Nathanael Davis,

viajó a los Estados Unidos el viernes 7 de septiembre (cuatro días antes del golpe), se reunió con Kissinger el día 8 y volvió a Chile el día 9» (citado de *Nacla's Latin American and Empire Report*, vol. VII, número 8). Este Davis fue director de Cuerpos de Paz en Chile en 1962, y en 1968 fue destinado a Guatemala, donde dirigió un «programa de pacificación política» similar a los realizados en Vietnam. «Para 1971 ese programa había dejado 20.000 personas muertas» (citado de la misma fuente). Jack Anderson, en el «Washington Post» del 10 de diciembre de 1972, cita un cable mandado por Davis a Nixon, desde Santiago, pocos días antes, que dice: «Tal vez lo más significativo ahora es la creciente convicción, en los partidos de oposición, sector privado y otros, que la oposición es posible... Los objetivos (de Allende) se ven cada vez más como incompatibles y como que están yendo más allá de lo que se puede aceptar. Si los intereses de la oposición tienen que ser protegidos, la confrontación no se puede evitar.» Bueno, la confrontación vino y el programa de «pacificación» en Chile costó 15.000 muertos en los primeros 18 días, según datos de las fuentes de la resistencia que, en general, están formadas por los mismos informadores que la izquierda tuvo, durante el Gobierno, en el seno de las Fuerzas Armadas, y que ahora esperan la oportunidad para luchar por la democracia de nuevo.

6

El infierno

Los excesos de la Junta son tan sistemáticos, que se acercan al genocidio.

(Palabras de Leopoldo Torres, de Madrid, presidente del Movimiento Internacional de Juristas Católicos)

Poco antes de la medianoche del día 10 de septiembre, comenzó a desencadenarse el infierno sobre el pueblo chileno. Las fuerzas de la destrucción y la muerte fueron soltadas de los regimientos, bases militares, navales y aéreas, de los cuarteles y de los domicilios de jefes de organizaciones fascistas, donde grupos operacionales civiles, llamados «unidades independientes» por el alto mando insurreccional, comenzaron a guiar a las patrullas militares para asesinar a dirigentes de los trabajadores chilenos.

El infierno se desencadenó bajo la forma de una *blitzkrieg* que, en el plazo de menos de veinte horas a partir de ese momento, dejaría un ancho camino de destrucción, muerte, tortura, ignominia y brutalidad sin límites puestas en práctica por los altos mandos militares que se presentaron a la nación como cumpliendo «con el deber moral que la Patria les impone», para, en verdad, cumplir con las instrucciones de las FF.AA. de una potencia extranjera (los Estados Unidos). País que necesitaba urgentemente detener el movimiento revolucionario de mi pueblo y colocar a su Gobierno en el flanco de la dictadura militar de Brasil, con el propósito de iniciar una «limpieza de enemigos de los EE.UU., de los grandes consorcios imperialistas de los EE.UU.», desde el extremo sur de América Latina hasta llegar a México.

A las diez de la noche del 10 de septiembre, los pocos borrachos rezagados en los bares del puerto de la ciudad de Valparaíso, vieron algo no acostumbrado: las naves de la Escuadra de Guerra, que había zarpado diez horas antes desde allí mismo, con el supuesto propósito de unirse a cuatro naves de guerra de los EE.UU. para iniciar los ejercicios bélicos anuales llamados Operación Unitas, habían regresado al puerto... ¡y estaban desembarcando sus tropas que se desplegaban por la ciudad!

Contingentes de la Infantería de Marina, bajo el mando personal del contralmirante Sergio Huidobro, estaban ocupando el gasógeno de la Estación Cerro Barón, la Intendencia, la plaza Arturo Prat, la Estación de Ferrocarriles y otros sitios estratégicos... grupos de tropa de Carabineros se mezclaban con ellos.

En la comandancia naval de la Primera Zona, en Valparaíso, el comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero Cornejo, era arrestado personalmente por el vicealmirante José Toribio Merino, depuesto y dejado bajo custodia por un capitán de fragata armado de subametralladora, «hasta que las cosas se aclaren mañana». Merino tomó el mando de la Marina, en presencia de los almirantes dirigidos por Patricio Carvajal Prado, quien, después de la ceremonia insurreccional, viajó apresuradamente a Santiago para hacerse cargo de su puesto «de combate», en el Ministerio de Defensa, a pocos metros del Palacio de Gobierno.

A esa hora, un oficial de Carabineros de Valparaíso, sin tener idea de lo que realmente estaba sucediendo, informó a la Dirección de Carreteras en Santiago que «los marinos están montando un operativo en busca de armas tremendo», «están por todas partes en la ciudad.» Después hubo silencio y las comunicaciones telefónicas con Valparaíso, desde la capital, se cortaron.¹

Lo que pasaba era que la Marina, cumpliendo con el plan de acción final acordado el 7 de septiembre, en el mismo puerto, con el general de Ejército Augusto Pinochet, había simulado salir a alta mar con su Escuadra de Guerra el día 10, y regresado a puerto, cerca de la medianoche, dividiéndose en dos. La mitad se quedó en

Valparaíso, con apoyo «internacional si es necesario» de dos destructores de los Estados Unidos que navegaban hasta ponerse a 200 millas mar frente al principal puerto de Chile. La otra mitad navegaba ya, a toda máquina, hacia el puerto de Talcahuano. También allí, a 200 millas mar afuera, se deberían situar dos unidades de guerra de la Marina de los EE.UU. como «apoyo tentativo».

La ocupación militar de Valparaíso, utilizando las fuerzas desembarcadas como vanguardia, se hizo en las dos últimas horas del día 10 de septiembre con tal precisión y efectividad que nadie en el resto del país se dio cuenta de la situación hasta muy entrada la madrugada del día 11 de septiembre.

Es cierto que el mérito de la eficacia no es totalmente de los altos mandos militares chilenos, porque los planes de ocupación militar del país habían sido discutidos, rectificados y remendados con los miembros de la Misión Militar de los Estados Unidos en Chile, y con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá, durante los meses de junio, julio y agosto.² Incluso, la gigantesca operación militar de invasión de Chile por los generales en contacto con el Pentágono, tenía una debilidad técnica: la falta de un sistema de centralización de las comunicaciones radiales entre las Fuerzas Armadas repartidas en veinticinco provincias por mar, aire y tierra. El Comando Sur del Ejército yanqui, a través de su base militar aérea de la provincia de Mendoza, en la República Argentina, les resolvió el problema. Les destinó un avión equipado especialmente para servir de «estación de relay» y «centralizadora» de mensajes radiales militares. La operación fue tan descarada, de todos modos, que los propios reporteros argentinos descubrieron la maniobra, tres días después del golpe militar, cuando el mundo estaba horrorizado por el genocidio que sucedía dentro de las fronteras chilenas.

El diario «El Mundo», de Buenos Aires, reveló parte de la operación de «apoyo de transmisiones» por parte del Pentágono norteamericano, en esta información:

«El avión tipo WB57S y los pilotos de reservas M. B. Lemmons y D. C. Baird, comandados por los mayores V. Dueñas y T. Shull, de la Fuerza Aérea norteamericana, coordinaron todas las operaciones de las Fuerzas Armadas golpistas antes y durante el cuartelazo.

»Este avión, especializado en misiones de espionaje y equipado con los más modernos instrumentos de telecomunicaciones, operó el día del golpe como estación radial volante. El perímetro de vuelo comprendía la región limitada por Mendoza, Argentina, y las ciudades chilenas de La Serena y Puerto Montt.

»El avión yanqui comenzó a operar en la zona el 7 de septiembre. Ese día cumplió dos misiones y otras el día 10. Del día 11 al 13 estuvo adscrito permanentemente al apoyo del sistema de comunicaciones de las tropas golpistas, que era vital para tareas

»La cobertura legal de las misiones de coordinación en comunicaciones de los militares golpistas se llamó "Mission Airstream". La tarea cumplida por el avión norteamericano permitió la conexión de estaciones de la Armada chilena, de una parte del Ejército y de la Fuerza Aérea.»³

Operación Pinzas

Sin embargo, no todo el mérito del infierno que se comenzaba a desencadenar sobre Chile era de los generales norteamericanos del Pentágono y del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá. Buena parte de los objetivos de la insurrección había nacido de las mentes de los conspiradores de más alto rango. Ese era el caso, por ejemplo, del vicealmirante José Toribio Merino Castro, autoascendido a almirante y a comandante en jefe de la Armada esa noche del 10 de septiembre, por la fuerza que dan las armas, y en pocas horas más tarde destinado a ser uno de «los cuatro» integrantes de la Junta Militar que comenzaría a gobernar un país ocupado militarmente, y en guerra permanente de un grupo de generales y su tropa contra un pueblo que había construido la

democracia burguesa más sólida y duradera del continente latinoamericano. Una guerra declarada para destruir, arrasar, no dejar piedra sobre piedra de esa democracia chilena, impidiendo con ello, para defensa de una potencia imperialista extranjera y de los grandes señores del dinero en Chile, que ese pueblo creara una democracia más amplia, más sólida todavía.

El «almirante» Merino Castro era un hombre de 57 años, graduado de la Escuela Naval de Playa Ancha (Valparaíso) en 1936. Años más tarde, al igual que todos los altos mandos militares de América Latina «destinados» a ser jefes de sus ejércitos, hizo una «larga práctica» en el aparato militar de los EE.UU. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a bordo del buque de guerra *Raleigh*, de la Armada de los Estados Unidos, patrullando por la Zona del Canal de Panamá y Guadalcanal. Entre 1956 y 1957 fue adicto naval en Londres, y después oficial de Estado Mayor y profesor de Geopolítica y Logística.⁵

Merino Castro fue el primero de los altos mandos insurrectos que se «sublevó» contra la idea de que una combinación de partidos de izquierda gobernara Chile. Ya en 1971 hacía oír su voz en la Academia Naval de Playa Ancha, para decir que «es un error de los americanos dejar que Allende gobierne». Y esa noche del 10 de septiembre de 1973, Merino Castro era un hombre orgulloso: estaba poniéndose en práctica un plan de «exterminio de la ideología marxista» por el cual había luchado muy duro desde 1972. Primero fue el general Gustavo Leigh Guzmán quien apoyó con toda su fuerza ese plan de exterminio. Después el general de división Augusto Pinochet Ugarte y, por último, el general de Carabineros César Mendoza Duran. Antes, en julio de 1973, cuando Merino Castro, a través de Gustavo Leigh y Augusto Pinochet, expuso los detalles de su plan a la Misión Militar de los EE.UU. en Santiago, ésta contestó que «le parecía bien», pero que la forma en que «ustedes se desembaracen de los rojos es problema de ustedes, no nuestro».

Días más tarde, cuando algunos jefes navales, después del golpe

militar, hicieron ver su horror por la terrible matanza que estaba asolando al país, el almirante Merino Castro dio una tajante y breve definición, que recorrió los buques de la Armada como un escalofrío: «Nosotros somos los cirujanos del país. Cuando un enfermo tiene cáncer en una pierna, se le extirpa y se salva al paciente. Nosotros estamos extirpando el marxismo... Estamos haciendo una operación quirúrgica... Nuestra labor es humanitaria.»⁸

En junio de 1973, aun antes de que Augusto Pinochet fuera «invitado» por los demás altos mandos insurrectos para ser «jefe» en la sublevación militar que se estaba montando, los planes operativos de la ocupación armada del país estaban completos en su aspecto estrictamente bélico; pero no estaban completos en la parte de cómo mantener «políticamente» la ocupación militar del país por largos años. Claro, había acuerdo general en clausurar el Congreso Nacional, disolver la Central Unica de Trabajadores, militarizar los sindicatos, fábricas del área de propiedad social, aparato administrativo y disolver todos los partidos políticos, comenzando por los de la Unidad Popular. Pero, ¿era eso suficiente?

Para Merino Castro eso no era suficiente. Para Merino Castro el problema estaba en «los comunistas como personas» y no en sus organizaciones. Él proponía un plan que llamaba orgullosamente de «los tres tercios». Decía que había que fusilar «en las primeras horas» de la «operación» a tres mil dirigentes medios de todos los organismos y organizaciones de la Unidad Popular; detener, juzgar y condenar a prisión larga a otros tres mil dirigentes que tuvieran una fama pública muy conocida; y «exiliar» a otros tres mil políticos, profesionales y «gente intelectual», desde «la Democracia Cristiana a la izquierda». Con eso, decía Merino Castro, se garantiza «la paz social» por un decenio.

Esta idea de Merino Castro no era nueva para él. Había comenzado a hablar de ella ya en marzo de 1973, en los círculos navales de Valparaíso, y cuando llegó a oídos de algunas personas

de la izquierda en ese mismo mes (entre ellos el autor de este libro), el comentario fue «este pobre tipo está loco, es un nazi trasnochado... No se da cuenta de que está en Chile». La realidad, meses más tarde, probó que no era un nazi trasnochado, sino muy contemporáneo, con la diferencia de que su centro ideológico no hablaba en alemán, sino en inglés. Y probó también que la capacidad de barbarie de los seres humanos manejados por la ideología del imperialismo no tiene límites.

Contra la idea de Merino Castro se oponía solamente la de un grupo de generales en el Ejército, del seno de los «reformistas», que estimaban que una acción así provocaría una reacción de «odio contra los militares, que nos costará estar en guerra de guerrillas durante todo el tiempo que nos mantengamos en el poder». Pero los sucesos de marzo, abril, mayo y junio de 1973, que vimos en detalle en los capítulos anteriores, demostraban la profundidad, las hondas raíces que el deseo de liberación nacional había tomado en el pueblo, y ello fue decisivo en la decisión. Los generales y almirantes complotadores estimaron que los chilenos estaban «enfermos» de revolución, que eso era lepra, y como en la Edad Media, había que quemar a los leprosos para sanear el ambiente.

Y desde fines de junio comenzó a perfeccionarse el plan de «los tres tercios» de Merino Castro. Se codificaron las listas de «extremistas», «dirigentes», «políticos de izquierda», «periodistas marxistas», «agentes del comunismo internacional», y toda persona que participara con alguna fuerza en organizaciones vecinales, comunales, sindicales o nacionales, que tenían preparadas desde octubre-noviembre de 1972 los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Aviación. Se pidió ayuda al Pentágono para que se le proporcionaran al Ejército chileno las listas de la Agencia Central de Inteligencia... ¿de chilenos vinculados con los países socialistas!, y se trabajó con la meta de separar dos niveles: las personas no conocidas públicamente, o conocidas relativamente poco, pero que eran importantes en las organizaciones de todo tipo de la izquierda; y las personas conocidas públicamente en un grado

importante, incluyendo funcionarios estatales de categoría de la Administración Allende.

A los primeros se les llamó, por indicación de Merino Castro, «motores del marxismo». A los segundos, «dirigentes del marxismo». Ya a principios de agosto, las listas estaban bastante completas, y el plan de «los tres tercios» de Merino Castro tomó una dimensión apocalíptica.

Se llegó a la conclusión de que los «motores del marxismo» eran unos veinte mil chilenos, que iban desde estudiantes universitarios hasta personas de edad avanzada, ya jubilados de sus trabajos pero con una vida de participación en la comunidad muy activa. Estos eran los que había que detener y fusilar en las primeras horas, o días, del golpe militar.

Los «tres mil» de Merino Castro se habían transformado en «veinte mil», ya en agosto de 1973.

Los de la segunda lista, los «dirigentes del marxismo», en cambio, no fueron sorpresa para el almirante Merino Castro. Su suma no sobrepasaba los tres mil. A éstos, se acordó, había que apresarlos, juzgarlos por el mero hecho de haber deseado una democracia mejor para su pueblo y condenarlos a prisión larga.

Los altos mandos militares encontraban que esta idea era muy buena porque «si damos de baja a los dirigentes tan conocidos, se nos va a acusar de dictadores en todo el mundo». Y en cambio, pensaban, si exterminaban a los desconocidos, pero verdaderos movilizados de los obreros, campesinos y empleados, entonces, «nadie nos preguntará por ellos».

Así, a fines de agosto, estaba todo tan calculado, tan a punto de ponerse en práctica por parte de los generales y almirantes insurrectos, que la operación, en realidad, parecía lo que era en esencia: los preparativos secretos de la invasión militar de otro país, para apoderarse de él definitivamente.

Cuando en la noche del 10 de septiembre los infantes de marina comenzaron a ocupar Valparaíso, como primera fase de la ocupación de todo el país, los generales y almirantes tenían metas

específicas a cumplir en su *blitzkrieg*:

1) *Cazar* y asesinar a veinte mil personas, cuyos nombres figuraban en listas distribuidas previamente a todos los mandos de las veinticinco provincias. La meta para las primeras horas del golpe eran seis mil personas de esas listas.

2) Detener y confinar en campos de concentración, previamente designados, a tres mil personas más.

3) Ocupar militarmente todos los centros administrativos, económicos y políticos del país.

4) Prepararse para un combate de cinco a seis días, que hacía suponer un presupuesto de bajas de «cincuenta mil personas», de las cuales las Fuerzas Armadas militares podían soportar una parte «no mayor» de dos mil hombres, para asegurar la operación. (Sobre estos puntos, en declaraciones públicas posteriores a la masacre, los jefes militares incurrieron en algunas divergencias. Por ejemplo, el general Gustavo Leigh, en el diario «La Tercera», de Santiago, del día 17 de septiembre de 1973, declaraba: «Actuamos así porque es preferible que haya CIENTO MIL MUERTOS en tres días y no un millón en tres años, como ocurrió en España.» Y el general Augusto Pinochet, en entrevista por televisión en red nacional, en octubre de 1973, decía: «La resistencia se desmoronó rápidamente. Nosotros esperábamos, estábamos preparados para que ellos resistieran cinco días... No fue así, podría haber habido CINCUENTA MIL MUERTOS.»)

En todo caso, es importante ver lo siguiente: los cuatro objetivos básicos de la *blitzkrieg*, que abrió las puertas del infierno sobre Chile el 11 de septiembre, demuestran que los militares insurrectos estaban actuando sobre seguro, que ellos «sabían» que se iban a enfrentar con un pueblo desarmado, o pobremente armado, por sorpresa, sin siquiera sospechar la invasión militar, y que su resistencia a la masacre iba a ser solamente la resistencia que da la desesperación frente a la muerte segura. Por eso calculaban un máximo de UN SOLDADO muerto por cada VEINTICUATRO CIVILES. Esto es bueno recordarlo para quien

tenga en mente el supuesto Plan Zeta esgrimido como excusa por los generales y almirantes.

Con el correr de los meses, después del inicio del genocidio en la noche del 10 de septiembre de 1973, la situación se haría tan brutal, que incluso el cardenal de la Iglesia Católica chilena, arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, declararía públicamente, tomando un gran riesgo personal, lo siguiente: «Creemos que no se hará la paz de Chile sobre la base de LA DESTRUCCIÓN DE UNA PARTE NUMEROSA DE LOS CHILENOS» («Ercilla», número 2002, 12 diciembre de 1973. Esta revista es demócratacristiana, del grupo de Eduardo Frei).⁷

No obstante, a pesar de la preparación minuciosa del asesinato de los veinte mil chilenos de la lista manejada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a pesar de la sorpresa con que se lanzó la maquinaria de muerte sobre este grupo de chilenos tan grande, y a pesar de la falta de preparación de las organizaciones populares para resistir con éxito una matanza de esa magnitud, los resultados de las primeras veinticuatro horas de la operación exterminio de los «motores del marxismo» fue un fracaso relativo para los generales y almirantes.

De acuerdo a cifras aproximadas, conseguidas por el propio autor de este libro y por amigos de él que arriesgaron su vida para informarlo en los días inmediatamente posteriores a la insurrección, en el primer día de operaciones (el 11 de septiembre), sólo lograron asesinar a poco más de tres mil personas.

Un detalle tentativo, provincia por provincia, de esos resultados estimados «no satisfactorios» por el Estado Mayor insurrecto, es el siguiente:

Provincia de Tarapacá: 80 dirigentes medios asesinados, de un total buscado de 400. La región fue invadida por las tropas al mando del general de brigada Carlos Forrestier Haengsgen y el coronel Odlanier Mena Salinas.

Provincia de Antofagasta: Alrededor de 80 asesinados, después de ser cazados en sus propios domicilios, de un total buscado de

400, más o menos. Las Fuerzas Armadas de ocupación estaban al mando del general de brigada Joaquín Lagos Osorio y el coronel Eugenio Rivera Desgroux.

Provincia de Atacama: De un total aproximado de 1.000 nombres inscritos en la lista de exterminio, sólo consiguieron cazar y asesinar a unos 100 dirigentes.

Provincia de Coquimbo: 100 asesinatos de un total presu-
puestado de 200. Las provincias de Atacama y Coquimbo estaban al mando de los tenientes coroneles Óscar Haag Blaschke y Ariosto Lapostol Orrego.

Provincia de Aconcagua: 100 asesinatos de un total buscado de 500. Las tropas genocidas estaban al mando del coronel Héctor Orozco Sepúlveda.

Provincia de Valparaíso: 250 asesinatos de un total buscado aproximadamente de 2.000. La ocupación militar estaba al mando del contralmirante Adolfo Walbaum Wieber.

Provincia de Santiago: De una lista para cazar y asesinar de cerca de 6.500 personas, los comandos de exterminio consiguieron matar «sólo» a unos 800 miembros de organizaciones civiles de izquierda. El jefe militar de las tropas invasoras era el general de brigada Herman Brady Roche.

Provincia de O'Higgins: Alrededor de 80 cazados y ejecutados, de un total buscado de unos 600. Al mando de los invasores estaba el teniente coronel Cristian Ackercknecht.

Provincia de Colchagua: Los comandos de exterminio consiguieron matar a unos 100 civiles de un total buscado cercano a los 500. Comandaba las tropas invasoras el coronel Hernán Brantes Martínez.

Provincia de Curicó: De una lista para exterminar a 300, consiguieron cazar y ejecutar a unos 50. Jefe militar: teniente coronel Sergio Angelotti Cádiz.

Provincia de Talca: Los comandos militares asesinos tenían una lista que bordeaba las 400 personas. Asesinaron a 80. Jefe militar: el teniente coronel Efraín Jaña Girón.

Provincia de Linares: Cerca de 20 asesinados de un total programado de 100. Jefe militar: coronel Gabriel del Río Espinosa.

Provincia de Maule: De un total buscado de cerca de 100 civiles, lograron cazar y asesinar a unos 20. Jefe militar: teniente coronel Rubén Castillo Whyte.

Provincia de Nuble: La lista de exterminio pasaba de los 500. A la medianoche del día 11 de septiembre informaron a la central de Inteligencia en Santiago, que sólo habían conseguido «dar de baja» a 98 de los buscados. Jefe de las fuerzas de ocupación: coronel Juan Toro Dávila.

Provincias de Concepción y Arauco: Bajo el mando conjunto del general de brigada Washington Carrasco Fernández y el contralmirante Jorge Paredes Wetzer. En Concepción, de un total buscado de 2.000 civiles, lograron asesinar cerca de 250. En la provincia de Arauco, de un total buscado de alrededor de 500, asesinaron cerca de 100.

Provincia de Bío Bío: 120 cazados y asesinados de un total buscado de más o menos 800 personas. Jefe militar: coronel Alfredo Rehren Pulido.

Provincia de Malleco: De un total aproximado de 400 buscados, las fuerzas de ocupación lograron cazar y ejecutar a unos 80. Jefes militares: tenientes coroneles Elías Bacigalupo Soracco y Alejandro Morel Donoso.

Provincia de Cautín: 150 ejecuciones de un total programado de 600. Jefes militares: coronel Hernán Ramírez Ramírez y teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse.

Provincia de Valdivia: La lista de «motores del marxismo» tenía alrededor de 200 nombres. Se logró la captura y muerte de cerca de 40. Jefe de las fuerzas invasoras: el general de brigada Héctor Bravo Muñoz.

Provincia de Osorno: Las fuerzas invasoras, a cargo del teniente coronel Lizardo Simón Abarca Maggi, lograron la captura y muerte de alrededor de 140 civiles de un total buscado cercano a los 600.

Provincias de Llanquihue y Chiloé: El jefe de las fuerzas de ocupación era el coronel Sergio Leigh Guzmán (hermano del integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh Guzmán). Se consiguió la caza y asesinato de más o menos 115 personas, de un total aproximado de 400 personas buscadas en las dos provincias.

Provincia de Aisén: Fueron cazados y capturados 10 «motores del marxismo», de una lista de alrededor de 200 buscados. Jefe militar: coronel Humberto Gordon Rubio.

Provincia de Magallanes: El jefe militar era el general de división Manuel Torres de la Cruz, cuyas fuerzas «sólo» consiguieron asesinar a unas 100 personas, de un total inscrito en «las listas» de alrededor de 500.

En términos estadísticos, la efectividad de los comandos asesinos de los Servicios de Inteligencia Militares, a pesar de estar siendo asesorados por las unidades «independientes» de civiles de los grupos fascistas, que funcionaban barrio por barrio en las ciudades, era muy baja.

Esto, al parecer, decidió a los generales y almirantes insurrectos a desatar sobre la población civil considerada como «cancerosa» una represión sin límites, bajo la forma de apresamiento masivo, instalación de lugares de torturas propias de la época nazi en Europa y campos de concentración en toda la nación.

En los primeros 18 días tras el 11 de septiembre había solamente en Santiago casi 20.000 civiles presos. Y en todo el país, esta cifra llegaba a los 75.000; era una desesperada búsqueda de todos los componentes de la lista de los «veinte mil».

De acuerdo a cifras aproximadas, desde el 12 al 30 de septiembre, de entre las decenas de miles de prisioneros, los generales y almirantes insurrectos lograron detectar a otros 6.300 integrantes de las listas de los Servicios de Inteligencia, que fueron fusilados en el interior de los mismos campos de concentración. Esto dejó la efectividad de los comandos asesinos a poco menos del 50 % para el total de veinte mil. Esto fue lo que se llamó Operación Pinzas.

Por otro lado, en los primeros cinco días después del comienzo

de la ocupación militar, la defensa desesperada y descoordinada de algunos grupos de trabajadores contra la maquinaria bélica lanzada contra ellos, dejó unos 500 muertos civiles «caídos en combate», contra alrededor de 500 miembros de las tropas bajo mando fascista, entre los cuales se contaban los oficiales y soldados asesinados en la misma mañana del 11 de septiembre y días posteriores, por negarse a obedecer las órdenes de salir a las calles y caminos y masacrar al pueblo chileno. Cerca de 100 oficiales y soldados cayeron en esta forma, fusilados por sus propios compañeros de armas.

Todo esto hace una cuenta homicida de casi 15.000 víctimas civiles en los primeros 18 días del desencadenamiento del infierno sobre Chile. Es decir, unos 740 muertos por día. O, de otro modo, 30 víctimas por hora; es decir, ¡UN ASESINATO CADA DOS MINUTOS!

Después de esta primera lluvia torrencial de muerte sobre los chilenos, los asesinatos se hicieron más espaciados a medida que las dificultades para los comandos asesinos se hacían mayores por la reorganización del pueblo, que comenzó a burlar en parte la maquinaria destructiva montada, por encargo del Pentágono, por los generales y almirantes chilenos.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1973, los oficiales insurrectos asesinaron a un promedio de 30 a 40 personas por semana, aplicando métodos tan sutiles como «la ley de fuga».

Una crónica transmitida el 15 de noviembre para el diario «Excelsior», de México, por su corresponsal en Buenos Aires, Giangiacomo Foa, dibuja ese rincón del infierno en aquellos meses. Su texto, resumido, es el siguiente:

«En Chile sigue aplicándose "la ley de fuga". Todos los días, todas las noches, la Junta Militar que gobierna Chile ejecuta en nombre de los sagrados derechos humanos, la libertad, la democracia y la religión a decenas de ciudadanos chilenos cuyo único delito consiste en haber sido partidarios del Gobierno socialista del

extinto presidente Allende. La paz que busca implantar Pinochet es la paz de los sepulcros.

»Las palabras que siguen son de la abogada Carmen Hertz. Su esposo, Carlos Berger, que fue jefe de la empresa de cobre de Chuquicamata, acaba de ser fusilado en la cárcel de Calama junto con veintiséis obreros del cobre. La Junta Militar de Chile sigue implacable con sus prisioneros de "guerra". "Estuve con él hasta las 16,30 horas. Conversamos largo rato. Estaba tranquilo, sabiendo que sólo le restaban 20 días para cumplir la condena que le había impuesto pocos días antes el consejo de guerra. Nunca llegó a pensar que 90 minutos más tarde sería fusilado"

El relato de Carmen Hertz no difiere mucho del que hacen centenares de víctimas que han visto destruidos sus hogares, sus familias y su vida, cuando la furia represora del Gobierno de Pinochet se ensaña en sus seres queridos. En Chile, los perfumes nacionales se han vuelto la pólvora y la sangre. La "ley de fuga" es el pan macabro de todos los días: "Al inquirir por mi esposo me contestaron lacónicamente que había sido muerto cuando, en compañía de otros veinticinco prisioneros, intentaba fugarse. Creí volverme loca cuando me confirmaron la noticia que había recibido un día antes, pero a la que no podía dar crédito. Me habían dicho la víspera que todos los prisioneros que estaban en la cárcel de Calama habían sido sacados sorpresivamente de sus celdas y llevados a un lugar denominado Topater, campo de entrenamiento de tiro de los militares acantonados en esa región fronteriza con Bolivia. Luego logré obtener del médico forense de Calama el certificado de defunción de mi esposo. Allí se "establece como causal de la muerte la destrucción del tórax y la región cardíaca por fusilamiento". Junto con Berger murieron esa tarde David Miranda, ex dirigente nacional de la Federación Minera; dos periodistas de radio El Loa y el resto obreros. Pero el ajusticiamiento de Calama es sólo uno más de una sangrienta serie de sucesos inconfesables.

En el cuartel de La Serena se mató a quince ciudadanos. Entre ellos ejecutaron al director del Conservatorio de Música, Jorge

Peña, y al médico pediatra Jorge Jordán. En las afueras de Antofagasta, el 19 del mes pasado, fueron fusilados otros veintidós patriotas chilenos. Entre ellos estaba un primo de la esposa del ex presidente Eduardo Frei. **TODOS LOS FUSILADOS HABÍAN SIDO CONDENADOS POCOS DÍAS ANTES A RECLUSIÓN CARCELARIA**, con penas que iban de dos meses a cuarenta años. Pero la Junta los prefirió muertos...

Mientras la Junta Militar celebrada los dos meses del derrocamiento del Gobierno socialista, un largo convoy de vagones jaulas, utilizados habitualmente para transportar ganado, conducía novecientos presos políticos a la oficina salitrera de Chacabuco, recientemente convertida en campo de concentración. Los detenidos tendrán que soportar los rigores de un clima desértico: la salitrera fue convertida hace dos años en monumento nacional por el presidente Allende.

Sin embargo, el infierno no terminó para los chilenos con el final de 1973. Todavía en abril de 1974, al completar casi siete meses del derrocamiento del Gobierno constitucional por parte de los generales en contacto con el Pentágono, la situación era horrible. La agencia norteamericana Associated Press, el primero de abril, transmitía desde Santiago de Chile la siguiente noticia:

«Dirigentes religiosos católicos, luteranos y judíos de Chile apelaron ante los tribunales en favor de ciento treinta y una personas de las que, dicen, nada se sabe desde que fueron arrestadas por fuerzas del orden en los últimos meses. La petición fue hecha por monseñor Fernando Ariztía Ruiz, obispo auxiliar de la Archidiócesis Católica de Santiago; Helmuth Frenz, obispo evangélico luterano; Ángel Kreitman, gran rabino de Chile, y varios otros dirigentes.

El documento fue presentado el viernes pasado como recurso de amparo (*habeos corpus*), en nombre de un Comité de Cooperación para la Paz ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Expresa que su objetivo es salvaguardar la integridad física y moral de tantas personas que hoy se encuentran privadas de

libertad y recluidos en sitios que se mantienen secreto para sus parientes y amigos e inaccesibles, por ende, a una justa y adecuada defensa pública.

El recurso de amparo de los dirigentes religiosos fue presentado en favor de los presuntos perseguidos, entre los cuales no figuran nombres de resonancia pública. "El drama humano que están viviendo tantas madres, esposas, hijos, parientes y amigos ha movido al Comité de Cooperación para la Paz en Chile a presentar en favor de personas arrestadas, y no ubicadas hasta hoy, el presente recurso de amparo", dice el documento.

Agrega que "nos ha conmovido, en nuestra condición de pastores, el dolor y la angustia de tantas personas inocentes, pobres y humilladas en su inmensa mayoría, desprovistas de todo relieve social, sin nombre conocido y sin influencias importantes. El caso de cada una de las personas por quienes recurrimos hoy de amparo ha sido estrictamente estudiado y sometido a comprobación no sólo por los parientes o amigos de los recurridos, sino además por un cuerpo de abogados y asistentes sociales".

Aun cuando muchos de los casos citados en la apelación habrían ocurrido poco después del levantamiento militar de septiembre pasado, otros son más recientes, según el documento. Entre ellos menciona a una madre de dos hijos, identificada como Amapola Lizette Ruiz, de 29 años, quien habría sido detenida el 17 de marzo último por cinco soldados en un barrio modesto de la capital. Agrega el documento que su hermana la ha estado buscando desde entonces sin éxito.

Cita también el caso de Sergio Héctor Salinas Tamayo, de 48 años de edad, casado. Dice que fue arrestado en una fábrica hace tres semanas por cinco personas que se identificaron como agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Agrega que los esfuerzos de sus parientes para tratar de averiguar su paradero fueron infructuosos "a pesar de haber visitado sitios de detención, cárceles, estadios, morgue, hospital, etc"

Otro caso mencionado es el de un empleado de servicio de

energía eléctrica de Santiago, Luis Alberto Gerlach Zúñiga, de 23 años, de quien afirma que ha sido arrestado el 27 de febrero sin que se sepa nada de él.

Todo lo anterior no es más que un pálido reflejo de lo que comenzó a ocurrir desde el momento que los generales y almirantes en contacto con el Pentágono decidieron cometer un genocidio con un tercio de la población chilena para salvaguardar los intereses económicos de un puñado de oligopolios del dólar.

El asesinato de civiles indefensos, así, ha pasado a ser más que un castigo, un alivio para los centenares de miles de hombres, mujeres, ancianos e incluso niños brutalmente torturados cotidianamente por la maquinaria montada por el almirante Merino y los generales Leigh, Mendoza y Pinochet.

Las torturas

A principios del mes de noviembre de 1973, los pocos campesinos que transitaban por el Puente Las Tejuelas, a dos o tres kilómetros de Chillan, sobre el río Nuble, se dieron cuenta que ya las aguas comenzaban a bajar por el cese de la época de las lluvias. Y junto con ese fenómeno visto tantas veces, otro, nuevo y horroroso: la aparición de decenas de cadáveres de personas sin cabeza, degolladas, con las manos atadas a la espalda. Muchos de los cadáveres estaban semipodridos; otros no tanto. Los campesinos fueron a avisar al puesto de Carabineros de la salida de la ciudad; la respuesta fue ésta: «Ustedes no han visto nada. Si cuentan lo que vieron, los tomaremos presos y los degollaremos igual que esos cadáveres.»

Eran los restos de la operación «exterminio» en la provincia de Nuble. Restos semejantes a los de cualquier otra provincia de Chile después del 11 de septiembre. Restos dejados por la bayoneta, ametralladora y aparatos de tortura de los militares chilenos.

Poco antes, en el puerto de Talcahuano, la Sociedad Pesquera Arauco tuvo que suspender varios días sus faenas ¡porque en los

peces llegados para su trabajo, se encontraban restos de seres humanos! Eran de los cadáveres que la marina chilena iba a lanzar mar adentro.

Una periodista, cuyo nombre no puedo citar porque correría peligro en Chile, me cuenta cómo, en el río Mapocho, que atraviesa Santiago, comenzaron a aparecer cadáveres de personas torturadas y luego fusiladas:

«Durante las primeras semanas de octubre me tocó pasar casi todos los días, muy temprano, por el puente Bulnes, que cruza el río Mapocho. La primera vez me negué a creer lo que vi. No podía ser cierto. Desde lejos pude ver que en las barandas del puente y en los bordes del río se agolpaba gran cantidad de gente. Estaban mirando los cadáveres. Cuatro cuerpos de hombres que semiflotaban. Todavía recuerdo que uno de ellos llevaba una camisa roja. Un poco más lejos, un quinto cadáver, que había sido arrastrado hasta la orilla. La escena se repetía todos los días. Y no sólo en ese puente, también los pude ver en el puente Pedro de Valdivia. Decenas de mujeres se apostaban todos los días en los puentes con la esperanza de ver pasar el cadáver de su esposo o hijo desaparecido. Un día, vi nueve cadáveres, todos con el torso desnudo y las manos atadas a la espalda. Los cuerpos perforados a balazos. Y junto a ellos, el cadáver de una niña, de aparentes quince o dieciséis años».

Los niños nunca fueron ajenos a la furia militar. El día 18 de septiembre, una patrulla militar fue a buscar a su domicilio a José Soto, artesano mueblista en hierro forjado, presidente de la Junta de Abastecimientos y Control de Precios en su barrio de Quinta Normal. Soto no estaba. La patrulla militar sólo encontró a su hijo de 14 años. Lo apresó. Y después lo fueron a botar a la puerta de la casa, fusilado. «Para que el hijo de puta no sea maricón y se entregue», les gritaron los militares a los vecinos. José Soto y su familia están ahora fuera de Chile, por eso se puede contar lo que el anciano (de unos 60 años) le contó al autor de este libro.

Durante todo el mes de septiembre y parte de octubre, en las

poblaciones de Santiago, alrededor de concentraciones industriales, los oficiales al mando de las tropas de ocupación dejaban cadáveres en las calles, para que sus parientes fueran a recogerlos y así apresarlos. Los cadáveres estaban habitualmente con las uñas arrancadas, las piernas quebradas o los testículos reventados. Varios aparecieron con los ojos quemados, al parecer con colillas de cigarrillos.

En enero de 1974, tropas de la Fuerza Aérea de Chile dejaron en una población del lado sur de Santiago a un joven de 17 años, perteneciente al MIR, al que habían apresado diez días antes. Su cuerpo, ya muerto, resumía la brutalidad de las torturas: parte del abdomen sometido a vivisección en vivo, las dos piernas quebradas, el brazo izquierdo quebrado, todo el cuerpo con huellas de quemaduras de cigarrillos, y castrado. El médico forense puso «muerte por anemia aguda».

Otra forma de tortura habitual practicada por los oficiales de los Servicios de Inteligencia Militar y de Carabineros era el apagar cigarrillos encendidos en el ano de la víctima; así como la aplicación de corriente eléctrica en los oídos, ano y testículos. Por su parte, los oficiales de Infantería de Marina parecían tener otra afición: siete miembros de la policía marítima de Valparaíso aparecieron muertos con las piernas quebradas y los testículos reventados a golpes.

Personas que estuvieron presas en el barco de transporte Lebu, en la rada de Valparaíso, en septiembre, le contaron al autor de este libro cómo la nave se constituyó en una cárcel para torturas. Por ejemplo, en la bodega número dos, había doscientos presos y, en un rincón, un tambor de petróleo partido por la mitad para los excrementos y orinas de esos presos. En un calabozo de madera, había veinticinco presos, los cuales dormían en el suelo, y los infantes de marina, en la noche, cuando los presos habían logrado conciliar el sueño, se paseaban sobre ellos pisándolos. Salía el Lebu en la noche hasta alta mar y fusilaban en cubierta. Luego tiraban los cadáveres por la borda tras abrirles el pecho con

bayoneta «para que no floten los conchas de su madre».

Pescadores de Horcones, Quinteros y otras caletas de la zona han encontrado, al recoger la pesca, cadáveres o restos humanos en sus redes.

Cuando en la madrugada del 11 de septiembre, siete mil soldados del Ejército, dos mil de la Fuerza Aérea y cuatro mil de Carabineros, bajo las órdenes del general de brigada Sergio Arellano Stark, se dejaron caer sobre la población obrera y trabajadora de Santiago para masacrarla y asesinar al Presidente constitucional del país, ya había preparados diecisiete campos de concentración y de tortura para entrar en acción de inmediato. Eran las instalaciones de la Fuerza Aérea en los Cerros de Chena (San Bernardo), el Estadio Chile, la galería 5 de la Cárcel de Santiago, un patio de la Penitenciaría de Santiago, la Base Aérea de Los Cerrillos, los subterráneos del Ministerio de Defensa, el recinto oriente de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, el Regimiento Buin, el Regimiento Blindados Número 2 (este recinto solamente para recibir a Salvador Allende cuando se «rindiera» y efectuar ahí la operación asesinato del presidente); la estación meteorológica de la Armada, en el parque de Quinta Normal; el Estadio Nacional, el Regimiento Tacna; la Escuela de Infantería; la base aérea El Bosque; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, y el Estadio Nataniel.

En la mañana del 11 de septiembre, cuando todavía no se daba la orden de bombardear el Palacio de Gobierno donde estaba Salvador Allende, la preocupación del general. Pinochet, jefe insurgente, desde su «cuartel general» en Peñalolén, era saber si esos diecisiete campos de tortura y concentración estaban ya en funcionamiento, y consultaba al puesto de comando del vicealmirante Patricio Carvajal sobre la materia, según esta grabación de sus transmisiones:

»Puesto cinco a puesto uno, cambio...

«Puesto cinco... Aquí puesto uno... Se necesita saber si es-

tán en funcionamiento los estadios Chile y Nataniel para los prisioneros... Queremos saber qué personal lo está guarneciendo. Si no están funcionado todavía, que para qué hora se espera que funcionen».

Allí, en esos campos de concentración y tortura, se fue dibujando toda una enciclopedia de la brutalidad de los seres humanos con uniforme de «soldados de la Patria». Desde los culatazos, los insultos, la quema de barbas con encendedores, los palmetazos en el oído o las simples patadas en los testículos hasta situaciones más refinadas.

Testimonio de Luciano Duque, obrero de imprenta de los Ferrocarriles del Estado, preso en el Estadio Nacional:

«...me enterraron la punta del fusil en la cicatriz de una operación de hernia que tenía al costado derecho. Pero a mí me pegaron poco. Vi a Alberto Corvalán, hijo de Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de Chile. Lo vi en el Estadio Nacional. Lo tenían aislado y no dejaban hablar con él. Nosotros éramos como cuatrocientos detenidos y nos hicieron formar entre dos filas de soldados que nos encañonaban con sus armas, por delante y por detrás. Allí estaba Corvalán hijo, con una frazada en la cabeza. Esto pasaba en la parte exterior del velódromo. Seis milicos lo insultaban en forma soez, para provocarlo y hacerlo hablar, según me daba cuenta. Corvalán no largaba nada. Cuando lo soez de los insultos le exasperaba, él contestaba como hombre y entonces entre los seis milicos lo pateaban, lo golpeaban, lo culateaban sin miramiento alguno, con todo salvajismo y como contentos de hacerlo. Corvalán gritaba entonces que no le pegaran más. Esto se repitió una y otra vez y todos los detenidos estábamos desesperados porque no podíamos hacer nada y estaba claro que si gritábamos siquiera nos iban a ametrallar a todos. Al fin terminó el suplicio de Corvalán cuando se se movió más y quedó botado. Los milicos exigieron la ayuda de los propios detenidos de la fila para trasladarlo. No supe donde lo llevaron...».

Las mujeres

Los equipos de torturadores militares, graduados en la Escuela de las Américas en la Zona del Canal, han demostrado con las mujeres chilenas una especie de conocimiento general de la bestialidad humana que los coloca muy por encima de sus maestros norteamericanos, a juzgar por lo que sabemos.⁹

Una profesora universitaria, de la sede Oriente de Santiago de la Universidad de Chile, casada, dos hijos, que estuvo cuarenta días detenida en el Estadio Nacional, hace un *memorándum* para el autor de este libro, sobre el trato a «las prisioneras de guerra»:

«Se las obligaba a permanecer todo el día boca abajo, con las manos sobre la nuca y las piernas abiertas... Había filas de prisioneras hincadas o paradas contra los muros, y al menor movimiento eran golpeadas, pateadas... Y en varios casos, lo vi, baleadas... En los camarines de seis por cinco metros había cien mujeres. Comida una sola vez al día (a las 16 o 17 horas). Había dos grupos mayoritarios de prisioneras: obreras y profesionales universitarias... Muchachas y mujeres adultas fueron vejadas, obligadas a desnudarse, manoseadas e insultadas como preámbulo a los interrogatorios... Las profesoras habían sido sacadas desde las propias salas de clase con los brazos en alto... Un grupo de maestras de escuela tuvo una peregrinación abyecta: en la comisión investigadora una de ellas fue pelada al rape... Luego a los Cerros de Chena, siempre con los ojos vendados... Para ir a los servicios higiénicos debían hacerlo con guardias que aprovechaban para manosearlas y golpearlas... Las interrogaban desnudas, les aplicaban corriente eléctrica en la boca, las manos, los pezones, la vagina, desparramaban agua sobre sus cuerpos para que el dolor fuera más intenso. Las palabras con que se dirigían a ellas eran propias de degenerados y las hacían repetir continuamente "yo soy huevona", "yo soy huevona"... Una profesional de un hospital fue llevada al recinto

naval de la Quinta Normal. Allí estuvo tres días sin poder dormir nunca, sometida a torturas eléctricas cada ciertas horas. También a ella se le aplicó electricidad en la vagina. Después la llevaron al Estadio Nacional. Fue llevada a interrogatorio de nuevo, también con los ojos vendados. Esta vez, al parecer fue en el Velódromo, donde ya se había instalado la cámara de torturas. Fuera de corrientes eléctricas, esta vez se le obligó a tomar algo con la mano. Le habían puesto una inyección, que supuso de pentotal y que la tenía algo mareada, pero consciente. Al momento, sintió que era un miembro masculino que, al contacto con su mano, se puso erecto. Se lo introdujeron en la boca, donde eyaculó». ¹⁰

Hay otros *memorándum* de prisioneras que después lograron comunicarse con el autor de este libro. En esencia relatan lo mismo, aunque agregan que algunos oficiales les contaban que tenían «métodos de interrogatorio fuerte» para «ablandar», para «sacar información» y para «intimidar moralmente».

Y algunas novedades en esos otros *memorándum*: «Las acosaban desnudas, sobre las tablas, y desparramaban cera derretida sobre el vientre... Hubo violaciones de a grupo o individual. "Muévete puta marxista", le decían. "Si no contestas vas a tener que chuparle el pico hasta al general Pinochet, puta de mierda", les decían también. "Otros oficiales comenzaban por introducirme un dedo en la vagina, con la intención de excitarme»...

Hay muchos ejemplos, las páginas de los periódicos del mundo están llenos de ellos. Los cementerios de Chile están cubiertos de cadáveres mutilados. Quisiera citar, como una especie de resumen del arte de la tortura aplicado en mi país por los militares, el testimonio aparecido en el diario «El Tiempo», de Bogotá, en las ediciones del 26 y 27 de marzo de 1974, bajo la firma de autenticidad del columnista Daniel Samper Pizano. El testigo es un estudiante universitario de Valparaíso y dice esto:

«Fui detenido a mediados de octubre en el mismo recinto universitario donde estudiaba, donde asistía normalmente a clases. El rector designado por los militares permitía que los esbirros del Servicio de Inteligencia Naval se introdujeran en la universidad, y tengo la impresión de que el propio rector delataba a los estudiantes de izquierdas. Con los demás detenidos nos llevaron a la Academia de Guerra Naval. Éste es un edificio de acero, de cuatro pisos, ubicado en un promontorio sobre el mar, en el Cerro Playa Ancha. Llegando se nos vendó los ojos y se nos hizo subir hasta el cuarto piso por las escaleras de hierro. Las caídas y los empujones iniciaban la tortura. Al subir escuchábamos gritos desgarradores; creímos que eran grabaciones para amedrentarnos, pero luego nos dimos cuenta de que eran gemidos auténticos de los torturados. Nos metieron en una pieza y nos obligaron a permanecer de pie, con las manos en la nuca, sin hablar. El que se movía o hablaba era lanzado al suelo donde le daban culatazos y lo pateaban. Allí permanecimos toda una tarde, en espera de que nos llamaran para interrogarnos. Nos sorprendieron hablando y nos castigaron brutalmente, pero así pude saber que en esa sala ya había personal de la Aduana que estaba siendo torturado. Había un profesor de literatura de la Universidad de Chile, un cura católico, y otro de nombre Juan, que era muy conocido en los barrios obreros de Valparaíso, quien posteriormente murió en una sesión de torturas. Se nos dio comida bastante buena, pero nadie comía por el horror de los gritos del recinto y el miedo. Los guardias sádicamente decían: "Aprovechen de comer, que será la última comida". No se pudo dormir en todo el tiempo que permanecí en el edificio, puesto que los gritos eran desgarradores; eran verdaderos alaridos de dolor y no cesaban ni de día ni de noche.

El primer día sacaron a mucha gente que había llegado antes: los de la Aduana, el profesor de literatura y el cura católico.

No volvieron más. Después sorprendí a un guardia que comentaba con otro: "El cura se les fue cortado, lo van a hacer aparecer como suicidio".

Al segundo día fui interrogado: Permanecí torturado durante más de tres horas. Me desnudaron y me golpearon con manos y pies por todo el cuerpo. Parece que los interrogadores eran muchos. Luego me aplicaron corriente en los testículos. Cuando suspendían la corriente me golpeaban con manos y pies. Especialmente me golpeaban el abdomen, porque cuando se inició la tortura intuí un golpe de karate en el vientre e instintivamente endurecí los músculos. Me gritó el torturador: "¿Así que entrenado? Ahora vas a ver". Durante todo el interrogatorio me tuvieron con los ojos vendados y las manos esposadas. Con las contracciones musculares por la electricidad, las esposas se cerraban cada vez más y me rompí las muñecas hasta el hueso. A estas alturas del interrogatorio ya no sentía dolor. Solamente me daba cuenta que me estaban quemando con electricidad. Al término del interrogatorio, que perseguía saber si había armas en la Universidad, me llevaron a otra sala donde me sacaron la venda para que pudiera caminar; pero me caía al suelo y me hicieron arrastrarme hacia otra sala donde yacían los torturados. Había allí un profesor universitario que conocía de vista, que estaba con todo un lado del cuerpo negro de los hematomas y le habían perforado el tímpano, por lo que el dolor le hacía aullar; los restantes estaban todos tanto o más golpeados que yo. Muchos tenían las costillas rotas y no podían siquiera respirar. Ninguno podía caminar; tenían fracturas en los huesos de las piernas, por golpes y por las contracciones musculares producidas por la corriente. Había muchas mujeres tan golpeadas como nosotros. A las mujeres las habían violado en forma bestial; estaban desgarradas internamente y sangraban con profusión. Una se quejaba continuamente, le habían introducido un objeto cortante en la vagina y parece que le había traspasado el peritoneo. Entre los que estaban, algunos dijeron haber recono-

cido a los interrogadores: "eran infantes de marina de los que han preparado las bases norteamericanas en Panamá".

Al tercer día me mandaron al buque Lebu, habilitado como cárcel, a la bodega número 3, donde ya había ciento sesenta personas. Al descender sentí un hedor a excrementos que daba náuseas. Se debía a que no tenían baño y hacían sus necesidades en unos tarros colocados en la misma bodega. Había allí obreros, empleados, médicos, abogados, estudiantes, profesores. Entre ellos recuerdo a Patricio Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Valparaíso; Sergio Fischer, eminente cardiólogo; Nelson Osorio, profesor de literatura; Félix Laborde, ingeniero químico; Carlos Pabst, físico; y muchos más que no puedo nombrar. Conviví con ellos durante sesenta y cinco días. La comida era asquerosa. Nos servían porotos con gorgojo, es decir, con gusanos. En un tiempo trataron de aparecer más humanos y el jefe del recinto, un oficial de apellido Osorio, nos permitió subir a cubierta, pero, para que no nos divisaran desde la ciudad, nos obligaba a estar sentados e inmóviles al sol. Se nos quemaban los talones y muslos por el calor de las planchas de cubierta. Después, el jefe se dio cuenta de que desde un buque italiano, creo que era el Verdi, nos fotografiaban y desde entonces se prohibió que saliéramos a cubierta.

Nos hacían levantar a las 6 y hacer gimnasia desnudos. Las faltas —fumar, conversar, no agregar el vocativo "señor" cuando nos interrogaban— eran sancionadas con culatazos y plantones, es decir, nos dejaban en posición erecta, rígidos, con las manos en la nuca, hasta por 24 horas, sin movernos. El menor movimiento era reprimido a culatazos. En las mañanas y en la noche nos hacían cantar el himno patrio al izar o arriar la bandera. Nos prohibían cantar el verso que dice "O la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión", porque parece que al principio los detenidos hacían mucho énfasis en esos versos y los marinos lo estimaban como un sarcasmo contra ellos.

Un día nos sorprendimos porque nos hicieron limpiar, nos dieron implementos y bajaron colchonetas para todos. Era que concurría ese día una delegación de la Cruz Roja Internacional. No bien se estaba retirando la Cruz Roja después de la visita, nos quitaron las colchonetas y no las volvimos a ver más. En los contados casos en que existía un interés de la Armada por ocultar las gravísimas flagelaciones inferidas a personalidades reclamadas por entidades internacionales, o cuya muerte podía causar escándalo exterior, se les llevaba al Hospital Naval, donde algunos de ellos se suicidaban, como me consta que ocurrió con una muchacha que fue reiterada y bestialmente violada, quien se suicidó, razón por la cual en el Hospital estaba sumariado todo el personal del cuarto piso para averiguar quién había permitido el suicidio.

Cuando llegó la noticia de que el Lebu era vendido como chatarra, me dejaron en libertad bajo condición de ser vigilado por la comisaría de Carabineros del barrio, donde tenía que concurrir diariamente. Una vez que habilitaron el nuevo campo de concentración (el estudiante se refiere al campo de torturas habilitado en Colliguay Alto, en Valparaíso, donde en diciembre fueron trasladados los prisioneros de los barcos), empezaron a detener de nuevo a los que habían sido liberados, y entonces yo me fugué. Antes de enviarme a casa bajo vigilancia trataron de dejarme psicológicamente condicionado y me llevaron a la Academia de Guerra para una nueva sesión de torturas. Estuve cuatro días y me di cuenta de que las cosas estaban mucho más crueles y refinadas. Golpeaban más y empleaban más la electricidad. Casi me trastorné, no tanto por mi propio sufrimiento como por el de personas más débiles que yo. Vi a jóvenes universitarias que habían sido torturadas hasta lo indecible; una de ellas, embarazada, había sido golpeada repetidamente en el vientre y mostraba síntomas de aborto. Ancianos de más de 60 años habían sido quemados por todo el cuerpo con cigarrillos y electricidad. Hombres y mujeres con las

ñas arrancadas con alicates. Después me llevaron al Cuartel Silva Palma, de la Infantería de Marina. Al cabo de dos días en este recinto, inexplicablemente, me dejaron en libertad, obligándome a controlarme diariamente y a no contar lo que había visto. Nunca supe la razón de mi detención, ya que no sabía de armas en la Universidad, no era extremista ni militaba en ningún partido de la izquierda y solamente había participado en los trabajos voluntarios de toda la juventud, como cualquier estudiante universitario. Tengo excelentes notas y mis profesores me estimaban mucho. Mis padres le pidieron al rector que intercediera por mí y quizás eso haya sido la razón de mi libertad. Son tan arbitrarios los fascistas que eso no lo sabré jamás.

Esto parece ser suficiente para explicar parte del infierno que se desencadenó sobre Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, algunos detalles adicionales son imprescindibles.

Por ejemplo, que a partir de febrero de 1974, el campo militar de Peñalolén, en los faldeos cordilleranos de Santiago, que para el día 11 sirvió de cuartel a los generales y almirantes insurrectos, se ha habilitado como «campo de torturas piloto» para los presos políticos. Antes, y durante tres meses, asesores de la policía y del Ejército brasileños, adiestraron a oficiales chilenos en el difícil arte de torturar a «prisioneros de guerra».¹¹

Esta asesoría «técnica» brasileña no es sorprendente, ya que, según propia confesión de los generales insurrectos, en declaraciones de una semana después del golpe militar, dijeron que habían enviado a Brasil, Bolivia y Paraguay oficiales del Ejército y la Marina de Chile para «poner en antecedentes» a esos Gobiernos del levantamiento militar que tendría lugar el 11 de septiembre. Así, los brasileños, bolivianos y paraguayos, un día después de dar el golpe, comenzaron a enviar expertos de Inteligencia de sus respectivos Ejércitos para «colaborar» en la identificación, apresamiento y torturas de

ciudadanos brasileños, bolivianos, paraguayos y uruguayos que habían buscado asilo político en Chile durante los años anteriores.

Un caso que ahorra todo comentario es el del sociólogo y profesor universitario brasileño Theotonio Dos Santos, refugiado en Chile desde hacía siete años. Dos Santos se asiló en la embajada de Panamá después del 11 de septiembre, y fue mantenido cinco meses allí sin que se le otorgara el salvoconducto. En Washington, cuando una delegación de la Hostos Community de la Universidad de Nueva York preguntó en la embajada chilena en la capital yanqui por qué no se le concedía salvoconducto a Dos Santos, la secretaria de prensa de esa embajada, periodista Carmen Puelma, respondió que «Dos Santos no tiene ningún problema pendiente en Chile, lo que pasa es que el Gobierno brasileño nos ha pedido que lo retengamos». Estas declaraciones fueron publicadas en el diario «The New York Times» del 24 de noviembre de 1973.

Los «asesores» brasileños fueron los que introdujeron la técnica de ablandamiento moral del fusilamiento «simulado», que consiste en llevar a los prisioneros al campo de matanza, someterlos a la ceremonia del fusilamiento, en grupo, y matar sólo a uno de cada cinco o a uno de cada tres de los prisioneros en fila. Esta técnica fue utilizada profusamente en los primeros dos meses después del 11 de septiembre. Ahora se utiliza en los diferentes campos de concentración como Chacabuco, en Antofagasta; Pisagua, cerca de Iquique; Isla Juan Fernández, a 360 millas de Valparaíso; Isla Quinquina, frente a Talcahuano; Isla Dawson, en el canal de Beagle; Colliguay Alto, en Valparaíso; y campos de Peñalolén, en Santiago.

La corrupción

La ocupación militar de Chile por parte de las tropas comandadas por los oficiales que obedecieron las órdenes del Pentágono

el 11 de septiembre de 1973, ha desarrollado en las filas de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros un nuevo estilo de corrupción, desconocido hasta ese día por los chilenos. Un resumen esquemático de este nuevo estilo de vida de los dueños de Chile, por el momento, es el siguiente:

Corrupción en Carabineros

1) Forman equipos de tres o cuatro funcionarios de civil, con armas que no son de reglamento, en las horas del toque de queda, para allanar domicilios y robarse especies de valor. Se las reparten según vaya robando cada uno, por turno. Primero, estudian el barrio, según soplos de empleados domésticos o fascistas civiles, después dan el golpe. A esto lo llaman «fona». Por ejemplo, los carabineros Daniel Vargas y Carlos Cáceres, de la 13 Comisaría en Santiago forman parte de uno de esos equipos.

2) Cuando están de guardia, por ejemplo en embajadas, se apropian de una libreta en blanco, y con ella en la mano hacen parar vehículos por supuestas infracciones del tránsito, y aceptan sobornos en dinero o especies. A esto lo llaman «hacerse un sobresueldo».

3) Cobran dinero a los familiares de los asilados en embajadas por darles permiso para hablar, a través de las verjas del antejardín, por uno o dos minutos. Las tarifas, en diciembre de 1973, iban de los 2.000 a los 15.000 escudos, según el aspecto del familiar.

4) Tratan de hacer pagar «protección» a ex funcionarios del Gobierno de la Unidad Popular que no han sido detenidos. Las tarifas, en enero de 1974, fluctuaban entre los 10.000 y 15.000 escudos mensuales.

5) Se sobrepasan con las esposas de los detenidos. Esto a nivel de oficiales, que les insinúan a las esposas que si se acuestan con ellos, podrán intervenir por el destino final de los presos. Estos casos suman miles en Santiago y son de diaria concurrencia.

6) A las sirvientas de las casas cercanas donde hacen guardia,

las manosean y las obligan a acostarse con ellos en sus propias casas, bajo la amenaza de «si no, te llevamos presa por ser marxista».

Corrupción en las Fuerzas Armadas

1) Algunos jefes eligen a las destinadas mejor parecidas para violarlas personalmente, como «parte del interrogatorio». Lo mismo que los oficiales de Carabineros presionan moralmente a las esposas de los detenidos para que se dejen violar a cambio de «alivio» para los maridos presos. Cuando son jefes de servicios, solicitan los mismos favores de empleadas y secretarias para «no despedirlas por simpatizantes de los marxistas».

2) En los allanamientos manosean a las mujeres, incluso se ha hecho habitual que las obliguen a desnudarse, «por si ocultan armas», y permanecer así mientras hacen registros. Se beben los licores que hay en las casas. En un departamento céntrico de Santiago, una mujer sola sufrió el allanamiento de su habitación cinco veces en un mes y las cinco veces fue violada por el oficial de la patrulla.

3) Realizan allanamientos en dos etapas. En la primera visita buscando al «prófugo» y en la segunda para llevarse aparatos electrónicos o de uso doméstico, cuadros, antigüedades, etc. Y destrucción de libros.

4) Groseros en el lenguaje con las mujeres cuyas casas han sido allanadas varias veces y amenazadas de «si no nos das dólares te violamos entre todos».

A medida que ha ido pasando el tiempo y los militares han copado los puestos de responsabilidad de la Administración pública, esta corrupción ha tomado formas más refinadas, y así un gran porcentaje del dinero que circula en el país, de las cosas de valor y de las mujeres, han pasado a formar parte del «botín de guerra» de estos mandos armados de la burguesía chilena, y del imperialismo norteamericano.

El comienzo

En realidad, es difícil establecer el punto exacto en que se inició esta especie de desenfreno mortal contra centenares de miles de chilenos (en los hechos más de un millón de adultos) cuyo gran pecado es ser partidarios de la izquierda. Puede haber algunos puntos de partida, como el de este cable del 29 de septiembre de 1972, procedente de Santiago de Chile, de la agencia española EFE:

«En medios eclesiásticos de Santiago se confirmó hoy la muerte de un sacerdote español, Juan Alsina, durante los sucesos ocurridos a partir del movimiento militar que derrocó al desaparecido presidente Salvador Allende. Su cadáver apareció el pasado jueves en el río Mapocho, que cruza Santiago, con disparos en la espalda. Otro sacerdote español, Antonio Gidó, está siendo buscado por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Quillota, bajo la acusación de estar vinculado a actividades extremistas».

O quizás, este otro cable, del 28 de septiembre, procedente de Montreal, de la Agence France Presse:

«Tres sacerdotes canadienses expulsados de Chile denunciaron hoy, a su llegada, la campaña de «asesinatos por millares» y «delación generalizada» que siguió al golpe militar del 11 de septiembre. El padre Jean Latulippe, quien colaboraba con un organismo de iniciativa popular, contó que según un testimonio del que no podía dudar, «los ocupantes de un camión militar registraron el 13 de septiembre a un peatón de unos 20 años y, al encontrar en su poder una navaja, un oficial desenfundó su pistola y lo mató en el acto. Arrojaron el cadáver al camión, y aconsejaron al testigo que se fuera cuanto antes. Es evidente que los soldados tenían la libertad de matar a quien les pareciera... Pero la represión de dirigentes de las organizaciones populares estaba perfectamente organizada».

Hay también otros casos, como los atestiguados por el parlamentario chileno Eduardo Contreras, en la provincia de Nuble:

«Carabineros de Ninhue tiraron el cuerpo agonizante del joven maestro Carlos Sepulveda Palaviccino delante de su domicilio, y durante dos horas mantuvieron sin poder acercarse al cuerpo sangrante a su esposa. Cuando la agonía cesó, y el profesor Sepulveda murió, se fueron y dejaron que la esposa, ahora viuda, se acercara».

O tal vez el caso del alcalde de Chillan, Ricardo Lagos, que fue asesinado en su propia casa por los soldados, junto con su esposa Sonia Ojeda, embarazada, y su hijo Carlos, de 20 años.

Pero hay algo más importante. Está la orden transmitida por el general Augusto Pinochet que, aunque incorporado tarde a la conspiración contra la democracia burguesa chilena, se destacó rápidamente como uno de sus más hábiles carniceros. Esa orden fue grabada en la mañana del 11 de septiembre por un radioaficionado, con la propia voz de Pinochet. Este es su texto:

«Aquí puesto uno... del general Pinochet... Que se prepare boletín... Que se establezca y se puntualice que por cada miembro de las Fuerzas Armadas víctimas de atentados se fusilarán de inmediato a cinco de los prisioneros marxistas en poder de las Fuerzas Armadas...

«Repita la última parte, por favor...

«Repito... SE FUSILARÁN DE INMEDIATO A CINCO DE LOS PRISIONEROS MARXISTAS EN PODER DE LAS FUERZAS ARMADAS... Que se prepare un boletín conteniendo estas ideas...

«Perfectamente claro».

¿No le parece, al lector, que esto trae un recuerdo como de Lídice, como del ghetto de Varsovia? ¿Como del comportamiento de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, al de las tropas norteamericanas en Vietnam?

Fue en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y hay más. Más de las inapreciables grabaciones de un radioaficionado patriota de las órdenes de los generales. Lean ésta, por favor. En ella, el general Pinochet pide «informes»:

«Agradeceré informe resultado.

«Informa Operación Reducción Población La Legua a las 10,14 horas de hoy. Señala que 300 carabineros, tres compañías de Ejército y cinco compañías de El Bosque forman cerco periférico a la población. Una vez aislado el objetivo se inicia operación ablandamiento con penetración de tanques, apoyo aéreo de los helicópteros, y aviones de caza si es necesario. Es requisito esencial aislar el objetivo. Para eso se necesita cooperación de Carabineros.

»Sí... Pero coordinación con Carabineros... También tiene que ver con Ejército... ¿Quién está a cargo de la operación?

»En la segunda División determinaron ellos que la hiciéramos nosotros por ser responsables de la zona... El comandante de los tanques, comandante Calderón está a cargo... El Ejército coordina... Hay que entregarle el objetivo a los tanques...

»Mire, quiero que me aclare qué significa exactamente el término reducción...

Dice reducción de la población... ¿Qué significa exactamente reducción?

«Significa que si hay necesidad, si la población se entrega, se termina la reducción, mi general... Hasta ayer había muchos grupos insurgentes ahí que estaban causando molestias, pero parece que ahora están en actitud defensiva...

«Reducción, entonces, es hacer entrada... Hay un punto fundamental, es importante... Al que se sorprenda con armas hay que detenerlo y al que se resista hay que darlo de baja... ¿Así lo entienden ustedes?

»Sí, general... Los tanques ablandarán...

»Está claro... Muy bien».

El general Pinochet estaba claro: mil soldados, tanques, helicópteros artillados y aviones de caza contra una población de emergencia, de casas de latón, cartón y papel de diario; con no más de doce mil habitantes, contando los niños, las mujeres y los ancianos. Pero ésta era la medida inaugurada el 11 de septiembre:

tanques contra hombres sin armas, niños descalzos... o tal vez hombres con armas cortas, muy pocas. Esa mañana, los mil soldados del general Pinochet asesinaron a más de doscientos hombres, mujeres y niños en la población La Legua, de Santiago de Chile.

Peró el infierno estaba siendo desatado por todas partes. Hay este otro comunicado grabado por un radioaficionado:

«Puesto tres a puesto uno... Puesto tres a puesto uno... Para el general Leigh de parte del general Pinochet: que el ataque aéreo al Banco del Estado y al Ministerio de Obras Públicas, si puede llevarse a cabo cuanto antes. Que estos ataques se hagan sobre los techos de esos edificios. Que se hagan lo antes posible y que dé la hora en que se van a realizar, para coordinarlo con la acción terrestre...

«Puesto tres a puesto dos... El general Leigh al teléfono... Que haga los ataques aéreos lo antes posible...

«Entendido... Un momentito por favor... Puesto dos informa a general Pinochet: helicóptero artillado hará fuego sobre los techos del Banco del Estado y Ministerio de Obras Públicas dentro de quince a veinte minutos...

«Entendido... Que el ataque aéreo se haga sólo sobre los techos de los edificios...»

Ésta era otra gran batalla del general Pinochet contra la democracia chilena. Tanques, carros blindados, cañones y quinientos hombres contra una cuarentena de civiles en el Palacio de La Moneda y una veintena de otros civiles en los edificios de Obras Públicas y Banco del Estado, a pocos metros de La Moneda. Todos los civiles armados de armas cortas o semicortas. Y hubo que pedir apoyo aéreo para tamaña batalla, cerca del lugar donde Salvador Allende vivía las últimas horas de su vida, batallando contra el destino que le habían fijado los generales: asesinarlo.

Mientras tanto, en la cordillera, en la Escuela de Alta Montaña, la esposa del general Pinochet pasaba un día de «cordillera» esquiando, con su hijo de 16 años y su hija de 14. Los había

enviado allá el general Pinochet. En la tarde, a las siete, ella llamó por teléfono al general, y éste le contestó: «Está todo tranquilo». Ya había asesinado al presidente Allende, destruida La Moneda y una alfombra de miles de muertos civiles cubría la «tranquilidad» de la tierra chilena, de norte a sur, de este a oeste.

Pero la desesperación hace milagros, y grupos de obreros, empleados, estudiantes y hasta mujeres que dejaron las ollas del almuerzo para combatir, trataban, ese día 11, de oponerse a la invasión militar del país por las tropas manejadas desde Washington a través de los generales y almirantes insurrectos.

Las comunicaciones se sucedían así:

«Correcto, puesto cinco... Avenida Las Acacias 1.000... Allí se está entregando armas... Hay una reunión de gran cantidad de personas a las que se les está entregando armas...

«Comprendido, puesto dos...

«Adelante, puesto dos... Por favor, informen qué medidas se están tomando respecto a la situación en el paradero seis de Santa Rosa... Allí fuerzas terrestres de la Fuerza Aérea y Carabineros están siendo copadas por gran número de personas armadas...

«Puesto tres a puesto uno... Por favor, informe...

«Puesto cinco... Aquí puesto tres... Mi general necesita el informe...

«Aquí puesto cinco para puesto tres... Lo que usted pidió del paradero seis de Santa Rosa... el comando informa que partieron tanques para allá y refuerzos de la Escuela de Infantería. ..

«Comprendido...

«Del puesto cinco al puesto uno... De acá al comando de tropas... Informe... Hay una radio clandestina que está transmitiendo en 29 megaciclos... Segundo, noveno... 29 megaciclos...

«Comprendido...

«Informe a puesto tres estamos pendientes de la concurrencia de apoyo...»

«Mire, Nicanor... "beta uno" El Bosque consulta necesidad de repetir bando de toque de queda para el día de hoy porque hay una

conurrencia muy grande de gente en las calles... "Beta uno" cree que hay que repetirlo cada diez o quince minutos...

»Okey... Se repetirá el bando...»

«Aquí general Benavides... El centro de Perfeccionamiento de Carabineros en Macul está siendo atacado... He solicitado apoyo aéreo. En Los Jazmines hay tiroteo. En esa población se informa que hay sólo un oficial y dos conscriptos...»

«Se necesita urgente información sobre intimidación de grupos de izquierda en gran cantidad en Villa Las Acacias de Maipú... Esto queda al fondo de Villa Schneider... ¿Copió?»

»No copié...

»Repito... Fuerzas de izquierda están intimidando pobladores de la Villa Las Acacias en Maipú... ¿Recibió?»

«Positivo...»

«No se acepta publicación de prensa de ninguna especie. Y si sale alguna, esto motivará la destrucción del lugar donde fue publicada...»

»Sí...

«Repito la primera parte: de la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición y unidades independientes: a partir de este momento se procede a arrestar a cualquier dirigente político o gremial o persona que no obedezca las órdenes y los bandos. Estas personas serán sometidas a proceso, y si se las sorprende con armas y/o explosivos, a los tribunales en tiempo de guerra...»

«Entendido...»

Sí, realmente era un «entendido» para todo el pueblo de Chile. Destruída la libertad de prensa, de asociación, de opinión, de vivir... Todos los derechos bajo las botas o las orugas de los tanques militares, después de una débil defensa de menos de tres días por parte de un pueblo sorprendido, atacado por la espalda, engañado y sin preparación para sostener una guerra con los representantes armados del gran capital monopólico de Estados Unidos y Chile.

Tan atacado por la espalda como el propio presidente Allende,

que todavía en la mañana del 11 de septiembre, mientras estaba cercado, creía en la lealtad de Pinochet y Herman Brady.

Un colaborador de Allende, que estaba trabajando con él la noche del 10 de septiembre, cuando preparaba su rendición frente a las exigencias de la oposición civil, cuenta la dramática ignorancia del Presidente acerca del verdadero papel que estaban jugando sus generales. Copiamos del relato recopilado por la agencia española EFE, el 18 de septiembre:

«En el transcurso de la reunión de trabajo el Presidente fue informado por teléfono del desplazamiento de camiones con tropas de San Felipe (a 100 kilómetros de la capital) en dirección a Santiago. El ministro de Defensa se puso en comunicación telefónica con el general Herman Brady, jefe de la guarnición militar de Santiago y comandante en jefe de la Segunda División del Ejército. Este último le indicó a Letelier que no tenía ninguna noticia, pero que iba a informarse y que lo llamaría de nuevo en 15 ó 20 minutos.

»A las 00.30 horas del martes 11, el ministro repitió su llamada al general Brady y éste le indicó que se había puesto en contacto con San Felipe y que allí "todo se encontraba normal".

»Poco antes de las 07.00 horas el presidente Allende fue despertado con la información de que los oficiales de algunas naves de la Marina se habían sublevado. En particular, el crucero Almirante Latorre y el submarino Simpson. (La verdad era que hacía NUEVE HORAS se había iniciado la invasión de Valparaíso por la Marina, el puerto estaba ocupado, y ya los torturadores y fusileros estaban trabajando duro, en TODAS las provincias de Chile. Y en Santiago, los cordones industriales de Vicuña Mackenna y Los Cerrillos habían sido ocupados por tropas, había tiroteos esporádicos, y la parte oriente de Santiago estaba bajo la ocupación de las tropas del general César Raúl Benavides Escobar.)

A las 07.00 Allende llamó por teléfono a los comandantes en jefe y ninguno le contestó.

A las 07.10 conversó Allende telefónicamente con el general

Brady y le dijo que tomara las medidas del caso y "que si no iba a tomarlas que se lo dijera directamente". (A esa hora, Brady estaba en conferencia con los generales Sergio Arellano Stark, jefe de las fuerzas de ocupación de la ciudad de Santiago; con el general Ernesto Baeza Michelsen, jefe de las fuerzas de ocupación del centro de Santiago; y con el general Javier Palacios Ruhman, jefe de las fuerzas de ocupación y destrucción de La Moneda.)

A las 07.30 el presidente Allende llegaba al Palacio de La Moneda.

A las 7.45 se puso en contacto telefónico con Luis Figueroa (comunista), presidente de la Central Única de Trabajadores.

A las 7.55 grabó su primer mensaje al país transmitido por Radio Corporación (socialista).

A las 8.00 llamó telefónicamente a Rolando Calderón (socialista), secretario general de la CUT. Hasta ese momento había reiterado sus intentos de comunicarse con los comandantes en jefe, sin éxito. Manifestó que temía que estuvieran comprometidos. Indicó igualmente que el general Orlando Ubina (Inspector General del Ejército) no estaba en su casa y tampoco lo estaba el Almirante Montero.

A las 8.20 el edecán aéreo del Presidente, comandante Roberto Sánchez, llamó por teléfono en el momento en que el doctor Allende estaba grabando la segunda alocución radiofónica. El comandante Sánchez le indicó que se encontraba en el Grupo Siete de la Fuerza Aérea (en Santiago) donde había ido a informarse y que el general Gabriel Van Schowen (Jefe del Estado Mayor del Aire) le había manifestado que tenía dispuesto un avión para el presidente Allende. La respuesta a este mensaje fue la siguiente: "Dígale al general Van Schowen que el Presidente de Chile no arranca (no huye) en un avión, y que sepa cumplir con su deber de soldado.

A las 8.30 se escuchó por la radio en La Moneda la primera proclama de la Junta Militar.

El infierno se había desatado finalmente sobre Chile. Toda la

inmensa maquinaria de guerra alimentada por el Pentágono había comenzado a marchar por los caminos de Chile, para dejar un rastro de dolor, miseria, muerte y patentizar la bajeza moral de los oficiales chilenos. Las radioemisoras del Gobierno fueron bombardeadas. Las fábricas fueron ametralladas. Las poblaciones perforadas con tanques. La gran mentira militar cubriendo el país.

A las 7.40 de esa mañana, una mujer sola, la esposa de Allende, también comenzó a vivir su pesadilla. Cuenta:

«...el martes a las 7.40 recibí un llamado telefónico que me despertó. Era Salvador que me dijo: "Te hablo desde La Moneda. La situación se ha tornado grave. Se sublevó la Marina. Yo voy a quedarme aquí. Tú permanece en Tomás Moro". Prácticamente me prohibió salir de la residencia. Estuve pendiente de la radio. Escuché su último mensaje al pueblo de Chile. A las doce ya no me respondió el teléfono de La Moneda. Cerca de las 11.30 horas apareció sobre la residencia un helicóptero de reconocimiento. Para ese entonces no sabía yo que los Carabineros nos habían abandonado. Fue entonces cuando se iniciaron los bombardeos aéreos. Llegaban los aviones, descargaban sus cohetes y volvían. Entre cada uno de los ataques se desataba un tiroteo de locura. La residencia se convirtió en una masa de humo, de olor a pólvora y destrucción. Las últimas llamadas al Palacio de La Moneda las hice en el suelo, a veces de rodillas y a veces acostada. Cuando estaba en esas condiciones me fue a buscar Carlos Tello, mi chófer, que había logrado llevar el automóvil hasta el patio posterior de la casa. Salimos por el colegio de las monjas que queda atrás de la casa. Decidí irme a la casa de Felipe Herrera, por fortuna no nos había seguido nadie. Allí permanecí todo el día. No pude salir porque se había establecido el estado de sitio y el toque de queda. Estuve allí sin saber de mi marido y de mis hijos».

El resto de la historia es conocida por todos los pueblos del mundo. Pero hay, tal vez, un detalle que no lo es tanto. Cuando los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea chilena comenzaron a bombardear la casa de Tomás Moro para «reducir» a la esposa de

Salvador Allende, el primer avión atacante cometió un error muy serio. Confundió el blanco. En vez de dejar caer sus primeros cuatro cohetes sobre Tomás Moro, los dejó caer sobre el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, a unas veinte cuadras del objetivo. «Me confundió el brillo de las ventanas», confesó más tarde el piloto a sus compañeros. Pero sus cohetes impactaron en un ala del Hospital de la Fuerza Aérea: uno en el subterráneo-lavandería, otro en el tercer piso, un tercero en la terraza y el cuarto en el jardín. Una enfermera resultó con ambas piernas fracturadas.

Esa noche, el general Leigh declaró por televisión a todo el país que «los marxistas son malvados... No han vacilado en atacar un hospital... El hospital de la Fuerza Aérea en Las Condes». Y enseguida declaró solemnemente que ahora brillaba el sol para los chilenos, porque serían gobernados por personas honestas, porque «los militares no mentimos jamás».

La casa de Tomás Moro, residencia de los presidentes de Chile, ya había sufrido los primeros efectos del Gobierno de estas personas honestas. Después de ser bombardeada, fue dejada abierta para el saqueo de turbas de la clase alta, que se vengaron de Allende robándole sus pertenencias. Esos ladrones lo eran dos veces, porque pertenecían a las clases más adineradas de Chile.

Pero no sólo el general Gustavo Leigh era un militar «que no miente jamás». También lo era el general Augusto Pinochet, que el 16 de septiembre declaraba por teléfono a la radio franco-luxemburguesa RTL lo siguiente: «Pablo Neruda no está muerto y es libre. No matamos a nadie. Si Neruda muere será de muerte natural».

La verdad era otra ese día 16 de septiembre. Primero, había miles de muertos asesinados por orden personal de generales como Pinochet. Segundo, el asesinato del presidente Allende había sido encubierto con un suicidio fabricado. Tercero, Pablo Neruda, enfermo de cáncer de próstata, en gravísimo estado y con necesidad de atención médica diaria, había sido aislado en su residencia de Isla Negra, por cinco días, por un fiero cordón de

soldados, que no dejaban pasar nada, ni siquiera medicinas, ni salir nada de la residencia del gran poeta. No se ha podido establecer si los generales insurrectos decidieron asesinar a Neruda, matándolo «de muerte natural» al aislarlo en Isla Negra cinco días sin atención médica. Pero el hecho es que la muerte de Neruda se produjo por efecto de esos cinco fatídicos días desde el 11 al 15 de septiembre, día en que, agonizante, fue trasladado a la Clínica Santa María de Santiago. Cuando todavía el cuerpo del poeta, agonizante, no salía de Isla Negra, las tropas entraron en la casa y la saquearon, rompieron las pertenencias del poeta, quemaron sus libros y robaron su dinero. Y la casa de Neruda en Santiago, a los pies del Cerro San Cristóbal, también fue saqueada, o «allanada», que viene a ser lo mismo en el lenguaje de los militares «que no mienten», sus libros quemados y sus pertenencias robadas. El 23 de septiembre falleció Neruda de «muerte natural» provocada por los generales Pinochet, Mendoza, Leigh y el almirante Merino. De los cuatro, tres planearon la muerte de Allende. De los cuatro, todos planearon la muerte de una democracia y la masacre de un pueblo.

El día 24 de septiembre, la agencia France Presse, transmitía esta noticia:

«El cuerpo de Pablo Neruda, muerto ayer, reposaba esta tarde en las ruinas —abiertas a todos los vientos— de su palomar encaramado en las alturas de Santiago. Hoy, al alba, los militares hicieron un allanamiento en la casa del gran poeta comunista chileno. Las ventanas están ahora rotas, el lecho destrozado, los armarios destruidos y las revistas y los libros quemados. El piso de su casa y del palomar que la domina está inundado. Neruda reposa en medio de trozos de vidrios, de fotografías desgarradas y de piezas de alfarería precolombina convertida en cascotes».

Una semana más tarde, el primero de octubre, los generales y almirantes en contacto con el Pentágono, emitieron el Decreto Ley número 54, por medio del cual se multiplicaron POR DOS los sueldos de los oficiales, colocándose entre los personajes mejor remunerados de Chile. El mismo decreto «bonificaba» con CINCO

MIL ESCUDOS a los conscriptos de las Fuerzas Armadas. Es decir, un gasto extra de unos 600.000 dólares. Algo así como 40 dólares por civil asesinado desde el día 11 hasta el 30 de septiembre.

40 dólares por el cadáver del muchachito de 14 años, hijo de José Soto, fusilado por los soldados en las puertas de su casa. 40 dólares por el cadáver de Salvador Allende, ametrallado en el Salón Rojo de la Presidencia. 40 dólares por el cadáver de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura.¹²

Notas

1) El almirante José Toribio Merino, en el diario «La Tercera», del 19 de septiembre de 1973, dijo: «Yo acuartelé la guarnición de Valparaíso con el pretexto de buscar armas. Un cuarto para las seis comenzó el plan "silencio". Los buques habían regresado. Cortamos todos los teléfonos, menos uno, y todas las radios, menos la de la Armada. Se dejó el teléfono para que una persona llamara a Santiago a Allende... A la hora justa que nosotros planeamos se supo en Santiago. "Pero ya todo el país estaba controlado por las Fuerzas Armadas y Carabineros». Por su parte, Augusto Pinochet, muy ufano de su *blitzkrieg* contra el pueblo chileno, decía en el diario «La Opinión», de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1973:

«...sólo algunos oficiales sabían lo que haríamos. Los envié a Antofagasta, Iquique, Concepción y Valdivia con los últimos detalles, para evitar que se produjeran muertes inútiles, desórdenes. Lo mantuve en secreto hasta 14 horas antes del advenimiento de la Junta de Gobierno Militar. Todo salió de acuerdo a

uno de los principios elementales de la estrategia. Allende se preocupó de Valparaíso, cuando el centro de gravedad estaba en la capital».

2) Para la forma en que se hacían esos viajes entre Santiago y el Southern Command en la Zona del Canal, remito al lector a la nota 27. Respecto a la forma minuciosa en que el Southern Command apoyó y asesoró a las Fuerzas Armadas chilenas para la insurrección y su dominio posterior de todo el país, algunos datos adicionales: «Los soldados chilenos reciben diariamente cuatro raciones de alimentos, debidamente enlatadas y selladas en los EE.UU.» («Boletín del Comité de Solidaridad de Panamá con Chile», enero de 1974, p. 6). «Más de 200 militares, agregados de la última promoción de la Escuela Militar de Chile, llegaron hace poco a Fort Gulick (Zona del Canal) para ser sometidos a intenso entrenamiento para combatir guerrillas urbanas» (misma fuente anterior). «Desde la Zona del Canal, concretamente desde la Base Aérea de Howard, salen aviones que tienen como destino la base aérea chilena en Antofagasta, al norte del país. Hasta allí llegan dos tipos de "solidaridad yanqui". Por un lado, la empresa ITT, instigadora y financista del golpe, se ha comprometido con la Junta a enviar gran cantidad de productos necesarios para el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea chilenas. Los productos yanquis llegan desde California a la Base Howard en la Zona. De ahí salen vía Antofagasta. Por otro lado, desde el 11 de octubre de 1973, rige la circular núm. 17.277 Air Forcé de EE.UU. procedente del Pentágono, según la cual es necesario mantener todo tipo de apoyo logístico a la Junta. Desde el Post Echanze de Corozal, Zona del Canal, según las guías de salidas de productos de ese puesto militar, se consignan grandes cantidades de productos destinados a Chile: parque (balas para fusil M-1; calibre 45 para automáticos, gases lacrimógenos, etc.); igualmente productos farmacéuticos y plasma. Llama la atención en los envíos la gran cantidad de drogas, y particularmente, un tipo de alimento que se da a los soldados al momento de ir al combate» (extractado del «Boletín» mencionado, número 6 de junio de 1974, p. 5).

3) El diario «El Mundo» agregaba que el número de serie del avión era USAF-63103289. En la revista «Crawdaddy», de Nueva York, del mes de mayo de 1974, en su página 40 se leía: «Un reportero del periódico semanal "Phoenix", de Boston, comprobó con el Pentágono el mes pasado y un vocero de la Fuerza Aérea confirmó que un avión con ese número de licencia y con esa tripulación había dejado Argentina el día del golpe. El vocero, sin embargo, insistió en que el avión había estado en "misión meteorológica" y que no penetró en el espacio aéreo de Chile. Entretanto, Tim Butz, ex experto de reconocimiento de la U.S. Air Forcé, el cual ahora trabaja para Action Research de la Intelligence Community, examinó una serie de fotografías aéreas del bombardeado Palacio Presidencial. Butz informa que las fotos muestran que la zona aledaña está virtualmente

intocada mientras que el palacio de Allende estaba totalmente demolido, y afirma que ese tipo de precisión podría solamente ser conseguido con el uso de las avanzadas armas norteamericanas llamadas *smart bombs and rockets*».

4) Buenos Aires, septiembre 12 de 1973 (Prensa Latina): «Juan Domingo Perón condenó hoy el golpe fascista producido en Chile... Le preguntaron si habría intervención norteamericana en este golpe, y Perón respondió: "No podría demostrarla, pero creo que sí, creo profundamente que sí. Como conozco estos procesos, cómo no voy a saber. Si ayer mismo, los comentarios decían que había farra (fiesta) en el Departamento de Estado"» (publicado en «El Expreso», Lima, 13 de septiembre).

Washington, 12 de septiembre (EFE): «Una organización independiente norteamericana pidió hoy al Senado que investigue la posible participación en la Agencia Central de Inteligencia (CÍA) en el golpe de Estado que ayer derrocó al presidente Allende en Chile. El Comité para una Sociedad Abierta, con sede en Washington pidió al senador William Fulbright, presidente del Comité de RR.EE. del Senado norteamericano, que realice una investigación sobre cualquier supuesta intervención directa norteamericana en los sucesos de Chile. "Creemos que el Gobierno de los EE.UU. estaba profundamente comprometido en el derrocamiento del Gobierno de Allende"... dijo el director William Higgs» («El Expreso», Lima, misma fecha).

«En cifras globales, hasta el 11 de septiembre de 1973, se requisaron 170 empresas, se intervinieron 155 y se compró un porcentaje importante de las acciones de otras 90, lo que da un total de 415 empresas» (declaración del general Sergio Nuño, vicepresidente de «Corfo», a la revista chilena «Qué Pasa», 2 de noviembre de 1973).

Santiago de Chile, 15 de noviembre (AFP): «Medio centenar de empresas norteamericanas que fueron nacionalizadas por el Gobierno de Allende, serán entregadas a sus antiguos propietarios extranjeros, se confirmó hoy aquí en fuentes de la Junta Militar» (publicado en «El Día», de Buenos Aires).

«En Nueva York, la revista "Business Week" anticipó ayer, 14 de noviembre, que 50 empresas norteamericanas nacionalizadas por Allende serán entregadas a sus antiguos dueños... Añade la revista que "es improbable" que la ITT vuelva a tener control de la Compañía de Teléfonos de Chile, pero recalca que, en cambio, tendrá más posibilidades de obtener buenas indemnizaciones ("El Día", de Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973)».

«Durante la semana pasada llegaron a Chile los expertos de las misiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comité Interamericano para la Alianza para el Progreso y observadores de la OEA... Trabajan en el Banco Central de Chile desde donde toman contacto con los organismos que les interesan» (revista chilena «Ercilla», del 14 al 20 de noviembre de 1973).

«En busca de oxígeno fue a USA y Canadá una misión presidida por el can-

ciller almirante Ismael Huerta y su resultado fue satisfactorio. Se tomó contacto con agencias internacionales y con el Gobierno y empresarios privados norteamericanos, con quienes hay muchos asuntos pendientes» (misma fuente).

Washington, noviembre 5 (UPI): «Chile prometió hoy reparar presuntas injusticias en las expropiaciones de las empresas norteamericanas del cobre, y anunció que renegociará su indemnización. "Es injusto negar indemnización en forma unilateral a las empresas expropiadas, so pretexto de que no pagaron impuestos en años anteriores", dijo el nuevo embajador de Chile en la Casa Blanca, general Walter Heitman».

Diario «El Día», de Buenos Aires, citando el *repon* del Bank of America sobre el golpe en Chile, el 14 de diciembre de 1973: «El informe dice que "los bancos nacionales en el futuro, como era en el caso anterior de ser nacionalizados por el Gobierno derrocado, volverán a actuar independientemente y directamente en sus operaciones con el exterior, pero bajo la supervisión del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos".»

Washington, 22 de diciembre (PL): «Chile acordó con los EE.UU. pagarle 124 millones de dólares como primer plazo de su deuda externa y otorgarle "una indemnización justa a los intereses norteamericanos". La decisión fue dada a conocer en un comunicado conjunto del Departamento de Estado y el del Tesoro Nacional del país. El documento del Gobierno norteamericano dice que "la nueva Junta Militar de Chile está comprometida a pagar las compensaciones correspondientes a las empresas norteamericanas y asegura un clima propicio a las inversiones» («El Expreso», de Lima, 23 de diciembre, página 15).

Nueva York, 4 de enero de 1974 (Reuter Latin): «La Dow Chemical dijo hoy haber firmado un contrato con el Gobierno chileno para retomar la Administración de dos compañías (en Chile)... Fernando Leniz, ministro de Economía, expresó que el Gobierno tiene listo un plan para devolver a sus propietarios privados los bancos estatizados durante el régimen del extinto presidente Salvador Allende».

Washington, 28 de enero (AP): «El "New York Times", en un artículo acerca de la situación chilena a cuatro meses del golpe militar, dice que el programa económico de la Junta ha logrado el elogio de los economistas conservadores... Agrega el artículo que en los barrios pobres existe temor por la represión, y que allí las libertades civiles importan ahora menos que los precios de los alimentos».

Diario «El Mercurio», de Chile, 19 de enero: «Robert Haldeman, alto ejecutivo de la Braden Copper, propietaria hasta 1971 de la mina de cobre El Teniente, llegó al país... Se reunió con Eduardo Simián, asesor de la Junta... Después de sus reuniones en Santiago, ha iniciado una gira por los grandes yacimientos cupríferos, visitando especialmente Chuquicamata»...

Santiago de Chile, enero 23 (AP): «Trece industrias textiles estatales serán devueltas a sus antiguos propietarios (eran monopolios textiles de los clanes

Yarur, Sumar e Hirmas, en sociedad con capitales norteamericanos de Chase Manhattan Bank). En noviembre pasado se publicó la lista de las primeras 88 empresas devueltas, incluidas fábricas de conservas, ropa, madereras, metalúrgicas y otras.

Washington, 29 de enero (AP): «El Servicio de Inteligencia Económica Rundt... informa que... los empresarios se sintieron grandemente aliviados por el cambio de Gobierno, y ese espíritu fue afianzado cuando se devolvieron las propiedades incautadas por el presidente Allende»...

Washington, 8 de febrero (EFE): «El Gobierno chileno pagó hoy más de millón y medio de dólares a los EE.UU. en compensación por la nacionalización de compañías de cobre y productoras de papel con interés norteamericano».

Mendoza, Argentina, 28 de marzo (PL): «Respecto al pago de indemnizaciones (a la Anaconda y la Kennecott), el asesor económico de la Junta, Raúl Sáez, anunció que su monto oscilará "entre 300 y 600 millones de dólares"».

Santiago, 13 de abril: «La General Motors ha aceptado formalmente regresar a Chile después de haber suspendido sus operaciones bajo el ex presidente Allende» (extractado del Miami Herald, del 14 de abril de 1974).

Santiago de Chile (inserción de la Embajada de Chile en Panamá, en «La Estrella de Panamá», del 30 de mayo de 1974): «Ya se ha superado la etapa de la regularización de unos 3000 predios agrícolas que habían sido expropiados ilegalmente por el anterior régimen marxista.» (Esto significa la devolución a los latifundistas de casi el 50 % de la tierra expropiada por la reforma agraria durante las administraciones de Frei y Allende).

Santiago de Chile, 13 de junio de 1974 (AP): «El Gobierno puso ayer en venta 107 empresas que fueron expropiadas durante los tres años del Gobierno del extinto presidente Salvador Allende... La Corfo publicó una lista de un total de 150 firmas que serán devueltas al sector privado... En la lista figuran 7 empresas que operaban con capital norteamericano, dos con británico y una con italiano... Hace nueve meses, la Junta Militar devolvió alrededor de 90 empresas a sus anteriores propietarios... Un vocero de la Corfo dijo que el Estado venderá todas las empresas actualmente bajo su control, con excepción de los servicios públicos o estratégicos (extractado de «La Estrella de Panamá», 14 de junio 1974).

5) Como ejemplo, veamos los comandantes en jefe del Ejército.

General Luis Miqueles Caridi, comandante en jefe en 1967: cursos en Fort Belvoir y Fort Monmouth en 1941 y 1942. En 1952, Misión Militar en la Embajada en Washington. General Sergio Castillo Aranguiz, comandante en jefe en 1968: Fort Knox en 1949. General René Schneider Chereau, comandante en jefe 1969-70: Fort Benning, en 1953.

General Carlos Prats González, comandante en jefe 1970-73: Fort Leavenworth, en 1954.

General Augusto Pinochet, comandante en jefe desde 1973: Fort Leavenworth, en

1955, y Southern Command en 1956. Misión Militar en Washington en 1956.

6) Hay algunas frases alrededor de la idea, las cuales, probablemente pasarán a la historia, como ésta, del general Augusto Pinochet, a la revista «TIME», reproducida por el semanario «Punto en Domingo», de Caracas, del 30 de septiembre de 1973: «La democracia lleva en su seno la semilla de su propia destrucción. La democracia debe cada cierto tiempo BAÑARSE EN SANGRE para que pueda continuar siendo democracia».

Por su parte, el general Sergio Arellano Stark, jefe de la guarnición de Santiago, dijo, el 23 de diciembre de 1973, en el Canal 13TV, a las once de la noche, que «en realidad los muertos no son tantos... SI HUBIERA HABIDO SETECIENTOS MIL MUERTOS, como dicen algunos, YA NO TENDRÍAMOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD».

Estas ideas tienen antecedentes civiles, como la declaración del diputado nacional, Patricio Phillips, en este mismo programa, en febrero de 1973: «NOSOTROS TENEMOS QUE TENER CLARO QUE EL MEJOR MARXISTA, ES EL MARXISTA MUERTO».

O también, la declaración, a gritos, del diputado nacional Domingo Godoy Matte, el primero de julio de 1973, en la Cámara de Diputados: «Que no se alegren los marxistas, ¡YAKARTA va!» (refiriéndose a la idea planteada por Patria y Libertad de una operación Yakarta en Chile, copiando la de Indonesia en 1965, cuando fueron asesinados más de 300.000 civiles por las tropas insurrectas, acusándolos de «comunistas»).

7) A partir de abril de 1974, se desarrolló un violento conflicto entre los generales y la Iglesia Católica, porque ésta, a través de su cardenal Raúl Silva Henríquez comenzó a protestar por los asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, además de miseria nunca vista antes en el país, a que era condenado el pueblo chileno. El día 14 de abril, el cardenal dijo en una homilía en la Catedral de Santiago: «Lo hemos dicho a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, que no se puede faltar a los principios del respeto al hombre, los derechos humanos son sagrados, nadie puede violarlos. Por eso, hoy día lloramos el dolor del padre que presencia el desgarramiento de su familia, la lucha entre sus hijos, la muerte de algunos de ellos, la prisión y el dolor de muchos de ellos... Hemos dicho que la violencia sólo genera la violencia y que ese no es el camino».

Más tarde, el 24 de abril, la mayoría de los obispos católicos emitieron un documento dramático, en que denuncian «las delaciones», «los falsos rumores», «el aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios o por razones ideológicas», que «los asalariados debencargar con una cuota excesiva de sacrificio», «la falta de resguardos jurídicos eficaces para la seguridad personal», «detenciones arbitrarias o excesivamente prolongadas», «interrogatorios con apremios físicos y morales»... «Hay derechos que tocan la dignidad misma de la persona humana, y ellos son

absolutos e inviolables». Esto provocó una reacción airadísima de la Junta, cuyo vocero, el general Gustavo Leigh, dijo: «Los obispos son instrumentos del marxismo internacional» (publicado el 30 de abril de 1974, en "El Mercurio", de Santiago).

8) Cuando se desencadenó el golpe militar del 11 de septiembre, había dos grupos políticos bastante preparados para soportar el ataque: el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y el PCR (Partido Comunista Revolucionario) los cuales tenían un aparato de información clandestino desde el comienzo del Gobierno de la Unidad Popular (incluyendo la clandestinidad de la abrumadora mayoría de sus miembros activos). Estos dos aparatos de información, más los restos en reorganización del PS y el PC, permitieron al autor hacer una reconstrucción sumamente aproximada de las bajas de la batalla de septiembre. A principios de 1974, el diputado francés Gustav Ansart, del Parlamento Internacional con sede en Estrasburgo (Francia), dio a la publicidad cifras muy semejantes, que eran así: 15.000 muertos; 30.000 presos políticos; 200.000 trabajadores expulsados de sus centros de trabajo por haber pertenecido a la Unidad Popular o simpatizado con ella, y 25.000 estudiantes expulsados de las universidades. El 5 de diciembre de 1975, Martin Reynolds, de la UPI, en recuento noticioso anual publicado en «El Comercio», de Lima, dice «el 5 de octubre se revela que según los cálculos de la CÍA, unas 3.000 personas murieron en el proceso de consolidación del golpe militar en Chile». Se agregaba que 250 miembros de Patria y Libertad habían sido adiestrados por militares de Paraguay, Bolivia y Brasil, los cuales, previamente, habían recibido adiestramiento en la Zona del Canal de Panamá.

Por su parte, los militares chilenos, más conservadores, informaban el 4 de octubre que las bajas fueron 476 civiles y 17 militares. Pero, en marzo, a la revista «Ercilla», de Chile, el general Augusto Pinochet declaró otra cosa: «Hemos tenido 1.600 muertos, de los cuales 200 fueron de nuestro lado.»

9) Entre los torturadores, han sido identificados con precisión, los siguientes: capitán Bender Hoffer (en Chillan), coronel Manuel Contreras Sepúlveda (regimiento Tejas Verdes, en San Antonio), el teniente Medina (en la cárcel de Rancagua), el coronel Horacio Oteiza, el general Orlando Gutiérrez, el capitán Nelson Arturo Duffey, el capitán Víctor Matic, el capitán Florencio Dublé, el capitán Alvaro Gutiérrez, el teniente José García Huidoro, el capitán Alberto Bastendorf, el auditor de guerra Christian Rodríguez, el comandante de escuadrilla Jaime Lavín Parina, el comandante de grupo Gonzalo Pérez Canto, el comandante Erick Barrientos Cartagena y el comandante de escuadrilla Edgardo Ceballos, todos de las bases aéreas 7 y 10 de Santiago. Y coronel Daniel Ivaceta, de Carabineros, en Santiago.

10) De este espeluznante tipo de torturas hay centenares de testimonios. Uno de

ellos, presentado a la Comisión Internacional de Helsinki, que funciona desde el 21 de marzo de 1974, sirve de prueba abrumadora, porque se puede dar el nombre de la torturada, ya que ahora está segura en otro país del mundo. La denuncia, hecha en forma de carta-testimonio enviada a Chile, a los propios militares, dice en parte:

«Conocemos, señor Daniel Ivaceta, cómo usted interrogó y torturó a Ana Alicia Flores, chilena, de 25 años, profesora de educación física en Santiago, esposa de Manuel Matamoros, gerente de Banco durante el Gobierno del Presidente Allende». El relato cuenta que las torturas fueron para saber dónde estaba Matamoros. Hubo golpes, insultos y «esperaba unos segundos y al no obtener respuesta la despojaba de una prenda de vestir». «La golpeaba en la cabeza, en el pecho, enrollaba sus cabellos en el puño, le echaba la cabeza hacia atrás y le golpeaba el rostro». Después cuenta que la dejaron sola, pasó un rato, y la bajaron, en camisa y calzada, dos pisos más abajo en el Cuartel Zañartu, de Carabineros, en Santiago. «Allí la esperaba usted, señor Daniel Ivaceta y cinco oficiales. Eran hombres mayores, con canas, aproximadamente de su edad. Antes de empezar el interrogatorio, usted y sus compinches la obligaron a quedarse desnuda, y así, en cueros, le ordenaron que pasara por delante de ustedes, viejos repugnantes. Después la obligaron a que corriera y bailara. Claro está que Ana Alicia Flores no podía bailar. Entonces la obligaron a que se tumbara en el suelo, después la echaron sobre la mesa que tenían delante y, usted, señor Ivaceta, empezó a desnudarse primero... La infeliz encontró fuerzas para saltar de la mesa, correr hasta un rincón de la habitación y lanzar a sus mugrientos y sudorosos rostros todo lo que pensaba de ustedes... Desfallecida, la echaron sobre la mesa y tres de ustedes la violaron... El testimonio cuenta que la víctima se desmayó y la encerraron hasta el día siguiente. Ese día, nuevo interrogatorio y «juntos le pegasteis de nuevo, luego la violasteis, y ella otra vez perdió el conocimiento». Pero Alicia Flores no respondió (no sabía dónde estaba su marido, de todas maneras). «Al día siguiente usted la echó de la comisaría, comprendiendo que con ella no iba a lograr nada. La metieron en un vehículo, semidesnuda y manchada de sangre, la llevaron a varias cuadras de la comisaría... y la dejaron en la calle. Unas personas desconocidas le ayudaron a llegar a casa».

11) El 23 de marzo se denunció ante la Comisión Internacional de Helsinki este hecho, con documentación que fue aceptada como valedera por parte del presidente del Comité Organizador, ministro de Instrucción Pública de Finlandia, Ulf Sundkwist, y de los miembros del Comité. La asesoría ha producido torturas muy refinadas, de tipo moral, como la hecha a Clodomiro Almeyda, ministro de RR.EE. de Allende, que estuvo quince días con la vista vendada, día y noche, en la Academia de Guerra Aérea de Santiago, según expresó al director del diario «El Excelsior», de México. El mismo periódico, el 16 de mayo reprodujo un detallado informe sobre las

torturas realizadas por estos «técnicos militares», según unas denuncias de obispos católicos, líderes protestantes y rabinos judíos en Chile.

12) En septiembre de 1973, el grupo Pro Justicia y Paz de Chicago, escribía un informe titulado *Chile: Hora Cero*, que decía: «La política de EE.UU. en Chile no fue: dejémosle solo, sino: cortemos su yugular, quitémosle la comida y el agua, forcémosle a morirse económicamente y después mirémosle caer. Mientras suspendían toda ayuda económica, los EE.UU. seguían contentos enviando ayuda militar a la nación y ocurrió que la ayuda económica militar de Nixon a Chile en 1974 es la más grande jamás recibida. Nixon es tan inocente en Chile como lo fue en la última campaña electoral: Chile es un Watergate con pasaporte» (tomado de «Diálogo Social», 9 de octubre de 1973, Panamá).

Cable de la AP, del 11 de septiembre de 1973: «...para el año fiscal de 1974, el presupuesto del Gobierno Nixon tenía asignado UN MILLÓN DE DOLARES para el adiestramiento de oficiales chilenos, una de las cifras más altas para cualquier país del mundo».

Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, informe anual de 1973: «Chile fue en 1972, el país latinoamericano con más alto gasto militar *per capita*: 36 dólares por habitante, que equivalen al 4,6 % del PNB».

Los 40 dólares por muerto producido por los generales chilenos, tuvieron un fruto impresionante, según recopilación de informaciones oficiales a través de cables AP, UPI, EFE y AFP:

24 de octubre de 1973. El Agricultural Department de EE.UU. presta 24 millones de dólares a la Junta para adquirir trigo. Había sido pedido el 26 de septiembre por los generales, y es el mayor crédito en la historia de Chile para ese propósito. Durante los tres años de Allende, sólo se obtuvieron 3.200.000 dólares. Entre 1962 y 1965, se obtuvieron 6.500.000 dólares. 8 de noviembre de 1973. 20.000.000 de dólares para electrificación rural.

9 de noviembre de 1973. 24.000.000 de dólares para artículos manufacturados, concedidos por el Manufacturers Hannover Trust, y 20.000.000 de dólares para el Banco Central; 8 bancos de EE.UU. y 2 de Canadá ofrecen 150.000.000 de dólares en préstamos a la Junta. James Green, presidente de la Asociación de Banqueros de Nueva York, al firmar el convenio, dice: «Extender la mano al nuevo Gobierno chileno, en una ayuda psicológica y de buena fe».

14 de noviembre de 1973. 28.000.000 de dólares de préstamo para comprar maíz, del Agricultural Department de EE.UU., batiendo otro récord para Chile (por supuesto a tres años plazo y 9,5 % a 10,5 % de interés anual).

12 de diciembre de 1973. 80.000.000 de dólares del FMI, batiendo otro récord para Chile.

18 de enero de 1974. El BID ha concedido 128.000.000 de dólares en préstamos a la Junta. En los últimos 14 años, antes del 11 de septiembre de 1973, Chile había recibido un total de 314,1 millones de dólares del BID.

Apéndice

El Pentágono, la C. I A. Kíssinger y los generales de la junta chilena

En los últimos veintidós días de septiembre de 1974 ocurrieron tres sucesos dramáticos, dos en Estados Unidos y uno en Argentina, los cuales, aparentemente desconectados entre sí, fueron, sin embargo, parte de la trama que conduce a conocer el argumento completo del derrocamiento sangriento del gobierno constitucional de Chile en septiembre de 1973, la participación de sectores de poder de los Estados Unidos en él, y las maniobras que hoy se hacen para ocultar a los verdaderos actores estadounidenses de esa trágica pieza fascista.

Los tres sucesos son los siguientes:

1) El «New York Times», el 8 de septiembre, da a conocer pruebas irrefutables (con los extractos del testimonio del propio jefe de la CÍA) de los esfuerzos del gobierno norteamericano, entre 1970 y 1973, para derrocar al gobierno chileno de la época.

2) El presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa sostenida el 17 de septiembre, admite como válidos los esfuerzos del gobierno de su país para derrocar al extinto presidente Allende, de Chile.

3) El 30 de septiembre, es asesinado en Buenos Aires el ex comandante en jefe del ejército chileno, general de división (R) Carlos Prats González.

Los dos primeros sucesos dejaban en claro las siguientes cosas: La CÍA gastó más de ocho millones de dólares entre 1970 y 1973 para derribar el gobierno legal de Chile, y lo hizo con el visto bueno, la aprobación y la complacencia del presidente de los Estados Unidos; el secretario de estado Henry Kissinger aprobó personalmente el complot. El actual presidente de los

Estados Unidos encuentra «moralmente» apropiado que la Casa Blanca conspire para cambiar gobiernos en otros países.

Hasta aquí, todo claro, excepto por un pequeño, importante, y fundamental detalle.

No fue la CÍA la que tuvo un papel fundamental en los preparativos para el derrocamiento y asesinato de Allende y posterior masacre del pueblo chileno. Al revés, la CÍA cometió errores de apreciación (asesinato del comandante en jefe del ejército chileno en octubre de 1970, general de división René Schneider) y de subestimación de la capacidad de organización del pueblo chileno (gran huelga empresarial de octubre de 1972). Errores que le costaron perder «el liderato» en el complot norteamericano para acabar con el gobierno constitucional de Santiago. Y no fue la CÍA, sino el Pentágono quien convenció, sobornó y planificó, en unión con los actuales generales de la Junta fascista chilena, el asesinato de la democracia en mi país.

Así pues, la publicación en septiembre de 1974 de los testimonios de William E. Colby, director de la Agencia Central de Inteligencia, dados en abril del mismo año en una audiencia *top-secret* del senado norteamericano, ¿para qué servía en realidad?

Notoriamente, para dos propósitos: uno, hacer de la CÍA un chivo expiatorio norteamericano de la ingerencia del gobierno de Washington en los sucesos de Chile, y, dos, para «desestabilizar» la posición del Secretario de estado Henry Kissinger en la actual política interna de los Estados Unidos.

Del segundo suceso no me ocuparé aquí porque corresponde a problemas internos de la política de los Estados Unidos, que no me incumben. Pero del primero sí me ocuparé, porque tiene que ver con el infierno que los generales del Pentágono, vía sus títeres militares en las fuerzas armadas chilenas, desataron en mi patria.

¿Para qué —podía uno pensar— se destapaba así, en septiembre de 1974, el papel intervencionista de la CÍA en los asun-

tos políticos internos de Chile? Claro, para ocultar la culpabilidad de los verdaderos protagonistas del drama: los generales del Pentágono. Y eso, porque los hechos y los dichos de los generales títeres chilenos estaban causando una tal conmoción en el mundo, incluyendo la opinión pública de los Estados Unidos, que necesariamente debía llegar el momento en que los políticos de este país tuvieran que responder a la inquietud de sus electores, sobre todo teniendo en cuenta los renovadores aires de Watergate.

En suma, para nosotros los chilenos, concedores del interior de la trama que puso al fascismo en el cuello del pueblo chileno, estaba claro la noche del 8 de septiembre que el «nuevo Watergate» desatado por el «New York Times», señalando a la CIA y a Kissinger como chivos expiatorios del golpe de Chile, ocultaba las manos del Pentágono en el suceso.

Dos hechos posteriores lo probaron. Uno ocurrió el 9 de septiembre, cuando Kissinger autorizó a su vocero, Robert Anderson, para decir que «el Comité de los 40 actúa solamente con la aprobación unánime de sus cinco miembros»... y que «el Comité de los 40 somete sus decisiones a la aprobación personal del Presidente, antes de llevarlas a cabo». («The New York Times», 11 de septiembre 1974, en la crónica «Censored Matter in Book about CIA Said to Have Relate Chile Activities»).

Kissinger esquivaba el bulto de dos formas: pasando la responsabilidad al caído señor Richard Nixon, y apuntando con el dedo a la composición de los cinco miembros del Comité de los 40, organismo superior de inteligencia de los Estados Unidos... ¡en el cual tienen mayoría de votos los representantes del Pentágono! Veamos la composición del Comité de los 40:

1) El señor Henry Kissinger que, por su cargo, tiene que tomar en cuenta los informes de seguridad nacional proporcionados por el Pentágono sobre cualquier tema importante; 2) el presidente del Estado Mayor General Conjunto (Joint Chiefs of

Staff), es decir, el superjefe del Pentágono; 3) el subsecretario de Defensa, es decir, un funcionario directamente manejado por el Pentágono; 4) el subsecretario de Estado para asuntos políticos directamente bajo la presidencia de la República, y 5) el director de la CÍA.

En suma, tal como lo pensó el asesinado presidente John Kennedy al crear el Comité de los 40 después de la frustrada invasión a Cuba de la CÍA en 1961, este comité ponía a la CÍA bajo la vigilancia del Pentágono y de la presidencia de los Estados Unidos... ¡Y eso, probablemente, era lo que quería señalar Kissinger, a través de su vocero, el 9 de septiembre, en un intento de defenderse del Watergate que se le venía encima...! ¡señalar que si la CÍA actuó en Chile, lo hizo por aprobación del Pentágono y del Presidente Nixon!

Tres semanas más tarde, vino el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno, residente en Buenos Aires desde una semana después de haber triunfado la conspiración Pentágono-generales fascistas chilenos, el general de división (R) Carlos Prats González.

¿Por qué asesinar a Prats ahora? Porque Prats, como jefe del ejército chileno hasta fines de agosto de 1973, conoció las maniobras del Pentágono para derrocar a Allende, conoció el «informe Perú» del Pentágono leído a los generales chilenos en noviembre de 1972, conoció las instrucciones de jefe del Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos (uno de los cinco del Comité de los 40), a los generales chilenos para derrocar el régimen constitucional de Chile, y conoció tanto todo esto, que a fines de agosto de 1973 renunció a su cargo de comandante en jefe para no ser cómplice de la desvergüenza universal que se iba a dejar caer sobre el generalato chileno a partir del 11 de septiembre.

En una palabra: el ex jefe del ejército chileno era el único testigo de graduación máxima en situación de decir que no había sido la CÍA sino el Pentágono el jefe del complot para ase-

sinar la democracia chilena. Había que asesinarlo. (Esto no es nuevo para la opinión pública norteamericana. La lista de testigos clave asesinados a propósito de los asesinatos de John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy y otras figuras menores es interminable).

Nueve puntos

Sin embargo, es bueno acercarnos más al detalle del asunto. De acuerdo a la crónica firmada por Seymour M. Hersh, del «New York Times» del 8 de septiembre de 1974, las declaraciones del señor Colby (director de la CÍA), el día 22 de abril, al Subcomité de Inteligencia sobre los Servicios Armados de la Cámara de Representantes, podrían resumirse en nueve puntos fundamentales:

1) Las operaciones de la agencia, desde 1970 hasta 1973, fueron consideradas como una prueba para la técnica de utilizar fuertes pagos en efectivo a fin de derribar un gobierno considerado como antagónico para los Estados Unidos.

2) El señor Colby afirmó también que todas las operaciones de la agencia contra el Gobierno Allende fueron aprobadas por adelantado en el Comité de los 40 en Washington, un organismo secreto de alto nivel para la inteligencia dirigido por el secretario de Estado Kissinger (...es decir, el Comité de los 40, en el cual tienen mayoría de votos el Pentágono, autorizó a la CÍA su intervención de apoyo a las maniobras del Pentágono para poner a los generales títeres chilenos en el poder, destruyendo la democracia chilena).

3) El testimonio del señor Colby indica que altos funcionarios en el Departamento de Estado y la Casa Blanca engañaron repetida y deliberadamente al público y al Congreso acerca de

la magnitud de la acción de los Estados Unidos al introducirse en los asuntos internos de Chile durante los tres años del gobierno del doctor Allende (los recientes sucesos de Watergate no hacen de este hecho una novedad para el público norteamericano).

4) El señor Colby testimonió que 500.000 dólares fueron autorizados secretamente por el Comité de los 40 en 1970 para ayudar a las fuerzas anti-Allende. Otros 500.000 dólares fueron proporcionados a las mismas fuerzas en 1969, dijo el señor Colby. (Esto tiene que ver con el primer gran fracaso de la CIA en Chile contra Allende, en octubre de 1970, cuando el Pentágono debió intervenir incluso para exigir a Nixon que ordenara a la CÍA desistir de su descabellado plan para impedir que Allende fuera ungido presidente en el Congreso chileno, el 24 de octubre de ese año).

5) Testimonió que habían sido autorizados 350.000 dólares por el Comité de los 40 en un fracasado esfuerzo para sobornar a miembros del Congreso chileno. El soborno era parte de un complot mucho más complicado cuyo fin era desconocer los resultados de la elección (presidencial), aseguró el señor Colby, pero todo el plan, aunque inicialmente aprobado por el Comité de los 40, fue más tarde rechazado por impracticable. (Es una verdadera lástima no contar en la actualidad con un testigo responsable del Pentágono, para saber si esta historia de los sobornos se repitió con los generales que actualmente mantienen al pueblo chileno bajo la bayoneta.)

6) El director de la CIA también dijo que después de la elección de Allende, el Comité de los 40 autorizó cinco millones de dólares para mayores esfuerzos de «desequilibrio» en 1971, 1972 y 1973. Una cantidad adicional de un millón y medio fue proporcionada para ayudar a los candidatos anti-

Allende en las elecciones generales del año pasado. Algunos de esos fondos fueron proporcionados, testimonió el señor Colby, a un periódico influyente anti-allendista en Santiago, al cual no identificó (a partir de 1972, esta parte del trabajo de la CIA se hizo en concordancia con el trabajo del Pentágono: mientras la CIA «desequilibraba», el Pentágono «equilibraba» a los generales chilenos en torno al plan para destruir la democracia chilena. La CIA hacía el trabajo sucio público, mientras el Pentágono hacía el trabajo sucio secreto.)

7) El señor Harrington (representante demócrata por Massachusetts que reveló el testimonio Colby en carta del 18 de julio de 1974) señaló que «se proveyeron fondos a personas, partidos políticos y medios de comunicación en Chile, a través de canales en otros países, tanto en América Latina como en Europa... La descripción de esas operaciones por parte del señor Colby fue directa, aunque no hasta el punto de identificar los contactos y conductos reales», añadió el señor Harrington.

8) El señor Harrington citó al señor Colby testimoniando que el Comité de los 40 autorizó un gasto de un millón para actividades de «un mayor desequilibrio político» en agosto de 1973, un mes antes de que la junta militar se hiciera con el poder en Santiago... «Todo el plan autorizado en agosto fue cancelado cuando ocurrió el golpe militar menos de un mes más tarde», escribió el señor Harrington. Agregó que, sin embargo, el señor Colby había testimoniado que habían sido gastados 34.000 dólares de esos fondos incluyendo un pago de 25.000 dólares a una persona para comprar una radioemisora... (Esto demuestra cómo el Pentágono, por encima del Comité de los 40, y por lo mismo, por encima del Presidente Nixon, llevaba adelante su propio complot en Chile, sin contarle a nadie los detalles... ¿Cómo se llama esto? ¿Un estado dentro de otro estado? ¿Una especie de gobierno militar-industrial más arriba de la Ca-

sa Blanca cuando es necesario?)

9) Complementando las declaraciones del señor Colby, los reporteros del «New York Times» consultaron a funcionarios de gobierno y obtuvieron esto: «en el período antes del golpe», dijo un funcionario, «en el Comité de los 40 había el convencimiento absoluto., de que el gobierno Allende estaba destinado a desmoronarse y que era necesario desacreditarlo en todos los aspectos... El Departamento de Estado apoyaba esto, pero de un modo diferente... La discusión era entre aquellos que deseaban usar la fuerza y terminar rápidamente con él (el gobierno chileno) y los que deseaban que se desmoronara solo. Henry Kissinger estaba del lado de los primeros... Todos los funcionarios entrevistados pusieron énfasis en que la Agencia Central de Inteligencia no fue autorizada para jugar ningún papel directo en el golpe que derrocó a Allende». (Este punto es muy importante. Prueba que Kissinger actuaba según había decidido el Pentágono ya en noviembre de 1972, derribar a Allende con un golpe militar dirigido por los generales chilenos al servicio del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que el Departamento de Estado no sabía del «plan duro» del Pentágono, y que el Comité de los 40, manejado por el Pentágono, había prohibido a la CIA entorpecer con acciones directas el complot altos mandos Estados Unidos-Chile en marcha ininterrumpida desde fines de 1972).

En suma, Kissinger, el Departamento de Estado y la CIA, aunque cómplices en el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile, jugaron un papel secundario en comparación con el Pentágono, director verdadero de toda la trama.

¿Quién gobierna a quién?

En Chicago, el 16 de septiembre de 1970, cuando Kissinger era funcionario del Pentágono, es decir era asesor de Nixon para

asuntos de seguridad nacional, dijo, de acuerdo al «New York Times» del 11 de septiembre de 1974:

«...La asunción de Allende (a la presidencia) en Chile presentará masivos problemas para nosotros, y en verdad para todo el hemisferio occidental... ustedes tendrán un gobierno comunista en un país principal latinoamericano, junto a, por ejemplo, la Argentina, que está profundamente dividida... a Perú, que ha estado ya caminando en direcciones difíciles de tratar... y Bolivia, que ha ido en una dirección más a la izquierda, más anti Estados Unidos... Estamos mirando de cerca la situación. Y ella no es una en la cual sea muy grande nuestra capacidad para influir...»

El señor Kissinger, en esta apresurada declaración hecha sólo doce días después que Allende ganara las elecciones presidenciales chilenas, cometió dos errores que sus jefes inmediatos en asuntos de seguridad no cometieron: primero, Kissinger calificó a Allende de comunista, lo cual estaba muy lejos de la realidad, tanto, que pocas semanas después el propio Pentágono estuvo de acuerdo con el informe de los generales chilenos acerca de que Allende podía hacer un gobierno que aplacara el ardor revolucionario del pueblo chileno, impidiendo, precisamente, la revolución social en Chile... las esperanzas del Pentágono fueron frustradas por el empuje del pueblo chileno, y en noviembre de 1972 cambió de opinión y estimó que no había otra salida... para la seguridad de los Estados Unidos... que estrangular la democracia burguesa en Chile. Segundo, Kissinger señaló públicamente el itinerario de los «esfuerzos» de las fuerzas monopólicas que gobiernan en Washington para cambiar gobiernos en América Latina: Argentina, Perú, Bolivia, Chile. Hoy, cuatro años más tarde, cada lector puede sacar sus propias cuentas, tanto en gobiernos derrocados como en conspiraciones frustradas con la marca *made in USA*.

Pero, vamos a la esencia del asunto, ¿por qué el Pentágono

ordenó a los generales chilenos asesinar a Allende y a la democracia burguesa chilena? Para impedir por medio de ese asesinato real e histórico, aunque transitoriamente, que el pueblo chileno hiciera la revolución social y se liberara del control que sobre él tienen los grandes consorcios multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Dicho de otro modo, los generales chilenos, al derrocar a Allende, lo hicieron para proteger, primero, los intereses de grandes empresas monopólicas norteamericanas, y, segundo, los intereses de grandes empresas monopólicas chilenas.

Los hechos posteriores al 11 de septiembre de 1973 prueban este hecho, y hacen comprender por qué el Pentágono, complejo militar estrechamente ligado a los intereses monopólicos de los grandes consorcios norteamericanos, fue el jefe de toda la conspiración.

Quince días después del golpe militar, el 26 de septiembre de 1973, los generales chilenos piden al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos un préstamo de 24 millones de dólares para comprar trigo. Era el mayor crédito pedido en la historia de Chile para ese propósito al gobierno de Washington. El 24 de octubre... menos de treinta días después... fue concedido. Veinte días más tarde, el 14 de noviembre, el mismo Departamento de Agricultura concede un préstamo de 28 millones de dólares a los generales chilenos, para comprar maíz, en los Estados Unidos, por supuesto.

Es bueno saber que durante el período de Allende, tres años, ese departamento yanqui le concedió préstamos por tres millones de dólares. A los generales, en dos meses, 52 millones de dólares.

El 9 de noviembre, es decir, cinco días antes, el Manufacturers Hannover Trust de Nueva York presta 24 millones de dólares a los generales «para compra de artículos de consumo habitual».

El día 2 de marzo de 1974, el ministro de Economía de los

generales, Fernando Léniz, en el periódico «El Mercurio» señala que «ya hemos concretado los siguientes préstamos: 95 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional; 10 millones de la AID; 13 millones del Banco Mundial; 93 millones del Banco Interamericano de Desarrollo; otros 50 millones del BID prometidos para septiembre, y uno adicional del mismo bando de 24 millones de dólares para 24 meses»... y que «existen varias operaciones crediticias en marcha con empresas del área privada de Estados Unidos y otras naciones».

El 6 de abril, «El Mercurio» informa que el EXIMBANK ha otorgado garantía para los créditos de empresas privadas norteamericanas a Chile a corto y mediano plazo, y el general de brigada Eduardo Cano, presidente del Banco Central de Chile, dice que «la decisión de EXIMBANK muestra la confianza de la comunidad financiera internacional en las favorables perspectivas de la economía chilena»...

Al parecer, la «comunidad financiera internacional» se refiere a los Estados Unidos. Es cuestión de sacar las cuentas. 285 millones de dólares de las alegres cuentas de Léniz, más 52 millones del Departamento de Agricultura y 24 millones del Hannover Trust, hacen 360 millones de dólares para los generales chilenos en seis meses.

Hay que comparar estas cifras del Banco Central de Chile: préstamos de la misma categoría en 1967: 124 millones de dólares; en 1968: 304 millones de dólares; en 1969: 263 millones de dólares; en 1970: 148 millones de dólares; en 1971: 45 millones de dólares; en 1972: cero; en 1973, hasta el derrocamiento de Allende, cero.

Hay más cifras, como la petición de la Junta al BID, en mayo de 1974, por 297 millones de dólares adicionales. Como las nuevas inversiones de consorcios como Dow Chemical, General Motors, Ford Motor y ADELA, como los pagos de indemnización por 42 millones de dólares para la Cerro Corporation (el gobierno derrocado había fijado en 31 millones esa indem-

nización), y de 253 millones de dólares a la Anaconda (Allende había fijado una «indirecta» de 770 millones de dólares en conjunto con la Kennecott Corporation y nada en forma «directa»). La junta fue generosa «con la comunidad financiera internacional» y dio 253.000.000 de indemnización «directa» adicional a la «indirecta».

Pero no se trata de abrumar al lector con cifras. Sólo un ejemplo más que resume la pregunta de ¿quién gobierna a quién? respecto a la junta militar chilena. Este ejemplo:

En la edición del 26 de junio de 1974, página 4, del diario santiaguino «La Tercera», se leía la siguiente noticia:

«Con la asistencia del Presidente de la Junta de gobierno, general Augusto Pinochet Ugarte; el almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta, y el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante Ismael Huerta, fue inaugurada en la tarde de ayer en el edificio Diego Portales la reunión que sostienen autoridades del gobierno y representantes del sector privado de nuestro país con 168 empresas afiliadas a la Business International Corporation»... «dio la bienvenida... el general Augusto Pinochet, expresando: "Es muy significativo para nosotros que tan importante organización internacional de hombres de negocios haya decidido organizar esta convención en nuestro país"... y agregó: "En pocos días más será legalizado el estatuto del inversionista, lo que orientará y alentará a miembros de ustedes a invertir en el país CON LAS SEGURIDADES QUE POCAS NACIONES EN EL MUNDO DE HOY PUEDEN OFRECER"..."»

Y Pinochet tenía razón ¡y de qué manera!

Al día siguiente, 26 de junio, Eldridge Haymes, presidente ejecutivo de la BIC (que reunió en Santiago a delegados de corporaciones como la Dow Chemical, Wells Fargo Bank, General Electric, General Motors, Gulf Oil, IBM, Monsanto, ALCAN Aluminium, y 50 otros distinguidos miembros del negocio multinacional), dijo: ...«con respecto al Pacto Andino el

grupo internacional ha expresado objeciones a uno de los artículos, el número 24»... «uno de los principales intereses del grupo visitante es conocer el Estatuto del Inversionista Extranjero. Mientras no sea aprobado será difícil para cualquiera de las empresas del Grupo adoptar una decisión final sobre sus proyectos en Chile».

Dos días más tarde, después de cuatro reuniones entre el grupo BIC de consorcios «multinacionales y los cuatro integrantes de la junta Militar, el almirante José Toribio Merino, declaró: «...creemos que, objetivamente, la Decisión 24 no favorece, como era su propósito, el crecimiento acelerado de la región».

Menos de quince días después, el 11 de julio de 1974, los generales de la Junta publicaron el Estatuto del Inversionista Extranjero, en el cual se daba libertad absoluta a los capitales (naturalmente de las empresas multinacionales) para sacar ganancias del país, invertir «en igualdad de condiciones con los capitalistas chilenos», y no tener limitación en los sectores en que entrarían. Todo esto, contra la Decisión 24 del Pacto Andino, que fijaba un plazo de 15 años para nacionalizar las empresas de capital extranjero y un tope de 14 °o para el traslado de utilidades al exterior. Fue un escándalo para el resto de los firmantes del Pacto Andino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La Junta Militar se vio obligada a enviar una misión especial a esos países, y en el diario «La Opinión», de Buenos Aires, del 5 de septiembre, reproduciendo las actividades de la misión chilena en Colombia, se escribía: «Los enviados chilenos justificaron la adopción de la medida en virtud de la *angustiosa situación económica* por que pasa su país y pidieron *comprensión para estos pecados veniales...*». Fue sólo el comienzo. En la reunión de Lima, en septiembre pasado, de los países del Pacto Andino, el gobierno militar chileno fue criticado tan acremente por los otros miembros, que la delegación chilena abandonó la reunión.

Este episodio demostraba como los generales chilenos habían

destruido la democracia en mi país para garantizar al gran capital monopólico de los Estados Unidos sus negocios allí... y a qué costo... El 1 de septiembre de 1974, el abogado británico John Platts Mills, laborista, después de estar 15 días en Chile, declaraba: «El grado de represión y horror vigente en Chile supera al que reinó en Alemania en la época de la dictadura de Hitler» («La Opinión», Buenos Aires, 2 de septiembre 1974).

Y el Pentágono seguía prestando apoyo irrestricto y confidencial a los generales chilenos a su servicio. El 14 de mayo, según declaraciones a «El Mercurio» de Santiago, el embajador en Washington de los militares insurrectos, general Walter Heitman, decía: «...Las relaciones entre Chile y los Estados Unidos son excelentes... hay un manifiesto deseo de ayudarnos a resolver nuestros problemas. Las autoridades estadounidenses han demostrado ésto con hechos»...

Sí. Como, por ejemplo, la gigantesca cantidad de armas proporcionada por el Pentágono a los jefes del fascismo en Chile. De acuerdo a una denuncia del periodista chileno Hernán Uribe Ortega, en el diario «Excelsior» de México y reproducida en «La Opinión» de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1974, más de 200 millones de dólares en armas han salido de los almacenes del Pentágono para los generales chilenos.

Esta es la lista: 24 cazabombarderos de ataque A-4-D Skyhawk; 18 a 24 cazas F-5-E Tiger II; 18 a 24 Cessnas T-37 y A-37-B; 24 aviones de entrenamiento primario tipo T-41-C Cessna; dos destructores provistos de cohetes mar-aire y mar-tierra, mar-mar; dos submarinos convencionales; dos barcos de desembarco de tropas tipo LST o LSM; un número indeterminado de tanques M-60 y de fusiles M-16 (AR-55) y otras armas menores.

La publicación de esta lista no fue desmentida por la Junta fascista chilena, y se limitó a despojar de la nacionalidad chilena al periodista Uribe. La pregunta es: ¿Tiene el Congreso norteamericano alguna idea de estos 200 millones de dólares en armas proporcionados por el Pentágono a los generales fas-

cistas chilenos? ¿Para qué se está armando el gobierno títere del Pentágono de Chile? ¿Acaso para atacar al Perú, bajo pretexto de diferencias fronterizas, y hacer para el Pentágono el trabajo sucio de derribar el actual gobierno del Perú? No hay que olvidar las palabras de Kissinger aquí citadas. Según esas palabras el Pentágono ya resolvió los problemas de hacerse de gobiernos títeres en Bolívia y Chile... le fatan Perú y Argentina. No sería una novedad histórica que militares traidores a su patria le hagan el juego a una potencia extranjera, por medio de guerras entre países pequeños.

Y ocurre que el Pentágono manejó el golpe fascista en Chile a partir de un «informe de inteligencia» enderezado contra un pretendido «revanchismo» del actual gobierno peruano. Ocurre que los generales chilenos al servicio del Pentágono han atizado una violenta campaña antiperuana a través de sus escribas en los diarios «El Mercurio» y «La Tercera», de Santiago. Es como para pensar que algo grande preparan en el cono sur de nuestra América los generales del Pentágono por medio de sus peones militares en Chile, Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza. ¿Será una novedad el hecho de que el Pentágono esté preparando una guerra en algún punto del globo y el Congreso de los Estados Unidos no tenga la menor idea?

Los hechos señalan que así está ocurriendo. Y señalan también como el Pentágono está tratando de cubrir su retirada en el caso del golpe militar chileno, desviando la atención, como único culpable, a la CÍA y su jefe en el Comité de los 40, Henry Kissinger, en circunstancias que el verdadero director de la orquesta estuvo y está en el gigantesco Ministerio de Defensa de cinco lados de los Estados Unidos.

6 de octubre de 1974

FIN

Del mismo autor



¿Quién mató a Kennedy? He aquí la pregunta que la humanidad viene haciéndose desde que el joven presidente fue asesinado. Este libro trata de descifrar el enigma de un crimen brutal y repugnante, revelando la identidad de los verdaderos asesinos de Kennedy. El autor les llama LA MAFFIA, pero aclara que no se trata del grupo grotesco y sonoro de inmigrantes italianos, sino de los gigantescos consorcios de Wall Street, esos mil norteamericanos que tienen en sus manos todas las riquezas naturales del país, el reducido grupo que controla toda la maquinaria económica de los Estados Unidos, esos mil norteamericanos que gobiernan al Congreso Nacional, a la Corte Suprema y a los gobiernos de los Estados.